



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**15ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA**

**8 DE OCTUBRE DE 2014**

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don **AMADO BOUDOU**,  
del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
senador don **GERARDO ZAMORA**, del señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitu-  
cionales del Honorable Senado, senador don **MARCELO J. FUENTES**,  
y del señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado,  
senador don **ANÍBAL FERNÁNDEZ**

Secretarios:

Señor don **JUAN H. ESTRADA** y señor don **JUAN H. ZABALETA**

Prosecretarios:

Señor don **LUIS BORSANI**, señor don **MARIO DANIELE** y señor don **JOSÉ LEPERE**



## PRESENTES:

AGUILAR, Eduardo Alberto  
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ARTAZA, Eugenio Justiniano  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BASUALDO, Roberto Gustavo  
 BERMEJO, Rolando Adolfo  
 BERTONE, Rosana  
 BLAS, Inés Imelda  
 BORELLO, Marta Teresita  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CASTILLO, Oscar Aníbal  
 CATALÁN MAGNI, Julio César  
 CIMADEVILLA, Mario Jorge  
 CREXELL, Carmen Lucila  
 DE ANGELI, Alfredo  
 DE LA ROSA, María Graciela  
 DI PERNA, Graciela Agustina  
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz  
 FELLNER, Liliana Beatriz  
 FERNÁNDEZ, Aníbal Domingo  
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle  
 FUENTES, Marcelo Jorge  
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela  
 GARRAMUÑO, Jorge Alberto  
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, Pablo Gerardo  
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
 GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio  
 HIGONET, María de los Ángeles  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada R. del Valle  
 JUEZ, Luis Alfredo  
 KUNATH, Sigrid Elisabeth  
 LABADO, María Esther  
 LATORRE, Roxana Itatí  
 LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime

LUNA, Mirtha María Teresita  
 MANSILLA, Sergio Francisco  
 MARINO, Juan Carlos  
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo  
 MAYANS, José Miguel Ángel  
 MICHETTI, Marta Gabriela  
 MONLLAU, Blanca María del Valle  
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor  
 MONTERO, Laura Gisela  
 MORALES, Gerardo Rubén  
 MORANDINI, Norma Elena  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
 ODARDA, María Magdalena  
 PEREYRA, Guillermo Juan  
 PÉRSICO, Daniel Raúl  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
 PICETTO, Miguel Ángel  
 PILATTI VERGARA, María Inés  
 REUTEMANN, Carlos Alberto  
 RIOFRÍO, Marina Raquel  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROJKÉS de ALPEROVICH, Beatriz Liliana  
 ROLDÁN, José María  
 ROMERO, Juan Carlos  
 ROZAS, Ángel  
 SANTILLI, Diego  
 SANZ, Ernesto Ricardo  
 SOLANAS, Fernando Ezequiel  
 URTUBEY, Rodolfo  
 VERNA, Carlos Alberto  
 ZAMORA, Gerardo

## AUSENTES, CON AVISO:

GIUSTINIANI, Rubén Héctor  
 MENEM, Carlos Saúl

## LICENCIA POR ENFERMEDAD:

MEABE, Josefina Angélica

## SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 3.)
2. **Decreto de citación a sesión especial.** (Pág. 3.)
3. **Homenaje por el bicentenario de la creación de la provincia de Tucumán.** (Pág. 3.)
4. **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.** (O.D. N° 460 y Anexos.) (Pág. 4.)
5. **Cuestión de privilegio.** (S.-3.332/14.) (Pág. 4.)
6. **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.** (O.D. N° 460 y Anexos.) (Continuación.) (Pág. 6.)

## 7. Apéndice.

- I. **Convocatoria a sesión especial.** (Página 117.)
- II. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 117.)
- III. **Acta de votación.** (Pág. 141.)
- IV. **Inserciones.** (Pág. 142.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 3 del miércoles 8 de octubre de 2014:

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión especial.

## 1

**IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL**

**Sr. Presidente.** – Invito al señor senador por Catamarca, Oscar A. Castillo, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los presentes, el señor senador Castillo procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

## 2

**DECRETO DE CITACIÓN A SESIÓN ESPECIAL**

**Sr. Presidente.** – Se incorpora en el Diario de Sesiones la nota de varios señores senadores solicitando esta convocatoria y el respectivo decreto dictado por la Presidencia.<sup>1</sup>

–Puestos de pie, varios señores senadores sostienen una pancarta.

## 3

**HOMENAJE POR EL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN**

**Sr. Presidente.** – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de hoy se acordó rendir homenaje al bicentenario de la creación de la provincia de Tucumán.

**Sr. Secretario** (Estrada). – “El Honorable Senado de la Nación declara su profundo beneplácito en el bicentenario de la creación de la provincia de Tucumán ocurrida el día 8 de octubre de 1814. Hacer llegar a los ciudadanos de la provincia las más cálidas felicitaciones por la conmemoración del bicentenario”.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.

**Sra. Elías de Perez.** – Señor presidente: para cada uno de nosotros es un honor representar a nuestras provincias en el Senado de la Nación pero, a quienes como yo somos tucumanos, estar sesionando duplica el honor porque fue exactamente un día como hoy, hace 200 años, que fue creada nuestra provincia. Es entonces el director supremo, doctor Posadas, quien firma el decreto de creación de la provincia. Y lo mejor de todo es que si leemos los diferentes decretos de creación de todas las provincias, vamos a ver que hay sencillamente razones geopolíti-

cas y no hay mayores explicaciones, excepto en el decreto de creación de Tucumán. En ese decreto el doctor Posadas, en cinco artículos, hace mención a que se trata de reparar el daño que han sufrido los pueblos del norte.

Voy a leer textualmente una frase que él utiliza: “Distinguir de algún modo al glorioso pueblo de Tucumán que ha rendido tan señalados servicios a la patria”. La verdad es que mi provincia fue creada con una gloria especial, y esto parecería un antecedente de lo que iba a pasar dos años después, porque Tucumán va a ser la cuna de la independencia, la cuna de la historia de esta bendita Nación.

Es el primer gobernador intendente que se nombra en ese momento, el señor Bernabé Aráoz. Fue un prohombre tucumano, monterizo, que realmente jugó un rol protagónico y muy importante en la ayuda al Ejército del Norte en la Batalla de Tucumán.

Por eso, señor presidente, es que yo invito a este cuerpo a que me acompañe en este homenaje a mi provincia, en donde cientos de miles de hombres y mujeres hoy continúan haciendo patria, como aquellos gloriosos tucumanos a los cuales hacía referencia Posadas.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente.** – Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: manifestamos nuestro apoyo a este pueblo y a esta provincia, que forman parte de la historia de la Argentina, y acompañamos con nuestro voto esta declaración recordando los doscientos años de la fundación de la ciudad de Tucumán.

**Sr. Presidente.** – Muchas gracias, senador.

**Sr. De Angeli.** – Presidente: no puedo dejar de volver a decirle lo que vengo diciendo en dos sesiones atrás. La verdad es que a mí me eligieron para representar a la provincia de Entre Ríos, y los entrerrianos siguen sorprendidos cómo usted, con todas las causas que tiene, sigue presidiendo el Senado.

Así que tengo que repetir lo que...

**Sr. Fernández.** – Está fuera de tema...

**Sr. Presidente.** – Muy bien. Gracias, senador.

Vamos a poner en consideración la propuesta de la senadora Elías de Perez.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado por unanimidad. Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

#### 4

### RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

(O.D. Nº 460 Y ANEXOS)

**Sr. Presidente.** – Corresponde considerar el dictamen en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 17.319 y sus modificatorias y otros temas vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.

Hay un expediente con dictamen en mayoría y tres expedientes anexos con dictamen en minoría; uno por el bloque de la UCR, uno de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, y adicionalmente uno de los senadores Solanas y Linares junto con el senador Giustiniani.

#### 5

### CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

(S.-3.332/14)

**Sr. Morales.** – Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente.** – Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: tiene que ver con la situación que acaba de plantear también el senador por Entre Ríos y que, en todas las sesiones, en la medida en que usted esté presente, no podemos dejar de reflexionar sobre la necesidad de que tome alguna decisión.

Hemos planteado distintas vías; un proyecto también de resolución para producir la suspensión en su cargo como presidente de esta Cámara. Hemos planteado nuestra interpretación sobre el artículo 66 de la Constitución, y en ese marco es que lo hemos pedido.

Quiero aportar al cuerpo nuevos elementos que van surgiendo todas las semanas. Ha habido una resolución de la Cámara que integran distintos jueces, los jueces Cattani, Irurzún, Farah. Es decir, no sólo es el caso del juez Bonadío para la causa “Taboada, María G. y otros” sobre el procesamiento en el que se investiga al vicepresidente por haber transferido irregular-

mente un automóvil mediante documentación falsa. Ha habido una novedad en esta causa, que es la confirmación de la Cámara, firmada por unanimidad, es decir que no es sólo un juez, son varios jueces, en un trámite que procesalmente está muy avanzado; han confirmado el procesamiento. Tengo, acá, también algo del 7 de octubre –esto ocurrió el 1º–. El 7 de octubre el fiscal Marijuán ha dado por concluida la etapa de instrucción y ha pedido la elevación a juicio. Éste es el tema más avanzado de todas las causas que se tramitan en su contra. Está el caso Ciccone a cargo del juez Lijo. Está la causa por dádivas, en donde la cámara federal revocó el sobreseimiento dictado por el juez Rodríguez, que también se está tramitando en la justicia federal. Está la causa sobre enriquecimiento ilícito, que también está en manos del juez Lijo, que declaró la conexidad con la causa Ciccone. Está la causa por la denuncia ante el juez Sergio Torres, por la posible compra irregular de autos en el Ministerio de Economía en 2009. Está la causa en el juzgado de Ariel Lijo, a cargo del fiscal Pollicita, por favorecer a una constructora en un plan de viviendas en el Partido de la Costa, y por fraude, por no terminar de construir casas cuando usted era secretario de Hacienda del distrito, en 2005. Hay otra causa, que tiene en manos el juez Sebastián Casanello, que investiga también el convenio de The Old Fund con la provincia de Formosa. Está la causa para favorecer a una empresa contratista, Dynatec, radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, en la cual el fiscal Ramiro González hace imputaciones referidas a su responsabilidad.

Hay otros temas, también, que tienen que ver con aquel momento en que produce su renuncia y que ha involucrado al ex fiscal Righi, al ex procurador general y a otros jueces y fiscales. Pero el dato que a nosotros nos surge de la investigación, y que no hemos visto que se haya hecho público, es que aquí hay una parte, en cuanto al DNI, en la causa. Estoy hablando del escrito de Marijuán. En cuanto al DNI de Amado Boudou, sostiene Marijuán: “A fin de radicar el trámite en el registro de la encargada procesada, que consta por intermedio de la Seccional 36 de la Policía Federal y por la División de Sustracción de Automotores que el domicilio consignado en la copia del DNI cuestionado es inexistente. Esto es así porque en el DNI se

indica el piso 10º, y ese edificio sólo cuenta con nueve pisos”. Éste es el caso de Carlos Calvo 329, piso 10º, oficina 43, escrito en el domicilio que aparece en su DNI, habiendo indicado el notario, a fojas 103, que en la última testación se lo debe haber manifestado él, o bien era el domicilio que se encontraba inserto en su DNI, y cabe hacer notar que dicho edificio sólo posee nueve pisos. Es decir, además de a un médano, usted mandaba a los fiscales o inspectores a la terraza del edificio, porque no tiene diez pisos, sino que tiene nueve.

Este es un dato nuevo que también surge en una causa, donde tiene un embargo por 10 mil pesos. Realmente, nosotros creemos, presidente, que tiene que tomar una decisión. Ya no sabemos qué hacer en las sesiones, de qué modo alertar, porque su postura frente a esta Cámara, de no apartarse, el no acompañamiento que tenemos de la mayoría en cuanto al tema de la suspensión genera una situación no solamente complicada para usted sino, como representante del Senado, para el pueblo argentino. No es el mejor ejemplo el que se da desde la Cámara y desde usted mismo.

Entonces, la sociedad argentina va a pensar que no hay límites para nada y que se puede hacer todo. Si realmente hay algo para reponer eso es la fractura de un pueblo partido en dos —el que está a favor y el que está en contra— y también el desafío cultural de recuperar valores. En consecuencia, creo que poco favor se hace a ello mediante su postura.

Por eso, volvemos a plantear la cuestión de privilegio.

En esta oportunidad no voy a leer algunos ricos fundamentos de la Cámara y del fiscal Marijuán en esta causa, tal como se hizo en el caso Ciccone, pero la verdad es que se sigue avanzando y sigue habiendo confirmación de parte de otros jueces. Ya no son los de primera instancia, y lo cierto es que usted debe reflexionar en algún momento sobre la necesidad de no hacer esto al Senado de la Nación.

Por ello, volvemos a plantear la cuestión de privilegio. Le pedimos que se aparte. Hemos puesto carteles donde solicitamos que pida licencia y hemos pedido que la Cámara lo suspenda, pero no fuimos acompañados.

Por favor, le pedimos que tome una decisión al respecto porque no sólo se hace daño usted, no sólo le hace daño a su gobierno sino que le hace daño al Senado de la Nación.

Está planteada la cuestión de privilegio.

**Sr. Presidente.** — Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** — Señor presidente: nuevamente, sin hacer ningún tipo de defensa corporativa, porque nunca lo hemos hecho, decimos que como ciudadano usted tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano a tener una resolución judicial justa, una sentencia que determine su inocencia o su responsabilidad.

Por lo tanto, creemos que, a veces, desde estos planteos se avanza más por encima de ámbitos propios que son del Poder Judicial.

Reconocemos que el hombre público tiene mayores responsabilidades que el hombre común y que hay otro tipo de exigencias. Pero yo quiero recordar que en la Cámara de Senadores siempre hubo cuestiones de estilo que se han cuidado. Aquí nunca hubo ni carteles ni banderas ni tampoco gritos, barras y ofensas hacia nadie en particular. Me parece que esto hay que mantenerlo por encima de cualquier circunstancia porque hace al estilo de la Cámara de Senadores; un espacio de respeto, convivencia y discusión de ideas. En contadas excepciones pudo haber alguna situación donde se haya caído en el agravio. Y, en general, cuando ello se dio, hubo las debidas disculpas casi en el acto.

Aspiro a que se pueda mantener esta situación y a que se deje funcionar al sistema judicial, que, de hecho, está actuando sin ningún tipo de presión por parte de nadie. Porque ha habido respuestas judiciales que, indudablemente, no lo han favorecido y que marcan una línea de accionar del Poder Judicial con un criterio independiente.

Por lo tanto, les voy a pedir a los senadores que, en ese sentido, tengan la prudencia de poder esperar a que la Justicia se expida.

Esto es lo que quería decir como reflexión antes de abordar el debate en cuestión que es el debate de la Ley de Hidrocarburos.

Si bien es cierto que se trata de una cuestión de privilegio, y se puede abordar de esa manera, implica un apartamiento del temario.



Yo he renunciado a pedir temas que no estaban previstos para la sesión especial porque privilegiamos un asunto que es vital para el país. Me refiero a la mencionada cuestión de los hidrocarburos.

Vamos a esperar para ingresar los pliegos de las autoridades del Banco Central porque era el único tema, y usted sabe bien que en una sesión especial no se pueden tratar otros temas; y éste fue un pedido nuestro.

Entonces, le pido que podamos abordar ese tema a partir de ahora y con la profundidad que el debate requiere. Creo que habrá aquí un debate muy rico en esta materia que tiene que ver con el futuro y el destino de la Argentina.

Por lo tanto, luego de estas reflexiones, le pido que abordemos el debate de la Ley de Hidrocarburos.

## 6

### RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS

(O.D. Nº 460 Y ANEXOS)

(Continuación)

**Sr. Presidente.** – Muy bien, damos comienzo al debate.

Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.** – Señor presidente: pocos temas desbordan las fronteras nacionales, por su significación y por el entramado y cruce de intereses complejos, como el que vamos a tratar. Ésta, que aparenta ser una simple reforma de una vieja Ley de Hidrocarburos –sobre un total de más de cien artículos se modifican catorce–, en el contexto histórico, por un lado, y en lo que es la situación internacional imperante, por el otro, adquiere una trascendencia que difícilmente en otro momento hubiéramos podido ver.

Desde el punto de vista histórico, no hay construcción de un Estado nacional que no se haya hecho sobre la apropiación de un recurso natural o sobre la expropiación de un sector interno a partir del desarrollo de potencias-imperios: los bosques de roble inglés armando la armada inglesa para dominar los mares; la cuenca del Ruhr para producir acero, en ese proceso de transformación de la segunda Revolución Industrial; el carbón de Gales para poner en marcha la maquinaria de vapor de la primera Revolución Industrial.

Todo esto, desde el punto de vista de las relaciones entre naciones –estados nacionales constituidos– y los otros, nosotros –en ese mandato histórico de construir un Estado-nación, ya sobre el cierre de esa etapa–, adquiere una trascendencia cuya gravedad me permito, como una instrucción, mencionarla. Es decir, las potencias hegemónicas aseguran el acceso a las fuentes de recursos estratégicos, fundamentalmente, a través de la imposición de la fuerza. No vamos a entrar a analizar lo que fue el colonialismo de las potencias camino a la obtención de esas materias primas; no vamos a entrar a analizar lo que fue la etapa del neocolonialismo condicionando incipientes y débiles burguesías, en un país en el que una oligarquía jactanciosa se transformó en una burguesía renuente y perezosa. Simplemente, debo señalar que, actualmente, no hay conflicto en el mundo que no se pueda explicar desde la óptica de la puja por la apropiación de los recursos estratégicos, en particular, de los hidrocarburos. Si alguna duda queda acerca de esto, simplemente basta ver el panorama del Medio Oriente; simplemente basta ver la crisis en Crimea; basta ver las presiones que se ejercieron sobre la Federación Rusa para provocar la devaluación del 20 por ciento.

Es decir que las potencias hegemónicas, los países consolidados con control de su territorialidad, imponen, en las cuencas energéticas de otros países que no tienen la misma dimensión de poderío, condicionantes y limitaciones. Basta ver el mapa de América Latina, basta ver de norte a sur cómo se van generando y desarrollando esas hipótesis de conflicto que vulneran, limitan y cuestionan las autonomías nacionales. Por ejemplo, en relación con la cuenca del Golfo de México, la teoría de la inviabilidad del Estado –teoría OTAN– se aplica en Serbia por primera vez, en un Estado que no controla sus fronteras y que no hace valer la ley internacional en su territorio; en un Estado fallido. Esto condiciona la propia actividad e independencia de ese sufrido país del que una vez supo decir un presidente: “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

En la cuenca del Orinoco, la más rica de América Latina, ahí vemos el conflicto con las FARC, la guerrilla, las hipótesis, el narcotráfico y esos condicionantes que generan vigilancia permanente y monitoreo.

Hemos visto que, en su momento, hace no mucho tiempo, el presidente Inácio Lula Da Silva denunció la reactivación de la cuarta flota americana y el establecimiento de las bases armadas americanas en Colombia, que tuvieron su debut de fuego en el ataque, desarrollando por primera vez la doctrina del ataque preventivo en defensa, sobre territorio soberano ecuatoriano.

Seguimos bajando más al sur, y nos encontramos con la cuenca Andina. Allí tenemos, nuevamente, el populismo nacionalista de Evo Morales, entre comillas, el tema de la droga, etcétera, etcétera.

Y, para sorpresa de todos nosotros, es bueno recordarlo, el reservorio que caracterizaba a la Argentina, compartido con otros países, era el acuífero Guaraní. Recordemos permanentemente las campañas publicitarias, la amenaza de filmación de películas en torno a la triple frontera, el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. Ése era el elemento que justificaba el monitoreo y la preocupación de la potencia hegemónica sobre cuál era el destino de ese recurso.

Pero, evidentemente, la puesta en valor de tecnologías en la apropiación y en la extracción de hidrocarburos no convencionales y la cuantificación que se ha hecho de esos recursos, habla de que constituimos la segunda reserva del recurso gasífero no convencional del mundo, y la cuarta reserva del recurso petrolero no convencional del mundo. Con una ventaja inmensa, además, que consiste no sólo en las características geomorfológicas de esas formaciones en torno al grosor de esa roca madre, sino fundamentalmente en la distancia que esos reservorios tienen con respecto a las napas acuíferas. Y, principalmente, a la proximidad de recursos hídricos para poder explotar ese recurso. ¿De qué sirve tener recursos no convencionales en un desierto, en el cual no hay acceso al agua?

¿Qué quiero decir con esto? En la Argentina no se desconocía la existencia de esos recursos, como bien explicara la secretaria de Energía, pero para poder llegar a rocas blandas, yacimientos convencionales, en mi provincia previamente había que pasar perforando por la formación Vaca Muerta. Se conocía la existencia del recurso, pero se carecía de la tecnología o de la capacidad para poder extraerlo. Esta

situación dimensiona, de una manera totalmente inédita, esta cuestión que vamos a discutir hoy.

Por eso, es bueno que tengamos la sinceridad entre nosotros de identificar con claridad, detrás de nuestra posición, qué interés expresamos o qué interés defendemos.

Se nos acusa de que estamos haciendo una ley hecha a la medida del interés de YPF, olvidando que hemos tomado la decisión trascendente del recupero soberano del capital mayoritario de esa compañía, entendiendo que en la coyuntura histórica concreta que teníamos, la única manera de poder llegar al ejercicio de esa soberanía hidrocarburífera y al autoabastecimiento era el recupero de la empresa de bandera.

Entonces, uno puede decir: esta norma favorece a determinado sector. Pero es interesante indicar, entonces, a quién perjudica.

Una cuestión distinta, es una campaña que gira alrededor de que había un conflicto entre las provincias productoras de hidrocarburos y el Estado nacional para decir que este privilegio de YPF—entre comillas—perjudica los legítimos derechos de las provincias. Sin embargo, cuando se celebra el acuerdo federal entre los gobernadores y las provincias hidrocarburíferas que forman parte de la organización de productores de hidrocarburos y el Estado nacional, ese argumento carece absolutamente de fundamento.

Entonces, queda la otra cuestión: si cuestiono esta ley en función de que hay un interés creciente de que esa empresa recuperada constituya la herramienta central de la política energética argentina, ¿a quién perjudica? Evidentemente, podrá decir a alguna otra empresa que se siente perjudicada y se lo explicará. Por lo tanto, cuando vamos a defender y a debatir esta ley acá, aclaremos qué interés estamos expresando en esta cuestión.

Costó mucho tiempo. Lo dijimos cuando informamos sobre el proyecto de soberanía hidrocarburífera, que era un corolario inexorable lógico de una necesidad vital de la Argentina para asegurar su abastecimiento.

Los datos fueron perfectamente explicitados tanto por el ministro de Infraestructura de la Nación como por la Secretaría de Energía y posteriormente por el presidente de YPF en torno a la significación de la matriz hidrocarburífera en el consumo argentino. El 90 por ciento del

consumo primario de la Argentina depende de nuestra matriz energética.

De esa matriz energética, la mayoría de los yacimientos de gas y de petróleo de la Argentina se encuentran en declinación. No vamos a analizar acá lo que ya fue objeto de discusión cuando fundamos la necesidad de la expropiación de Repsol: la caída de la producción, la falta de exploración.

Entonces, forma parte de una estrategia nacional de posicionamiento en un mundo complejo, donde la cuestión central de la conformación del Estado-nación argentino pasa por la discusión de la soberanía del Atlántico Sur y esa discusión de soberanía del Atlántico Sur está íntimamente vinculada a los recursos y reservorios hidrocarburíferos del lecho marino.

Es evidente que esta norma simplemente es la actualización de la vieja Ley de Hidrocarburos dictada en un momento donde no se concebía la explotación del recurso no convencional, por lo que requiere una actualización.

Esta actualización parte fundamentalmente del análisis de la dinámica propia de esta nueva manera de explotar ese recurso existente pero dificultoso, y por sobre todas las cosas de alto costo para poder extraer.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador D. Gerardo Zamora.

**Sr. Fuentes.** — Es evidente que el desarrollo de esas tecnologías se generó en el país del norte y en zonas totalmente marginales, y fundamentalmente por pequeñas empresas. Sobre la base de una práctica de error y acierto se fue generando ese valor de conocimiento tecnológico.

Por eso, cuando hablamos de mecanismos de asociación estamos hablando de asociación sobre la base de que es un dólar tecnológico. El otro día el presidente de YPF daba unos simples ejemplos cuando decía que, en la formación de Loma Campana, el primer pozo que realiza de fractura hidráulica vertical-horizontal costó 40 millones de dólares. Posteriormente, con motivo del convenio con Chevron, esa cifra llegó a 10 millones de dólares y nos informaron hace escasos días que hoy está por debajo de los 7 millones de dólares.

Es decir, obtener y llegar a ese recurso y poder establecerlo requiere de inversiones de una magnitud en la cual es necesario generar

mecanismos de asociación con quienes están en condiciones de invertir precisamente en ese tema de explotación.

Vamos viendo en mi provincia, y motivaba expresiones de jolgorio del senador Morales cuando decía que envidiaba el recurso y el subsuelo neuquino, y yo le decía que tuviera paciencia porque el litio en algún momento iba a tener que sustituir al hidrocarburo en la motricidad automotor.

Es fundamental, entonces...

**Sr. Morales.** — El tema es que no cobramos regalías del 12.

**Sr. Fuentes.** — Hay que empezar a resolverlo.

**Sr. Fernández.** — O llevar llamas a Neuquén. *(Risas.)*

**Sr. Fuentes.** — O llevar llamas a Neuquén.

Este proyecto de reforma fundamentalmente se da en el marco del Acuerdo Federal de Autoabastecimiento de Hidrocarburos, que es complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197, y del decreto 929/13. Es decir, ésta es la conclusión de un proceso de negociación donde gobernadores de provincias productoras defendieron lo que entienden son sus intereses en el marco del plexo normativo de la Constitución del 94, donde el dominio de los recursos son de la provincia pero la facultad de dictar la política energética constituye una potestad irrenunciable de la Nación.

Dijimos en su momento, con la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, que no había posibilidad de llegar al desarrollo de una auténtica política nacional de autoabastecimiento si no mediaba una eficaz coordinación entre las provincias productoras y el Estado nacional. Es precisamente en medio de esa negociación que la señora presidenta de la Nación destraba el conflicto de ese entonces con las provincias señalando tres requisitos para la norma: el primero y fundamental era el tratamiento igualitario y la uniformidad —que no hubiese condiciones diferenciadas en cada provincia que generaran una especie de remate del recurso y de carrera para otra cosa—; la segunda, transparencia en lo que era el proceso de adjudicación; y la tercera y fundamental —eso explica esta norma no sólo en la necesidad de reglamentar conceptos no existentes, como el no convencional en la ley anterior—, la inversión como llave de acceso a la explotación de esos yacimientos.



Estos tres requisitos están claramente establecidos en el proyecto de ley que venimos hoy a tratar. Primero, en cuanto se modifican los plazos de los permisos de exploración y las concesiones de explotación. Se modifican fundamentalmente en la medida en que se abrevia el plazo de exploración, y se posibilita la prórroga de los plazos de explotación. ¿Esto a qué se debe? A una razón de sentido común. Es decir, esos dos sistemas de explotación están expresados en dimensiones geológicas que normalmente conviven dentro del mismo territorio. O sea, en el yacimiento convencional en explotación muy probablemente exista el cúmulo de roca madre también superpuesto que genera, precisamente, el llenado de esa cuenca hidrocarburífera. Por lo tanto, quien hoy está explotando con el sistema convencional tiene el conocimiento de que en su territorio de concesión existe ese recurso. Por eso, precisamente, se generan las modificaciones en cuanto a la unificación de las zonas.

Se establece a los efectos de garantizar la uniformidad en el tratamiento de la cuestión que haga a la seguridad jurídica, a una política unidireccional, pero que contemple los intereses en juego. Se hace esto con el acuerdo celebrado con las provincias de que, junto con las autoridades de aplicación provinciales y la Secretaría de Energía de la Nación, van a elaborar un pliego base que va a ser utilizado uniformemente en todos los llamados a licitación, única manera de acceder a la concesión; pliego único que va a generar garantías de igualdad en torno a las ofertas en todas las áreas que se presenten, sea la autoridad de aplicación provincial o nacional.

Ha sido rubricado el texto del proyecto de ley con la totalidad de los señores gobernadores de las provincias productoras de petróleo. Están las firmas acompañando ese texto.

El proyecto trae anexos que contemplan la necesidad de una uniformidad en el tratamiento de la cuestión ambiental y el compromiso de las provincias de dictar las normas correspondientes. En algunas ya se ha avanzado. En mi provincia, por ejemplo, está la prohibición expresa de la utilización de aguas de acuíferos en la explotación no convencional. Tiene que ser únicamente agua de río que debe ser tratada adecuadamente. Por lo tanto, la Nación tendrá que dar los presupuestos mínimos ambientales

en toda la actividad y las provincias, como titulares del medio ambiente respectivo, deberán dictar las normas correspondientes.

Se propende, en el convenio celebrado, a la uniformidad en materia tributaria provincial a los efectos de no generar diferencias entre unas provincias y otras.

Las reformas introducidas tienen que ver –dijimos 14– con el artículo 23, donde se modifican los plazos de explotación y se reducen los plazos de exploración –repito– ante la necesidad de que sea la inversión el determinante del mantenimiento de los mismos y cuanto más tiempo se demore en ese proceso de exploración, más se gravará lo que se deba compensar.

Fundamentalmente, en el proyecto de inversión sostenible posteriormente para la explotación, para transformar ese permiso en concesión de explotación, ése es un atributo básico e indelegable de la autoridad de aplicación de la jurisdicción. Se ha dicho que son concesiones a perpetuidad. No es verdad, porque es facultad precisamente de la autoridad de aplicación entender sobre la base de lo acordado en el llamado que motivara la concesión, si los recaudos de inversión –repito que es determinante la necesidad de inversión en esas áreas– han sido realizados.

Se acompaña la descripción del plan piloto que es determinante en torno a esa expresión de voluntad y eficacia de inversión, que es lo que va a tener que ser considerado específicamente por la autoridad de aplicación para tomar las resoluciones que le atribuye la ley con respecto al mantenimiento o prórroga de esas concesiones.

En otro anexo, cuya importancia está de más destacar, están los beneficios del decreto de promoción de inversiones hidrocarburíferas 929/13, que determinó que toda empresa que tuviera un área concesionada, convencional o no convencional, garantizando durante cinco años una inversión de más de mil millones de dólares, podía, al cabo de ese período, disponer del 20 por ciento de lo extraído en función del valor del mercado internacional. Pero esto implicaba, a su vez, la facultad del Estado, en el caso que fuera necesario destinar ese 20 por ciento a satisfacer necesidades del mercado interno, de comprarlo al valor internacional. Este beneficio se extiende bajando el monto de la inversión para contemplar la mayor cantidad de inversores posible, con un mínimo de 250

millones de dólares, y se acorta el plazo a tres años para poder disponer de ese 20 por ciento en el mercado internacional.

Las modificaciones que la ley introduce en cuanto a plazos, modalidades y ventajas están directamente vinculadas al volumen de la inversión comprobada en el yacimiento. Y ésta es, precisamente, la responsabilidad que tiene la autoridad de aplicación, sea nacional o provincial.

La cuestión ambiental, que es un tema caro a todos nosotros, genera, en primer lugar –y ya lo he sostenido–, una ventaja comparativa que radica justamente en las bondades de las características geomorfológicas de estos yacimientos que, salvo impericia o grosero error, tienen las napas freáticas absolutamente a resguardo por la simple distancia entre una y otra. Será la autoridad de aplicación la que tendrá que velar adecuadamente por esa protección ambiental, con las exigencias que cada legislatura provincial deberá sancionar conforme este convenio establece entre los gobernadores y la Nación.

Simplemente, quiero indicar que sólo tratar el agua de río en su transporte, captación, almacenamiento, transporte, tratamiento y depósito implica inversiones de una gran magnitud, volúmenes de actividad económica sin precedentes para nuestras regiones. Todavía no tenemos dimensiones ciertas de ese impacto que genera ni de las dificultades y los desafíos que dicho impacto acarreará.

Hablábamos con el secretario general del gremio, senador Pereyra, de que, en este momento, por una habitación minúscula en Añelo se está pidiendo hasta más de ocho mil pesos de alquiler; y la presión sobre los precios, la curva de precios en los supermercados varía conforme a la distancia del lugar de pagos de los salarios. Neuquén tiene hoy, probablemente, los precios más caros en los supermercados. Cabe también destacar la presión del negocio inmobiliario que esta expansión genera en otro tipo de actividades económicas que deben ser protegidas, como la agricultura familiar. ¡Es inmensa!

Todos estos son los desafíos sobre los cuales las comunidades de estas provincias, que están bendecidas por esta riqueza, tienen que tomar recaudos para que se desarrolle correctamente. Ya hemos vivido procesos parecidos, donde aparecía la bonanza. Nosotros, en nuestra provincia,

vemos que las grandes obras hidroeléctricas lo único que dejaron fueron obradores abandonados y gomerías a la vera de los caminos.

Quiero decir que es imposible cumplir los objetivos que estableciera en su momento la ley 26.197 si no media una tarea mancomunada entre la Nación y las provincias.

A los efectos de no seguir ocupando tiempo, otros compañeros de la bancada se referirán al comentario de los catorce artículos que han sido modificados.

Capítulo aparte merece la complejidad de la deuda externa soberana, con esta expectativa inmensa de desarrollo hidrocarburífero que potencia a la Argentina a pasar de ser un país netamente importador a la posibilidad de ser un país exportador de hidrocarburos.

Esa bomba de retardo que conforma el fallo del juez Griesa en la acción de esos fondos buitres –fondos buitres que no son una anomalía del sistema capitalista, sino que fundamentalmente operan como la fuerza de tareas de ese sistema– es el elemento condicionante que se busca sobre la tutela de estos recursos. Es muy sencillo: provocar la caída de nuestra negociación soberana implica una actualización de deuda que probablemente supere los 400 mil millones de dólares.

Yo no tengo la menor duda de que inmediatamente se constituye la misión del Fondo Monetario y a los distintos candidatos a presidente les ofrecen la panacea de que se van a hacer cargo de esos 400.000 millones de dólares en estas condiciones; y “estas condiciones” son: “Éste es el programa de gobierno para los próximos 50 años y éstas son las condiciones de explotación de esos recursos”.

La independencia, la soberanía, el abastecimiento energético –e hidrocarburífero en particular– de la Nación están íntimamente vinculados al conflicto que hoy tenemos con esos fondos buitres. Ésa es la hipótesis de conflicto que se deja sembrada. Eso lo hablamos en Washington con los representantes del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Hablamos de las hipótesis de conflicto, de la existencia de una cuenca hidrocarburífera de significación como la que podíamos constituir y de qué necesidad había de provocar esa conflictividad si no era simplemente el intento de manipular y controlar.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Senador: se ha excedido varios minutos. Le ruego si puede finalizar.

**Sr. Fuentes.** – Estoy en eso.

**Sr. Mayans.** – Él es miembro informante, señor presidente.

**Sr. Fuentes.** – Estoy buscando la piedra filosofal. (*Risas.*)

Para cerrar, la norma que traemos a consideración es el corolario lógico y derivado de esa decisión trascendente de la señora presidenta de proceder al dictado de las normas sobre hidrocarburíferos y sobre la expropiación de YPF para convertirla nuevamente en empresa de bandera. Ésa es la herramienta con la cual contamos y esta ley va a facilitar los mecanismos de asociación de esa empresa con aquellas inversiones que no solamente traigan capital sino también tecnología en el duro aprendizaje que estamos llevando adelante de poder aprovechar esos recursos.

Simplemente les recuerdo a los señores senadores qué distinto hubiera sido el destino del cerro del Potosí –hablando de geología, según el senador Cimadevilla– si pudiese comenzar a explotarse hoy con la tecnología existente: ése sería un yacimiento inagotable.

Es evidente que los países centrales extraen recursos de la periferia con los menores costos posibles y con las mayores consecuencias ambientales y preservan sus recursos estratégicos para otro momento, para el futuro.

Voy a citar un solo ejemplo. El elemento exterior que provoca la caída del presidente Salvador Allende es cuando Estados Unidos mueve sus reservas de cobre para hacerle caer el único producto exportable que Chile tenía. La huelga patronal camionera de Chile, que paralizó el país durante tres meses, más la pérdida de divisas provocan las condiciones del malestar donde operan, como documentación decodificada recientemente del Departamento de Estado Americano lo demuestra: un golpe financiando por la CIA. Esto es lo que hoy está en juego acá.

Y no quisiera simplemente comparar algunas actitudes, como pretender, a pérdida de recursos propios, no vender soja para que el Estado no tenga recursos; guardar soja, aun a precio de perder dinero, para desfinanciar al Estado.

Entonces, tengamos cuidado, y, sobre todo, cuando sostengamos las posiciones legítimas que acá vamos a sostener, manifestemos qué interés concreto tenemos detrás de esto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: ¿por qué no se lee la lista de oradores, la cerramos, y así tenemos una hora prevista para el cierre de debate? Pedimos el cierre de la lista de oradores.

**Sr. Presidente.** – Continuaría el senador Sanz y luego los senadores Di Perna, Garramuño, Solanas, Pereyra, González, Martínez, Leguizamón, Negre de Alonso, Bermejo, Santilli, Petcoff Naidenoff, Giménez, Linares, Higonet, Guinle, Montero, Labado, Morandini, Crexell, Rozas, Urtubey, Artaza, Mayans, Cimadevilla, Fernández, y cierran los senadores Verna, Michetti, Odarda, Romero, Morales y Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Cumplamos con el plazo reglamentario de los diez minutos para poder avanzar.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra el señor senador Linares.

**Sr. Linares.** – Señor presidente: habíamos acordado en labor parlamentaria que había una modificación a un artículo, no la mencionó el miembro preopinante, para volver al dictamen anterior. Entonces, es a los efectos de que nos pasen el articulado para tener completa la información.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra la señora senadora Pilatti Vergara.

**Sra. Pilatti Vergara.** – Señor presidente: quiero pedir autorización para que podamos insertar quienes no hagamos uso de la palabra, así no dilatamos en el tiempo el debate.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Se van a votar los pedidos de inserción.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Aprobado.

Con las incorporaciones en la lista de oradores ya realizadas, se la da por cerrada.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Señor presidente: me pasa cada vez que me toca hablar después del senador por el Neuquén que cambio totalmente en la cabeza lo que tenía pensado para hacerme car-

go de algunas de las reflexiones que el senador ha efectuado, sobre todo esta reiteración –lo escuché por lo menos tres o cuatro veces en su discurso– de que se aclare a partir de él a qué intereses responden todos los que hablen, todos los que expresen una posición.

No sé para los demás, para los que hablen después de nosotros, pero como me toca ser miembro informante no de una ONG, sino de un partido político que tiene una historia en este tema, vamos a hacer caso omiso a ese desafío que ha hecho el senador preopinante porque no necesitamos, cuando pedimos la palabra y hablamos de hidrocarburos, de la defensa de la soberanía energética, cuando hablamos de proyecto nacional estratégico en materia energética, andar aclarándole a nadie a qué intereses representamos.

Hemos venido representando en este país, a lo largo de la historia, desde que se descubrió el primer pozo de petróleo, que casualmente coincidía con las épocas en que el radicalismo era gobierno, desde que se creó la empresa estatal, que también coincidía con nuestros gobiernos. Hemos venido sosteniendo desde siempre y en los avatares que ha tenido la historia argentina la misma línea conceptual, la misma línea ideológica, la misma línea argumental.

Por lo tanto, si al senador preopinante le interesa saber qué intereses estamos defendiendo, en el caso nuestro, que lea la historia, y que ahí se va a dar cuenta de cuál es la línea de la Unión Cívica Radical, que es la que vamos a tratar de defender hoy porque en este tema no hemos tenido ni dobleces ni cambios de rumbo.

Otra de las cosas que me pasa cuando me toca hablar después de él es que siento como que tengo que bajar a tierra un debate que se ha puesto por allí arriba, en una suerte de superestructura ideológica, que me parece bien porque todos los temas tienen que ver con ideología y todos los temas tienen que ver con definiciones conceptuales, pero en este caso en particular me quedo con una suerte de sabor a poco, porque fijese lo que significa estar discutiendo esta ley y qué es lo que estamos discutiendo.

Estar discutiendo esta ley significa que, por primera vez en la historia de la República Argentina, un Congreso de la Nación va a discutir una Ley de Hidrocarburos.

Obviamente, esta no es la ley; son modificaciones a una ley anterior. Pero por primera vez el Congreso va a discutir una ley. Nunca un Congreso discutió una Ley de Hidrocarburos.

Lo que hubo antes de la ley 17.319 fueron resoluciones, normas aisladas; no una Ley de Hidrocarburos; nunca pasó por el Congreso.

Lo que la 17.319 expresa es un decreto ley de la dictadura, de la época de Onganía, y desde ahí hasta esta parte nunca hubo un debate porque nos ha regido la 17.319.

Por lo tanto, quiero poner el acento en la importancia que esto tiene.

Ahora bien, dicho esto, el gusto a poco que nos queda es porque, primero, es una modificación parcial, y creo que después de cincuenta años la Argentina merece la discusión de una ley integral de hidrocarburos.

Éste es precisamente el trabajo que se ha tomado la Unión Cívica Radical, presentando como proyecto alternativo o como dictamen en minoría una ley integral de hidrocarburos que recoge el trabajo de mucho tiempo, el trabajo de mucha gente, la inteligencia de muchas personas –fuera de estas bancas–, las que fueron consultadas y con las que se debatió durante mucho tiempo en cada uno de los diferentes proyectos que hemos presentado a lo largo del tiempo.

Nos quedamos con ese gusto a poco porque entendemos que merecíamos la discusión integral de una nueva Ley de Hidrocarburos.

Dicho esto, tampoco estoy de acuerdo con que lo que se está discutiendo acá forme parte de un plan; que esta ley se inscriba dentro de una estrategia nacional implementada sobre todo en estos últimos tiempos y que tenga que ver con un plan nacional de energía, de autoabastecimiento, de desarrollo estratégico de las cuencas hidrocarburíferas. De ninguna manera; y vamos a tratar de hacer reflexiones para que se entienda qué es lo que queremos decir.

Es más, hace mucho tiempo que en la Argentina no hay un plan, y esto no es privativo del actual gobierno. En esto hay muchas responsabilidades de la dirigencia política en todos sus tiempos. Hay que hacer una profunda autocrítica. Hace mucho pero mucho tiempo que en la Argentina no hay un verdadero plan estratégico vinculado al desarrollo hidrocarburífero.



Esto es porque al espacio, al esquema de los hidrocarburos en el país, le ha pasado lo mismo que a otras áreas, a la economía en general; al modelo productivo en general. Le ha pasado que ha vivido, por lo menos en los últimos veinte y pico de años –en esto me hago cargo de los que nos toca en esos veinte y pico de años: los dos años de gobierno del 99 a 2001–, pero en más de veinte años este tema sufrió los mismos avatares que sufrió la economía y el país en su conjunto.

En la política del péndulo, pasamos en una época a la visión mercadocentrista donde el mercado podía arreglar todo, el mercado podía proveer y distribuir riquezas, también acá, en materia de hidrocarburos; el mercado podía encargarse absolutamente de todo, con un repliegue del Estado que nos ha traído consecuencias calamitosas en términos de desarrollo.

Después pasamos, ahora, en estos tiempos, a la visión –que no significa una realidad– del Estado presente: el estadocentrismo. Del mercadocentrismo al estadocentrismo. El Estado que todo lo puede, el Estado que supuestamente tiene un plan, el Estado que genera riqueza, que la distribuye, que hace absolutamente todo.

Entonces, creo que a esta altura vendría bien un debate, en el concepto del rol del Estado, que nosotros lo traemos acá y lo queremos traer al ámbito económico, cuando discutamos el presupuesto, y lo vamos a traer en todos los ámbitos, porque es un tema transversal a todas las cuestiones de debate en la Argentina. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el Estado que nosotros tenemos que encontrar, como síntesis?

Porque haber pasado de un extremo del Estado ausente al Estado omnipresente no nos está trayendo beneficios. No estamos bien. No hay datos objetivos que se puedan mostrar como que estamos aprovechando los beneficios de esa concepción.

Lo que digo, en materia ya de hidrocarburos, bajando a tierra, es que tan negativo ha sido y es el Estado ausente, el que dejó en manos del mercado la explotación, la producción de los recursos estratégicos, como el Estado ineficiente. Y acá está el punto: el Estado ineficiente.

Cuando se habla de plan, yo quiero ir al punto y tocar cada uno de los temas, no contestándole, quizás, al senador preopinante porque no habló de eso, pero sí recordando las palabras que el

ministro de Planificación de Vido expresó en la presentación del tema, cuando empezamos a discutir esto en las comisiones, la semana pasada. Él fue, en nombre del Poder Ejecutivo, quien presentó el tema. Y lo presentó como parte de un plan estratégico.

Yo me permito decir que nunca hubo un plan, que si lo hubo fue un plan muy ineficiente, pero me quedo con que nunca hubo plan y lo que hubo fueron parches, “contraparches”, marchas, contramarchas, un pragmatismo que en algún momento pudo tener sentido, pero que nos ha traído muchos perjuicios.

El plan de los últimos años arrancó, sobre todo, para los que tenemos memoria y además fuimos protagonistas, con la ley que creó ENARSA. Ése fue el primer episodio, la primera decisión estratégica, si se quiere, que el gobierno tomó apenas asumió en 2003. Lo de ENARSA fue alrededor de 2004, cuando el gobierno ya se estaba asentando en su primer tiempo.

Y yo recuerdo el debate de ENARSA. Tanto lo recuerdo que nosotros votamos a favor de ENARSA. Tuvimos un debate tan fuerte dentro del partido, que votamos a favor a pesar de todas las reservas que teníamos, a pesar de todos los prejuicios que, con el tiempo, se fueron confirmando. Más que de prejuicios, se trataba del viejo cuento de que alguien aparece al final del tiempo y dice: “¿Viste que yo te dije, viste que te dije que iba a pasar esto?”. Y a pesar de esas cosas, nosotros votamos a favor de la creación de ENARSA, porque siempre creímos que el Estado tenía que tener un rol activo, que tenía que tener herramientas concretas para intervenir en un modelo estratégico, que no puede estar librado a las fuerzas del mercado, al capitalismo del mercado.

Pero miren cómo ha terminado, con el tiempo, esa creación de ENARSA: en el reconocimiento, liso y llano, del fracaso del gobierno, expresado en esta ley, cuando revierte las áreas, revierte todos los derechos concedidos a ENARSA en la plataforma *off shore* para que lo maneje, ahora, la Secretaría de Energía. Y, en el medio, deberíamos darnos un debate –hoy no da el tiempo– acerca de lo que ha hecho ENARSA en todos estos años, desde 2004, en que empezó a operar, hasta ahora. ¿Cuál fue el cometido de ENARSA? ¿Cuáles son o cuáles fueron las contrataciones?

Terminó siendo una inmobiliaria de estos derechos, que hoy vuelven a manos de la Secretaría de Energía, pero que nunca hizo absolutamente nada. En la jerga de Galuccio: un cortador de pasto de primera calidad. De esos cortadores de pasto a quienes se les dan las concesiones y que –como los cortadores de pasto de un lote–, en lugar de edificar, van los fines de semana, cortan el pastito del lote, pero nunca van a edificar nada. Ésos son los cortadores de pasto en materia petrolera. ENARSA se lleva las palmas como el primer cortador de pasto que ha habido en el país, en estos años. Concesiones extraordinarias con las que podría haber hecho miles de operaciones con inversores de afuera, con inversores de adentro. Y ahora el fracaso está en los artículos en los que se revierte esta cuestión.

Ahí está la primera parte del plan.

La segunda: la Ley Corta. Yo quiero hablar de la Ley Corta, quiero hablar de esta ley. Es cierto que la Ley Corta no puede ser caratulada como un fracaso, al contrario, institucionalmente es un avance. La Ley Corta, que también votamos –estoy haciendo referencia a todas las cuestiones en las que nosotros hemos dejado puesto el sello de nuestra ideología– con las dos manos porque era la consolidación de lo escrito en la reforma constitucional del 94, era la puesta en operatividad del 124 de la Constitución y de la transferencia del dominio de los recursos a las provincias, tampoco puede ser exhibida acá como parte de un plan. En todo caso, la institucionalidad argentina la puede exhibir como un avance, pero en la práctica, operativamente, el gobierno, este gobierno, no lo puede exhibir como algo exitoso, porque la Ley Corta no dio sus resultados, porque la administración de los recursos por parte de las provincias no ha sido buena. Y si hubiera sido buena no estaríamos discutiendo esta ley. Ésa es la prueba más acabada de que la Ley Corta no rindió sus frutos. La Ley Corta fue transferirle la propiedad a las provincias y desentenderse de lo que la propia Ley Corta establece para el Estado nacional: tener un plan nacional energético.

No hay posibilidades de ensamblar la idea de Nación con la idea del federalismo si estos dos factores juegan en paralelo o juegan cada vez más equidistantes. Nación federal significa encastrar en una sola idea los beneficios de te-

ner una Nación, que es tener un plan nacional con el beneficio de que las provincias sean los titulares del dominio e ir juntas de la mano para poder producir, explotar, buscar inversiones, crecer, desarrollarse y hacer todas las cosas que suponen el federalismo de concertación y de desarrollo.

Entonces, no hay que rasgarse las vestiduras con la Ley Corta. Y lo hablo como senador de una provincia petrolera que votó la Ley Corta, pero que luego de seis o siete años de vigencia, y como representante de esa provincia petrolera, tengo el derecho de revisar qué pasó. ¿O acaso la autoridad de aplicación, que son los gobiernos de las provincias, hizo todo bien respecto de lo que debía hacer con relación a la Ley Corta? Miremos.

En algunas provincias se dieron renovaciones y prórrogas de concesiones casi con una continuidad casi vitalicia. En otras provincias se dieron concesiones que no han tenido ningún fruto porque no ha habido ninguna inversión.

En otros casos, la formulación de esquemas asociativos con las empresas energéticas de las provincias que, supuestamente, iban a traer beneficios y tampoco se dio como se suponía. Y en el medio muchas sospechas de poca transparencia.

Hay que decirlo: muchas sospechas de poca transparencia en estos esquemas, y por una cuestión elemental. Cuando se habla de la autoridad de aplicación hay que poner el debate sobre la mesa.

Las provincias, negociando cada una en forma aislada semejantes intereses y con semejantes titulares del capital del otro lado, son débiles. Son institucionalmente débiles. Y lo dejo ahí. No ahondo en que también hay que ver quién está del lado de la provincia porque entran a jugar aspectos humanos. Lo dejo ahí porque no quiero profundizar ese debate, pero son débiles institucionalmente.

Entonces, el federalismo de concertación exigía que, después de la Ley Corta, cada provincia que tuviera en sus manos la posibilidad de avanzar en negociaciones contara con un gobierno nacional, un plan nacional –un Estado nacional–, que pudiera fiscalizar, ayudar y compartir estos esquemas. Porque no hay salida para las provincias si no es junto a la Nación.

Y tampoco la hay para la Nación si no lo es acompañando a las provincias. Y eso faltó en estos años. Hoy se da este debate porque falló la Ley Corta. Porque si la Ley Corta hubiera sido la panacea, hoy no estaríamos discutiendo este tema, que ha sido hecho nada más que con el fruto de la necesidad de salir a buscar inversores y no del plan estratégico de tener una nueva Ley de Hidrocarburos. No nos engañemos a nosotros mismos. Somos gente grande, debatamos en función de la realidad. No discutimos acá la panacea universal o la piedra filosofal, como decía recién el señor senador preopinante. Discutamos de intereses concretos y de dinero que le hace falta al país. Después veamos las demás cosas. Centrémonos en eso porque, si no, vamos a pensar que discutimos el diseño ideológico de vaya a saber qué cosa.

La tercera cuestión dentro del no plan. Lo de Repsol YPF, la época de esa compañía en YPF desde que asumió el gobierno hasta el 2010, año en que se estatizó YPF. ¿Alguien puede ver un plan estratégico allí? ¿Alguien puede ver un plan de desarrollo de contenido nacional?

Por eso, cuando el senador preopinante tira ese guante para que alguien lo recoja sobre qué intereses van a defender, ¿por qué no me cuentan qué intereses defendieron en esos años?

¿Por qué, en vez de preguntar qué intereses van a defender los que hablen a partir de ahora con esta ley, alguien me explica –porque tengo tantas dudas, al igual que muchos argentinos– qué intereses se defendían en esa época, cuando se bancaba a Repsol, cuando se bancaba la incorporación del capital privado argentino, cuando se permitió que los miles de millones de dólares –que hoy desesperadamente salimos a buscar con esta ley– se fueran por las cuentas del Banco Central –como salen los dólares– en valijas, qué sé yo cómo se fueron? La verdad es que a esta altura deben ser tan sofisticados esos sistemas que no sé cómo se fueron. Sin embargo, se fueron; están contabilizados. Se fueron miles de millones de dólares todos los años en concepto de utilidades –muchas más de las que se podían haber repartido–, que deberían estar enterradas en nuestro subsuelo y nos hubieran permitido, si eso se hubiera fiscalizado desde la Nación, tener el autoabastecimiento que perdimos. Entonces, hoy, esos miles de millones de dólares que este gobierno, por no tener plan,

permitió que se fueran escandalosamente son los que hay que salir a buscar desesperadamente con esta ley.

Éstas son las contradicciones de las que hay que hacerse cargo. Por lo menos, no quiero que a mí me cuenten el cuento del plan; no hubo plan. Y si lo hubo, no tenía nada que ver con los intereses nacionales. Eso también hay que decirlo: no tenía nada que ver con los intereses nacionales; en todo caso, con otros intereses. Pero acá no vamos a hablar de esas cosas.

**Sr. Pichetto.** – ¿Me permite una interrupción, senador Sanz?

**Sr. Sanz.** – Sí, señor senador.

**Sr. Presidente (Zamora).** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: a mí no me gusta mucho reflexionar sobre el pasado porque parecería que ajustamos cuentas hacia atrás. Sin embargo, parte de la crisis de 2001, parte de la crisis del sistema económico, determinó una política energética sobre la base de fuertes subsidios del Estado y de precios por debajo del nivel internacional, cuya finalidad era incentivar el desarrollo industrial y alentar al consumidor, ayudarlo con una plusvalía en la mecánica de su salario.

Es indudable que si uno hace el repaso histórico, quizás ésas sean algunas de las cuestiones que tienen que ver con la falta de procesos de inversión. Si el valor del crudo no coincide con el valor internacional, indudablemente, puede ser un elemento totalmente desmotivador en el plano empresario para invertir. Pero había una política – y la hubo – en la Argentina que tendió a que creciera el desarrollo industrial a expensas de tarifas baratas, de combustibles baratos –uno de los más baratos de Latinoamérica y del mundo–, solventada por el Estado nacional, que no fue valorada. La verdad es que si hacemos un análisis, no fue valorada. Hay cosas que a veces se incorporan, que forman parte de lo cotidiano, y no las valora nadie.

Ayer vi en un programa de televisión al senador Morales, junto con el senador Solanas –no compartían lo mismo, pero estaban en el mismo programa–, y dijo algo que comparto: el fuerte proceso de concentración de subsidios en el área metropolitana a expensas de un interior que tiene que pagar tarifa plena. Yo lo

comparto. Incluso, en un escenario que nos es totalmente adverso, pues esta ciudad nunca nos ha reconocido absolutamente nada de todo lo que hemos hecho en estos diez años en términos tarifarios. Si uno analiza la política de la ciudad, se actualiza permanentemente –por arriba del 50 por ciento– el ABL todos los años.

Entonces, creo que hay algunas cuestiones que el proceso histórico revisará y que, a lo mejor, podemos compartir. Pero hubo una política y hubo un fundamento, que fue tratar de sostener una tarifa mucho más accesible al ciudadano y, fundamentalmente, un incentivo a la industria en materia de combustible y de gas; o sea, en materia de la energía que es fundamental para crecer. Esto hoy se empieza a revertir, con una ley más realista. Yo comparto que esta ley tiene contenidos de incentivos a la inversión, indudablemente: retiro de utilidades y precio del crudo que se acerca al precio internacional. Me parece que esto forma parte de un análisis que se acerca más a la realidad, senador Sanz.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Continúa en el uso de la palabra el senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Yo no creo que sean incompatibles ambas cosas. Se puede generar una inyección en la economía y se puede decidir subsidiar tarifas, porque de esa manera se está generando una acumulación social y económica que a la vez redunde en el consumo y en la competitividad del sector económico, y no descuidar el plan hidrocarburífero ni el plan energético. El problema es que acá se hizo una cosa y se descuidó totalmente la otra. Pero se puede hacer. Porque los subsidios no explican el desmanejo con Repsol. No lo explican.

En ese sentido, no me voy a olvidar jamás de lo que ocurrió cuando vino aquí Kicillof. Él tiene la ventaja de que, desde que asumió, no se hace cargo de nada de lo que pasó. Y justo cuando él asumió, vino a hacerse cargo del debate de la estatización de YPF. No me lo voy a olvidar jamás. Tenía sentado a De Vido de un lado y a Cameron del otro. Parecían enemigos. Y lo que estaba señalando Kicillof de los últimos seis o siete años –de los que habían sido responsables los dos que tenía al lado– era precisamente lo que estoy diciendo yo ahora. O sea, que no soy un opositor caprichoso que se inventó ahora estas cosas, para contestarle al senador por el

Neuquén. Éste es un debate que intentamos que sea muy profundo.

Entonces, para terminar este tema, afirmo que se podía haber hecho y se puede hacer económicamente el tema de tener tarifas que generen volumen económico interno y, por otro lado, no descuidar la política hidrocarburífera. Pero acá esto se descuidó, y por eso digo que no hubo plan. O hubo un plan, en el caso de Repsol, que tenía otra intención, otros fines.

Ahora bien, obsérvese bien el tema de los precios. Digo esto, sobre todo, para el senador Pichetto, porque lo involucra a él. Lo tengo anotado aquí. Miren la contradicción enorme en el debate de los otros días. Frase del ministro De Vido: “Los precios internos se encuentran establecidos a costos argentinos, y desacoplados de los precios internacionales, producto de la decisión política vigente desde 2003 que defiende la visión de que la Argentina necesita competitividad para su desarrollo”. Esto lo dice De Vido ahora, porque está convencido.

Pero después vino la secretaria de Energía y dijo que uno de los principales beneficios del decreto 929 es, justamente, el giro de divisas al exterior y que a partir del tercer año pueden obtener el precio del *import parity*, o sea, paridad de importación para su producción.

Y luego cerró el senador Pichetto diciendo: “Yo quiero reconocer acá el rol preponderante del ingeniero Galuccio, porque fundamentalmente ha emprendido un camino que tiene que ver también con que las empresas tengan previsibilidad, retiro de utilidades y un valor del crudo que tenga también que ver en la relación con el precio internacional”.

O sea, De Vido diciendo una cosa, y Pichetto y la secretaria de Energía diciendo otra. ¿Cuál es el problema? ¿Está equivocado Pichetto? No. El que está equivocado es De Vido. ¿Y quién es De Vido? El responsable de la política energética de todos esos años. Éste es el problema. Acá quedó patente, en la versión taquigráfica –porque somos esclavos de nuestras palabras–, cuál es la cabeza que tiene cada uno.

Y voy a decir algo, que iba a expresar más adelante: ¿cómo no va a ser este proyecto, en lugar de ser una elaboración de la secretaria de Energía o del Ministerio de Planificación, una elaboración de Galuccio en YPF? Porque es el



que entiende la cosa. Y los otros no. Éste es el problema. Pero coexisten en el gobierno.

Pues bien, háganse cargo de esta contradicción. Nosotros no nos vamos a hacer cargo.

Y sigo. Dentro del no plan, los regímenes de promoción...

**Sr. Pichetto.** – Con esta ley se está avanzando...

**Sr. Sanz.** – ¿Sabe qué pasa? Que sigue sin haber inteligencia y plan en los responsables de la política. Y nosotros no podemos caer en el error –que está rondando alrededor de todo este debate– de que la política energética del país es YPF. Porque si ustedes quieren que esto sea así, compremos el 49 por ciento y hagamos una sociedad del Estado como corresponde, con todas las de la ley. Pero mientras tanto, si no es así, la política no puede ser de YPF; la política es de la política. La política es de quienes tienen responsabilidades políticas, de quienes son elegidos para eso.

Entonces, si De Vido viene acá con el casete de hace ocho años, el problema es de la política, no de Galuccio. Galuccio tiene el casete de ahora para adelante, pero el que tiene el casete... Bueno, ya está, no voy a hablar más de De Vido.

Regímenes de promoción, otra parte del no plan. Hemos tenido ley de promoción de hidrocarburos, que la votamos en el año 2007; no tengo el número acá, pero ahí está. El decreto 929. Los planes: Gas Plus, Refino Plus, Petróleo Plus. ¿Y por qué estamos discutiendo esto? Si hubieran servido todas estas cosas no estaríamos discutiendo esto. Entonces, eso tampoco formó parte de un plan.

Ahora bien, hubo un detonante, que fue en el 2010 cuando se perdió el autoabastecimiento. Vuelvo sobre las palabras de De Vido, que vino a explicarnos que no teníamos que hacernos problemas, que teníamos que minimizar, que sólo tenemos un problema del 10 por ciento de autoabastecimiento. Yo no sé si es del 10, 11, 8 o 9 por ciento. Lo que sí sé es que desde ese momento las cuentas de la economía en general empezaron a descalabrarse, que el verdadero impacto negativo que hubo sobre la economía fue el proceso de la pérdida del autoabastecimiento y los dólares que hacen falta. Este año...

**Sr. Mayans.** – ¿Y la deuda?

**Sr. Sanz.** – Este año vamos a llegar a casi 15.000 millones de dólares, dólares que hacen falta. Me podrán dar explicaciones económicas o lo que quieran, pero ahí están los dólares que nos hacen falta y que se nos están yendo por ahí. En tres años y medio que llevamos han impactado negativamente sobre las cuentas de la economía, y no es que lo diga yo. Impactan negativamente en las cuentas de la economía.

La consecuencia de ese detonante fue la estatización del 51 por ciento de YPF y esta ley. Pero son consecuencias y no las causas de un plan. Esto es lo que quiero discutir. A mí no me vengan a tratar de convencer de que todo esto es parte de un plan, son consecuencias. La estatización también fue una consecuencia, porque el agua empezaba a llegar al cuello y, entonces, se dieron cuenta de todos los errores, y ahí se dieron cuenta de lo de Repsol, de las utilidades. Esto no lo dije yo, lo dijo el señor Kicillof. Están en la versión taquigráfica cuáles fueron las razones de la estatización.

Vuelvo al punto: no se puede reemplazar un plan nacional con una empresa en donde el señor Slim tiene más porcentaje que mi provincia, Mendoza. En esa empresa el señor Slim tiene el 5,7 por ciento de las acciones; mi provincia, Mendoza, tiene el 5,2. ¿De qué estamos hablando? El señor Soros tiene el 3,5 por ciento. La única provincia que está por encima de estos señores inversores, financistas internacionales, es Neuquén. Todas las demás estamos por debajo. Entonces, esa empresa no puede ser la generadora del plan nacional, más allá de que tengamos la mayoría.

Además, quedó clarito cuando le pedí a Galuccio que mostrara los otros días a los senadores que estuvimos en el debate la filmina de la cantidad de producción y cómo se dividía entre todas las empresas. Ahí queda claro que YPF tiene una porción de la producción del 37 por ciento nada más, el resto es del sector privado, y menos aún de las áreas concedidas, donde tiene el 23 por ciento. Lindo debate el tema de los cortadores de pasto. ¿Cómo puede ser que una empresa tenga nada más que el 23 por ciento de las áreas concedidas –esto que digo va en favor de YPF– y tenga el 37 de la producción? Quiere decir que las otras empresas, que tienen la gran torta de las áreas concedidas, no producen. Es así, es verdad.

¿Por qué no producen? Porque la autoridad de aplicación, en la que nos refugiamos permanentemente, está fallando, sea la autoridad nacional o las provinciales. Recién dije cuál es el problema de que sean solamente las provincias...

Sí, vamos.

**Sr. Pichetto.** – La autoridad de aplicación son fundamentalmente las provincias. Asumamos este debate con valor y profundidad y hagamos la autocrítica de provincias que son ricas en su naturaleza y pobres en el Estado; estados precarios que no pueden pagar salarios. Entonces, se colocan en situación de alta debilidad cuando negocian con empresas petroleras.

**Sr. Sanz.** – Lo dije yo recién.

**Sr. Pichetto.** – Comparto plenamente, y lo vengo diciendo en este debate desde el primer día.

**Sr. Sanz.** – Compartimos...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

**Sr. Sanz.** – Fomenté la división del bloque oficialista, lo cual no es menor. El ala Pichetto versus el ala Mayans.

**Sr. Mayans.** – Estoy en total disidencia con la explicación del presidente de la Unión Cívica Radical en materia energética porque éste no es el país que encontró el gobierno.

**Sr. Sanz.** – Ya está, sigo.

A favor de YPF, reconozco que sacudió la inercia con la que veníamos. Me hubiera gustado que en vez de venir Galuccio como presentador hubiera venido un secretario de Energía que se las aguantara. Quiere jugar fuerte en el mercado, está bien. El tema de las disputas que ha tenido con las provincias es para discutirlo. Que quiere conseguir inversiones, es cierto.

¿Qué es lo que hay en contra de todo esto? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo un proyecto de ley que procura buscar inversiones. En contra, el oficialismo va a sancionar esta ley con los votos que tiene y las inversiones buscan otra cosa, no solamente una nueva Ley de Hidrocarburos. Buscan una nueva macroeconomía estable y este país no la ofrece. No por casualidad cuando estábamos discutiendo esto los otros días estaba renunciando el presidente del Banco Central y se le estaba aceptando su renuncia. Todos sabemos lo que eso ha significado en materia de debate econó-

mico. Lo vamos a discutir ahora, cuando venga el pliego del nuevo presidente del Banco Central de la República Argentina. Una macroeconomía y un sistema institucional que mientras se discute este proyecto mantiene el artículo de la ley de abastecimiento que permite meterse también en esta actividad y hacer todas las cosas que posibilita hacer esta ley en un supermercado o en una fábrica de harina o de chocolate. Y pueden hacerlo; entonces, cualquier inversor va a decir: ¿esta ley de abastecimiento se me aplica también a mí? Entonces, no me importa mucho lo de los años porque si con esta ley de abastecimiento se puede hacer estas cosas de un día para otro, también en esta actividad, entonces, pónganse de acuerdo, ¿quieren inversiones o no quieren inversiones?

Regulaciones varias. También hay un problema acá. Hay problemas de transición política. Y de esto hay que hablar también. Hay transición política en los gobiernos de provincia y, por lo tanto, hay debilidades para poder acordar cuestiones estructurales a treinta, cuarenta o cincuenta años y hay transición política a nivel nacional. Estamos a un año de un cambio de gobierno.

Entonces, esa transición política también está en el debate de esta ley. Y por eso será que la debilidad de la transición política hace que nosotros tengamos muchas reservas respecto a cómo han firmado los gobernadores; no quedó muy claro. Por supuesto que todos lo salieron a defender. ¿Qué va a decir un gobernador frente a las preguntas que se le han hecho sobre si sufrió alguna presión? Sí, me presionaron, me extorsionaron...

El ejemplo más claro lo mostró el senador Cimadevilla con la hoja de los diarios, lo que pasó con el gobernador del Chubut, el proceso judicial y la denuncia. Eso pasó, yo también lo señalé. No lo invitaron a refinanciar la deuda. Firmaron y, tres días después, lo invitaron a refinanciar la deuda. Por lo menos podrían haber sido un poco más prolijos para el mensaje. Podrían haberlo hecho un tiempo después.

Éste es el contexto de la ley, no nace por virtud sino por necesidad. Por eso elige estimular el statu quo, no abrir el juego.

Después van a hablar el senador Martínez, la senadora Montero, todos los senadores del bloque van a hablar de nuestro proyecto sobre hidrocarburos y la comparación con el de ellos.

Este proyecto se asienta en los pilares de continuidad y de plazo. Acá hay mecanismos de aceleración de inversiones que en vez de estimular que los cortadores de pasto inviertan hace que ellos se queden ahí, que es todo el proceso previo de haber achicado los plazos de exploración, haber evitado de que reviertan porcentaje de las áreas como estaba en la vieja ley 17.319, que respecto de eso es mucho más dura en término de “ponerles un cuchillo en la panza” a los inversores.

En el proyecto, desde que vino del Ejecutivo hasta acá, sacaron el canon, el que estaba en el proyecto original. Es el canon para la etapa de exploración. Resulta ser que cuando vino Galuccio una de las preguntas que yo le hacía era esto, si él no pensaba que la reversión de áreas era más dura y mejor para el Estado y él me contesta: “No, porque nosotros le estamos cobrando un canon”. Pero ahora lo sacaron. Entonces me quedé con la respuesta de Galuccio y ahora alguien me tiene que explicar por qué lo sacaron, si eso era, supuestamente –según él dijo–, el incentivo para que en el proceso de exploración los inversores pusieran la plata.

No hay reglamentación de cesiones. La senadora Montero lo dijo claramente el otro día. Sobre todo en las provincias donde hemos tenido ejemplos de cesiones –las inmobiliarias–, no hay reglamentación. Y eso no es una cuestión menor. Al que entró por convencional cuando no había expectativa del no convencional hace muchos años, le estamos dando hoy una concesión de muy largo plazo. De eso vamos a hablar mucho hoy.

El punto flojo sigue siendo lo de la autoridad de aplicación. Lo había dicho antes de que llegara el senador Pichetto y lo recojo ahora. Ése es el punto flojo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para resolver la debilidad de la autoridad de aplicación? Porque me parece que esto no puede ser el mecanismo único de resolución. Y aquí tocamos el tema del federalismo y cuestiones muy sensibles. Pero la experiencia indica que no podríamos meter a la Nación a que reemplace a las provincias, porque estaríamos afectando el federalismo, y tampoco es bueno que la provincia, como autoridad de aplicación, sea el refugio para que el oficialismo, frente a cada duda, nos conteste “pero la provincia es la que decide.” Porque no nos ha ido bien con eso. Para

nosotros el mecanismo era, en vez de incentivar la continuidad, incentivar la competencia. Es la clave de nuestra disidencia profunda en esta ley. En vez de incentivar la continuidad, que es lo que hace esta ley, nosotros habríamos preferido que se incentivara la competencia.

Termino con un ejemplo. Hoy se está perdiendo mucha plata, si es lo que se pensaba encontrar. YPF compró Apache y vendió, inmediatamente después, 1.240 kilómetros de Vaca Muerta que tenía Apache a Pluspetrol en 217 millones de dólares. Un negocio de entrar y salir. ¿Una cosa inteligente? No lo sé, veremos.

¿Para qué sirve esto? Los economistas lo llaman tener el caso testigo. Cuando no se puede valorar algo porque no tiene precio, se lo toma como antecedente. Si estos 1.240 kilómetros de Vaca Muerta valen –porque eso ocurrió hace cuatro meses– 217 millones de dólares, los 30.000 kilómetros cuadrados de Vaca Muerta, que es el total, hoy valen 5.500 millones de dólares. Son 5.500 millones de dólares por el derecho, nada más, que es lo que hizo YPF. ¿Por qué no jugamos con eso? ¿Por qué esos 5.500 millones de dólares hoy, de los que YPF tuvo 217, no los involucramos acá? Habría habido una renta petrolera a distribuir entre Nación y provincias de 5.500 millones de dólares. ¿Saben dónde está esa renta petrolera? Se la damos a los concesionarios actuales.

Ésta es la famosa discusión de la renta petrolera. Acá traigo un ejemplo concreto. Son 5.500 millones de dólares. Esto es lo que uno no entiende. Esto es renta petrolera.

**Sr. Fuentes.** – ¿Me permite una interrupción? Dice la ley en el artículo 57 que pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme la siguiente escala: plazo básico, primer período, 250 pesos; segundo período, 1.000 pesos. Y se va aumentando. ¿Cómo que no hay canon?

**Sr. Sanz.** – Me sorprende que usted me haya contestado de esta manera. Le estoy hablando del valor de ese derecho en la comercialización de ese derecho. El canon es una risa al lado de esto. Si usted suma todos los cánones, con esas sumas que me dio, no sé si paga el papel.

Estamos hablando de 5.500 millones de dólares, que es el valor del derecho. YPF lo hizo

valer. ¿Por qué no lo podemos hacer en estas condiciones?

Cierro con el tema ambiental. Nos estamos perdiendo una oportunidad. No acepto, como senador de la Nación, que nosotros estemos resignando nuestra condición de constructores de leyes de presupuestos mínimos, como lo dice la Constitución. Y no lo acepto porque es sencillo decir: “vamos a discutirlo después con una ley integral”. Sé lo que pasó acá. Y todos lo sabemos. En el primer borrador estaba el tema ambiental. Es más, estaba reconociendo que el Congreso tiene la obligación de dictar la ley de presupuestos mínimos ambientales del famoso *fracking*. Pero, ¿por qué se sacó de las discusiones, de los debates? Porque los gobernadores no quieren que haya una ley de presupuestos mínimos ambientales. Me gustaría conocer cuáles son las razones por las que no se quiere tener esto ya que, en realidad, las provincias no tienen de qué quejarse. La ley de presupuestos mínimos es eso, es el piso mínimo. A partir de ahí, las provincias pueden hacer lo que quieran.

¿Por qué no lo vamos a discutir nosotros? Estamos resignando una potestad y me parece que este es el momento de discutirla, no después en otra situación.

Presidente, llego hasta acá. Perdón por el exceso. Los demás senadores de mi bloque van a hablar de nuestro propio proyecto de Ley de Hidrocarburos, que es un proyecto integral.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra la senadora Di Perna.

**Sra. Di Perna.** – En primer lugar, quiero referirme a la situación de crisis energética que vive nuestro país, algo que sufren cotidianamente los ciudadanos y que fue manifiesta en el último verano, con miles y miles de hogares sin energía eléctrica.

Es un tema en el cual todos los sectores debieran comprometerse y acordar una estrategia, priorizando el bienestar de las actuales y futuras generaciones como política de Estado.

Más allá de que existan distintos niveles de responsabilidad de funcionarios que deberán dar cuenta en la Justicia según corresponda, es fundamental acordar esto entre todos los sectores. Hace falta una política energética que sea expresión de grandes acuerdos de mayoría. La Argentina lo necesita; que sea una política de

Estado. Cualquier ley sancionada o impuesta en otro contexto –como creemos que es en este caso– no resolverá ni encauzará la situación; y los argentinos necesitamos dejar de ser víctimas de continuos desaciertos y de visiones a corto plazo.

Coincidimos que es necesaria una nueva Ley de Hidrocarburos en razón de los tiempos, de las nuevas tecnologías y de la titularidad de los recursos por parte de las provincias, pero no es este el proyecto.

Señor presidente, creemos que este proyecto de reforma de la ley 17.319 es una imposición del Estado nacional sobre los estados provinciales; y así no se acuerdan las políticas de Estado.

Para asegurar la continuidad del abastecimiento energético y lograr un pleno desarrollo del país, necesitamos una política para el mediano y largo plazo que no se modifique con la sucesión de los distintos gobiernos.

Sabemos que los recursos hidrocarburíferos son recursos agotables, finitos, por lo que no habrá futuro si no logramos diversificar las fuentes primarias de energía y redefinir la matriz energética. El Estado nacional debiera comprometerse también en el desarrollo efectivo de la hidroelectricidad, de la generación eólica, de la generación nucleoelectrónica, de los biocombustibles y otras fuentes renovables.

En nuestro país hubo en los últimos cuarenta años una gradual sustitución de petróleo por gas natural. Los hidrocarburos, en conjunto, aportaron más del 85 por ciento de la matriz energética. Sabemos que en el futuro, si bien es previsible un aumento en la participación de otras fuentes, la matriz continuará basada fundamentalmente en los hidrocarburos.

Señor presidente, éste es uno de los problemas centrales. Los actuales yacimientos de producción se encuentran en un avanzado estado de madurez. Se trata de yacimientos con varias décadas de explotación y ahora van declinando.

La productividad por pozo para el petróleo pasó de 9,6 metros cúbicos por día en 1998 a 4 metros cúbicos por día en la actualidad; y de 143 mil metros cúbicos por día a 61 mil metros cúbicos por día para los pozos de gas en el mismo período. Ello significa que se necesita el doble de pozos en producción efectiva para mantener los niveles actuales.



Los hidrocarburos por extraer en el futuro van a provenir de esos yacimientos cada vez más maduros y también de los llamados no convencionales, conformados por rocas de baja permeabilidad y arenas compactas. La tecnología de producción de esos reservorios es compleja y los costos elevados.

La señora secretaria de Energía, en la audiencia realizada en este Senado, expresó que alto riesgo para la industria petrolera es la alta inversión que requiere, mucha perforación, ya que el pozo no convencional declina rápidamente. Nosotros creemos que un riesgo mayor aún, que esta ley no debe dejar de considerar en profundidad, es la afectación e impacto del medioambiente que procede de esta actividad.

Tal como lo entendemos hoy en día, el ambiente no sólo abarca el entorno natural, el estudio de los seres vivos y su relación con el soporte inanimado, también la interrelación de las actividades productivas con el medio que las rodea.

La sustentabilidad necesaria para la extracción de hidrocarburos es de máxima importancia y esto no es posible si no existe una armonía con el medio. Ese equilibrio entre exploración, producción, factores socioambientales, aun cuando las actividades se desarrollen en regiones remotas, requiere la presencia del Estado cumpliendo un rol de contralor.

Esta ley, señor presidente, propone explorar y operar en áreas protegidas por su alto valor ambiental, histórico, arqueológico, cultural y de biodiversidad. Si hoy tratamos la producción, no podemos dejar estos aspectos para otro tiempo.

También se habla de actividades de exploración y explotación que se extienden a ríos, lagos, lagunas y mares, introduciendo nuevas dificultades y riesgos, ya que en este último caso a los riesgos habituales se suman los causados, por ejemplo, por las tormentas marinas, el transporte naval y aéreo, las instalaciones concentradas en espacios reducidos.

Además, las instalaciones *off shore* son instalaciones marinas, y a ellas son aplicables las prácticas y normas propias de la navegación. Los planes de contingencia deben ajustarse a estas condiciones y los trabajadores deben ser capacitados sobre los riesgos a los que se enfrentarán.

La Patagonia tiene historias concretas que contar en materia de derrames de hidrocarburos en el mar que impactaron en sus costas, avifauna y su impacto social en pescadores y zonas costeras.

Repito: el Estado nacional no puede eludir un rol activo en el marco de una política energética consensuada.

Esta ley hace que lo urgente, que es la inversión, deje de lado lo importante, que es el ambiente, que es nuestro hogar.

En Chubut tenemos mala experiencia. Luego de 100 años de explotación petrolera por parte de YPF en manos del Estado nacional, éste no se hizo cargo de la remediación ambiental. Esto no puede ni debe repetirse.

Tenemos miles de pozos de hidrocarburos sin sellado definitivo. Al efecto, yo he presentado un proyecto de sellado de pozos en el año 2012 que duerme en el olvido.

Nuestras provincias patagónicas pertenecen a una región semidesértica que tiene en su sótano los hidrocarburos que hoy trata esta ley, pero es el concesionario de explotación el que adquiere la propiedad de éstos en algún punto desde la profundidad del yacimiento hasta la superficie. Internacionalmente se reconoce que ese punto es la cabeza del pozo, cuando los hidrocarburos atraviesan la válvula. Para el concesionario de explotación la adquisición de esa propiedad lo hace pasible de transportar, comercializar e industrializar los hidrocarburos cumpliendo con las reglamentaciones de la ley.

Más allá de la rentabilidad que este proceso deje a la Nación y a las provincias –justa o injustamente– como resultado de esta ley, la afectación del ambiente es lo que permanecerá en el tiempo, y el Estado debe brindar las garantías para que ese territorio no sea en poco tiempo un desierto inhabitable, ya con un sótano vacío y sin alternativas para quienes elijan vivir ahí. Esta ley no puede eludirlo.

En segundo lugar, quiero destacar la importancia de leyes sancionadas por este Congreso, me refiero a normas recientes dictadas por el gobierno nacional con relación a la industria de hidrocarburos en la República Argentina.

Nuestro sector destaca la sanción de la ley 26.197, en enero de 2007, que puso en ejecución lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional en su reforma de 1994, reafirmando el principio legal de propiedad originaria de las provincias argentinas sobre los recursos naturales que se encuentran en su territorio, obviamente hidrocarburos incluidos.

Esto significa la ratificación de la adopción del sistema regalista. El proyecto de ley que estamos tratando propone fijar un tope a las regalías, con lo cual la provincia pierde su capacidad de negociación. No coincidimos, señor presidente. El núcleo normativo de la ley 26.197 establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y su plataforma continental pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado nacional y los estados provinciales, según el ámbito territorial donde se encuentren.

Otra ley que queremos destacar es la 26.741, del 3 de mayo de 2012, que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, crea el consejo federal y declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A. y de Repsol YPF Gas S.A.

El decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 1.277, crea un nuevo mecanismo de conducción del sector de hidrocarburos, que es la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Esta comisión quiere ser hoy ratificada por ley. No estamos de acuerdo, señor presidente, porque creemos que en el consejo federal deben estar representadas también las provincias que no son productoras pero sí consumidoras de energía, con lo cual deben ser parte de las decisiones en política energética. Esta comisión es otra forma de avasallamiento del Estado nacional a los estados provinciales.

En tercer lugar, nuestro interbloque propone una visión de país federal en serio, donde los gobernadores administren con capacidad de decisión y den respuesta a los ciudadanos de sus provincias. En ese sentido, en la audiencia realizada con la presencia de los gobernadores

de las provincias productoras quedó flotando la idea de que los mismos fueron presionados por el gobierno nacional para firmar el acuerdo que luego se convertiría en ley.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador don Marcelo J. Fuentes.

**Sra. Di Perna.** — Más allá de las respuestas que deberán evaluar los senadores de cada provincia, puedo decir que la credibilidad del gobernador del Chubut es nula. Este gobernador fue quien, el mismo día que asumió el cargo, traicionó a quienes lo votaron y a quienes trabajáramos fuertemente para que llegara, arrojándose ante la Nación. Y, hasta el día de la fecha, no ha tenido el coraje de ponerse de pie. No lo ha tenido, señor presidente.

También es cierto que existen otros dirigentes genuflexos en mi provincia. Esto lo digo no por resentimiento sino porque existen muestras suficientes a las que haré referencia. En este sentido, si me lo permite, leeré parte de la versión taquigráfica de la sesión de la Legislatura del Chubut, del 17 de enero del presente año, cuando se trató el convenio de reestructuración de la deuda entre nuestra provincia y el gobierno nacional. En ella, el presidente de nuestro bloque decía lo siguiente: “Acuerdan ambas partes, el gobierno nacional y la provincia del Chubut que la deuda de la provincia con el Estado nacional, al 31 de diciembre de 2013, es de 569.610.000 pesos”.

Hay una cuestión que es otro avasallamiento burdo de las autoridades provinciales. Pero burdo.

El punto 6º establece que la provincia se compromete a suministrar información actualizada y en tiempo real de la ejecución presupuestaria; suministro de un sistema de información y gestión financiera destinado a verificar el personal del sector público provincial; identificar los complejos productivos estratégicos; identificar las obras de infraestructura que resulten vitales e indispensables para generar competitividad; desarrollar las metas de cumplimiento de indicadores sociales, laborales y sanitarios, y propiciar un acuerdo marco para lograr el desistimiento de todas las acciones judiciales contra el Estado nacional para el primer trimestre del año 2014.

Debo recordar que nuestra provincia desestimó graciosamente, sin contrapartida, juicios por mil millones de dólares en concepto de regalías petroleras.

El punto 6° de este artículo dice que el jefe de Gabinete, el contador Capitanich, y el ministro de Economía, evaluarán el cumplimiento por parte de la provincia.

O sea que ésta es una virtual intervención económico-financiera a la provincia del Chubut en función de una renegociación de deuda. En función de ello, la provincia desiste de los juicios por mil millones de dólares; juicios que estaban en distintos niveles de ejecución, hasta con peritajes aprobados y con un fuerte detrimento en las arcas del gobierno provincial. Porque con el estudio jurídico no estaba pactado el tema del desistimiento judicial y esto ocasionó una erogación aún mayor.

Al gobierno de la provincia del Chubut y al total de los ciudadanos les costó el desistimiento de juicios por mil millones de dólares sin ningún tipo de contraprestación, porque, como vemos, el Estado nacional, lejos de reconocer esa actitud al gobierno de la provincia, sigue apretando el torniquete al punto de intervenir económica y financieramente a la provincia, a fin de que se arrodirle, de que preste toda esta información y de que va a ser monitoreado por el eficiente jefe de Gabinete nacional y el eficiente ministro de Economía de la Nación, como si fueran un dechado de virtudes en cuyos espejos tendríamos que mirarnos.

A continuación, señor presidente, brevemente me voy a referir a expresar por qué no estamos de acuerdo con...

**Sr. Presidente** (Fuentes). – Senadora, perdón, me informan que compartían el tiempo con el senador Garramuño como miembros informantes. Son veinte minutos: diez y diez. Usted ya está agotando los veinte. Entonces, el senador Garramuño se anota como orador simple; no hay problema; diez minutos. Gracias.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: el senador Garramuño tiene dictamen en minoría.

**Sr. Presidente** (Fuentes). – Perdón mi equivocación. Pido mil disculpas. Soy novel en esto. Gracias.

**Sra. Di Perna.** – Brevemente, señor presidente.

No estamos de acuerdo con que en el artículo 2° se sustituya el artículo 25 de la ley 17.319 y se elimine el segundo párrafo, referido al número

de permisos de exploración, ya sea en forma directa o indirecta.

¿Será esto para blanquear la situación de algunas empresas? No estamos de acuerdo, señor presidente.

En el artículo 6° se incorpora como artículo 27 ter de la ley 17.319 la aprobación de proyectos por la Comisión de Planificación, etcétera. No estamos de acuerdo. Quien sí debe estar ahí citado es el Consejo Federal de Hidrocarburos, creado por el artículo 4° de la ley 26.741.

En el artículo 16 se sustituye el artículo 59 de la vieja ley, que establece un porcentaje del 12 por ciento de pago mensual de regalías. No estamos de acuerdo, así como establecen condiciones de reducción por productividad, condiciones y ubicación de pozos, también creemos que cuando las condiciones son favorables al concesionario, ella puede ser discutida con el poder concedente y mejorar ese 12 por ciento.

Tampoco estamos de acuerdo con que las alícuotas de regalías previstas en dicho artículo sean el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio. Otra vez, avasallamiento a las provincias. ¿Por qué no puede haber otros acuerdos entre las provincias concedentes y el concesionario?

No estamos de acuerdo tampoco con el artículo 18 que se incorpora como 91 bis a la ley 17.319. Con este artículo nuevamente avanzamos sobre derechos de las provincias. Si hablamos de una ley para los próximos cuarenta años, ¿por qué mi provincia no establecerá en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de empresas públicas u otras entidades? ¿O se quiere eliminar a las empresas provinciales de energía hidrocarburífera?

Además, creemos que es necesario definir con mayor claridad el destino y conformidad por parte de las provincias de los fondos de rentabilidad social empresarial. Asimismo, no se expresa, ni siquiera en porcentajes mínimos, cuánto sería el aporte del Estado nacional para obras de infraestructura.

Finalmente, no estamos de acuerdo con el artículo 23 porque nos parece insuficiente. Hablamos de proyectos a decenas de años y no queremos repetir la historia de pasivos ambien-

tales en materia de industria hidrocarburífera de los que nadie se hace cargo.

En materia ambiental concluimos que es necesario especificar y mejorar los aspectos de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional; pero explicitando algunos puntos básicos y centrales que se deben incluir en esta legislación en materia de hidrocarburos, en particular teniendo en cuenta el tipo de proceso, la tecnología, los insumos, y los medios de exploración y explotación no convencionales.

Por ello, para resguardo de la salud y de la calidad de vida de la población, y a efectos del cuidado del ambiente para las próximas generaciones, haciendo uso racional de los recursos naturales y permitiendo el goce de un ambiente sano, proponemos incorporar los siguientes aspectos: uso responsable del agua; generación de estudios de base ambientales, sociales y sanitarios; forma de disposición final de residuos y registro de empresas autorizadas; eficiencia en la reutilización de agua para fines industriales; prevención de contaminación de acuíferos no productivos y manejo discrecional de compuestos químicos; y planes de remediación y contingencia.

Señor presidente: por los motivos que hemos expuesto, nuestro interbloque no va a acompañar el dictamen en mayoría.

**Sr. Presidente** (Fuentes). – Tiene la palabra el senador Garramuño.

**Sr. Garramuño.** – Señor presidente: trataré de ser concreto para ocupar el menor tiempo posible.

Me gustaría dividir en dos partes la explicación: una, para analizar un poco algunos de los fundamentos que el Ejecutivo presentó en su elevación; y, por otro lado, el articulado en sí de la ley.

En la parte de fundamentos me parece que hay una serie de errores y de indicaciones que no se condicen con la realidad y que, por lo tanto, es necesario aclarar.

Primero, el gobierno nacional indica que después de once años de gestión se encuentra con que, sin inversión, no existe soberanía hidrocarburífera. Esta soberanía existía cuando asumió y se perdió por políticas equivocadas: por no fomentar las inversiones, por explotar indiscriminadamente los pozos existentes, por

falta de exploración para reemplazo de las reservas que se iban consumiendo, por fijar precios distorsionados en el mercado, por no aceptar el consejo que se daba desde muchos ámbitos y por parte de gente capacitada con respecto al tema. Esto llevó a que la producción de petróleo cayera, entre 2003 y 2013, un 27 por ciento y el gas un 17,5 por ciento. Los pozos que se hicieron en el 2013 fueron la misma cantidad que los realizados en el 2009: 1.300 pozos.

Entonces, este discurso de que ha aumentado el consumo y por eso hay problemas energéticos no es así. Tenemos problemas energéticos producto de haber aplicado pésimas políticas en la República Argentina.

Los fundamentos indican que la Nación tiene que hacerse cargo de la importación de combustibles y que las provincias deben colocar sus recursos para alcanzar el autoabastecimiento.

En base a los artículos de la ley, me hace acordar a esas fiestas donde no participaron las provincias ni las organizaron y, sin embargo, las tienen que “garpar” habitualmente en virtud de los errores cometidos por la Nación.

Se dice que la ley se dicta para garantizar el desarrollo económico con equidad social.

Señor presidente: desde que se dictó la ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera, los precios aumentaron un 115 por ciento. En lo que va del año, el precio de los combustibles subió un 44 por ciento.

Si uno toma datos al 15 de septiembre del 2014, los precios en dólares de los combustibles son de 1,54 en Chile, 0,42 en Bolivia, 1,64 en Paraguay, 1,68 en Uruguay, 1,26 en Brasil y 1,43 en la Argentina.

Entonces, no nos engañemos con que el combustible es barato. Además, tengamos en cuenta lo siguiente: el 115 por ciento que subió en veinte y pico de meses y el 44 por ciento en el presente año es uno de los grandes motores de la inflación que está atravesando la Argentina. Y es un gran problema porque la inflación es un impuesto distorsivo y uno de los más injustos que padece una sociedad, ya que lo pagan más quienes menos tienen.

Se dice que el gobierno nacional elabora la política energética del país. Pero nada se dice respecto de que el artículo 4º de la ley 26.741, de soberanía hidrocarburífera, establece el Consejo



Federal de Hidrocarburos. Pone todo el énfasis en algo que, si me permite, voy a leer ya que tiene un título realmente pomposo: Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan de Inversiones Hidrocarburíferas, integrado por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, y la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía.

La ley que creó el consejo federal se promulgó el 4 de mayo de 2012. El decreto 1.277 se dictó el 25 de julio de ese mismo año, es decir, dos meses y veinte días después de que la ley fuera promulgada.

Era diputado en esa época y uno de los motivos que me llevaron a acompañar aquella norma fue la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos porque preveía la participación de todas las provincias y permitía que la política diseñada por el gobierno nacional fuera aprobada por todas las provincias argentinas, no solamente las productoras sino también las consumidoras. Fue, realmente, un engaño inteligente por parte del gobierno nacional, lo cual hace que uno luego desconfíe de las cosas que le digan.

Leyendo los principios de la política hidrocarburífera enunciados en los fundamentos advierto la poca correlación que tienen con la realidad.

Se alude a la conversión de recursos en reservas comprobadas y su exploración y la restitución de reservas. Pero la realidad es que hay muy baja inversión en exploración y restitución de reservas y un desaliento total de las inversiones. También se alude a la integración de capitales en alianzas estratégicas.

¿Qué se ha hecho? Se expropió el 51 por ciento de las acciones de Repsol YPF fuera de todo tipo de seguridad jurídica y, encima, luego se pagó a un valor como si fuera una gran empresa del mundo por un valor de 5 mil millones de dólares.

Se lee también en los fundamentos: “maximización de inversiones e incorporación de nuevas tecnologías”.

Nuestro país es el que menos inversiones recibe de toda la región en virtud de la inseguridad jurídica existente.

Dicen los fundamentos: “protección de los intereses de los consumidores relacionados con precio, calidad y disponibilidad de combustibles”. Huelga repetir lo que dije hace un rato sobre la suba de precios.

Dice que tiene que haber saldo exportable. Los datos que tengo es que supera los 10 mil millones de dólares la importación este año; el senador Sanz decía recién 15 mil millones. Es el gasto más alto por importaciones que tiene el país, incluido el pago de deuda externa.

Dice explotación racional del recurso, pero hay una sobreexplotación de los pozos por falta de inversión en nuevas exploraciones.

¿Por qué tenemos en los fundamentos tan buenas definiciones de las normas que estamos escribiendo y por qué la realidad nos marca que es totalmente lo contrario? ¿Por qué en una parte dice que hay que proteger la actividad de la participación de capitales especulativos? Me encantaría saber, en cuanto a ese 25 por ciento de YPF del que se hizo el grupo Eskenazi, comprado con retiro de ganancias extraordinarias de la misma empresa —un negocio fantástico—, qué hubiese pasado si ese dinero, en vez de a ese 25 por ciento, se hubiese destinado a la exploración y explotación de nuevos pozos, que es lo que realmente se tendría que haber hecho. ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra?

Concretamente, y para terminar con el tema de los fundamentos, da la sensación de que a veces nos toman el pelo, poniendo cuestiones rimbombantes en los fundamentos y en las normas que se elevan, cuando están totalmente alejadas de la realidad que vivimos cotidianamente.

Pasaré ahora al articulado. Simplemente me voy a referir, por una cuestión de acortar tiempos, a los puntos en los que no tenemos coincidencias. En cuanto al resto, dejaré de lado una serie de comentarios que tenía sobre puntos que podrían ser mejorados en algunos artículos.

El artículo 6° incorpora el artículo 27 ter, que plantea que se pueden reducir hasta un 50 por ciento los proyectos de producción terciaria, petróleo extrapesados y costa afuera. No estamos de acuerdo con ese famoso triunvirato de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica. Esto tendría que ser planteado por la Nación si corresponde, por la provincia si

corresponde, y aprobado por el Consejo Federal de Hidrocarburos, que es lo que corresponde.

El artículo 15 dice que, en las concesiones actuales, para el canon de ingreso se tomará un 2 por ciento del precio promedio de la cuenca de los dos años anteriores al momento de otorgamiento de la prórroga, multiplicado por las reservas remanentes comprobadas. Señor presidente, no voy a hablar de provincias grandes como el Neuquén; voy a hablar de mi provincia. Nosotros no tenemos una estructura técnica que nos permita conocer exactamente cuáles son las P1, las reservas remanentes que están perfectamente comprobadas. Entonces, tendremos que caer en brazos de la empresa, que nos dirá lo que queramos escuchar. Hoy, lo que estamos recibiendo como canon de ingreso equivale a un año de regalías anticipadas, lo cual es una cuenta clarita. En ese sentido, contaré una cuestión particular que sucede hoy en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego está negociando con YSUR un yacimiento que pertenecía a Apache, que es una renegociación que viene de la concesión que, en su momento, el gobierno nacional le dio de acuerdo con el artículo 35. Si yo tomo el valor como hoy está, la provincia de Tierra del Fuego recibirá 20 millones de dólares. Si yo tomo el valor que marca este proyecto de ley, recibirá 13 millones de dólares; 7 millones de dólares menos. O sea que la provincia pierde más de un 30 por ciento, simplemente, con el cambio de las reglas de juego. Entonces, que no me vengan a decir que esta ley favorece a las provincias; por lo menos, en estos artículos.

El artículo 16 fija un canon de un 12 por ciento, más un 3 por ciento en la primera renegociación, y puede llegar hasta un total del 18 por ciento. Es el único mecanismo de ingreso que van a tener las provincias. Nuestro dictamen plantea que no será inferior al 12 por ciento ni superior al 15 por ciento; plantea una regalía adicional de un 3 por ciento en la primera prórroga, y que puede haber hasta un máximo de un 21 por ciento en la siguiente prórroga. Además, un artículo de nuestro dictamen en minoría dice que es el único mecanismo de ingreso, salvo acuerdo contrario entre el concedente y el concesionario.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador don Aníbal D. Fernández.

**Sr. Garramuño.** — Esto lo quiero plantear porque me parece que es una postura inteligente dado que provincias —en función del proyecto que marca el oficialismo— están quedando de lado del canon variable. Me refiero al canon variable que las provincias productoras de hidrocarburos vienen negociando desde hace tiempo. Tomo, por ejemplo, el caso del petróleo: se establece que si el precio del barril dentro del mercado interno pasa de 79 a 84 —voy a redondear— tiene un canon diferencial de un 0,5 por ciento más; si va de 84 a 89 deja un 1 por ciento más; de 89 a 94, un 1,5; de 94 a 99, un 2 por ciento; de 99 a 104, un 2,5; y de 104 en adelante, un 3 por ciento. ¡Ojo! Estamos hablando de un 25 por ciento de las regalías. Y esto las provincias, de acuerdo con el proyecto que está enviando la Nación, lo ceden totalmente. Por lo tanto nos parece mucho más racional el proyecto que estamos elevando, donde prevemos una mayor regalía si así corresponde.

Por otra parte, está esto de que es el único ingreso que va a percibir, salvo acuerdo en contrario entre concedente y concesionario. Me parece que hay que tener en cuenta que puede aparecer en cualquier provincia de la República Argentina —un 83 por ciento de nuestra superficie no está explorada— algún yacimiento extraordinario fuera de lo común; un yacimiento surgente con un petróleo de altísima calidad, con un volumen de producción extraordinario, que permita a esa jurisdicción que tiene un recurso no renovable negociarlo por única vez como para que sea mejor. Sin embargo, si está planteado como el proyecto de la mayoría, eso es simplemente un 12 por ciento que puede pasar a un 15 en una renegociación o a un 18 por ciento; pero hasta ahí llega. Lo dicho, a pesar de que las rentas que puede llegar a obtener esa empresa son enormes.

También puede darse otro hecho: que el gobierno de turno que esté en ese momento llegue a plantear que tengamos una retención a las exportaciones —como hoy pasa con la soja— y se quede con una renta de la cual las provincias ni siquiera tendrán la posibilidad de conseguir algo. Estamos hablando, repito, de un recurso no renovable.

En el artículo 18 se incorpora como artículo 91 bis que no fijarán áreas reservadas a favor de empresas o entidades jurídicas con participación estatal y que, si lo hacen, tendrán que participar

con las inversiones comprometidas en la parte que le corresponda: o sea, proporcionalmente.

En la Legislatura de Tierra del Fuego está pendiente la aprobación de una empresa provincial de energía, con lo cual nace muerta: con esto es absolutamente imposible. Entonces, tiene una posición desventajosa con respecto al resto de las provincias que lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron otras provincias y mi provincia no? No voy a entrar en eso, pero mi provincia quedaría fuera del resto.

Ahora bien, yo quisiera saber –que alguien me lo explique– cuál es la diferencia entre la empresa provincial e YPF. Porque YPF lo que está haciendo y lo que va a hacer es tomar el área del cual es concedente y buscar inversiones. Es exactamente el mismo *carry* que le están negando a las provincias. Que lo haga en yacimientos no convencionales, que tienen inversiones y tecnologías extras, me parece que es analizable. Ahora, ¿por qué en yacimientos convencionales tiene que ser una cuestión así? ¿Por qué la provincia tiene que aceptar una imposición de esta característica, donde transfiere una posibilidad que tiene de una empresa estatal provincial a una empresa como YPF, que encima tiene un 49 por ciento privado?

En el artículo 19, que contempla el régimen de promoción de la inversión creado por el decreto 929 de 2013, notamos bastante las incongruencias que a veces se tienen dentro de la política del Estado nacional.

Señor presidente: el decreto 751 de 2012 del Poder Ejecutivo nacional eliminó a la provincia de Tierra del Fuego todos los beneficios en la parte de hidrocarburos –no solamente las empresas sino también el personal– del régimen de la ley 19.640: esto es, del régimen de promoción. Entonces, por un lado estamos hablando de generar promociones y, por el otro, le estamos cortando las posibilidades a una provincia que tiene mucha mayor distancia de transporte del producto que está sacando, con lo cual la coloca en una situación inconveniente con respecto a otras provincias productoras de hidrocarburos. Entonces, un decreto promueve y otro elimina. O sea, hay bastante incongruencia en la actuación del Estado nacional.

Hoy lo conversamos en la reunión de labor parlamentaria. No sé cómo quedó redactado finalmente el artículo 19 del proyecto oficial

respecto a la explotación costa afuera hasta los 90 metros de profundidad. El dictamen en mayoría eliminaba los 90 metros. Hoy decía el jefe de la bancada oficialista que se iba a mantener...

**Sr. Presidente** (Fernández). – Cuando ocupe mi banca, señor senador, voy a pedir una interrupción para leer el nuevo artículo 19.

**Sr. Garramuño**. – Fantástico.

Quería decir, en base a esto, que en nuestro caso la fijación de los 90 metros es perjudicial porque puede haber explotaciones dentro de las 12 millas que corresponden a la jurisdicción provincial que no tienen 90 metros de profundidad. No vaya a ser que se corran las explotaciones a un costado, quedando las provincias fuera de la posibilidad de tener una participación directa en estos yacimientos.

El proyecto habla de los proyectos de inversión que sean aprobados por la Comisión de Planificación. Reitero, esta Comisión de Planificación, este famoso triunvirato, tendría que desaparecer rápidamente y ponerse en marcha el Consejo Federal de Hidrocarburos, que es una herramienta que marca una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional.

Otra cosa que no compartimos para nada es la obligación de que en 90 días las provincias que tengan en negociación procesos de prórroga, a lo que se refiere el artículo 35, yacimientos, tenga que concluir este proceso. No tengo idea por qué esta ley tiene que meterse y por qué fija 90 días. Las Legislaturas provinciales pueden tener un mayor tiempo. Considero que se inmiscuye dentro de una atribución netamente provincial dado que el artículo 124 de la Constitución Nacional fija que es un recurso de las provincias.

Marca también este 3 por ciento de ingresos brutos en el anexo 1 y que no se puede gravar con nuevos tributos. Uno puede compartir el principio de buscar reglas de juego claras para todos los oferentes, pero sucede que es ineludible no solamente el anexo 1 sino la totalidad de la ley el paso por las jurisdicciones provinciales, dado que afecta un recurso que es propio de cada una de las provincias.

Finalmente, me hago algunas preguntas y también algunas aseveraciones. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no planteó la generación de un capítulo especial para yacimientos no convencionales dentro de lo que es la ley vigente?

Nos hubiera evitado un montón de problemas y seguramente muchos hubiéramos acompañado y actuado buscando mayor concordancia. ¿Por qué modificar los yacimientos convencionales cuando creo que la mayor parte de esto está apuntando a lo no convencional? ¿Por qué no se buscó un consenso más amplio? ¿Por qué este apuro? ¿Por qué siempre tiene que ser a los tirones? ¿Por qué no hubo forma de poder agregar artículos al proyecto que por ahí no modifican sustancialmente pero sí permiten resguardar intereses provinciales que hubiesen llevado a aprobaciones de una mayor cantidad de legisladores y no esta pelea siempre de ver si tengo o no la mayoría?

Asevero que ésta es una ley a la medida de YPF. La empresa YPF fue la autora de los cambios que estamos planteando. Lo reconoció el mismo Galuccio el otro día cuando estuvo en el Senado. YPF avanza gravemente a la propiedad de los recursos provinciales. Considero que muchos aspectos de la ley tienen visos de inconstitucionalidad.

Asevero que los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos no pueden decidir sobre el presente y el futuro de las provincias sin la ratificación de las legislaturas provinciales. No estoy de acuerdo con que un gobernador, y sobre todo muchos de ellos yéndose, puedan comprometer el futuro de las provincias sin rendir las cuentas correspondientes a otro poder, como lo marcan nuestras constituciones.

Estoy seguro, y asevero, que YPF va a reemplazar a las empresas provinciales en el *carry*. El rol de las empresas provinciales ya lo está haciendo YPF. Está llevándose un negocio enorme, que no lo discuto si fuesen yacimientos no convencionales, pero está avasallando fuertemente sobre lo que las provincias consiguieron.

La secretaria de Energía cuando estuvo en el plenario de comisiones dijo que tenían que ser leyes que perduren a través del tiempo: que no sean aprobadas por simple mayoría porque son leyes que afectan el presente y el futuro del país. Me parece que nos estamos volviendo a equivocar. Este proyecto de ley va a ser aprobado por un oficialismo disciplinado y por aliados circunstanciales, como normalmente pasa; pero la mayoría de la oposición va a votar en contra. Y muchos de los senadores –puedo

hablar en nombre de ellos– estamos con ganas de acompañar, de encontrar consenso, puntos de acuerdo.

Son leyes importantes. Nos parece que habría que generar las modificaciones a una Ley de Hidrocarburos que necesita ser actualizada: hay nuevas tecnologías, nuevos yacimientos y todos estamos con ganas de participar. Pero es esto o nada; es esto o es el abismo. No hay forma de que nos sentemos alrededor de una mesa para llegar a un acuerdo, para hacer política, que es la base de los que estamos acá. Entonces, nos enfrentamos nuevamente a la frustración de tener que irnos sin poder sentarnos a discutir algo que nos convenga a todos. Se va a aprobar. Ahora, el sabor que le va a quedar al oficialismo va a ser bastante amargo; y es el sabor que les va a quedar a muchos legisladores nacionales que después van a tener que volver a sus provincias para explicar por qué otra vez renuncia a atribuciones que son provinciales.

Señor presidente: no vamos a acompañar el proyecto como está planteado. Nos hubiera gustado hacerlo. Estamos abiertos al debate, a la discusión y a la búsqueda de puntos de acuerdo, que es lo que la Argentina está necesitando. Desgraciadamente, nos llevan a que cuando se vote el proyecto de la mayoría no lo estemos acompañando.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Muchas gracias, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Odarda.

**Sra. Odarda.** – Señor presidente: en primer lugar, como lo hemos hecho en las comisiones en las que hemos participado, vamos a adelantar nuestro voto negativo al presente proyecto de ley.

No hace falta decir que el debate ha sido absolutamente insuficiente: cuarenta y ocho horas de debate para una ley que va a hipotecar el futuro de los argentinos por más de dos generaciones.

Ratificamos lo que dijimos desde el principio: que con este proyecto, en realidad, se está discutiendo las condiciones de la entrega; y me animo a decir que significa la mayor entrega de soberanía de los últimos años. ¿Por qué lo decimos?

Este proyecto de ley, además de establecer regalías totalmente irrisorias –techo de un 18 por ciento, si sumamos los doce por ciento más



los tres más tres de las posibles prórrogas—, no establece bases: o sea, no establece pisos e inclusive se puede llegar hasta a un 5 por ciento de regalías cuando sabemos que otros países del mundo establecen regalías que puede ascender hasta el 50 por ciento, el 25 por ciento, el 30 por ciento, según los casos. Y estamos hablando de países como Colombia, Venezuela y Bolivia.

Debo referirme también a cómo se ha “desjerarquizado” la cuestión ambiental remitiéndola solamente a un artículo —el que está ubicado en los anexos— o bien en las disposiciones transitorias, que indican que la cuestión ambiental va a estar resuelta por cada una de las provincias oportunamente con una decisión uniforme de ciertos parámetros ambientales que no conocemos en absoluto.

Voy a hacer eje en lo que significa la opinión respecto de lo que está pasando, sobre todo en nuestra zona, con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro; y principalmente con la cuenca del río Colorado. ¿Para qué? Para finalizar diciendo que si nosotros como Estado no hemos podido controlar los efectos de las explotaciones convencionales, menos aún tenemos garantía de poder controlar lo que suceda con las explotaciones de los no convencionales.

Por eso quiero traer a colación un informe del COIRCO, que es el Consejo Interjurisdiccional que debiera velar por la salud del río Colorado, que reconoce los siguientes datos. Es información de 2012.

La Comisión Técnica Fiscalizadora del COIRCO expuso la gran cantidad de incidentes de contaminación ambiental ocurridos en esa cuenca. Allí hay 70 yacimientos operados por 18 empresas que totalizan 13.000 instalaciones. El estudio indica que las empresas denunciaron 1.164 incidentes en 2010 y 1.982, en 2011. Es lo que denunciaron las empresas. Cabe preguntarse lo que no denunciaron.

En 2011 se verificaron en la cuenca del río Colorado 5.652.000 litros de agua de producción y 429.000 litros de petróleo, el equivalente a unos 14 camiones de combustible totalmente cargados.

Esto lo dice el informe del COIRCO.

Vamos a otro aspecto de este proyecto que nos preocupa, que es la legalización de la explotación de los llamados no convencionales y,

sobre todo, de la metodología a utilizar, que es la llamada técnica del *fracking*. Y cuando hablamos de fracking pareciera que creemos que todos los argentinos saben a qué nos referimos. Por eso me voy a permitir hacer una somera explicación muy simple.

*Fracking* es una palabra inglesa que significa fractura hidráulica. Es una perforación que puede llegar a 2 o 3 kilómetros bajo tierra hasta llegar a lo que se denomina la roca esquisto, donde está acumulado el gas que queremos extraer. Y de esa perforación van a salir otras, pero de modo horizontal, también de una misma dimensión. Estamos hablando de 3 kilómetros de perforaciones en forma horizontal.

Para eso se inyectan miles de litros de agua, porque cada pozo puede soportar 18 perforaciones, aproximadamente, y cada una conlleva un equivalente a 30 mil metros cúbicos de agua que va mezclada con sustancias químicas y con arena a gran presión para poder provocar justamente la explosión de esas rocas donde está acumulado el gas que se pretende extraer.

Uno se pregunta a dónde van los fluidos, esa agua que se inyecta a gran presión. Se ha señalado que de esos fluidos solamente entre un 30 y un 50 por ciento vuelve a la superficie y el resto queda abajo. Lo que vuelve a la superficie ya viene, además de mezclado con los químicos, contaminado con el gas metano con el cual toma contacto. Y lo que queda de esta agua contaminada con químicos y arena es lo que ya está probado en distintos accidentes ambientales ocurridos a lo largo y a lo ancho del mundo que ha contaminado las napas freáticas o —peor aún— las llamadas aguas subterráneas o acuíferos.

Como sabemos, ésta es una técnica que se usa desde hace más de diez años en Estados Unidos y es justamente ese país, pero también Gran Bretaña y algunos de Europa, quienes están estudiando con mayor profundidad los efectos nocivos de la fractura hidráulica.

Por ejemplo, el centro Tyndall de la Universidad de Manchester, del Reino Unido, fue uno de los primeros en investigar los impactos de la extracción del gas de esquisto sobre el medio ambiente y analizó 260 productos químicos usados en el *fracking*. Estableció que de ese total, 17 fueron considerados tóxicos para organismos acuáticos; 38, tóxicos agudos; 8, cancerígenos

probados y otros 6, sospechados de serlo; 7 elementos mutagénicos y 5 que producen efectos sobre la reproducción.

Como decía recién, hubo muchos accidentes ambientales. En el estado de Colorado en 2004, por ejemplo, se observó gas natural burbujeando en una aguada y en los acuíferos circundantes que era 90 veces superior al límite establecido de gas. En otro estado de Estados Unidos se produjeron movimientos sísmicos y se está estudiando si fueron provenientes de esta fractura hidráulica.

Sin irnos más lejos, en la localidad de Allen en mi provincia, Río Negro, se han detectado hace muy poco tiempo dos accidentes ambientales con llamas de más de 15 metros que, por supuesto, produjeron alarma en los pobladores de las chacras. Ya vamos a hablar de eso. También, por supuesto, en lo que es Vaca Muerta hoy.

Por eso esta técnica de fractura hidráulica no es inocua, no es inocente, y ha sido prohibida o suspendida con diferentes moratorias en más de 17 países del mundo. Por ejemplo, en Francia y Bulgaria.

El estado de Nueva York, por ejemplo, decidió en 2010 establecer una moratoria de las perforaciones hasta obtener normas de control. Pittsburgh en 2010 lo prohibió dentro de los límites de la ciudad. La legislatura de Ohio también estableció una moratoria respecto de la técnica del *fracking*. En Canadá también hubo moratoria. En Australia, en Sudáfrica y podemos seguir la lista.

Más allá de la cuestión de la fractura hidráulica y de lo que significan el gas y el petróleo no convencional, a nuestro criterio hay una un peligro aun mayor, o tan importante como el gas y el petróleo no convencional, que es el que acarrea la explotación *off shore* sin garantías de control ambiental.

¿Qué son las explotaciones *off shore*? Como está establecido en el proyecto, son las llamadas explotaciones costa afuera. No en vano muchas organizaciones de pescadores han manifestado su oposición a lo que significa la explotación en la costa marítima, en el mar.

Todos sabemos lo que significan las explotaciones propiamente dichas, la emisión de gases y el lodo producto de las perforaciones. Pensemos en nuestra riqueza marina, en nuestra

fauna marina. Por eso hablo de lo que significa masificar la explotación *off shore* sin control ambiental suficiente o sin garantía de que exista control ambiental.

¿Saben cuántas áreas protegidas tenemos a lo largo de los más de 5.000 kilómetros de costa en nuestro país? Más de 40 áreas naturales protegidas de lobos marinos, pingüinos, etcétera.

Todos conocemos nuestras riquezas en lo que significan las áreas protegidas para ballenas, delfines, etcétera. También, los centros turísticos que tenemos a lo largo y a lo ancho de la costa atlántica. Y, además —por eso no se explica con todas las letras—, sabemos cuáles han sido las modificaciones de último momento que se introdujeron al presente proyecto respecto de las previsiones, entre comillas, que estaban establecidas en el original relacionadas con la profundidad a la cual remitiría la futura ley en lo concerniente a estas explotaciones *off shore*.

Por eso se entiende la defensa tan animada que hizo el gobernador Martín Buzzi, del Chubut. Creo que estuvo media hora haciendo hincapié en la necesidad de promocionar o fomentar este tipo de explotación *off shore*, o sea, explotación del petróleo en el mar, por más de 30 años, como establece este proyecto de ley, por la presión aparentemente producida por una empresa con intereses en la región, sobre todo en la extensión de la explotación del Cerro Dragón y sobre todas las explotaciones en Comodoro Rivadavia.

En virtud de ello, yo hago responsable al gobernador Martín Buzzi por lo que pudiera suceder con eventuales accidentes ambientales, como el ocurrido en el golfo de México. En efecto, no olvidemos que fue uno de los mayores derrames de petróleo que hubo hace muy poco tiempo y que impactó fuertemente en la cuestión social, económica, cultural, sobre todo de las regiones de Centroamérica.

No queremos que esto pase en la Argentina, señor presidente. Si no hay controles, es muy posible que suceda. Pensemos en nuestras playas y en los centros turísticos que visitan cientos de miles de turistas al año.

Otra cuestión a la cual siempre hago referencia por provenir de una provincia como Río Negro, donde las explotaciones de gas y petróleo no convencional están avanzando

sobre la zona de chacras, es la vinculada con la fruticultura. Esto también significa una responsabilidad histórica que algunos tendrán que explicar en algún momento, porque hablamos de reemplazar la matriz productiva agraria por la matriz productiva hidrocarburífera, que implica que donde se explote un pozo petrolero ya no se pueda plantar más una planta de peras o de manzanas. Pensemos que esto está ocurriendo en localidades como Allen, que es la capital nacional de la pera y le estamos metiendo gas y petróleo no convencional.

Creo que allí habrá una gran responsabilidad histórica no sólo por los impactos sociales que produce el avance inmobiliario, sino por la posible destrucción de todo un sistema de riego que —como decíamos en las comisiones— nos enorgullece, porque ha sido la obra más importante en los últimos cien años.

Por otra parte, quiero referirme —porque también se puso en cuestión— a cómo esto afectará la calidad de nuestra fruta, sobre todo en cuanto al mercado externo.

Yo temo —al igual que muchos otros— que con esta ley se deje a Río Negro en un escalón mucho más abajo en lo que respecta al mercado internacional de peras y manzanas. También allí habrá una responsabilidad histórica de quienes promuevan que cada vez tengamos menos pequeños y medianos productores —ahogados por deudas, por la AFIP y por los remates que todavía lamentablemente acechan sobre sus cabezas—, ya que este avance de la explotación hidrocarburífera hace que nuestros pequeños productores, ahogados, estén alquilando sus chacras por 4.500 pesos por mes. Por supuesto, eso significará la sentencia absoluta de lo que será la calidad de esa tierra en el futuro.

Otro asunto al cual me he referido en las comisiones es el de los derechos de los pueblos indígenas. La explotación de Vaca Muerta está asentada en un territorio que pertenece a más de treinta comunidades o pueblos indígenas de la nación mapuche.

Tenemos una legislación de carácter superior a esta norma que estamos tratando, como es el Convenio 169 de la OIT, que ha sido incorporado a nuestro plexo constitucional, donde se establece el derecho que tienen nuestros pueblos indígenas a la consulta libre, previa e informada, así como también a decidir sobre las prioridades

en su desarrollo. Cuando muchos hablan de la economía pastoril y lo hacen en forma de burla o de menoscabo, ese es el modo que han elegido nuestros pueblos indígenas.

Hoy, con este proyecto de ley que vamos a votar en unas horas más, lamentablemente estamos consolidando ese abandono, esa humillación que sufren nuestros pueblos indígenas; y que la siguen sufriendo después de cinco siglos. Estamos en las vísperas del 11 de octubre, el último día de libertad de nuestros pueblos indígenas. Más que nunca tenemos que decir que allí no hubo descubrimiento, sino una simple conquista que significó uno de los mayores genocidios del cual nuestro Estado aún no ha dado respuestas. No hay reparación histórica de lo que ha pasado con nuestros pueblos indígenas. ¡Y esta ley vuelve a ignorarlos!

Por eso, recuerdo cuando el doctor Zannini dijo en las comisiones que no lo podía someter al derecho a la consulta libre, previa e informada el texto de este artículo, porque no podía abarcar todo y que había que dejarlo librado a los pliegos.

Yo digo: si olvidamos los derechos de nuestros pueblos indígenas, ya que no hay una sola palabra que remita a esos derechos consagrados en nuestra Constitución, ¡imagínense si lo van a tener en cuenta en los pliegos!

Por eso, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacerme nuevamente eco del reclamo de los viejos “ypefianos”. Hay más de ocho mil casos aún no resueltos en la Justicia producto del proceso de privatización, donde las que más sufrieron fueron las treinta mil familias de YPF. Éstas son las consecuencias.

Y cuando hablamos del avasallamiento de las provincias, yo también quiero hablar de la cual provengo. Tenemos un artículo en la Constitución, el 79, donde se establece que los yacimientos de gas y de petróleo existentes en nuestro territorio provincial y plataforma marítima son bienes del dominio público provincial y su explotación se otorga por ley provincial. Entonces, señor presidente, ¿qué vamos a hacer con las provincias que tienen constituciones con este tipo de disposiciones?

Y cuando hablamos de lo que sucedió en el proceso de negociación o en la supuesta negociación con los gobernadores, yo fui una de

los que dijeron que los gobernadores estaban firmando este borrador de Ley de Hidrocarburos bajo fuerte presión.

Mi provincia, Río Negro, fue discriminada al momento de ser convocada a renegociar su deuda. En efecto, 31 millones de coparticipación era lo que iban a descontar si no firmaba. Se mantuvo en zozobra al pueblo de Río Negro durante todo el largo proceso que duró esta negociación; y cuando se firmó el borrador de la Ley de Hidrocarburos, recién la llamaron a renegociar la deuda. Si eso no es presión, señor presidente, ¿cuál es el término que tenemos que utilizar?

El avasallamiento a las autonomías municipales. Hay cuarenta municipios en la Argentina...

**Sr. Presidente** (Fernández). – Senadora, su tiempo se ha terminado.

**Sra. Odarda.** – Sí.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Debería ir redondeando.

**Sra. Odarda.** – Bien. Yo pedí en labor parlamentaria que como es único tema seamos flexibles con el tiempo. Cuarenta municipios...

**Sr. Presidente** (Fernández). – Hemos sido flexibles. Lo que estoy tratando es de que, en la medida que podamos, vayamos redondeando.

**Sra. Odarda.** – No. Me parece... No quiero creer que le esté molestando lo que estoy diciendo. Son cuarenta municipios en la Argentina...

**Sr. Presidente** (Fernández). – No. No es molestia. Lo que estoy diciendo es que se estiró lo suficiente. De los últimos cinco miembros informante, usted es la última. Se le dio un plazo adicional. Lo que digo es que, en la medida de las posibilidades, hay que ir redondeando. No estoy cercenando su palabra.

**Sra. Odarda.** – Muchas gracias, señor presidente.

Le decía que hay cuarenta municipios en la Argentina que se han declarado libres de *fracking*; o sea que en sus ejidos municipales no se puede practicar la fractura hidráulica. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esos municipios? ¿Los vamos a pasar por encima con este tipo de legislación que no contempla las decisiones soberanas de los representantes del pueblo de cada una de las localidades de la Argentina?

Por último, cuando hablamos de política energética también tenemos que decir que este proyecto significa un atajo. ¿Por qué no pensamos como lo hacen otros países, como Uruguay, en desarrollar en serio las políticas llamadas de energías limpias, renovables, eólica, solar? Uruguay dispone de un 30 por ciento de energías limpias en lo que hace al concepto total de energía. ¿Sabe de cuánto dispone la Argentina? De 0,5 por ciento; 0,5 por ciento, a pesar de que hay una vasta legislación que promociona las energías renovables.

Quiero hacer un reconocimiento al trabajo y a la resistencia de la Confederación Mapuche Neuquina y del Parlamento Mapuche de Río Negro. También tengo que hablar de la resistencia de los pueblos indígenas de la provincia del Chubut, que han presentado un amparo –y en segunda instancia tienen una medida cautelar a favor, sobre todo justamente por no respetar el principio de la consulta libre previa informada–, y mencionar también a la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, a Unión Patún, a la Unión de Asambleas Patagónicas, a la Unión de Asambleas Ciudadanas, a Renace, y a muchos que han trabajado e investigado, como Elvio Meldioroz, Roberto Chandío, Maristella Svampa, Enrique Viale, Pablo Bertinat, Eduardo D’Elia, al Observatorio Petrolero Sur, a los municipios libres de *fracking* que se han organizado en la cooperación e integración por territorios libres de *fracking*.

Para terminar, entonces, voy a insistir en que este proyecto constituye una de las entregas más escandalosas de nuestros bienes naturales comunes, y por eso decimos una vez más “no es no”.

Gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Muchísimas gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Guillermo Pereyra, de la provincia del Neuquén.

**Sr. Pereyra.** – Gracias, señor presidente.

Primero quiero recordar que en 1994, cuando se reformó la Constitución, la actual presidenta de la Nación hizo un encendido discurso refiriéndose a la modificación de la Constitución con relación al tema de la titularidad de los hidrocarburos.

Posteriormente, el presidente Néstor Kirchner promulgó la llamada Ley Corta, la 26.197,



que voy a leer textualmente para recordarles por qué nosotros defendemos tanto lo que corresponde a lo que es la Ley Corta, que es una conquista para todas las provincias en materia de hidrocarburos.

Dice esa ley: “A partir de la promulgación de la presente ley las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueran ribereñas, quedando transferidos de pleno derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgados o aprobados por el Estado nacional en uso de sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas de sus titulares”.

A nadie le cabe la menor duda de que la soberanía es de la Nación Argentina, pero esa soberanía debe existir en la medida en que se respeten las autonomías provinciales. Esto que quede bien claro.

Está claro también que los condicionamientos, la forma de concesionar, los plazos, las limitaciones a las regalías, a los impuestos provinciales y a los tributos municipales, y las restricciones a la participación de las empresas provinciales con cualquier tipo de asociación, son los recortes a la potestad que tienen las provincias y los municipios.

Las limitaciones a las provincias y a los municipios para cobrar impuestos o tributos no se corresponden con las competencias y facultades otorgadas por la Constitución y las leyes.

La provincia del Neuquén viene reclamando el pago de estos impuestos –impuesto a los sellos, impuesto a los ingresos brutos– a la empresa YPF. Este reclamo data de 2013. YPF paga bajo protesta y valores mucho menores a los que realmente le corresponde pagar en este concepto.

Este proyecto de ley que hoy estamos tratando consolida la posición dominante y abusiva de YPF al blanquearse la situación de que la ley 17.319 limita las concesiones y los permisos de exploración y de explotación a sólo cinco

áreas, tal como dice la actual legislación en sus artículos 25 y 40.

Estas restricciones legales se convalidan a través del proyecto de ley que estamos tratando, porque al 31 de diciembre de 2013 YPF ha concretado nada menos que 142 permisos, de los cuales 52 son de exploración –ciento por ciento 3 de ellos y el resto participando entre el 45 y el 90 por ciento–; y 90 son de producción: 50 son de concesión al ciento por ciento y las 40 restantes participan en un 12,2 y un 98 por ciento.

YPF opera directamente cien de estos permisos: 42 de exploración y 58 de explotación. Por eso decimos que esta ley está hecho a la medida que YPF y que, lógicamente, no es competitiva para el resto de las empresas.

De acuerdo con el proyecto de los permisos de concesión, serán adjudicados mediante licitaciones competitivas –dice el proyecto– y los pliegos serán elaborados por las provincias...

**Sr. Presidente** (Fernández). – “Licitaciones” dice el dictamen. Perdone que lo interrumpa, senador.

**Sr. Pereyra.** – Licitaciones dije, ¿no?

**Sr. Presidente** (Fernández). – Son licitaciones, pero no competitivas.

**Sr. Pereyra.** – Licitaciones. Sí. Perdón. Licitaciones competitivas...

**Sr. Presidente** (Fernández). – El dictamen dice licitaciones.

**Sr. Pereyra.** – Ah, lo corrigieron entonces. Perdón.

Decía que los pliegos serán elaborados por la Secretaría de Energía y las provincias que figuran en el proyecto.

Se impide a las provincias participar a través de sus empresas provinciales. Creo que aquí se pierde una posición histórica que tienen las provincias y también una oportunidad; y realmente esto es grave. Es imprescindible que la rentabilidad de los proyectos y la atracción de inversiones también corresponda a las provincias.

En el artículo 21 del proyecto de ley se menciona la posibilidad de aportes no definidos del Estado nacional, y en el 21, inciso b), para las zonas productoras en función de la magnitud y alcance de los proyectos de inversión.

Se dice aquí también que esto va a ser evaluado por esta comisión estratégica creada por decreto 1.277, pero no se sigue ningún parámetro, no aclara absolutamente nada de qué parámetros se van a seguir para evaluar las inversiones.

En Neuquén tenemos una experiencia amarga, que no es del Yacimiento Amarga Chica sino del acuerdo Chevrón-YPF, donde el gobierno nacional se comprometió a hacer una inversión de 1.000 millones de pesos en obras de infraestructura. La estamos esperando hace un año. Sigue llegando gente, siguen llegando trabajadores desde distintos puntos de nuestro país y solamente tenemos una sala de primeros auxilios con un médico; y por supuesto que la única escuela que hay allí va a ser desbordada en el próximo ciclo lectivo.

Dentro de ese proyecto de inversión de 1.000 millones que tenía la provincia estaba el tema de la ruta. La provincia tuvo que elevar los proyectos a la Nación para hacer los trabajos y los mismos fueron aprobados por la Nación. La ruta del petróleo está colapsada. Como consecuencia del tránsito que circula por allí en horas pico, tanto por la mañana como por la tarde, cuando los equipos y los trabajadores van al yacimiento están ocurriendo accidentes de tránsito casi todas las semanas.

Entonces, es importantísimo definir estas obras de infraestructura que establece el inciso b) del artículo 21.

Si no vienen las inversiones será imposible el acompañamiento provincial a la dinámica actividad que tenemos y que se espera de los gradientes de poblaciones migrantes.

Como decía, hay que construir hospitales y viviendas, es imposible pensar que Añelo va a tener un crecimiento demográfico sin que tenga las obras de infraestructura. ¿A dónde van a ir? ¿Qué es lo que van a hacer? Esto hay que ponerlo también, porque ocurrió en la parte sur de los Estados Unidos, cerca de Houston, donde creció mucho la actividad y después se dieron cuenta de que no había obras de infraestructura y se pusieron a trabajar en esta línea. Es esperable que con este proyecto de ley se agraven los problemas de desorden, de falta de planificación y de obras mínimas y necesarias para las ciudades como Rincón de los Sauces y Añelo.

Es un proyecto que refleja una ostensible improvisación, enfocado caprichosamente en modificar los roles y facultades de las provincias. Porque es así el proyecto: enfocado en este tema con respecto a los roles de la provincia sin atacar de fondo los graves problemas y las definiciones de políticas energéticas, que es necesario incorporar en una ley que está muy lejos de ser un marco que otorgue igualdad de oportunidades.

Por eso, señor presidente, adelanto mi voto negativo a este proyecto y también porque colisiona con la Constitución provincial del Neuquén, cuando habla de la cláusula federal. Ella dice que todo representante provincial está obligado a ejecutar las acciones positivas pertinentes en defensa de la autonomía y los derechos e intereses de la provincia frente a cualquier pretensión ilegítima de poder Nacional, provincial o municipal.

Este proyecto de ley tampoco modifica en absoluto un problema muy grave que existe con respecto a la refinación de pequeñas y medianas empresas. Es decir, a través de distintos programas como Refino Plus o Refipymes, una otorgada por el decreto 2014 y la otra por la resolución 1.312/08. A estas empresas les cambiaron las reglas de juego. Las Refipymes fueron ayudadas por el Estado nacional con fuertes inversiones para reemplazar la importación de combustibles, después les cambiaron las reglas de juego y así empezaron con graves problemas económicos; y algunas de ellas ya han cerrado, como el caso de RENESA en Neuquén, dejando a trabajadores en la calle.

La exportación de estos combustibles, principalmente de aquellos solventes que no son utilizados en la República Argentina, son compensados con un bono que se reintegra a los 7 u 8 meses. Estas pequeñas empresas tienen que salir a la banca privada a buscar crédito, con un alto costo financiero, para poder seguir sosteniendo esta actividad. Son problemas que hay que solucionar.

El acuerdo con la Nación tiene un anexo. Es un acuerdo sobre el que tanto se ha dicho acá y comparto cuando hablamos de que hubo una fuerte presión para que lo firmaran. No estaban de acuerdo ni con el primero ni con el segundo borrador, ni tampoco con el final sobre el que también discutieron mucho los gobernadores.

Sin embargo, como estaban muy presionados, que si no firmaban lógicamente no podían reestructurar la deuda pública, terminaron suscribiéndolo. Y no están muy de acuerdo tampoco con lo que han firmado.

Por eso, estos mismos gobernadores nos han hablado a los senadores para ver si podemos hacer algún tipo de modificación. Lo intentamos, porque estábamos convencidos de que era el camino para llegar a un acuerdo definitivo y aprobar este proyecto de ley. No hemos logrado absolutamente nada de eso. El anexo tiene que pasar por las legislaturas para su aprobación, porque habla del tema fiscal de las provincias.

Me voy a referir a un tema muy candente. Muchos dicen que el trabajador petrolero gana bien. No gana bien, son sueldos de 10 o 12 mil pesos. Hay que tener en cuenta el trabajo que realizan. Llegan a salarios de 50 o 60 mil pesos. Treinta mil pesos gana un peón de boca de pozo, pero sabe por qué; es por mayor esfuerzo: horas extras. No trabajan 8 sino 12 horas y en fractura, que le llaman servicios especiales; trabajan aproximadamente 250 horas por mes de horas extras. Entonces, sumémosle las 200 horas normales y son 450 horas por mes; más de la mitad de las horas del mes que trabajan. Son agotadoras jornadas porque el sistema se lo impone así. Lógicamente que con esto llegan a sumas como las que mencionaba, de 40, 50 o 60 mil pesos, pero el 35 por ciento se lo lleva el impuesto a las ganancias.

Quiero decirle, señor presidente, que hay un clima de conflicto latente, que están pidiendo acciones los trabajadores a sus dirigentes y quieren ir a la pelea. Como no se ha modificado el mínimo no imponible, se llega a la conquista de mejores salarios pero ya no lo quieren; no quieren hacer horas extras porque se las lleva el Estado.

Por eso estoy convencido de que debemos trabajar en una modificación. Este Senado debe trabajar en una modificación en lo que hace al impuesto a las ganancias. Cuando el trabajador llega a este tipo de sumas por el mayor esfuerzo que realiza, descuida a su familia porque no lleva a sus hijos al colegio ni comparte la mesa familiar. Éstas son cosas que debemos modificar y muy pronto porque estamos al borde de un gran conflicto social.

Entonces, allí es donde nos vamos a ver perjudicados porque nos está mirando el mundo debido a este nuevo paradigma que es la formación geológica de Vaca Muerta. Y, además, con conflictos sociales. No van a venir a invertir en la República Argentina. Los trabajadores somos quienes estamos cuidando todo esto, somos el dique de contención –los dirigentes– al gran conflicto que se está viniendo y que se está gestando en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza. Debemos tomar con responsabilidad este tema porque seguramente vamos a tener grandes problemas.

En ese sentido, tenemos problemas de accidentes: en siete días hemos tenido tres muertos en la provincia del Neuquén por accidentes de trabajo. El Estado, a pesar del llamado que se les hace a los organismos laborales, no ha actuado como corresponde frente a esto, que es una debilidad que tienen tanto las ART como las empresas.

Y las organizaciones sindicales que estamos allí queriendo controlar no lo podemos hacer porque es responsabilidad de otros. Los compañeros que están trabajando muchas horas están desconcentrados, se duermen en los camiones, como ocurrió con este accidente de la semana pasada, donde el camión desbarrancó y murieron dos trabajadores a los que les pasó la carga por encima. ¡Pero cuántas horas llevaban trabajando!

Entonces, hay que hablar de muchas cosas; no es solamente de los millones que vienen a invertir –y que no son tantos los millones como se habla–.

Señor presidente: el único que hasta ahora vino e invirtió fue Chevron. Primero, en el plan piloto, los 1.240 millones de los veinte kilómetros; y ahora esta prórroga hasta diciembre, pero para adelante no hay nada. Petronas, un compromiso de 500 millones de pesos en tres años. Para explorar, para explotar esta formación hacen falta aproximadamente 20.000 millones por año, entonces estamos muy lejos de la realidad.

Pero ¿por qué no vienen las empresas? Por el marco macroeconómico que vive nuestro país y la desconfianza que existe no vienen a invertir.

¿Qué es lo que han hecho? Como hizo Petronas, que puso los pies y dijo: “Aquí estamos, vamos a invertir de acuerdo a las exigencias

que tenemos en este proceso y esperamos a que cambie la situación económica y política de este país”. Para ellos recién entonces van a venir a desarrollar su proyecto. Mientras tanto, vinieron y están allí, pero no hay desarrollo, salvo lo que tienen que hacer de acuerdo al compromiso asumido.

Por eso, presidente, reitero mi voto negativo a este proyecto. Lamentablemente, aspiraba a muchísimo más. Vengo y provengo de una provincia productora de petróleo y de gas. Cuarenta años trabajando en esta actividad y tenía muchísimas expectativas. Pero realmente no están cubiertas.

Gracias, presidente.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Muchísimas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Pablo González, de la provincia de Santa Cruz.

**Sr. González.** – Gracias, presidente.

Primero voy a aclarar que no viene ningún conflicto en la provincia de Santa Cruz. No viene ningún conflicto en la provincia de Santa Cruz, más allá de que haya algunos que generen ciertas reuniones tratando de potenciar esos conflictos.

Es más, en el día de mañana la presidenta de la Nación va a estar en la ciudad de Las Heras, ciudad petrolera, y acompañada por una dirigencia sindical joven, producto de una gran renovación, hará un acto en la localidad de Las Heras, donde el principal emprendimiento es el petróleo; y la gente va a acompañar a la presidenta.

Usted mismo estuvo hace poco con nosotros, en un equipo de perforación en Las Heras; y dígame qué vio. Vio trabajo, vio gente que está contenta por trabajar, vio gente que se sacrifica...

**Sr. Presidente** (Fernández). – Hablamos con el gremio...

**Sr. González.** – Estaba la gente del sindicato. Es decir, no va a haber ningún conflicto en Las Heras. Yo soy de Santa Cruz y voy siempre a Las Heras. No va a haber ningún conflicto en Las Heras.

Insisto: tenemos una dirigencia sindical que está con los trabajadores, que viene fruto de una renovación; que sí que tiene problemas; que sí discute con nosotros los problemas, pero que

no va a plantear ningún conflicto de esas dimensiones. La prueba la vamos a tener mañana, cuando nuestra presidenta esté en Las Heras. La dirigencia sindical del petróleo, de Santa Cruz, va a estar con ella. Eso para empezar.

Se han dicho muchas cosas. A uno le va cambiando un poco lo que tenía pensado decir. Con el tema de la desconfianza en las inversiones, este fantasma que se quiere azuzar, de que no van a venir inversiones... Mire: el petróleo fue descubierto en la Argentina el 13 de diciembre de 1907. Al otro día, Victorino de la Plaza tuvo que emitir un decreto porque el Código de Minería vigente, de 1875, decía que la inversión podía ser exclusivamente privada. Porque, en aquella época, absolutamente todos los territorios anexos a ese descubrimiento ya habían sido ocupados por privados.

Hace más de cien años, empresas como la Standard Oil venían a invertir en la Argentina. Mire si no van a venir a invertir. Mire si se van a preocupar porque haya tal o cual indicador económico para no venir a invertir.

Lo que hay que hacer es estar preparados para eso; y esta ley forma parte de una estrategia energética que se ha dado la Argentina, que se está preparando para lo que se viene.

Por eso, es una lástima que no esté, pero decía el presidente del bloque radical que no había plan estratégico; criticaba la Ley Corta pero, a su vez, reivindicaba que la había votado.

En una gran contradicción, absoluta contradicción, decía que esa porción de Vaca Muerta vale hoy 5.000 millones de dólares. Número redondo: 5.000 millones de dólares.

Los mismos que, cuando se votó el acuerdo con Repsol dijeron que estábamos vaciando la Argentina y estábamos entregando la Argentina porque pagábamos 5.000 millones de dólares por el 50 por ciento, dicen ahora que vale 5.000 millones de dólares solamente una porción de Vaca Muerta. Fíjese qué contradicción. Fíjese qué contradicción: dieciocho votos negativos y ocho abstenciones, y el bloque oficialista más sus aliados votaron a favor. Votaron en contra; ahora dicen que vale lo mismo. Digamos que nosotros pagamos una porción ínfima de lo que significa YPF. Mire qué contradicción.

Sí hay plan estratégico, claro que hay plan estratégico. Acá se dieron números en los



plenarios que nadie se ocupó de contradecir. El pico de potencia aumentó un 70 por ciento, alcanzando los 24.034 megavatios. En los hogares se incrementó el 143 por ciento y la demanda anual se incrementó un 53 por ciento. En el caso del gas, la demanda aumentó el 35 por ciento, mientras la demanda anual lo hizo un 54 por ciento.

“No hay plan energético” se dijo. Este gobierno construyó 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión, que anillaron el sistema eléctrico, conectando a diez provincias, incluyendo la región de Cuyo –de Mendoza–, el Noreste, el Este y la Patagonia, que estaban aisladas. Incorporó 9.000 megavatios, incluyendo Yacypetá, la central nuclear Néstor Kirchner, ex Atucha.

Construyó 2.900 kilómetros de gasoducto, incluyendo el segundo cruce del estrecho de Magallanes y el gasoducto Juana Azurduy, etcétera, y todas las cosas que se dijeron en el plenario de la comisión. Eso en la estrategia energética.

En el sector hidrocarburífero, después de la privatización de 1992, hay cinco momentos para resaltar. Obviamente, el primero es la reforma constitucional del 94. Y si la Ley Corta dice lo que dice es porque lo señala la Constitución. Lo que pasa es que el primero que hizo operativa la Constitución fue el presidente Néstor Kirchner, doce años después. Mientras tanto, hubo gobiernos de todos los colores políticos que no hicieron absolutamente nada. Nada hicieron. Nada. Que hay que hacerse cargo también, y yo no pretendo hacer un revisionismo histórico de esto, pero tengo que decir que, cuando estuvieron en el gobierno, no hicieron nada.

Uno de los que vino a exponer fue, por ejemplo, el ingeniero Montamat, que dijo que era reformista. Cuando fue secretario de Energía no hizo nada. Es más, yo era subsecretario de Recursos Tributarios en esa época y nosotros, a los trabajadores petroleros, los teníamos con bolsa de comida. Había caído el barril a precio internacional y no había trabajo.

Digamos que los reformistas hubieran reformado algo de eso, para que ganen más o menos lo que están ganando ahora, cuando hay, insisto, muchas cosas para discutir. O sea, los que no hicieron nada, absolutamente nada, nos vienen a decir a nosotros que no tenemos plan estratégico.

El segundo momento, entonces, es la Ley Corta. Hay que decirlo con todas las letras: quien la hizo operativa y la impulsó, a pesar de que acá se votó por unanimidad, fue el presidente Néstor Kirchner.

El otro momento importante de esta política energética es la sanción de la ley 26.741, que declara de interés público nacional, como objeto prioritario de la República Argentina, el autoabastecimiento de hidrocarburos y expropiación el 51 por ciento de YPF.

Sentido federal. Expropiación el 51 por ciento: de ese 51, el 51 corresponde al Estado nacional y el 49 a las provincias. Por eso estamos defendiendo a YPF, porque ahora las provincias son parte de YPF. Es decir que un 24,99 corresponde a las provincias petroleras y un 26,03 al Estado nacional.

El otro momento es el que decía recién: el acuerdo con Repsol. Hagamos memoria. Se decía de una candidata a presidente actual, de UNEN –o lo hizo; no sé–, que nos iba a denunciar por infames traidores a la patria, por la entrega del patrimonio argentino, por haber votado el acuerdo con Repsol.

¿Cuánto vale Repsol ahora y cuánto valdrá a futuro? Si tomamos el criterio bursátil, la acción que ayer valía 22 dólares, hoy vale 33,72 dólares. Creció un tercio la acción de YPF.

Ese acuerdo, que se pagó con bonos Discount, con BONER 24, con los BONAR X, a una tasa del 8,75 –insisto: 5.000 millones de dólares por el 50 por ciento de YPF–, fue absurdamente criticado, cuando hoy los números, y para lo que ahora nos estamos preparando en función de esta ley, nos están diciendo que las provincias y el Estado nacional tienen que estar preparados para lo que se viene.

¿Qué es lo que se viene?

Voy a dar algunos números, producto de estudios, publicaciones y propias declaraciones de autoridades energéticas de otros países. Para los que les gusta Estados Unidos, hace poco, en mayo, vino el subsecretario de Energía de ese país y dijo que la Argentina tenía reservas de gas en función de los yacimientos no convencionales para cuatrocientos años. Es decir, no es descabellado que nosotros estemos considerando qué valor tienen esas reservas de gas, de *shale gas*, que ubican a la Argentina segunda

en el mundo, y de petróleo, de *shale oil*, que la ubican cuarta en el mundo.

Si se toma solamente el 25 por ciento de esas reservas, estaríamos cuantificándolas en 1,6 billones de dólares, contra los 5 mil millones de dólares que constituían la entrega. Cuando nosotros votamos el acuerdo con Repsol y ellos votaron en contra, era la entrega.

Supongamos que no se trata de 1,6 billones de dólares, que es tres veces y medio el PBI de la Argentina; supongamos que se trata del 10 por ciento o del 1 por ciento de eso. Solamente ese 1 por ciento alcanza para satisfacer la demanda de nuestro país y volver al autoabastecimiento.

Son números que figuran en las revistas de energía de absolutamente todo el mundo. No es un delirio nuestro. No estamos delirando, ni pecamos de optimismo. Es lo que se viene, para lo cual las provincias y la Nación tienen que estar preparadas para defender el patrimonio nacional. E insistimos, con convicción, en la defensa de esta ley como defendimos el acuerdo con Repsol, que hoy creo que nadie se anima a criticar.

Con respecto a las preguntas que hizo el gobernador del Neuquén, él vino y dijo que nadie los presionó, que hubo una discusión acalorada. Cuando se le pregunta por la ley, él rememora a Napoleón y el código francés, y las preguntas que Napoleón se hacía: si es necesaria la norma, si es justa. Entonces, él decía que, claro, las provincias podíamos haber aspirado a un punto más de regalías; tal vez, las provincias podíamos haber aspirado a un poco más de canon, pero lo cierto es que teníamos que articular y prepararnos –justamente para esto que estoy explicando yo– para lo que se viene, que es la discusión energética en la Argentina.

¿Sabe cuánto tiene nuestro país, según la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos, en reservas de *shale gas*? 802 trillones de pies cúbicos. Un trillón de pies cúbicos equivale a un cuatrillón de BTU. De esos 802 trillones de pies cúbicos, 273 son de Vaca Muerta, 130 son de Los Molles, el resto lo tienen Inoceramus en la cuenca austral de Santa Cruz, 86 lo tiene el pozo 129D en la cuenca del golfo de San Jorge, entre Santa Cruz y Chubut, y tres en la cuenca del chaco paranaense.

Esos 802 TCF comparémoslos con las mayores reservas de gas que tiene el país, que son las de Loma de La Lata, que tiene 10,8 TCF. Es decir, 802 trillones contra 10 que son las reservas actuales. En petróleo, también tenemos importantes reservas y la necesidad de articular políticas claras y uniformes en materia energética en el país.

Reitero el acuerdo con Repsol. Lo dije en el momento en que me tocó intervenir, en el balance, Vaca Muerta valía cero. En el balance de YPF, Vaca Muerta valía cero. Fíjense la significación que tiene ese yacimiento, 30 mil kilómetros cuadrados, de los cuales YPF tiene 12 mil. Y se firmó un convenio con Chevron por 300 kilómetros cuadrados, por los cuales la empresa mencionada invirtió 1.200 millones de dólares. Comparemos esa cifra, en ese lote, comparada con los 5 mil millones de dólares que pagamos nosotros, todos los argentinos –creo que una buena decisión– por el 50 por ciento de YPF.

¿Qué reservas tiene la Argentina en materia de *shale oil*, según publicaciones serias? Sólo en Vaca Muerta, 1,6 billones de dólares, es decir 16.200 millones de barriles de crudo, contra reservas de 3.942 barriles de crudo.

Se pueden discutir estos números. Se puede hablar de 1,76 millones que vale cada pozo, del factor de recuperación, de los 168 pozos que se hicieron y de los que se tienen que hacer. Pero, con esta magnitud de reservas, esta ley viene a cerrar esa política energética de la que hablaba hoy. Después del 92, la reforma; después la Ley Corta; después la expropiación de YPF; después el acuerdo con Repsol, y después esta ley, en virtud de la cual los gobernadores convienen y se preparan para lo que se viene.

Creo que hay discusiones difíciles de responder ahora. Estamos todos de acuerdo con los pueblos originarios. Estamos todos en contra de la contaminación. Estamos todos a favor de que se aplique, por lo menos ahora, la ley 25.675 que establece los presupuestos mínimos. Estamos todos de acuerdo. Lo que no podemos hacer ahora es venir a plantear que tenemos que pensar en un desarrollo económico del país basado solamente en la cuestión agrícola, o que vamos a presurizar peras para producir combustible, con el nivel de crecimiento que ha tenido la Argentina en el consumo. Lo que tenemos que hacer

es compatibilizar estas actividades respetando el medio ambiente y pensando en el crecimiento. Si no, el país no va a seguir creciendo.

De paso, digo que los pueblos aborígenes fueron atacados por los dueños de la tierra, y fueron atacados por los que establecían explotaciones agrícolas ganaderas. En nuestra provincia, más allá de la matanza de los obreros patagónicos del año 21, cuando había un gobierno democrático, los que mataban a los indígenas eran los dueños de las tierras, quienes hacían actividades agrícolas. Como decían que los indios se comían las ovejas, contrataban gente para que los matara a cambio de ovejas. Me parece que ésa es una discusión de hace cien años.

Nosotros estamos apoyando una ley que prepara para esto que decía yo que se viene, para estos números que yo decía que se vienen. Y no es cierto que Galuccio dijo que ésta era una ley para YPF. Cuando le preguntaron concretamente si era una ley para YPF, dijo que ésta es una ley para la Argentina.

En resumen, ha habido un trabajo de cinco meses entre los gobernadores. Ha habido discusiones que han sido seguramente acaloradas. Se ha llegado a un consenso. Se está buscando una norma que sea uniforme, preparándose para lo que se viene a la Argentina, que es esta discusión que nos ubica a nosotros con un potencial energético increíble, según el cual estamos posicionados segundos en cuanto a reservas de *shale gas* y cuartos en cuanto a reservas de *shale oil*, en el mundo.

Y ¡guarda con lo que decía el senador Fuentes! Tomémoslo con seriedad, porque no es lo mismo un país endeudado con estas reservas, que un país con 400 mil millones de dólares de deuda y con estas reservas. Digamos que las cosas no pasan porque sí. Tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Elaboremos y aprobemos una norma que se prepara para lo que se viene en la Argentina, que es esta discusión, gracias a Dios, del crecimiento y no del reparto de bolsas de comida, como las que teníamos que repartir cuando el secretario de Energía nos vino a decir que era reformista.

Gracias, presidente.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Gracias senador.

Tiene la palabra el senador Freddy Martínez, de la provincia de Santa Cruz.

**Sr. Martínez.** – Señor presidente: no será la primera vez que concuerdo en algunas cosas y no concuerdo, con mi amigo Pablo, en algunas otras.

Lo primero que quiero hacer es contestar ese guante que tiró el senador Fuentes. ¿Qué interés concreto representábamos cada uno de nosotros cuando avanzábamos en esto? La historia no tengo que explicarla. La Unión Cívica Radical ha tenido una historia muy clara en cuanto al tema de los hidrocarburos.

Cuando el senador González hablaba de todo el proceso, si uno iba un poquito más hacia atrás, hubo una etapa en la cual se privatizó la empresa nacional, no solamente YPF, sino Gas del Estado, etcétera. Hubo un desguace de lo que fueron las empresas nacionales y yo creo que allí es donde comienzan todos los problemas que tenemos que ver, luego, no solamente en lo que es la política hidrocarburífera, sino en la energética.

Si tengo que pensar qué interés represento para adelante, no me cabe ninguna duda de que el principal es la gente de mi provincia, la que nos ha puesto en cada una de estas bancas. Pienso en los jóvenes y en esto, no por una cuestión de egoísmo, sino de responsabilidad, veo a mis hijos y a mis nietos, y no solamente en esta norma sino en cada una de las cosas que llevamos adelante. Esto me lo enseñó un viejo militante de la política. Me decía que cuando tuviera una duda sobre lo que debía firmar, pensara en lo que iba a implicar en la vida de mis hijos. La verdad es que tenía razón; es un buen parámetro siempre para ver lo que hace uno, aunque, por supuesto, puedo equivocarme.

No voy a concordar con lo que decía el presidente de mi partido. Ernesto Sanz sostenía que en el Senado ellos acompañaron la creación de ENARSA. Yo era diputado y voté en contra. Queríamos que se llamara ENARSA, Sociedad del Estado. Entendíamos que debía existir una herramienta por parte del gobierno nacional para que tuviera intervención no solamente en hidrocarburos sino en combustibles –de eso se hablaba en aquel momento–, y varios diputados votamos en contra. No sé si todos votaron negativamente, pero yo sí lo hice porque era uno de los que pensaba que realmente no se trataba

de una buena herramienta. Lamentablemente, no me equivoqué y hoy, con buen criterio, se solicita la reversión de todos aquellos derechos que se le dieron a ENARSA sobre la plataforma continental a fin de que las áreas vuelvan a la Secretaría de Energía a efectos de ser licitadas nuevamente en virtud de que son realmente muy importantes.

Es cierto que hubo algunas actitudes que fueron necesarias, sobre todo, al comienzo de un proceso donde la situación social era compleja. Me refiero al tema de los subsidios. Pero también es verdad que hubo errores graves con ese tema.

Recuerdo un debate tenido en este recinto donde yo decía que, lamentablemente, aquellos que consumían la garrafa de gas –aquellos habitantes de menores recursos del NEA y NOA y hasta de zonas del Gran Buenos Aires– subsidiaban el calentamiento de las piletas de natación de los *countries*, porque el gas estaba subsidiado. Recuerdo haber ido a una empresa nacional que se dedicaba a hacer los calefactores para piletas de natación y estaban chochos porque vendían muchos equipos.

Como hombre de provincia, también observaba la concentración en el AMBA de todo lo relacionado con los subsidios. Pago 30 pesos en cada boleta de servicio en el departamento que alquilo y, por supuesto, que no es lo que pago en mi ciudad ni lo que paga cualquier otro habitante de una ciudad del interior del país. Lo mismo se puede decir respecto del boleto de transporte. Cuando se recorren los distintos lugares se advierte que en estos temas hay una muy fuerte distorsión.

Hoy hay cerca de ocho buques metaneros esperando para descargar gas. Hubo un error de cálculo y no se necesita la inyección de gas. Bienvenido sea que haya bajado el consumo, pero debe pagarse el alquiler de esos buques metaneros mientras esperan en los puertos. En este momento, hay cuatro en Bahía Blanca y cuatro en San Nicolás haciendo cola para regasificar la carga que tienen encima.

Independientemente de esto, lo que hay que analizar son las consecuencias que trae para las provincias.

Se alude al tema de las empresas provinciales de energía. Mi provincia la tiene y el senador Garramuño hablaba de que la Legislatura de

su provincia estaba terminando de crear esa empresa provincial que, en realidad, va a nacer muerta. Lo digo porque, realmente, no va a tener la oportunidad de llevar adelante ninguna asociación o *carry*, cosa que sí fue bien aprovechada por la provincia del Neuquén en épocas pasadas. Pero hoy, lamentablemente, el único que va a poder hacer *carry* –ya lo ha hecho, entre comillas– es YPF a través del acuerdo celebrado con Chevron; acuerdo que, lamentablemente, todavía no conocemos en su totalidad.

Con respecto al proyecto de ley, uno ve que no limita o reglamenta la cesión de los permisos. Bien hablaba Galuccio de los que cortaban el pasto y con eso hacían buenos negocios.

En este caso, la ley permite extender los plazos; es decir, la posibilidad de que las empresas, si bien no digo que puedan cortar el pasto, sí puedan hasta inclusive hacer una especulación de tipo inmobiliaria.

Quisiera referirme al mecanismo de renovación de las concesiones. La vieja ley –la que hoy está vigente– permite veinticinco años más diez. Punto. No habla, y es lógico que no lo haga, del no convencional porque no se conocía. En ese sentido, me parece bien que se incorpore esa clase de explotación. Pero lo que sucede es que se arrastra al convencional. En el caso del convencional, son veinticinco más diez, más diez, más diez, más diez, más lo que fuera necesario.

En los debates que tuvimos, esa extensión era una de las aspiraciones más grandes que tenía uno de los hombres que trabajó desde la parte privada –el conocido ingeniero Oscar Vicente–, quien siempre sostenía que lo que había que hacer para que las empresas tuvieran posibilidades de invertir era otorgar concesiones hasta la extinción del yacimiento. Siempre sostuvo esa postura frente a todos los gobiernos que le tocó enfrentar.

En el caso, se establece el tema de los *off shore* y los no convencionales con treinta y cinco.

Reitero: no hay un límite porque el límite estará determinado por la autoridad concedente. Me parece bien que así sea. Pero si uno analiza la extensión de los plazos advierte que no es gratuita. Uno cede un derecho económico sobre el recurso natural, independientemente de los plazos que otorgue. Pero la negociación bilateral va a darse entre las empresas y las provincias. Le



evita a la empresa tener que revelar la verdadera valuación del derecho que adquiere. El perdedor de la renta es quien ejerce el dominio. Esto es la provincia. Punto.

Las licitaciones competitivas quedaron como licitaciones a partir de ahora. Pero las licitaciones como mecanismo de adjudicación son sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 bis. Ese artículo alude al derecho a solicitar subdivisiones de áreas, otorgamiento de nuevas concesiones no convencionales, unificación de áreas convencionales adyacentes. Es decir, se establece un mecanismo de licitación, pero, por otro lado, se fija un mecanismo que lo que hace es evitar las licitaciones.

Ejemplo: estoy plantado sobre un yacimiento, digo que geológicamente tengo la posibilidad de que haya no convencional y pido que me establezcan los treinta cinco años. Pero en ello arrastro lo que es convencional sin necesidad de absolutamente nada. Si bien dice...

**Sr. Presidente** (Fernández). – En el medio debe estar el plan piloto.

**Sr. Martínez.** – Tiene que haber un plan piloto, por supuesto. Pero ello se establece.

Si bien se indica que la actividad más importante debe ser la no convencional, se fija que las adyacentes convencionales pueden seguir siendo desarrolladas por la persona que está sentada sobre ese lugar.

No quisiera que se tome como chicana. Pero las nuevas concesiones van a ir a lugares de riesgo geológico más importante. Los del chaco paranaense, la cuyana, bolsones, etcétera, van a estar contentos porque serán los lugares donde comenzarán a ir las nuevas inversiones.

Me quiero referir al tema de los bonos. Se establece que en el caso de una renovación de una concesión, el concesionario deberá pagar un bono del 2 por ciento, el que se fija sobre el cálculo de la renta remanente de la capacidad de reservas del yacimiento en función de los dos años anteriores como determinante del precio.

Pero, ¿por qué no se fija el cuatro o el cinco? ¿Por qué hay que poner un techo, de la misma forma en que se hace con el tema de las regalías?

Las regalías se establecen con un techo del 12 por ciento, con la posibilidad incluso de que puedan bajar en el caso de que haya petróleo pesado, etcétera; algo que es razonable

si el yacimiento requiere un nivel de inversión importante para ser explotado; en ese caso es bueno que se otorgue un incentivo. Ahora bien, ¿solamente recién a los veinticinco años se puede acceder a un 3 por ciento más y a los diez años posteriores a otro 3 por ciento con un tope del 18 por ciento? ¿Y si aparece un yacimiento rentable? Hay lugar en Bolivia. No me quiero ir muy lejos. Ese país tiene hasta un 25 por ciento de regalías en algún tipo de explotación. No es pareja para todos, pero me parece bien. Creo que eso debería quedar determinado.

El otro tema es que se limita todo lo atinente a percepción de renta, ingresos brutos, etcétera. Todo eso queda establecido como un techo para las provincias. Pero no limita los mecanismos de percepción de renta para la Nación. Por ejemplo, se aplican derechos de exportación, y eso se establece en este proyecto de ley. Por supuesto que lo puede hacer la Nación; no me parece mal que lo haga. Soy partidario de las retenciones, no me cabe ninguna duda, en este tipo de cosas. Pero cuando se establece este tipo de cosas sobre las cuales se calculan las regalías, esto también afecta la base imponible del impuesto a los ingresos brutos y demás. O sea que las provincias siguen cediendo cosas a favor de la Nación, y nosotros entendemos que se está avanzando más allá de lo que realmente se debería. Lo mismo sucede cuando se establece la libre disponibilidad de ese 20 por ciento sobre tierra, y del 60 en el caso de *off shore*. Me parece bien que se establezca con mayor claridad cuándo es *off shore* y cuándo no; eso me parece excelente. Voy redondeando, señor presidente.

Lo otro que aparece rápidamente en el recuerdo es que, cuando vino Kicillof con el secretario de Energía de ese entonces –Daniel Cameron–, una de las cosas que nosotros planteábamos y que ellos plantearon en ese momento respecto de Repsol –para poder pagarlo– fue la remediación ambiental que se había llevado adelante. Nuestra provincia –la provincia de Santa Cruz– fue una de las pocas que trajo papeles en los que se decía cuál era el valor de esa remediación ambiental. Me acuerdo que era un monto más que interesante, independientemente de que uno esté de acuerdo o no; pero era un monto interesante. Recuerdo que Kicillof llegó a decirnos –está en la versión taquigráfica– que era casi posible que

tuviéramos que pagarles cero a los gallegos en función de lo que ellos habían generado como pasivo ambiental. Sin embargo, no se pagó un peso de pasivo ambiental.

Por lo tanto, respecto de Vaca Muerta, le pido al señor presidente –ya que es afecto a este tipo de cosas– que permita que cite este refrán: en el campo dicen que cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora. Realmente, espero que, viendo Vaca Muerta, no tengamos que llorar por habernos equivocado en lo que estamos hoy legislando.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Tiene la palabra la señora senadora Liliana Negre de Alonso, por la provincia de San Luis.

**Sra. Negre de Alonso.** – Señor presidente: en línea con lo que mis colegas han hablado acerca de a quiénes representamos, en realidad, yo represento a la provincia de San Luis, defiendiendo el federalismo de la Nación Argentina –que está establecido en la Constitución–, no respondo a ningún otro interés y, en este caso, me planto desde el lugar de representar a una provincia no hidrocarburífera que creo que forma parte de los sillones vacíos que existieron en la génesis de esta ley.

¿Era necesaria una nueva Ley de Hidrocarburos? Indudablemente sí era necesaria. ¿Era necesario legislar sobre los hidrocarburos no convencionales? Indudablemente que sí era necesario. Pero no por imperativos coyunturales, no por apremios de balanzas de divisas, no por supuestas presiones que se dicen haber recibido y que se van corroborando a lo largo del debate, no violando el medio ambiente, no violando el derecho de los pueblos originarios, y, menos aún, violando la ley recientemente sancionada por el Congreso de soberanía hidrocarburífera.

Además, no se ha reconocido en este debate el fracaso total de la política hidrocarburífera. El ministro De Vido habló del fracaso de la política neoliberal; pero no habló del fracaso de la política durante estos más de diez años de gobierno, cuando tenemos récord de importación de energía. No hablamos de la tolerancia a la pérdida del autoabastecimiento. No hablamos tampoco del fracaso de ENARSA; yo era presidenta de la Comisión de Legislación General en ese momento, y recuerdo que discutíamos con el senador Baglini porque él decía que tenía que ser una empresa del Estado –como

expresó recién el senador–, y yo sostenía que estaba bien que fuera una empresa privada y que veía auspicioso el tipo de exploración *off shore*, como se anunciaba que iba a realizar. Sin embargo, reitero, no hablamos del gran fracaso de ENARSA.

Tampoco se habla de las técnicas que se admitirán. No se habló ni se justificó, salvo algunas cosas que dijo el gobernador del Neuquén, que se admitirán técnicas de explotación no convencionales que hasta ahora la Argentina no había permitido.

Tampoco se habla de que se ha eliminado todo lo que tenga que ver con los presupuestos mínimos ambientales. En realidad, la remisión es muy somera. Nosotros, en el dictamen en minoría, lo hemos incorporado puntualmente en varios incisos que creemos que son indispensables.

Tampoco se ha hablado de que no se ha dado participación a las provincias no hidrocarburíferas.

Entonces, ¿cuál es la historia? El senador Sanz dijo que era la primera vez que se iba a tratar por parte del Congreso de la Nación una ley sobre hidrocarburos. En realidad, tiene razón: es la primera vez que la va a tratar un Congreso surgido de elecciones libres y sin proscripciones. Porque en 1935 se trató la ley 12.161, que se refería a minas, petróleo e hidrocarburos fluidos; pero se consideró sin la participación de la Unión Cívica Radical. Posteriormente, la Constitución de 1949, en su artículo 40, daba la propiedad exclusiva y excluyente al Estado nacional del dominio del subsuelo; pero esto fue derogado por la legislación de la Revolución Libertadora.

El presidente Frondizi dictó la ley 14.773, pero él había surgido de elecciones que no fueron libres porque el peronismo estuvo proscrito. Por lo tanto, al igual que el radicalismo del 35, no pudo participar.

Después vino esto que llamamos ley, pero que en realidad es un decreto ley de Onganía, el 17.319. Esto es lo que hoy estamos modificando sólo parcialmente. Estamos modificando un esqueleto normativo que tiene una base o un origen neoliberal, en el que, además, los recursos se consideraban de la Nación y no de las provincias. O sea que estamos emparchando

un decreto ley de una dictadura, anterior a la reforma constitucional, en vez de estar dictando una ley nueva –como aquí se ha dicho, si era tanta la urgencia–, no sólo para convencionales sino para la amplitud, para convencionales y no convencionales. Una ley nueva fruto de un Congreso donde todas las fuerzas políticas hayan participado.

De los tres temas que abordaré, empezaré por el del federalismo. Creo que esta ley tiene un gran avasallamiento al federalismo, y un incumplimiento y una violación expresa de lo que establece la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, la 26.741. ¿Por qué digo esto? Porque la ley 26.741 incorporó el Consejo Federal de Hidrocarburos. Pero el Consejo Federal de Hidrocarburos, aunque el senador Fuentes haya dicho que está en pañales o desnudo, es ley y, como tal, tiene expresas competencias para participar de este debate. Al respecto, le pido a la Presidencia autorización para leer, porque el artículo 5º, inciso a), dice que el Consejo Federal de Hidrocarburos debe promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos –o sea la soberanía hidrocarburífera–, expedirse sobre toda cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina que el Poder Ejecutivo nacional somete a su consideración, que es lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, y adonde nosotros y el resto de las provincias no hidrocarburíferas no hemos sido convocadas, como así tampoco el Consejo Federal, en tanto sólo fueron convocadas las provincias que cuentan, hasta hoy, con este recurso. Y después voy a explicar por qué aclaro que sólo hasta hoy.

También se dice en el artículo 3º que el Consejo Federal de Hidrocarburos tiene, entre sus competencias, la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos, de las provincias y de las regiones de la República Argentina –todos integramos la República Argentina–; la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y restitución de reservas; la integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración

y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales; la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión –acá se están incorporando nuevas tecnologías, motivo por el cual el Consejo Federal debió ser convocado y escuchado– que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina; y la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado.

Luego se menciona la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad –los consumidores somos todos los habitantes de la República Argentina–; y la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras.

El consejo, señor presidente, está representado por cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, o sea, por los ejecutivos provinciales, que son los que deben ejecutar las políticas de las provincias y tienen a su cargo la relación de éstas con la Nación.

Ahora bien, este proyecto de ley, consecuentemente, está violando la obligación que existía de haber convocado al Consejo Federal de Hidrocarburos, y aquí hay innumerables sillas vacías que debieron ser ocupadas por nuestros mandatarios provinciales, quienes debieron opinar y ser escuchados –tengan o no deuda para reestructurar– en este debate que hoy estamos dando.

En ese sentido, acá se dijo –porque esto lo reclamé– que tal vez eso no era importante, porque no pertenecían a las provincias hidrocarburíferas. Sin embargo, señor presidente, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos ha publicado recientemente un mapa, que va variando de acuerdo a los estudios satelitales que se están realizando, el cual investigamos porque se mencionó en uno de los seminarios que se hicieron aquí en el Senado, donde se señaló la existencia de estos datos. Y,

además, después me llamó la atención porque el gobernador de la provincia de Mendoza referenció a la de San Luis, y resulta ser que, de acuerdo a este mapa, la provincia de San Luis, juntamente con la de Buenos Aires y creo que también la de Córdoba, podrían tener reservas de *shale*. De tal modo que nuestra provincia estaría en esa situación. Y hablo por la provincia que represento, pero creo que puede ocurrir con cualquier otra del resto del país. Porque, ¿quién pudo pensar que en el Chaco o en Formosa podía haber también?

Por eso, debieron ser convocadas y participar. Porque además de que tenían el derecho, por la ley de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, son potenciales yacimientos. Después voy a proporcionar bien el dato a la senadora que me está mirando, porque ahí hay dos o tres mapas importantísimos. Pero en razón de lo expuesto, con mayor razón debimos ser convocados nosotros para opinar por nuestros gobernadores. Porque, en definitiva, el que ejecuta la política provincial es el gobernador; el que tiene la relación con el resto de los estados provinciales es el gobernador; y el que tiene la relación con el Estado nacional es el gobernador. Nosotros tenemos actividad legislante. No tenemos ejecución de políticas provinciales ni nacionales. Consecuentemente, el argumento que se esgrimió aquí de que eso se subsanaba con haberlo enviado al Congreso de la Nación el proyecto no se subsana en lo más mínimo.

En segundo lugar, yo dije que no se ha hablado del fracaso de los operadores. Se habló del fracaso de la política energética neoliberal, pero resulta ser que los actores son siempre los mismos, tal como dije claramente en la comisión: Pan American, Pluspetrol, Petrobras, Chevron. El 83 por ciento de estas empresas estaban con anterioridad al año 2003. Y hoy son Repsol YPF; Pan American; Petrobras; Chevron; Tecpetrol –que es Techint–; Total Austral. En una palabra, son exactamente los mismos personajes, señor presidente. Y a estos personajes que el ministro De Vido dijo que eran los grandes perdedores o los causantes de la gran pérdida que sufrió la República Argentina en la política energética, les vamos a dar hoy la posibilidad de las prórrogas fenomenales que contempla esta norma, y que están contempladas en este cuadro que voy a agregar después a la versión taquigrá-

fica, en un cuadro de datos al año 2013, cuya fuente es el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Y reitero: son exactamente los mismos.

¿Qué estamos haciendo? Estamos, simplemente, otorgándoles una prórroga a cambio de un porcentaje que irá para algunas provincias.

Quiero cerrar con dos temas: medio ambiente y pueblos originarios.

Debemos firmar un tratado de paz entre el progreso y el medio ambiente. Tenemos que conciliar el progreso y el medio ambiente. Fue muy dura la senadora por Río Negro en las apreciaciones que formuló. Y tiene mucha razón, en muchas de las cosas que dijo. Pero en su momento le obsequié un libro referido a cómo nosotros habíamos logrado conciliar en mi provincia al pueblo mapuche con el progreso y con el medio ambiente. Esto no es imposible. Se corresponde con una política que debe ser lograda y que –como ella dice– el camino para lograrla es el diálogo, el cual implica el cumplimiento de las normas de la OIT, que no voy a repetir porque aquí ya se han dicho.

Para decirles desde dónde estoy parada, les voy a pedir autorización para leer lo que dijo el general Perón –dicho sea de paso, hoy, 8 de octubre, es su aniversario– en su discurso del 21 de febrero de 1972, cuando hablaba sobre ecología.

En esa ocasión señalaba: “Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido, a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional”. Y agregaba: “También el ser humano, sesgado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia, y así, mientras llega a la Luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, el suelo y que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente, sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mal que podría servirle, de última, de base de sustentación”.



¿Es posible conciliar el medio ambiente con el progreso? Sí, es posible conciliarlo, pero también debemos conciliar los intereses de una Nación de la que todos somos parte; somos federales, algunas provincias tenemos unos recursos y otras tienen otros, pero queremos coadyuvar al bien común.

Acá ha habido una violación palmaria al federalismo y, consecuentemente, esta ley nace con un vicio de constitucionalidad de origen.

**Sr. Presidente** (Fernández).— Tiene la palabra el senador Adolfo Bermejo por la provincia de Mendoza.

**Sr. Bermejo.** — Señor presidente: luego de cinco meses de debate, trabajo, reuniones y cuatro borradores se llega a este proyecto que nos demuestra que a través del consenso entre diez jurisdicciones provinciales, representadas por sus gobernadores, y el Poder Ejecutivo nacional, se logran beneficios para todo el país, en un esquema “ganar-ganar” donde se pone de manifiesto el interés supremo, que es lograr la soberanía energética.

Esta acción conjunta de los gobernadores de la OFEPHI le garantizó a las provincias su derecho absoluto sobre los recursos naturales de su suelo, cumpliéndose con la Constitución Nacional en su artículo 124, y con lo establecido en la ley nacional 26.197, denominada Ley Corta, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Este marco legal faculta a los gobiernos provinciales como autoridad de aplicación, y no cabe duda alguna que reserva al gobierno nacional la fijación de una política de estado de hidrocarburos para todo el territorio nacional.

Estamos hablando de seguridad jurídica, que es lo que ha permitido, por ejemplo, en mi provincia de Mendoza, que este año se duplicaran las inversiones. Una industria que requiere y ocupa al presente 15.000 puestos de trabajo calificados, y que de acuerdo con la proyección, en 2017 se incrementará hasta llegar a los 20.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de cerca de 150 empresas que operan, de las cuales 125 son pymes, las que generan un efecto derrame sobre todo el sector industrial y de servicios de Mendoza.

La producción de petróleo en mi provincia fue revirtiendo su porcentaje de declinación. En este sentido, vale destacar que en cuanto

al gas natural, la producción creció un 50 por ciento desde 2011, yendo de los 950 millones de metros cúbicos a los 1.500 millones de metros cúbicos en 2013.

Quiero destacar que la ley que hoy votamos regula un nuevo paradigma de exploración y explotación en los hidrocarburos *offshore* y no convencionales. Con respecto a estos últimos, el hallazgo del pozo Filo Morado abre una nueva oportunidad que ya es una realidad. El *shale oil* encontrado en la formación Agrio es una muestra de que esto de lo que hablo es una realidad.

Es incuestionable la importancia de la ley que debatimos hoy en este momento histórico que vive la República Argentina, porque el objetivo final es alcanzar el autoabastecimiento energético, evitando el déficit energético, que como es sabido, consume reservas del Banco Central año tras año.

Me quiero detener y referir al sistema único de licitación y adjudicación de áreas. Volvemos a lo mismo: las reglas claras significadas en todo el país favorecen la inversión local y extranjera. A más inversión hay más crecimiento y así se logra el autoabastecimiento del que hablamos.

Podemos decir en este mismo sentido que los porcentajes estimados a título de regalías aportan a tener previsibilidad en cada uno de los estados provinciales.

Quiero destacar que esta Cámara, y sus miembros, nuevamente estuvieron a la altura de las circunstancias y de la importancia de esta ley que hoy debatimos, porque a lo largo de dos jornadas de reuniones plenarias de comisiones, tanto quienes están a favor como quienes están en su contra tuvieron la oportunidad de hacer conocer su postura y participar en el debate que las comisiones del Senado habilitaron para que todas las voces pudieran expresarse.

Señor presidente, para ir cerrando mi intervención, porque otros senadores están esperando para hacer uso de la palabra, quiero dejar explícito que acompaño con mi voto afirmativo este proyecto de ley porque considero, por lo que dije anteriormente, que es una herramienta legal beneficiosa para el país, petrolero o no petrolero, y especialmente porque me predispone con una visión esperanzadora hacia el futuro. Si diez de las veinticuatro jurisdicciones han podido consensuar un tema tan delicado y sen-

sible para las haciendas provinciales, como es la tasa del impuesto a los ingresos brutos en el 3 por ciento del todo, y no en una dispersión del 3, 4 o 7 de la nada, unificando en todas las provincias ese porcentaje, me animo a pensar que en el futuro no muy lejano otros temas, como la coparticipación federal de impuestos o las retenciones a las exportaciones, deberían tener este mismo tratamiento, y con este ejemplo de consenso desde la política, dando así respuesta a la ciudadanía, porque como nos enseñó el general Perón, debemos trabajar por la grandeza de la Patria y la felicidad de su pueblo.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Tiene la palabra la senadora Giménez por la provincia de Misiones.

**Sra. Giménez.** – Señor presidente: vuelve a ser un proceso histórico trascendental, y por tan trascendental no puedo dejar de llevar adelante la posición de la provincia de Misiones en cuanto a los recursos naturales y al federalismo, a lo que hacían acotación otros senadores con anterioridad.

Por eso le pido autorización para que me deje leer unos cuantos conceptos, porque tienen que ver con jurisprudencia que después será usada o no, en función de lo que por ahí uno advierte que hace la oposición, al judicializar todas las normas que llevamos adelante.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Señora senadora: no soy el que la autoriza, sino la Cámara, pero en líneas generales nadie se incomoda cuando alguien lee algún párrafo, de manera que no creo que haya algún problema.

**Sra. Giménez.** – Muchas gracias, señor presidente.

El poder constituyente, dicen las normas del derecho, es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa, en cuyo ejercicio la sociedad política se identifica con el Estado para darle derecho originario.

Debemos tener siempre presente esta idea: el poder constituyente originario como voluntad política creadora del orden que requiere justamente el fundamento, la legitimidad, el carácter trascendente en el orden jurídico positivo, en consecuencia, el fundamento de la legitimidad para hallarse dentro del derecho natural, el nacimiento y la personalidad para crear sus órganos de expresión; y tiene que ser continua,

originaria, extraordinaria, suprema, directa. Son características de ese poder constituyente.

También hay uno que es muy trascendental, que es el ilimitado, en cuanto al pueblo, a constituirse originariamente en un Estado y a darse las bases de su ordenamiento en forma permanente, sin encontrar limitación de ningún orden por ser amplia y por ser ajustada a derecho. Elige su régimen político, su forma de gobierno. Ese poder constituyente, que es el pueblo en sí mismo, es el que nos demanda a la dirigencia política ese crecimiento y ese progreso que va de la mano de la organización de la economía y de la construcción colectiva.

Por eso no podía dejar de llevar adelante esta presentación que hemos trabajando en conjunto con asesores jurídicos de la provincia de Misiones, porque nosotros tenemos un recurso natural muy importante, como lo decía hoy el senador Fuentes, que es el acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo, de América Latina, de la República Argentina.

¿Son soberanas o no las provincias respecto a los recursos naturales? A las provincias les corresponden el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este precepto constitucional es muy claro y frena las conductas de las autoridades nacionales lesivas de la competencia nacional. No digo que esta lo sea. Quiero que quede claro: no digo que esta lo sea, para que se entienda después en los próximos debates.

– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don Gerardo Zamora.

**Sra. Giménez.** – Misiones se encuentra a la vanguardia en la protección de sus recursos naturales. La provincia de Misiones tiene leyes propias de dominio originario, como la ley 1.699, antes 4.467, la cual crea el Parque Provincial Río Iguazú, bajo el régimen de áreas naturales protegidas, fluviales, terrestres, de dominio público y de jurisdicción de la provincia, declarándose, además, de interés estratégico el ecosistema de interfaz actual o futuro de ese Parque Provincial Río Iguazú, de dominio y jurisdicción de la provincia, resultando de interés público la prevención y conservación de la fauna íctica, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos, flora terrestre, aérea, acuática, plancton y los ciclos biogeoquímicos que la componen.

Y como ejemplo más reciente y categórico la ley IV cuarto y 56 de nuestro Digesto Jurídico, que es la nueva coparticipación económica para Misiones, que es la soberanía energética en el proceso decisión del patrimonio natural de los misioneros, la que establece, entre otros temas de fundamental relevancia, que la provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre los recursos naturales hídricos existentes en su territorio y regula los mecanismos de democracia semidirecta como requisito para la implementación de emprendimientos hidroeléctricos.

De esta manera, Misiones actúa dentro de sus facultades no delegadas en la Nación en lo que respecta a sus recursos naturales.

El ingeniero Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y nuestro conductor político en el Frente Renovador de la Concordia Social decía: el dominio y jurisdicción provincial, como autor de esta ley, sobre los ríos que surcan su territorio ya aparece reconocido por el gobierno nacional. En los considerandos del decreto de fecha 31 de marzo de 1909, donde el Poder Ejecutivo nacional señalaba que el mismo codificador, haciendo referencia al Código Civil, declaraba que los bienes públicos son del Estado general o de los estados particulares, según la distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional... que las provincias conservan todas las facultades y atribuciones que no han sido delegadas expresa o por implicancia y que en ninguna parte han enajenado su jurisdicción o derecho sobre riberas, playas y cauce de ríos que corren dentro de sus límites y se afirma que el dominio de la provincia ejerce el derecho originario.

También cita en esa instancia el artículo 24 la doctrina Guastavino, que perdió vigencia en lo que significó en lo anterior la búsqueda de las hegemonías provinciales a partir de la reforma del 94 y, obviamente, que el marco jurídico que es el artículo 124 *in fine* debe interpretarse de alguna manera por los precedentes que esto lleva hacia futuro y en la responsabilidad de generar hacia los argentinos que nos continúen la convicción de transitar en el camino correcto.

En el derecho existe un principio fundamental según el cual la jurisdicción se deriva del dominio y, por lo tanto, su ejercicio le compete a

quien es su titular, salvo que la ley establezca lo contrario para casos particulares y con carácter excepcional, cuando la Constitución lo autorice. El deslinde de competencias entre la Nación y las provincias surge de nuestra Constitución Nacional y habla por sí misma. Al proponer la definición de dominio originario para la titularidad provincial la Constitución establece también de forma innegable el carácter público de esta pertenencia, pero esto no debe confundirse con el concepto tradicional de dominio público.

En segundo lugar, deriva del propio titular del dominio. Es decir, provincia sujeto público por excelencia y en tercer lugar con el objeto que atribuye la Constitución a dicha pertenencia, a saber, los recursos naturales, bienes que la doctrina nacional e internacional han calificado del más alto interés público.

De esta manera, el dominio originario nunca podrá considerarse como de carácter privado.

En este orden de ideas la provincia de Misiones está llamada a ejercer su derecho constitucional de dominio sobre ríos, riberas y cauces y de allí deviene nuestra constitucionalidad en lo que se refiere al Parque Provincial Río Iguazú y en lo que significa la soberanía energética que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del presente año.

En ese trabajo de la potestad y de la eminencia jurídica y de la expresión política jurídica de la soberanía interna, que es una parte de este proceso de la Ley de Hidrocarburos y en ese ordenamiento institucional, también entendemos que el dominio originario va más allá del dominio eminente. Y que se reconoce la propiedad de los recursos naturales a las provincias como derecho real de dominio. Y en ese camino de lo que lleva adelante la Carta Magna y su interpretación para nosotros, vale la pena destacar que con esta reforma, la del 94, por primera vez se incluye en la Constitución Nacional las palabras recursos naturales y para no dejar duda al respecto, no se hace distinción alguna entre ellos y abarca todos los recursos naturales existentes en el territorio de las provincias. En tal sentido, algunos de los autores sostienen que el ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el dominio sobre los recursos allí comprendidos son propios de las provincias, los que las habilita para percibir tributos sobre ellos y disponer enajenación y

aprovechamiento de aquellos por sí mismos y en políticas concertadas con el Estado nacional.

Asimismo, la propiedad y la administración de los recursos naturales garantizan un presupuesto vital del federalismo, cuidando no alterar en esa insistencia las jurisdicciones.

Los recursos naturales pueden ser renovables, no renovables y en este caso, en el último, se incorpora...

**Sr. Martínez.** – ¡Disculpeme!

**Sra. Giménez.** – No, no los disculpo senador Martínez, senador Garramuño y senador Linares por interrumpirme. Quiero que quede en la versión taquigráfica, no más.

**Sra. Fellner.** – ¿Me permite una interrupción, senadora?

**Sra. Giménez.** – Sí.

**Sra. Fellner.** – Lo triste de este Senado: la senadora por Misiones, que no es una provincia hidrocarburífera, está hablando de un tema. Estamos hablando de lo que significa el desarrollo de un país que tiene recursos energéticos. Las bancas vacías con un cartel de política partidaria, no participando en lo que significa la importancia de una ley que habla y permite el desarrollo de un país. Tres senadores riéndose en el medio de una alocución. Creo que estos son escenarios que no queremos ver, presidente.

Gracias, senadora.

**Sra. Giménez.** – Gracias, senadora Fellner.

Los hidrocarburos son una riqueza, un recurso natural del suelo y del subsuelo, habida cuenta de que su exploración y explotación ilegal tiende a producir alteraciones relevantes que modifican el ambiente y los demás recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas. Motivo por el cual no se puede prescindir de la autorización de las provincias o de la Nación para su exploración y explotación, según el territorio en el cual pueda llevarse adelante el proceso de exploración. Por ello es muy importante en lo que corresponde al derecho dominial y al derecho ambiental en esa conciliación de lo que significa el ajustarse a derecho, el estar convencido de llevar adelante el desafío de acompañar esta ley para que realmente se convierta en una gran oportunidad para el desarrollo de la matriz energética, confiando en nosotros mismos, en nuestra capacidad y en el accionar presente y futuro. No sé quién gobernará la

Argentina después de 2015; lo que sí sé es que dejamos una Argentina de pie, con trabajo, en paz, con desarrollo económico, con progreso, respetando los procesos de economías regionales y lo hicimos solos, señor presidente, solos aquellos que creímos en nosotros, donde en ninguno de estos procesos nos acompañaron desde la oposición. Es más, nos boicotearon en forma permanente confundiendo a la sociedad sobre lo que se construye. Y acá estamos construyendo soberanía energética a partir de hacernos cargo de lograr inversiones rápidas, inmediatas, que generen el supuesto pretendido de los 5.000 millones de dólares. Es un cálculo que no pasa de ser un cálculo matemático si no se plasma en las inversiones reales, en las acciones de generación de empleo y de venta y comercialización del petróleo crudo de la República Argentina; si no se hace y si no se plasma en la electrificación rural en los cientos de miles de kilómetros de la República Argentina. Después nos muestran, señor presidente, a su provincia con pobreza o a la mía con pobreza y en ese desafío donde nos muestran sin luz, no nos acompañan desde las bancas dándonos la oportunidad de que nuestro territorio, nuestros comprovincianos tengan la oportunidad de igualarse frente al derecho a través del desarrollo energético que tanto reclaman e insisten. Por eso es muy importante esto que acabo de hacer en lo referente a recursos naturales.

Nosotros somos una provincia de vanguardia defendiendo el agua del mundo, de la República Argentina, y el oxígeno. Pero sabemos de la importancia que significa el desarrollo y el progreso. Porque como bien me recordaba por lo bajo la compañera Riofrío, de San Juan, el mayor impacto ambiental es el de la pobreza. Y conciliar la salida del desarrollo económico y la generación de empleo para sacar de la pobreza a nuestros compatriotas es una obligación del conjunto de la representación política de la República Argentina. Y es eso lo que venimos a buscar y lo que venimos a defender.

Por eso, con toda tranquilidad de conciencia y con absoluta convicción, quiero que los trabajadores de la República Argentina ganen los mejores sueldos posible para igualar hacia arriba, no hacia abajo. Quiero que los 60.000 o 70.000 pesos que decía el senador Pereyra, colega secretario del Sindicato de Petroleros



de la República Argentina, sean una realidad para todos, porque todos los trabajadores de la República tienen trabajos duros. Los tareferos de mi provincia cobran 1 peso con 35 centavos el kilo de hoja verde cosechada. Trabajan 12 horas a la par y no tienen herramientas para el desarrollo si no son las construidas por todos solidariamente en esto del desarrollo.

Por eso la complementación de la articulación de las políticas públicas, sobretudo en lo que significa progreso y desarrollo, es fundamental, con el acompañamiento y la convicción que debemos tener todos. Podemos estar en desigualdad de opinión en un montón de cosas, pero lo que no nos podemos permitir es no acompañar la salida de la pobreza de aquellos compatriotas que esperan de nosotros las mejores respuestas. Y la mejor respuesta es la inversión rápida, el ingreso rápido de dineros y el mercado rápido de integración de la Argentina a la venta y comercialización de petróleo refinado. Eso sí nos dará soberanía, independencia y libertad económica.

Por último y para terminar, deseo un éxito enorme en todo el desarrollo, en nombre de los misioneros, a todas las provincias petroleras de la República Argentina. Esperamos que les vaya de la mejor manera, porque si les va mejor a ustedes nos va a ir mejor a nosotros también. Y en ese desafío de acompañarnos y de confiar en nosotros, entendemos que esta modificación de la Ley de Hidrocarburos es una nueva herramienta de real inclusión para todos los sectores de la República Argentina y para la ubicación de un progreso que no dé ningún paso atrás.

Por eso, también para finalizar, ese desafío que persiste en defender con convicción este proyecto nacional y popular del que nos nombran como aliados casuales, condicionados, con gobernadores sometidos por este arreglo y esta opresión a la que se hacía referencia... Nada más lejano de esa situación. Ningún jefe de Estado responsable de su pueblo puede acercar esa postura de someterse o someter a sus comprovincianos ante aquello que no cree. Por eso legítimo la decisión de los señores gobernadores que firmaron el proyecto con la señora presidenta y lo remitieron acá, dado que son los representantes legítimos del pueblo en el Poder Ejecutivo como nosotros lo somos en los poderes legislativos nacional, provinciales y municipales. Y merecen respeto. No es

la primera vez que lo pido. Si acá queremos continuar un proceso de democracia pacífica y convivencia, los que debemos dar el ejemplo somos nosotros, quienes hacemos las leyes. Y tenemos que respetar a los otros poderes en su total funcionamiento.

Por eso vale la pena llevar adelante este gran desafío de también pedir a las provincias patagónicas que cambien el nombre de Vaca Muerta. Es la base de un desarrollo increíble para la República que debiera tener el nombre de la vida misma. Y la verdad, no nos identifica con un proceso cultural, ni con un proceso de expansión. La muerte no es buena en ningún lado. Lo digo como pediatra.

Lo digo como sugerencia. Ojalá puedan cambiar el nombre de ese yacimiento petrolífero y le pongan otro. Eso será responsabilidad de ustedes. Lo digo con toda responsabilidad y con todo respeto. No es un chiste, ni un paradigma, ni una chanza. Es justamente la búsqueda de un norte que nos ilumine, que nos permita crecer, incluir y que nos siga permitiendo a los que votamos afirmativamente esta ley, como tantas otras, creer que podemos, que vale la pena y que la herencia que tenemos va a ser la que nos dignifique como hombres y mujeres ciudadanos de la vida común de la República Argentina, siendo sus representantes, con legítima responsabilidad y representación.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra el senador Linares.

**Sr. Linares.** – Señor presidente: en primer lugar creo que tenemos que arrancar diciendo que estamos considerando tal vez la ley económica más importante que se ha tratado en este Congreso en muchos años, ya que impacta sobre la renta petrolera o el desarrollo energético por el tratamiento de los hidrocarburos y afecta a dos generaciones hacia adelante por lo menos.

En este esquema nosotros entendemos que no se puede tratar un proyecto de ley que va a modificar una ley de 1967, cuando ha habido tantos cambios en la actividad petrolera en cuanto a precios, innovación e incorporación de tecnología. Y estamos armando una ley que puede perdurar por los próximos 35 años por lo menos.

Nos parece también importante recalcar que no creemos conveniente tratar una ley como

esta fuera de un plan estratégico energético que dé previsibilidad, que incorpore las nuevas posibilidades de energía y, fundamentalmente, que trate los hidrocarburos dentro de ese cambio de matriz energética que es imprescindible y necesario en esta época del país.

Dicho esto, creo, porque lo mencionó el senador Fuentes el otro día en comisión, que esta es una ley que no habría tenido sentido si no hubiera aparecido Vaca Muerta y, particularmente, sin la condición de YPF para poder hacer una campaña de toma de inversiones para este yacimiento no convencional que tiene también sus implicancias todavía no aclaradas o no claramente definidas en el sistema productivo, ya que ha sido prohibido en muchos lugares y en otros está en observación. Por eso hoy no nos garantiza seguridad a los que dicen no al *fracking*, ni a los que dicen que sí. Me parece que hay un proceso todavía no resuelto y hasta que se demuestre lo contrario el *fracking* es una alternativa peligrosa en cuanto a lo ambiental, porque no conocemos todavía el desarrollo.

Esta es una ley, entonces, que no habría aparecido aquí si no hubieran estado Vaca Muerta y, en particular, YPF, que no estaba planteada en las primeras épocas del ex presidente Kirchner para pasar a la característica de funcionamiento que hoy tiene. El Estado tiene el 51 por ciento de una sociedad anónima integrada por socios a quienes las mejoras que hagamos a esta empresa seguramente van a beneficiar. Y dentro de esos socios hay unos buitres que en este caso son buenos, pero que normalmente en otros lados son malos. Un 3,5 por ciento de las acciones de YPF son de Soros y un poco más del 5 por ciento de Slim, que es un multimillonario mexicano.

Días pasados, he escuchado con atención a los gobernadores en la comisión donde, sorprendentemente, en algunos casos hasta pierden rentabilidad sus inversiones y lo aceptan mansamente; por lo que uno supone que tanta importancia se le da a estos gobernadores de las provincias petroleras.

Hay que recordar también que la YPF privatizada —la regalada, como dirían algunos— en la época del neoliberalismo, se hizo con los aportes de todos los habitantes del país; lo mismo que las refinerías y las destilerías, de las cuales la mayor parte están en mi provincia, en Buenos Aires. De manera que el proceso petrolero con

YPF estaba desde la extracción hasta la destilación o la transformación del crudo.

Hoy tenemos una empresa por la cual hemos pagado todos los argentinos una cantidad de millones de dólares, pero la mitad de las acciones son de las provincias petroleras. O sea, pagamos todos para que las provincias petroleras tengan el 50 por ciento de las acciones. No obstante, hay que recordar que en el proceso de privatización de YPF, las mayores responsables de la entrega de esta empresa fueron las provincias petroleras, las mismas que presionaron en la OFEPHI para que saliera de estos recintos la posibilidad de entregar esta herramienta esencial para el desarrollo energético del país.

La política energética no tiene que ver solamente con un gobierno circunstancial, sino con un plan que vaya más allá de cuatro, seis u ocho años. En este caso, al no tener un plan claramente definido y acordado nos parece considerado tratar este proyecto de ley cuando un gobierno se está yendo dentro de un año. Digo esto porque, en efecto, habrá un cambio de autoridades que puede ser del mismo grupo o de otro sector político, pero seguramente habrá un cambio. Entonces, nos parece mal tratar este proyecto de ley hoy sin el contexto de un marco energético superior que lo involucre y lo ordene.

Considero que esta norma viene ahora con la urgencia necesaria de inversiones, pensando que Vaca Muerta es la soja de los próximos años. Creo que es muy dudoso que esto se dé así, aunque alguno puede pensarlo. Sin embargo, considero que esta ley viene a tratar de resolver el fracaso de la política energética de estos últimos años, ya que no pudieron revertir la caída de producción de crudo que empezó en 1998 ni pudieron parar la de gas que empezó en 2004.

Si uno mira las estadísticas de cómo ha sido la producción en cuanto a barriles por parte de la política neoliberal que hoy está vigente y que esta ley consolida, veremos que entre 1980 y 1990 se explotaron más de 1.000 pozos. En la década siguiente, del 90 al 2000 más de 800 pozos y en la última década apenas más de 400. A ello se suma la caída estrepitosa de exploración vinculada con algunas concesiones, porque se dieron más de 180 concesiones de áreas, en muchos casos a amigos del poder que no pusieron un solo peso, sino que negociaron

después esas áreas. Hoy está claro quiénes son los responsables.

Esta norma viene a consolidar esos errores y a tratar, con esta YPF chiquitita, de resolver el problema energético, algo que no van a hacer con esta ley.

La caída de la producción del crudo de 2003 a 2010 fue del 18 por ciento y la del gas del 8 por ciento. Claramente, me parece que hay una falta de plan estratégico que permita direccionar mejor, controlar mejor la posibilidad de revertir esto.

El primer plan energético en la Argentina empieza a esbozarse por 1958. Se consolida en 1964 con el Plan Energético Nacional, el PEN, y después se agrega como política de Estado al CONADE, que fue el Consejo Nacional de Desarrollo. Ese Consejo Nacional de Desarrollo elaboró una serie de propuestas y prioridades que dio luz a un plan que comenzó con El Chocón y que siguió con una serie de represas hidroeléctricas, incluso Atucha y Planicie Banderita.

Cuando se empezó a diseñar este plan, la Argentina tenía una producción vinculada a los hidrocarburos del 94 por ciento y el otro 6 por ciento era hidroeléctrica. Y, en verdad, hasta 1994, cuando se termina Yacymetá, ha habido una serie de continuidad en mayor o en menor medida de todas las obras ahí planificadas. Hoy no hay un plan claro, por eso creo que es difícil que nosotros podamos apoyar esta norma que creemos que tiene, a su vez, errores graves. Voy a enumerar algunos.

Este proyecto de ley ratifica las concesiones temporales y las convierte en permanentes, con lo que consolida una condición de las concesiones hechas en la década del 90 en muchos casos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sr. Linares.** — Es una norma conservadora, porque lo que hace es mantener el statu quo. No pone límites en la cantidad de concesiones.

Las regalías no están bien tratadas, pues consideramos que en algunos casos son insuficientes y en otros son excesivas. No es lo mismo un pozo en Salta, en cuanto a producción y costo, a uno en Neuquén o en Santa Cruz. Son absolutamente distintos. Por lo tanto, hoy las regalías están bajando en algunos casos, como

en La Pampa, donde algunas concesiones cobran hasta el 35 por ciento. No se puede hablar de baja o alta regalía porque tiene que ver con un tratamiento mucho más específico y más abierto que permita no unificar, porque puede pasar que nos suceda como en las retenciones al trigo; es decir, que en los lugares de la zona núcleo por ahí tienen alguna rentabilidad y en los marginales trabajan a pérdida por poner el mismo número en todos lados.

Otro asunto en el que seguimos insistiendo, y que nos parece mal, es que todavía se mantiene la libre disponibilidad del crudo. Esto fue consecuencia clara del inicio del gobierno de Menem, con los decretos 1.055, 1.212 y 1.589 del 89. Esto no se revierte con esta ley. Me parece complicado y grave mantenerlo. Por eso, creemos que hay que discutir un plan energético consensuado, que tenga proyección en el tiempo y que incorpore las nuevas posibilidades de producción energética.

En consecuencia, hemos planteado un proyecto alternativo, rechazando el del oficialismo. En nuestro proyecto, nosotros proponemos terminar con las concesiones. Prohibimos claramente el *fracking* hasta tanto no se demuestre que la explotación o el proceso de *fracking* no genera complicaciones en lo ambiental.

Creamos un Consejo Nacional de Hidrocarburos, donde figuran las provincias petroleras, las no petroleras, los trabajadores y gente del Estado, ya que nos parece que es la única manera de mantener en el tiempo una política pública con consensos y participación amplia.

Pretendemos una YPF que sea una sociedad del Estado; acá algunos habían manifestado su negatividad cuando se llevó a cabo el tratamiento de YPF sociedad anónima.

En definitiva, señor presidente, y para terminar, creemos que esta ley tiene un error de concepto que nosotros hemos rechazado en la década del 90 y seguimos rechazando en esta década: sigue tomando al petróleo como un *commodity* cuando, en realidad, es un recurso estratégico no renovable del país que puede condicionar el crecimiento sustentable por muchísimo tiempo.

La explotación de los hidrocarburos no puede ser una condición de mercado o de inversiones solamente; tiene que tenerse en cuenta

que la explotación de estos son actos de interés nacional.

—Murmullos en el recinto.

**Sr. Linares.** — Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar esto porque creemos que a futuro el precio del petróleo puede alcanzar valores insospechados. Si uno mira para atrás, cuando se privatizó YPF el barril estaba entre 9 y 12 dólares; en algún momento ha pasado los 120 y ahora está a 85 o 90. Imagínese hacer una proyección de cuánto puede valer y cuál va a ser la renta petrolera en los próximos años, que puede determinar que este país tenga mayores rutas, mayor infraestructura en las provincias, como mencionaba la senadora Giménez, que se preocupaba porque yo hablaba con el senador Martínez y ahora habla ella. (*Risas.*)

Quiero dejar en claro, entonces, que nosotros rechazamos esta ley por los conceptos que he vertido y que hemos planteado una ley alternativa con los fundamentos de esos cuatro o cinco puntos centrales que a nosotros nos parece que debe tener una nueva Ley de Hidrocarburos, que debe ser discutida con más plazo, más tiempo y en el marco de un plan energético nacional nuevo.

**Sr. Presidente.** — Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

**Sr. Fernández.** — Solicito una interrupción, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — ¿Autoriza la interrupción, senadora Higonet?

**Sra. Higonet.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

**Sr. Fernández.** — Yo me había comprometido con el señor Linares a leer cómo quedaba finalmente el artículo 19, que ya se lo acercamos a la Secretaría Parlamentaria.

El último párrafo, que es el que se reemplaza, no es el párrafo que vino en el proyecto original ni el que redactamos en el dictamen, quedaría de la siguiente manera: Quedarán comprendidos dentro del inciso c) precedente aquellos proyectos de explotación costa afuera en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea, supere

los 90 metros. Todo otro proyecto de explotación costa afuera que no reúna dichos requisitos quedará enmarcado dentro de los incisos a) o b), según corresponda.

Así quedará redactado.

**Sr. Linares.** — ¿Me permite, señor presidente?

**Sr. Presidente.** — Le pide una interrupción el senador Linares. ¿La autoriza?

**Sra. Higonet.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente.** — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Linares.

**Sr. Linares.** — Es para agradecerle al senador Fernández porque hoy se había hablado en la reunión de labor que iba a ser el mismo texto que había venido originalmente. Por eso, nos parece bien. El problema es definir cuál es el alta y la baja marea en San Julián, donde hay 12 metros. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Higonet.

**Sra. Higonet.** — Gracias, señor presidente.

En primer lugar, y con todo el respeto y aprecio que le tengo al senador Linares, quiero mencionar que él recién dijo que una de las cosas que no entendía era por qué este proyecto en este momento, cuando estamos prontos a las elecciones, y la verdad es que si hay algo que este gobierno ha demostrado a lo largo de estos años es no tener ni un atisbo de especulación ni tenerle miedo a nada y enfrentar a todo siempre que esté en juego la Nación y el bienestar de todos los argentinos. Entonces, con más razón entiendo que hoy estemos tratando con total convencimiento este proyecto.

Alguien en el 64 se hacía una pregunta que supongo que nos va a plantear a todos muchas inquietudes, por lo menos eso ocurrió en mi caso.

Les pido permiso para leer.

Decía lo siguiente: ¿qué nos hace más independientes, extraer nuestro propio petróleo sumando aportes de algunos capitales extranjeros o importar petróleo pagando a países extranjeros las regalías, parte de nuestro trabajo, el transporte y los seguros? De eso estamos hablando.

La de hoy es una fecha muy especial, porque hoy se cumplen 119 años del natalicio de Juan Domingo Perón, y nosotros sabemos que dos de las tres banderas grandes de nuestro partido



tienen mucho que ver con el tema que estamos tratando, el de la soberanía política y la independencia económica.

En 1958, durante su exilio –cuando todavía no estaba Vaca Muerta ni sabíamos las dificultades de las nuevas tecnologías que íbamos a necesitar para poder extraer estos recursos–, Perón planteaba que él creía que YPF no tenía capacidad organizativa ni capacidad técnica ni capacidad financiera para un esfuerzo de esa naturaleza, que los sistemas empleados en la Argentina distaban de los nuevos métodos de exploración, prospección, cateo y exploración racional de los yacimientos modernos. Y también decía que los costos de producción eran absolutamente antieconómicos.

Hoy estamos tratando este proyecto de ley, pero tenemos que pensar en qué marco lo estamos haciendo.

La verdad es que hoy el consumo energético de nuestro país se duplicó. Voy a citar números que nos ha alcanzado el ministro De Vido. Nuevamente, agradezco la predisposición que han tenido tanto los representantes del Ejecutivo como los gobernadores, que vinieron y que tan claramente nos explicaron y contestaron todas las preguntas, algunas fuertes. Ellos mostraron su responsabilidad asumiendo claramente que en todo proyecto de país todos tenemos que ceder una parte: las provincias y la Nación. Esa es de la única manera que podemos hablar de un gran país, de una Nación, de un Estado federal.

Lo cierto es que, sobre esta duplicación del consumo de energía, él nos dijo que hoy tenemos 2.100.000 hogares y 120.000 medidores comerciales e industriales nuevos instalados a la red de gas, y más de 4.000.000 de hogares y de 320.000 medidores comerciales e industriales al sistema eléctrico. También nos dio números que ya han mencionado algunos senadores acerca de cuánta inversión se ha hecho en infraestructura, porque recordemos siempre cómo estaba el país en el 2001. Recordemos cuál era la situación del 50 por ciento de pobres que había en nuestro país. Hubo que reconstruir, y en esto fue importante la inversión en infraestructura.

Luego, en 2012 sancionamos una ley sobre declaración de interés nacional y búsqueda de la soberanía hidrocarburífera, y le dimos la potestad al Poder Ejecutivo para que arbitre los medios necesarios para lograrla. Fue entonces

cuando decidimos la expropiación del 51 por ciento de YPF y recuperamos así nuestra empresa de bandera.

También vino Galuccio y nos contó cuánto ha crecido cómo hemos vuelto a ser primeros en el país en producción de gas y petróleo, cuál es la inversión que se ha hecho, pero también citó números claros de cuál es la inversión que se necesita para poder extraer los recursos no convencionales.

Pensar en buscar esta inversión en capitales extranjeros significa, además de poder reducir nuestra balanza energética, que es deficitaria –lógicamente nosotros estamos importando más de lo que exportamos–, pero la experiencia de Chevron ya nos muestra cuánto se reduce el plazo de extracción de un pozo, lo cual significa una reducción en tiempos y en costos, y eso significa poder pensar y proyectar –¿por qué no?– que esa soberanía hidrocarburífera podremos conseguirla en menor tiempo al pensado.

Sabemos cuántos son los recursos: hoy se hablaba de 27 mil millones de barriles, que sería la reserva que hay en *shale oil*, y de 145 mil millones de barriles, que sería en gas. Ahora, eso tenemos que extraerlo y sabemos que cuesta mucho.

¿Qué significa esta ley? Es decir, cada uno de los artículos y los plazos de exploración necesarios, que se han reducido buscando disminuir la especulación que sabemos que se ha dado. Y sabemos que para salir a buscar esta inversión le tenemos que dar a estas empresas previsibilidad económica, legal y financiera. Esto es lo que busca la modificación. Acá se ha hecho una ley en 1967 y lo que estamos tratando hoy es una modificación de 14 artículos que buscan dar esta previsibilidad.

En ese sentido, va a haber un pliego de licitación, que va a ser uniforme y que va a salir del acuerdo de las provincias y la Nación, también vamos a reducir los plazos de exploración y se van a establecer claramente los plazos de explotación hablando de cada uno de los hidrocarburos: convencional, no convencional y costa afuera, *off shore*. Al respecto, se habla de que hay prórrogas y aquí es un punto importante porque cada una de esas prórrogas se va a dar atento a un plan de inversión. Hoy lo que interesa es la inversión, el plan piloto: es decir,

qué es lo que la empresa está haciendo y no de cuánto es el bono que le va a dar a la provincia.

Desde el punto de vista del análisis que tengo que hacer sobre qué significa este proyecto de ley para mi provincia, la alícuota que cobra la provincia por ingresos brutos es de 2,6 por ciento y este proyecto establece que va a ser de 3 por ciento. Eso significa un beneficio para mi provincia. Mi provincia tiene áreas concesionadas donde hoy se cobra 35 por ciento pero no son regalías, sino una retribución que se ha acordado en un contrato que se ha hecho dentro de los contratos de locación de servicios en 1992 y que vence en 2016. No son regalías.

Aún así, la provincia ya ha comenzado, de acuerdo al artículo 31 que establece que a partir de la vigencia de esta ley las provincias tendrán un plazo de 90 días para arreglar sus prórrogas. Esto no significa ninguna pérdida para mi provincia como no lo es para ninguna otra provincia, como lo han dejado claro los gobernadores, porque no avasalla ninguna autonomía. Hay algo que está muy claro, que es constitucional y que ha sido afirmado por la Ley Corta. ¿De quiénes son los recursos? De las provincias y ellas serán la autoridad de aplicación cada vez que el yacimiento esté dentro de la provincia. Y, cuando sea del dominio del Estado, será del gobierno nacional.

Señor presidente: apruebo con total convicción este proyecto de ley porque, más allá de que es posible la soberanía hidrocarburífera y que la necesitamos para seguir pensando en la grandeza de este país, creo en este país que ha logrado la inclusión de tantos argentinos. Además, porque quiero que esta posibilidad, que desde hace diez años vienen teniendo todos estos hogares de poder incluirse al gas y la luz, la sigan teniendo mis hijos y mis nietos. Y porque creo firmemente en la grandeza de este país. Todo esto es posible con industria, con demanda de energía, con inclusión y con soberanía. Por eso voto afirmativamente este proyecto de ley.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Guinle.

**Sr. Guinle.** – Señor presidente: voy a tratar de ser breve porque voy a insertar. En realidad, quiero acentuar dos o tres aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre este proyecto de ley en tratamiento. Primero, el proyecto de ley, que ha sido en-

viado por el Poder Ejecutivo, es producto del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos. Las provincias productoras y la Nación han rubricado un acuerdo que fue plasmado en este proyecto de ley, con anexos como el I y el anexo II. El anexo I se refiere al tema fiscal tributario y el proyecto está integrando el citado anexo II.

¿Qué hicieron el Gobierno nacional y las provincias? Fijaron pautas para discutir este proyecto de ley que intenta ser un complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197. Y entra en el campo de lo convencional y no convencional de hidrocarburos e intenta establecer reglas para actualizar el régimen vigente. Acá surge la discusión si está o no dentro de las atribuciones de cada uno. Hoy tenemos el marco vigente de la Constitución reformada en 1994, el artículo 124, y el reconocimiento de la titularidad del dominio originario de los recursos naturales por las provincias en cuyo territorio se encuentren.

En realidad, el tema de los hidrocarburos es un tema complejo que no se presenta en otro tipo de actividades, particularmente. Es complejo y no es fácil porque, por un lado, el mandato constitucional establece claramente el dominio originario de las provincias, más allá de que luego se avanzó con la Ley Corta. Y hay atribuciones del Congreso Nacional, también en la propia Constitución, como, por ejemplo, en el artículo 75, inciso 12. Por otro lado, en el tema legislativo, en la ley 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera.

¿Qué lo hace más complejo? Que algunas provincias productoras, en el marco de estas leyes, inclusive bajo el amparo de la ley 26.197 y citándola específicamente, avanzaron con leyes provinciales propias que reglan o rigen la misma materia. La situación jurídica es compleja, es inédita, no es tan fácil. Los años que llevamos de reforma constitucional no implican un avance de jurisprudencia o de doctrina especializada en el tema que haya desandado el camino de propiedad, jurisdicción o competencia. Yo diría que está todo por hacer y que este proyecto de ley está marcando cuestiones que deberán seguir discutiéndose, inclusive hay mecanismos de discusión que establece el propio proyecto de ley.

En este marco jurídico complejo, más allá de las disposiciones constitucionales, pero aún tratando de interpretar esas disposiciones

constitucionales, e inclusive las normas legislativas posteriores, han intentado, respetándose las esferas jurisdiccionales, de avanzar en una suerte de acuerdo o concertación invocando esto del –muchas veces proclamado y pocas veces llevado a la práctica– federalismo de concertación. En realidad, la dinámica propia de ejercer el federalismo y los desafíos que plantea, impiden la consagración de una única forma inmodificable y obliga a crear nuevos y determinados mecanismos. Porque no son sólo las normas constitucionales, el propio cuadro institucional que se da en la Nación, sino que es un cuadro institucional que permite en determinadas materias tener realidades, si se quiere, legislativas o jurídicas distintas, o visiones distintas, que van a amalgamarse definitivamente en la visión, en los parámetros o en los pilares que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Este es un tema que discutimos, no sé si se entiende o no, pero que gran parte de la doctrina lo entendió cuando se discutía la responsabilidad del Estado y se avanzaba en la definición de esta responsabilidad en el marco del derecho administrativo. Entonces, puede haber realidades distintas a partir de la formación y el diseño institucional que se ha dado el país con jurisdicciones que corresponden a ese diseño institucional.

¿Qué hace este acuerdo federal, aparte de plantear un proyecto de ley? Pactar un tratamiento tributario uniforme para la actividad hidrocarburífera en las distintas jurisdicciones provinciales. Esto se enmarca fundamentalmente en el anexo I y esto tiene que ir a las legislaturas provinciales.

Si esto no tiene tratamiento y sanción de las legislaturas provinciales no va a tener vigencia, porque debe ir a la Legislatura para su aprobación o su rechazo. Y en el caso de la aprobación, tendrá eficacia por tratarse de una materia, a mi juicio, estrictamente legislativa y local, con posibilidad de acuerdo.

En cambio, debe intervenir el Congreso en esta materia, porque en el ejercicio pleno de las atribuciones que le confiere la Constitución Nacional es el Congreso el que debe intervenir en esta materia. Es acá en donde la representación de todas las provincias, que sean o no productoras

de hidrocarburos, tienen voz y voto y deben definir el texto de una eventual nueva ley.

Hay cuestiones de deslinde jurisdiccional que son, a mi juicio, absolutamente posibles en el marco de este federalismo de concertación.

Uno pregunta ¿esto siempre estuvo bien en esta discusión? No, qué va a estar bien... Hubo cuatro borradores. Los primeros borradores eran inaceptables, por lo menos a mí me causaban algún escozor en los ojos (*risas*) al leer los primeros borradores y algunos conceptos escritos en los que creo que no había ahí un intento de concertar o de acordar. No era esto lo que muchos de nosotros entendemos como un federalismo de concertación.

Y uno podría preguntar: “¿Y esto?” Bueno, esto, aun con estas idas y vueltas, permitió una primera discusión base, que es que hubiera un acuerdo y que las provincias discutieran, que era lo primero que estábamos pidiendo. Sin acuerdo con las provincias hidrocarburíferas era imposible avanzar en un proyecto de ley que fuera sometido a tratamiento en el Congreso.

Creo que se va cerrando de alguna manera este esquema de concertación, con altas y bajas, donde se dice que se puede concertar un marco general de regalías; se puede concertar un marco general de bonos; se puede concertar; en el marco de provincias productoras y Nación, se puede.

¿Se puede tener un artículo como el que refiere al tema ambiental? Claro que se puede: si ese artículo habla del artículo 41 de la Constitución Nacional.

¿Qué dice el artículo 41? Más allá de ser, a mi juicio, un buen artículo en materia medioambiental, dice en el párrafo pertinente que la Nación es la que genera los presupuestos mínimos, y las provincias la legislación complementaria y la de fondo, sin que aquellas –presupuestos mínimos– afecten estas complementarias y de fondo propias de la legislación local.

Después se avanza en algunas cuestiones que, a mi juicio, tampoco avasallan el principio y tienen más que ver con esto de la concertación; la posibilidad de concertar un pliego modelo, más allá de que las cláusulas particulares tendrán que tener las características propias de cada uno de los desarrollos y su lugar. Y que la autoridad de aplicación, en este caso las provincias, van

a tener las atribuciones propias para poder hacer el llamado a licitación, desarrollarlo, el ejercicio de la fiscalización, aplicación de sanciones, evaluación y eventual otorgamiento de concesiones, así como la decisión discrecional sobre algunas cuestiones que son propias de la autoridad de aplicación.

Así, hay algunos artículos que creo que van cerrando este núcleo –a mi juicio, básico– de lo que significa un federalismo de concertación que, si bien no nace de la mejor forma, se plasma con gobernadores discutiendo este pacto, defendiéndolo.

Yo los escuché detenidamente acá. Los escuché a todos defendiendo con convicción; no escuché a ninguno reconocer que estaba declinando derechos. Todos estaban convencidos de que habían hecho lo mejor; y algunos de ellos con absoluta y evidente convicción.

Y creo que era también claro, muy claro, la convicción de los que, en definitiva, manejan la materia de hidrocarburos y sabían que habían llegado a un acuerdo que podían presentar en su jurisdicción y acá, delante de la representación colectiva de las provincias, diciendo que era lo que en definitiva habían pactado por su jurisdicción.

Creo que una evidencia absoluta de cómo cambia el ánimo de la perspectiva del pacto o del acuerdo es la forma de abordaje del esquema impositivo fiscal tributario. Porque cuando vi el primer borrador no tenía nada que ver con el último. Nada que ver. La redacción era absolutamente distinta. Y este último borrador tolera absolutamente cualquier tipo de test de constitucionalidad; el primero no.

Creo que no hay un avasallamiento y que hay un acuerdo que ha ameritado distintas cuestiones que pueden ser hoy también materia de revisión hacia el futuro. Pueden mejorarse, como todas las normas. Ninguna es una norma pétrea; de estas, ninguna; son todas modificables y revisables a futuro y en la medida en que sea necesario hacerlo.

Una última cuestión que creo que es importante. Creo que es conocido, pero creo también que hay repetirlo.

¿Cuál es el concepto de por qué las provincias productoras cobran regalías? Es el pago o es la compensación por un recurso no renovable

que se agota. Es una compensación por ese agotamiento. Entonces, hay que entenderlo en ese sentido. No es un...

**Sr. Presidente.** – Senador Guinle: el senador Castillo le pide una interrupción. ¿Se la concede?

**Sr. Guinle.** – Sí, cómo no.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Castillo.

**Sr. Castillo.** – Gracias a mi estimado amigo Guinle.

Hay un concepto histórico universal sobre el tema de las regalías y está ligado a algo que ocurrió a comienzos del siglo XX, en el norte de Chile. Cuando se acabó una mina de salitre, del salitral, los obreros caminaban hacia Iquique. Allí fueron recibidos en la Escuela de Santa María de Iquique y como los empresarios no sabían solucionar aquel tema, en el patio de la escuela levantaron las carpas y los ametrallaron. Murieron ese día más de 3 mil obreros.

A partir de ahí nace este concepto necesario de que, cuando hay una explotación extractiva, tiene que haber una compensación que permita que, cuando esa mina se agote, esas comunidades puedan seguir viviendo quizá de otras cosas.

Gracias.

**Sr. Presidente.** – Continúa en uso de la palabra el senador Guinle.

**Sr. Guinle.** – Le agradezco, senador, por el aporte.

En realidad, también es cierto que las jurisdicciones muchas veces no les han dado a las regalías el mejor destino; ese que ha sido señalado, de cómo sustituir ese recurso que se ha agotado. Pero en realidad ese es el sentido y el entendimiento de las regalías.

Hoy, la gran mayoría de las regalías integran nuestros presupuestos y se agotan en el presupuesto.

Entonces, cuando a uno le plantean algunas cuestiones... Porque, en realidad, la visión ha sido una visión corta; sigue siendo una visión corta. Pero entonces es absolutamente necesario que lo miremos y que se entienda.

Mi provincia tiene 1.52 de coparticipación, como Santa Cruz. Y no quiero hacer de esto una comparación de provincias productoras. Me refiero a tener la visión de qué significa,



porque si no, uno cree que en realidad estas provincias son absolutamente privilegiadas y que cobran la coparticipación de otras que, a lo mejor, cobran más.

Pero la distribución en esta Argentina, que debe ser una Argentina para todos –lo dijo la Corte en varios pronunciamientos, refiriéndose a esta visión que hay que tener de un país para todos; se pronunció así en el caso “Agueera”, y apareció en algún otro fallo–, es absolutamente cierto que hay que pensarla también con esta concepción de por qué se cobran fundamentalmente regalías y de cómo la discusión de los recursos tiene que ser integral.

Hay un regalo que me hizo Antonio Hernández, que es un artículo suyo. Antonio insiste mucho en lo poco que se ha avanzado en el tema de la discusión federal a partir de la reforma del 94. Y obviamente tiene razón. No ha pasado mucho tiempo, nada más que veinte años. Nada más y nada menos que veinte años.

Él decía, con muchísima razón, y lo escribía, que las reformas que había traído la Constitución del 94, en el artículo 75, inciso 30, eran un avance fundamental que podían tener las provincias en el aspecto impositivo, fiscal y demás.

Decía que consideramos que para la explotación, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales con un concepto de desarrollo sustentable se abre un campo amplísimo para el federalismo de coordinación o concertación. Mediante la utilización de las relaciones y entes interjurisdiccionales es necesario producir una modernización institucional que suma los esfuerzos de todos los niveles gubernamentales interesados, en una sinergia que nos permita alcanzar soluciones sustentables en el aprovechamiento del mar, de la pesca, de los hidrocarburos, de los minerales y de otros recursos naturales.

En realidad, es complejo el tema de los hidrocarburos, cuando uno analiza todas las normas; esas a las que yo hacía referencia. Alguien dijo que no es ni blanco ni negro. No, no. Pero los quiero ver avanzando y deslindando en un terreno de dominio, jurisdicciones y competencia, donde normalmente hay que concertar y hay que acordar. Y normalmente, por cómo nos manejamos, solamente se colisiona.

La Corte dijo, en “Agueera” y “El Cóndor” que la vocación de la Constitución Nacional, creadora de una unidad, no por supresión de las provincias sino por conciliación de la extrema diversidad de situación, riqueza, población y destino de los estados que la conforman, cuyo conjunto se confunde con la Nación misma, consagra el principio de hacer un solo país para un solo pueblo. Compleja, pero ésa es la tarea.

Gracias, presidente.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Montero.

**Sra. Montero.** – Señor presidente: buen marco me ha dejado el senador Guinle para hablar. A lo que me voy a referir, porque tengo sólo diez minutos, es que ratifico todo lo que he dicho ya en el trabajo de comisión. Voy a ratificar lo que ha señalado nuestro miembro informante con respecto al fracaso del plan energético.

Con respecto a lo que dijo el senador Pichetto, acerca de cómo se había contribuido al desarrollo nacional, deslindando precios, generando un marco de subsidio para sostener una política de consumo, también está mostrando a todas luces que esto ha fracasado.

Hoy tenemos una parálisis de la actividad económica, tenemos un nivel de desempleo creciente, tenemos compromiso en las cuentas fiscales. Ya lo vamos a ver en el Presupuesto y seguramente lo discutiremos, senador Fernández, pero llevamos en el primer semestre 89 mil millones de déficit. Esto compromete también las cuentas fiscales de las provincias por recursos que no llegan. Tenemos una situación de falta de acceso, por decirlo de una manera agradable, al sistema financiero internacional, por lo cual estamos complicadísimos con exportaciones que decrecen. También está complicada la balanza comercial. El talón de Aquiles es éste, el sector energético. Llevábamos –lo ratificó Galuccio– 7 mil millones de déficit.

No voy a hacer mayores observaciones a las que ya hiciera el senador Fernández con respecto a las críticas a este proyecto, porque ya se hicieron en el trabajo en comisión. Creo que lo más grave de este proyecto –yo puse el ejemplo de la provincia de Mendoza– es que deja vigente un statu quo con los actuales concesionarios de áreas de explotación, o permisos de explotación, con un sistema de prórrogas que nos pone en una

situación bastante compleja, particularmente en el caso nuestro.

Yo cité el ejemplo de YPF, que tiene el 60 por ciento de la producción de Mendoza y podría, con este mecanismo, en alguna de sus áreas, llegar hasta 2072. Los mecanismos de prórroga que se establecen no fijan límites precisos de inversiones. Se habla de planes de inversiones, pero no se fijan mecanismos específicos para determinar cuál es ese límite para pedido de prórroga.

Quiero ratificar esto que estaba diciendo el senador Guinle, en el sentido de que hay un marco normativo complejo y decir que estamos perdiendo una gran oportunidad, que es la de discutir un régimen único, ordenador, donde los recursos hidrocarburíferos y energéticos del país, que son estratégicos, puedan dar aval al desarrollo de un país de manera integral, dando soporte a todos los complejos productivos del país.

Es verdad, como decía el senador Fuentes, que es un recurso estratégico por el que se libran guerras. Justamente, por eso, tenemos los recursos y no los estamos optimizando.

Y esta norma es una ley parche. Primero, toma la ley 17.319, ley de Onganía; después, la Ley Corta; se modifica la ley 17.319; sigue y mantiene vigente la Ley de Soberanía Hidrocarburífera con su decreto reglamentario, el 1.277, con una autoridad de aplicación que finalmente termina teniendo facultades de registración, de pedido de planes de inversión y facultades sancionatorias por encima de las provincias. La verdad es que da un entramado más que complejo que lo que dice el senador Guinle.

Creo que un buen abogado puede, con todo este vericuelo y laberinto de normas que tenemos actualmente y que van a quedar vigente, dejar in eternum algunas de las empresas que ya tienen permisos o concesiones.

Entonces, yo quiero poner en valores lo que me toca. En ese sentido, el trabajo que se ha hecho interdisciplinariamente en nuestro bloque de diputados. Rescato el trabajo de Pedro Tunesi, ex diputado, quien ha trabajado con un grupo más importante, del ex secretario Lapeña, del ex secretario Montamat, de todos los firmantes de este dictamen en minoría.

La verdad es que estamos recogiendo en este dictamen en minoría el proyecto que presentáramos en su momento con la senadora Estenssoro, el senador Martínez, proyectos que ha presentado el senador Morales. O sea, hemos hecho un esfuerzo importante para que pudiéramos debatir un régimen único de hidrocarburos que cumpliera con este objetivo que ha dejado sentado el senador Guinle y con el que coincido, que nos lo debemos como país, nos debemos ese amalgamar la situación y los intereses de las provincias con el conjunto nacional, en beneficio del país, de todos los argentinos, en un mecanismo que genere equidad y equilibrio en el desarrollo territorial.

Y este es un recurso estratégico, por el cual nosotros podríamos haber logrado estos mecanismos de distribución y de renta.

Quiero agradecer a todos nuestros asesores porque la verdad es que han hecho un esfuerzo muy significativo. Y los voy a nombrar: Gerardo Rabinovich, Hernán López, Pedro Moso, Andrea Lar, Ignacio Bruera, Cristian Cabrera, Mirta Gariglio, Mauricio Roig, Luciano Caratori y Claudia Cisneros. Todos han hecho un esfuerzo importante para que pudiéramos tener un dictamen que, simplemente, tiene diez títulos, 173 artículos y dos anexos.

Se trata de una iniciativa que deroga la ley 17.319 y deroga toda norma que se le oponga –lo digo de esa forma– y crea un régimen único.

En sus disposiciones generales, por supuesto, declara de interés público todo el proceso de la cadena de hidrocarburos y, además, establece mecanismos de política de desarrollo de hidrocarburos en el marco de la necesidad de un plan estratégico energético. Teóricamente, esto es lo que debiera haber hecho esa comisión de largo nombre del decreto 1.277, que solicité a la Secretaría y no me lo pudo decir.

Se reafirma el pleno dominio de las provincias y crea instituciones. En efecto, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos, conformado por todas las provincias, las que darán direccionalidad a la política energética.

Se crea la Agencia Federal de Hidrocarburos. Esa agencia tiene facultades de investigación y registración, de asesoramiento a las provincias y de confección de pliegos dentro del marco de conocimientos para poder dar soporte y gene-

rar instrumentos técnicos válidos que puedan homogeneizar los mecanismos de concesión, exploración y explotación. Está integrado por cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo y dos por el Consejo. Pasan por un concurso y después tienen el acuerdo del Senado.

Fíjense lo importante que sería el contar con esta agencia, un alto nivel de capacidad técnica para darnos soporte en la toma de decisiones. Llevar estadísticas, tener reservas. Por supuesto que se ratifica a las autoridades concedentes, las autoridades ejerciendo el dominio originario –124 y Ley Corta–. Es lo que tienen que hacer cuando se ejerce la administración de las áreas: licitar, controlar, revocar si fuera necesario, y fiscalizar. La Agencia también tiene la misión de fiscalización.

Se fijan los mecanismos de permisos de exploración y los contratos de concesión con plazos distintos. Se fijan tres años de un período básico para exploración y otro período de tres. Pero siempre, cuando se pasa de un período a otro, se le hace caducar el 50 por ciento del área si es que no se logró el objetivo. Esto es importante. No se quiebra el mínimo de áreas que antes establecía la ley 17.319, que era de cinco, sino que se fija que ello será definido por la Agencia juntamente a la Comisión Nacional de la Competencia. Es decir, no se dan áreas sin límite.

Los plazos de exploración son de veinticinco años más diez de prórroga por única vez y se genera otro régimen para el convencional.

Quisiera poner el ejemplo que citaba Daniel Montamat. No es que se tenga un edificio de propiedad horizontal y, si se tiene el cuarto, se puede tomar el tercero. No. Se trata de concesiones distintas. Se establecen mecanismos de plazo para el no convencional, por supuesto, más adecuado a esa clase de yacimientos. Es decir, plazos de exploración de cuatro años y períodos de explotación de treinta y cinco, con prórrogas de diez. También se establecen límites a las cesiones de cumplimiento de inversiones de por lo menos el 50 por ciento, para que tengan la dificultad de que cuando vayan a ingresar sepan que debe haber un cumplimiento de inversiones.

Es decir que eliminamos del negocio petrolero el negocio rentístico; ese negocio inmobilia-

rio que ya vimos que se produjo por todas estas anarquías de las interpretaciones que se dieron en las provincias. Es decir, lo que decía el señor senador Sanz en el sentido de que, a veces, las provincias se vieron excedidas.

Tomamos un mecanismo de regalías como piso del 12 por ciento y no como techo, con la posibilidad de bajar a 5 por ciento en casos de riesgo geológico o de niveles de productividad muy baja.

Se hace un Régimen Único Ambiental; o sea, se respeta la posibilidad como Nación de dar presupuestos mínimos ambientales. Se trata de un capítulo aparte, totalmente completo, con declaración de impacto ambiental. Las empresas deben pasar por las autoridades antes citadas.

Se crea el Fondo Federal para la Transformación de la Matriz Energética. Es algo importante. Se crea un impuesto de asignación específica para dicho Fondo.

Con respecto a YPF, la tomamos como lo que es: una sociedad anónima con mayoría estatal. La obligamos a cotizar no menos del 5 por ciento de sus acciones y la sujetamos a la ley de administración financiera del Estado, para que quede bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación.

Si hubiéramos tenido la oportunidad de discutir el proyecto integral de hidrocarburos, el escenario sería distinto al contexto que se vive actualmente. Hubiéramos podido lograr todo lo que mencionó el señor senador Guinle en su frase final. Es decir, el federalismo de concertación y de conciliación que piensa en el bienestar general del país y en la mejora de la calidad de vida de los argentinos día a día. Y no lo que tenemos actualmente que, a los efectos prácticos, lamentablemente, logra lo que sucede en Mendoza, y que he demostrado. Hoy, la producción de YPF cae el 9,4 por ciento.

Senador Fernández: le ratifico lo que le dije en Twitter. Es que también me lo ratificó Galluccio. Lo que él también me prometió es que venían más inversiones. Le dije que, de todas maneras, siento una sana envidia respecto a la provincia del Neuquén, que recibe la mayoría de las inversiones. Frente a los 5.200 millones, Mendoza recibe 400.

Espero la promesa de inversiones. Espero la promesa de desarrollo de las áreas no conven-

cionales de Mendoza porque la verdad es que, a los efectos prácticos, ya que representa el 23 por ciento del valor agregado de mi provincia, la situación es de crisis.

Perdón por excederme en el tiempo.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la señora senador Labado.

**Sra. Labado.** – Señor presidente: he escuchado en varias oportunidades que el proyecto que represento no tiene un plan. No lo he escuchado hoy sino varias veces. Se dice que no hay un plan.

La verdad es que no quiero pertenecer a un proyecto que tenga planes. Quiero pertenecer a un proyecto que tenga políticas de Estado concretas y reales que se vuelquen en beneficio de la gente. Esto es lo que ha demostrado el gobierno nacional. Es decir que tiene políticas de Estado y no planes.

Como se ha dicho acá, el proyecto fue discutido y consensuado con los gobernadores. Es bueno que haya habido una discusión y que se haya insumido un tiempo para que todos encuentren la mejor norma a ser puesta a consideración de los argentinos; norma que seguramente va a sancionarse.

Como nosotros no tenemos un plan y tenemos políticas de Estado, también somos responsables de muchas cosas. Somos responsables de que, en los hogares de los argentinos, el consumo energético se haya duplicado en estos últimos diez años. Es decir que hemos mejorado la calidad de vida de los argentinos.

Somos responsables de que tengamos un incremento en el desarrollo de la industria. Somos responsables de que haya una duplicación del parque automotor. Somos responsables de los miles de puestos de trabajo que ha creado la industria y el gobierno en estos últimos diez años. Somos responsables de que el país se levantara de la mano de Néstor Kirchner, allá por 2003; trabajo y tarea que continúa con mucho esfuerzo nuestra compañera Fernández de Kirchner.

Para poner a andar el país hubo que tomar muchas medidas, y también realizar muchas inversiones. Es decir que este Gobierno, que tiene políticas de Estado y no planes, ha hecho varias cosas. Voy a leer algunas de ellas porque no quiero obviar ninguna. Somos responsables de la construcción de 5.500 kilómetros de líneas

de alta tensión, que unieron al sistema eléctrico nacional y que conectó a diez provincias que estaban aisladas, incluidas Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se incorporaron 9 mil megavatios a la obra de Yacyretá y a la central nuclear Néstor Kirchner, ex Atucha II. Somos responsables del incremento del potencial hidroeléctrico de la represa de Río Grande, en Mendoza. Somos responsables de la construcción y la puesta en marcha de la central hidroeléctrica de San Juan. Somos responsables de la construcción y puesta en marcha de los parques eólicos Arauco I, en La Rioja, y de la ejecución del Arauco II. Somos responsables del desarrollo de los parques solares fotovoltaicos Cañada Honda, en San Juan; y de la puesta en marcha de la central de biogás –procedente de rellenos sanitarios– en Buenos Aires. Somos responsables de la construcción de las centrales hidroeléctricas Los Blancos, en Mendoza; Chihuido, en Neuquén, y Jorge Cepernic y Néstor Kirchner –próximamente comenzará la construcción de esta última–, en Santa Cruz. Y somos responsables también de la construcción de la central de Pilar, de la modernización técnica de la central de Villa Gessell, de la central de Río Turbio y de los miles y miles de kilómetros de gasoductos.

En este plan de gobierno, también somos responsables de la recuperación estratégica de YPF, que ya ha demostrado que con inversiones –le doy tranquilidad a la senadora Montero de que YPF ha hecho inversiones– se pueden incrementar los recursos, y que con recursos también se puede incorporar más mano de obra, se puede ofrecer competencia y mejorar la producción. Por supuesto, espero mucho de YPF; pero no espero menos de las demás operadoras que, en iguales condiciones, explotan nuestros recursos.

El proyecto en tratamiento también es parte de la política de Estado para que el Gobierno pueda encaminarse a tener soberanía energética. Hoy, día en que celebramos el nacimiento de Perón, creo que también vamos a celebrar el nacimiento del camino a la soberanía energética del país.

Como dijo Galuccio, esta ley no es para YPF sino para el país, donde las provincias, y especialmente las productoras de hidrocarburos, tienen un rol muy importante. Para ello, es indispensable que existan reglas claras de



juego. En ese sentido, hace un rato escuché al senador Pereyra hablar de las reglas de juego claras, algo que nosotros hemos vivido en mi provincia. Al respecto, cuando se habla de que se vienen los conflictos, bien decía el senador González que en nuestra provincia no habrá ningún conflicto. ¿Saben por qué no habrá ningún conflicto? Porque hay una renovación en el sindicato petrolero de nuestra zona impulsada por jóvenes honestos que no arreglan con las empresas ningún conflicto para ganar contratos, como se hacía antes. Por ello, ratifico lo que dije mi par de que no habrá ningún conflicto.

Otro tema que me interesa tocar también es el de la renta. La renta no hay que medirla solo en términos económicos, según lo que ganará o recibirá una provincia por regalías; está perfecto y van a ganar más. También hay que medir la renta en términos sociales: cuánto se obtendrá por esa renta económica para destinarla a la salud, a la educación, a la vivienda. Creo que ese es un tema muy importante al que no debemos escaparle. Hay que tener en cuenta que la renta no sólo es económica, sino que también tiene un marco social.

Nada de esto se consigue si no hay políticas claras de distribución de ingresos, de la renta económica y de la inversión, y en cuanto al rumbo de las políticas. El verdadero sentido social es ese.

Esta ley es estratégica para buscar el autoabastecimiento energético. También conlleva lo más importante en esto de tener en cuenta la renta social: mejorar la vida de los argentinos y de las argentinas. En mi provincia urge la inversión –por eso celebro que se acorten los plazos para la exploración–, y es necesaria y urgente la generación de empleo que nos permita revertir nuestra matriz económica provincial, ya que todo ronda alrededor del Estado; el senador Martínez conoce perfectamente lo que estoy diciendo. Esta ley permitirá, en el caso de mi provincia, mejorar la salud, la educación y, reitero, reconvertir esa matriz económica, tan necesaria y que hoy tanto necesita Santa Cruz.

Tengo notables expectativas en la ejecución de esta ley. Y estoy segura de que gran parte de estas expectativas las cumplirá YPF, nuestra empresa, a partir de este marco legal que hoy estamos proponiendo.

**Sr. Presidente.** – Gracias, senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Morandini.

**Sra. Morandini.** – Señor presidente: tiene razón la senadora preopinante en cuanto a las responsabilidades. En ese sentido, la responsabilidad primera y mayor, que es la que nos tiene aquí debatiendo, es haber perdido el autoabastecimiento.

Quiero enmarcar este debate en lo que expresó el senador informante del oficialismo, al desafiarnos o preguntarnos qué intereses defendíamos. Como yo no defiendo intereses, sino que defiendo valores –no hablo de precios, no hablo de dinero; hablo de valores–, en el sistema democrático no hay otro valor que el que nos da nuestra Constitución, que tiene un corazón filosófico y jurídico de derechos humanos. Esto es lo que, precisamente, viola esta ley, en el sentido de no garantizar derechos fundamentales como puede ser el derecho a la consulta. Al respecto, todas aquellas comunidades que serán afectadas no han sido consultadas; no solo no han sido consultadas, sino que también fueron estigmatizadas y, muchas de ellas, perseguidas y con causas por oponerse o pedir nada más que participar en un debate que no nos hemos dado. Por lo tanto, uno de los primeros aspectos que se viola es no garantizar la consulta –consagrada por la OIT y establecida en nuestra Constitución– que no es otra cosa que dar participación.

Si el corazón de los derechos humanos es el derecho a la información, todo el debate no garantiza la transparencia y tener la información. El convenio que se hizo con Chevron, con cláusulas secretas a las que no podemos acceder, ya nos advierte el secretismo que se mantiene respecto de un tema que se presenta todo el tiempo como el gran proyecto. Pero la magnitud del proyecto se desdice con el trámite exprés con que se lo trata.

Si se me permite, leeré algunos de los diez puntos que demuestran que no se respetan los derechos humanos. No se atiende la contaminación atmosférica, que es uno de los impactos mayores que tiene esto que se presenta ahora como el *fracking*. Esta técnica es aplicada desde hace mucho tiempo; sin embargo, muchos de los países que la aplican recién empiezan a manifestar sus preocupaciones.

Sin embargo, en nuestro país ni siquiera nos hemos permitido el debate. Y ahí entendemos

en qué se gasta el dinero de la publicidad oficial, que crece cada año, porque si uno analiza los 1.500 millones que se han gastado el año pasado, podrá ver la forma en que se ha hecho propaganda en un sentido único, consistente en decirnos que Vaca Muerta es la gran salvación del país, y cancelando cualquier otra posibilidad de debate con aquellos que nos advierten los riesgos ambientales y lo que está pasando en otros países.

Y claro, si se confunde tanto información con propaganda, entendemos la enorme propaganda que se viene haciendo para crear una idea única, de que Vaca Muerta es algo con lo que nuestro país se va a salvar, sin ningún tipo de consideración. Ni siquiera escuchar ni poner a debate a aquellos que manifiestan preocupación por los daños ambientales que ya están comprobados en más de un lugar donde se aplica.

Con relación al impacto de lo que significa el uso del agua, cabe señalar que el consumo del agua por el *fracking* en enormes proporciones, tampoco tiene un abordaje que sea racional y, mucho menos, que esté contemplado de manera planificada, como se ha manifestado a lo largo de este debate.

En cuanto a los líquidos, es importante entender que también en el *fracking* no produce agua, como dice la industria. Lo que hace, es contaminar el agua, con sustancias que son peligrosas.

También se nos dice que contiene nada más que el 1 por ciento de los químicos, pero se ignora que esto implica cientos de millones de litros de químicos, que son nocivos porque quedan en el ambiente. Entonces, hace falta que regulemos esto, como está haciendo la industria en el mundo.

Por otra parte, se hacen perforaciones al azar, sin planificación, con abandono de pozos, que se suman a los nuevos riesgos del *fracking*, lo cual genera riesgos, caos ecológico, paisajístico y natural, por lo cual debe ser también regulado y sin embargo no está en consideración.

También hay impactos en el tránsito. Esta actividad trae congestión de tránsito, movimiento de camiones, ruidos y por ello es objeto de denuncias permanentes en otros países. Sin embargo, aquí está fuera del debate con relación al petróleo no convencional.

Tendríamos que ponernos de acuerdo, porque la violación primera que se produce en el debate de esta norma consiste en que no podemos llegar a un consenso, en esta confusión de creer que la Nación es de una sola parte política, y cuando se confunde tanto Nación con gobierno y vemos que la presidenta les dice a sus seguidores que cambien “Cristina” por “Argentina”. Es muy difícil, entonces, plantear que se nos escuche en el debate, porque ya se nos ha sacado del medio y se nos cancela la posibilidad de que se nos escuche como parte también de una representación importante de este país, como parte de esta Nación que no es de nadie, porque es de todos.

Entonces, también tendríamos que considerar si no es legítimo que haya algunas regiones que son reservas naturales o ambientes sensibles en las que se tendría que prohibir el fracking, como ocurre con las comunidades indígenas. Sin embargo, estos debates han ignorado cualquier necesidad de establecer zonas libres.

Tampoco se ha considerado la licencia social y la consulta pública, esto en lo que venimos insistiendo acerca de que en una democracia no se pueden tomar decisiones como se han tomado siempre, o sea, con el autoritarismo de arriba hacia abajo y sin escuchar, ni hacer participar, y sin poner eso en la soberanía, que es de los ciudadanos. Yo siento, a veces, como me dice el senador Pichetto con relación al gusto por las palabras, que las palabras no son inocentes. Y si uno lee las primeras líneas de los argumentos con que se presenta este proyecto, se dice que la soberanía son las inversiones. Entonces, ahí uno piensa: si hay semejante error conceptual, de creer que las inversiones son la soberanía, entonces todo lo que viene hacia abajo, no sólo en el articulado del proyecto de ley sino en el debate, está contaminado por ese error conceptual. La soberanía, como los ciudadanos que son la parte de la Nación y nosotros representantes de esos ciudadanos, tiene que ver con qué requisitos y qué condiciones fijamos, y con el hecho de cómo vamos a tratar a esas inversiones.

Por otra parte, hablamos de tecnología nueva, pero nosotros no tenemos esa tecnología. Entonces, vamos a quedar nuevamente dependientes de una tecnología que viene de afuera. Así, se habla tanto contra el colonialismo, pero lo que uno ve, es que se vuelve a reproducir un sistema de intercambio. Es ese sentido, díganme dónde

está la soberanía, si quedamos de alguna manera encadenados a lo que son las inversiones y a una tecnología que nosotros no tenemos. ¿No será que estamos cambiando de colonialismo por esta urgencia económica, como siempre ocurre en estos casos? Porque cada vez que pedimos debates y derechos ambientales, se nos contraponen las urgencias económicas.

Al respecto, siempre me llama la atención también que en este Senado, cuando se afectan seriamente los intereses de las provincias, jamás se invoca el federalismo, pero cuando invocamos derechos humanos, inmediatamente se invoca el federalismo. Es cierto lo que decía el senador Guinle, es decir, que se cumplieron veinte años de la Constitución reformada y que tenemos que construir un federalismo de concertación. Pero también tenemos, finalmente, que cumplir lo que nos manda esa Constitución, que son primero los derechos de participación, escuchar los reclamos y los llamados de los derechos de tercera generación, que son los derechos ambientales. Sin embargo, me parece que también está afuera de este debate que se consideren cuáles son las áreas protegidas o en riesgo.

Tampoco se habla de la deforestación, que es una consecuencia que vamos a sufrir cuando se introduzcan plataformas con miles de caminos de acceso, que implican decenas de miles de hectáreas deforestadas. Necesitamos ocuparnos de esto, porque son derechos humanos. Son los derechos ambientales consagrados por nuestra Constitución y que la urgencia del tratamiento de este proyecto de ley nos impide debatir en serio para lograr garantizarlos.

Me da mucha pena que nuestro país no esté en el debate de la agenda global, que tiene que ver con el cambio climático. Me hubiera gustado ver a nuestro país ahora en Nueva York, en la asamblea de las Naciones Unidas, y que tuviera –como tienen los países de la región– una participación activa en lo que es urgente en la agenda global, que es el cambio climático. Y no que en esto de decir que llegamos tarde, tengamos que tomar lo que los otros países ya han tirado a la basura.

En ese sentido, podríamos muy bien observar lo que hacen los fondos de garantía en los Estados Unidos, que ya contemplan fondos de garantía a perpetuidad o para siempre, y que le

exigen a los inversores para asegurar que el Estado no tenga que asumir el costo de monitorear y reparar daños ambientales cuando la empresa se va o no existe más. Este es el debate que nos tendríamos que dar.

Sin embargo, ¿cómo se puede dar un debate que se presenta con un tratamiento exprés, en el cual se nos descalifica y enseguida se nos pone el mote de poner palos en la rueda, con una enorme confusión de lo que es la democracia? Si no hay oposición, no hay democracia. Un Parlamento de un solo color político –perdonen que lo repita hasta el hartazgo– es antidemocrático hasta por definición.

Entonces, este debate también hay que enmarcarlo en la defensa de los derechos humanos. Porque hablar de derechos humanos es hablar del sistema democrático. Y este no se define sólo por votar cada cuatro años. De modo que siento mucho que se nos presenten las cosas como no son. Y cuando se presenta como virtud lo que en realidad es la mayor responsabilidad que va a tener este gobierno, que es haber perdido el autoabastecimiento energético.

Ahora ya sabemos, claramente, adónde va el dinero de la pauta oficial y el dinero que se utiliza para hacer propaganda, porque la propaganda que se ha hecho con relación al petróleo no convencional y al *fracking* muestra que se han utilizado hasta telenovelas de alta audiencia y que se ha empleado el verano para hacer simulacros de *fracking*. Es más, se ha utilizado muchísimo dinero para poner la National Geographic a hacer revistas enteras en las que aparece siempre la voz científica –como que los otros no tenemos nada que ver, como una verdad única– diciendo que el *fracking* nos va a salvar sin que se admita si quiera poner en duda, sin que se nos dé la información ni se nos permita debatir respecto de algo que se presenta como verdad revelada, además sustentada con todo el dinero que se gasta de manera discrecional, porque no tenemos ley de acceso a la información, que es lo que garantizaría a los ciudadanos saber qué es lo que se hace en su nombre.

Tampoco hemos podido saber qué se hace con la pauta oficial. Ahora tenemos la prueba de lo que sí se hace como propaganda para mostrarla a aquellos que estamos advirtiendo sobre el daño ambiental, que estamos advirtiendo que se mire lo que los países desarrollados hacen.

Tenemos todo para ser un país que empiece a buscar otras energías, energías limpias, energías renovables. Esta es nuestra riqueza, esto es ser progresista, y no recoger de la basura lo que los países desarrollados van tirando por inservible y que nosotros lo presentamos –lo que es peor– como si fuera soberanía, como si fuesen –lo que es peor– decisiones progresistas. Esto no es progresismo. Esta ley viene a violar seriamente los derechos humanos, los derechos a la participación, los derechos a ser escuchados y los derechos ambientales consagrados ampliamente por nuestra Constitución.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra la senadora Crexell.

**Sra. Crexell.** – Señor presidente: adelanto mi abstención. He escuchado los discursos de mis compañeros senadores.

Neuquén es una provincia protagonista en esta ley que estamos tratando hoy. La historia de mi provincia es la historia del petróleo. En 1920 se descubrió el primer yacimiento en Plaza Huincul. El desarrollo de mi provincia está vinculado a la historia del petróleo.

Cuando hablamos de los recursos de gas y petróleo estamos hablando de recursos naturales no renovables, estratégicos, como muchos senadores han dicho, y que son la riqueza de mi provincia, la riqueza del presente del Neuquén y la riqueza que tiene para el futuro.

Celebro que el senador Guinle haya tomado la propuesta. El senador Castillo dejó bien asentado que las regalías son una compensación a las provincias por esos recursos no renovables. Es un debate que nos debemos dar que esas regalías vayan a infraestructura y no a gastos corrientes, como sucede actualmente en la mayoría de las provincias. También aclaro que, justamente porque su naturaleza jurídica es de compensación, no son coparticipables. He escuchado decir a muchos dirigentes políticos de provincias que no tienen el recurso del gas y del petróleo que quieren hacer un fondo coparticipable con el recurso de nuestras provincias.

En esto hemos hecho algún avance en el proyecto de ley en tratamiento al separar en un título aparte lo que son regalías, que antes eran tratadas como tributos. La Corte se ha expedido claramente de que no se trata de tributos sino de compensaciones.

Quiero ser breve y circunscribirme al proyecto. He escuchado muchas posiciones políticas. Como decía, la historia del Neuquén está vinculada al desarrollo del petróleo. Para mí esta ley es de enorme trascendencia.

Dejo en claro que no estamos discutiendo el rol de YPF ni el rol de las empresas que llevan adelante la extracción y la exploración de petróleo. Por supuesto que necesitamos empresas, por supuesto que necesitamos inversión, por supuesto que necesitamos reglas claras, pero para ello necesitamos leyes que sean unívocas, claras, que dejen sentado que el dominio de los recursos naturales está en cabeza de las provincias, y que es el estado provincial, en el caso de mi provincia, quien ejerce de forma exclusiva y de manera excluyente el poder concedente y es la autoridad de aplicación.

Estas cuestiones que voy a plantear surgen de la lectura del proyecto de ley. Lamentablemente, los senadores no hemos tenido participación. Siento una profunda frustración por no haber podido estar en la redacción de esta ley. Si bien el gobernador de mi provincia llevó adelante negociaciones –creo que él dentro de estas negociaciones garantizó un mínimo inderogable, si se quiere, de lo que son los intereses de nuestra provincia–, confiaba en que los senadores y diputados pudiéramos introducir algunas cuestiones que por la manera de negociación, por los tiempos, por los apremios y las exigencias, no pudieron ser tenidas en cuenta en ese momento.

Básicamente hay un tema que me preocupa, que surge de los artículos 27, 27 bis y 35. Tiene que ver con esta nueva figura que se introdujo, que nosotros la hemos receptado en Neuquén con el acuerdo de Chevron, que es la concesión de las áreas no convencionales.

Actualmente, según la ley vigente 17.319 las concesiones se otorgan previo permiso de exploración. Se concursaban los permisos de licitación, luego se accedía a un derecho de concesión por treinta y cinco años con una prórroga. Cuando terminaba la prórroga las áreas revertían al Estado; quiere decir que las áreas eran devueltas al Estado, y el Estado podía nuevamente ejercer el poder concedente a través de nuevos concursos o licitaciones.

Lo que ocurre hoy con esta introducción es que a partir de la necesidad de otorgar concesiones no convencionales, que por sus



características de inversión requieren más años, se ha introducido la figura de la concesión no convencional. Además, se permite la posibilidad de obtener prórrogas sucesivas. Es decir, las áreas no vuelven o no revierten al Estado sino que mientras que las empresas cumplan con algunos requisitos que están vagamente definidos, podrán quedarse sentados en las áreas indefinidamente. El Estado, para recuperar sus áreas, tendrá que justificar que las empresas no han cumplido con algunos de los requisitos.

Estamos hablando de recursos estratégicos naturales y no renovables. No es un tema menor. Por eso quiero dejar en claro que no es una posición en contra de las empresas. Creo que tenemos que separar y realmente valorizar cuál es justamente la riqueza que tenemos con este recurso no renovable.

Esto surge del artículo 27 cuando dice que a los permisionarios y/o concesionarios les asiste un derecho de poder obtener las prórrogas y las concesiones, cuando en realidad son los que podrán solicitar al Estado, que es el encargado de conceder esas concesiones y esas prórrogas.

Ésta fue una de las cosas que observamos y no quisieron cambiar. Me preocupa porque algún que otro funcionario que trabajó en esta ley me dijo: “Bueno, es lo mismo ‘tendrán derecho’ o ‘podrán’”. Para mí no es lo mismo. La verdad es que no es un detalle menor teniendo en cuenta lo valioso que es el recurso del gas y del petróleo justamente para revertir esta situación de déficit energético y lo que significa en las arcas del estado provincial, en el caso de mi provincia.

El artículo 27 tiene una redacción muy enredada. Podrían haber mejorado la técnica legislativa. Habla de las nuevas formas de adquirir las concesiones no convencionales a través de la unificación y la subdivisión de las áreas. Por estos mecanismos podrán adquirir estas áreas por treinta y cinco años a partir de que presenten un programa de inversión, pero además podrán seguir haciendo explotaciones complementarias de convencional, o sea, se les estiran también los plazos para la explotación convencional, con un proyecto de inversión que no está definido cuáles son los requisitos que deben estar establecidos. Luego de eso podrán solicitar prórrogas indeterminadas –así lo dice el artículo 35–. Dice: prórrogas. Es decir, tal vez puedan pedir las prórrogas todas juntas y no

una por vez. Tampoco está establecido cuándo pueden pedir las prórrogas. Dice que no las pueden pedir un año antes de la finalización de la concesión, pero no con un tiempo máximo. O sea que quien recibe una concesión al año siguiente ya puede negociar las prórrogas y tendrá tal vez treinta y cinco años más diez, más diez, más diez años, de manera de tener muy claro el panorama para adelante.

Dentro de los artículos que tenemos para observar está el 35, que recién resalté. Tiene que quedar muy claro que quien ejerce la facultad de otorgar la prórroga es el Estado. En mi caso es el estado provincial la autoridad de aplicación y, como decía y resaltaba, tiene el poder exclusivo y excluyente de otorgar, de conceder y de hacer valer, justamente, el interés público por sobre cualquier otro interés en beneficio del bien común y de los ciudadanos. Esto no surge claramente del artículo.

Con estos dos mecanismos de la unificación y la subdivisión que permite que las empresas obtengan las concesiones no convencionales, hoy tenemos una empresa que controla dieciséis mil kilómetros de los treinta mil de Vaca Muerta. Con estos mecanismos esa empresa podrá quedarse de acá hasta que se agote el recurso, sin que esas áreas reviertan al Estado. ¿Qué implicaba que las áreas revertían al Estado? Que el Estado podía mejorar las condiciones para la nueva concesión. De esta manera, veremos de qué se tratan estos planes o proyectos de inversión.

Hoy, como muy bien decía la senadora Montero, esta ley, como está actualmente, cristaliza el mapa de concesiones en mi provincia. No permite el ingreso de nuevos actores si no es por asociación con las empresas que ya están concesionadas en Vaca Muerta, en Los Molles, en todos los yacimientos que tenemos en Neuquén. Es decir que si buscaba la competitividad, por este lado creo que no va a estar dada.

Unos artículos que hemos intentado mejorar fueron el 57 y el 58, que se refieren a los bonos de prórroga y bonos de exploración. Éstos fueron incorporados ahora, justamente, con los artículos de la concesión no convencional. Los gobernadores habían establecido una cláusula de actualización para esos bonos que creo fue removida del dictamen, que ha quedado fijado en pesos. Hubiese sido prudente establecer

alguna unidad de medida que permitiera actualizar esos bonos. Lo mismo para el artículo 58, se aumentó el valor, pero en pesos, y es muy poco sustancial.

El artículo 59, de las regalías, pone un techo del 18 por ciento, 12 más 3 más 3.

Me pregunto qué pasa si nosotros, con estas perspectivas que nos dicen va a tener Vaca Muerta, dentro de unos años tenemos una explotación de gas y petróleo excepcional y las provincias tenemos un techo para recaudar regalías, compensaciones de esos recursos no renovables que no se extraen. Lo mismo si aumenta el barril de petróleo, ¿por qué tenemos que tener un techo que nos condicione en obtener las riquezas de nuestro suelo o, en este caso, de nuestro subsuelo?

Lo mismo para el artículo 91 bis, que invade la esfera provincial, se ha hablado mucho en este recinto si compete o no al Congreso Nacional sancionar una ley federal. Muchos la enmarcan dentro de lo que es el 75, inciso 12, como dentro de lo que es el Código de Minería.

La verdad es que tenemos posturas que sustentan tanto lo que es una materia delegada como una materia no delegada, pero sí hay algo que está claro, es que no pueden entrometerse en la autonomía de las provincias. Nosotros no podemos legislar por sobre la autonomía de las provincias. Y yo creo que en lo que hace a la reserva de áreas, colisiona directamente con nuestra Constitución provincial y con nuestra ley provincial de hidrocarburos. El otro día les preguntaba a los gobernadores que asistieron a la comisión, ¿qué ley van a aplicar cuando un gobernador quiera reservar áreas para sí y tenga una ley federal que establece que no podrán reservarse áreas?

Yo fui promotora de una reforma de la Ley de Hidrocarburos, creo en el desarrollo del país, creo en la inversión, creo que tenemos la posibilidad de lograr el autoabastecimiento, pero justamente porque creo todo eso, también hubiese celebrado que nos diéramos el tiempo para sancionar una ley realmente estudiada, consensuada, unívoca y que no tuviera colisión con los derechos locales. El tiempo lo teníamos, teníamos la voluntad. Los senadores de las provincias petroleras nos hemos quedado todos con ganas de poder redactar esta ley que sin duda

hubiese sido mucho más rica en su contenido y mucho más armónica que la que tenemos hoy.

Por último, quiero salvar la posición del gobernador de mi provincia. Insisto, ha negociado todo lo que pudo resguardando los intereses del Neuquén y quiero dejar este mensaje, en el sentido de que nosotros teníamos intención de contribuir a mejorar una ley que creemos es necesaria. Cierro con lo mismo que dije cuando empecé. Es la riqueza del Neuquén la que hoy estamos tratando. Para mí es de suma trascendencia que nosotros podamos tener un uso racional y sustentable de este recurso porque es el recurso que tiene el Neuquén para el futuro también.

Así que dejo sentada mi abstención.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente.** – Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra el senador Rozas.

**Sr. Rozas.** – Señor presidente, voy a solicitar autorización para insertar y simplemente quiero dejar como reflexión, en forma breve, dos temas que a mi entender son importantes.

Desde luego adelanto mi voto negativo, como lo haremos la totalidad de los senadores de la Unión Cívica Radical por los fundamentos expuestos por nuestro miembro informante, senador Sanz, y los demás legisladores que han hecho uso de la palabra oportunamente.

Como despacho en minoría hemos propuesto un proyecto de ley fijando una política estratégica para el desarrollo integral de la Argentina que creo es lo que este país hoy necesita.

Quiero remarcar, como dije antes, dos cosas muy breves. En primer lugar, los senadores estamos aquí en nuestras bancas en representación de nuestras provincias. Yo represento, como dos legisladores más, a la provincia del Chaco. En ese carácter, como representante del Chaco, quiero que quede constancia en este Senado que nuestra provincia, que no es productora ni de petróleo ni de gas pero tiene recursos potencialmente explorables y explotables, tanto en petróleo como en gas, no hemos sido convocados a ningún tipo de reunión ni para firmar ningún tipo de acuerdo. Me parece que la provincia del Chaco y podría hacerlo extensivo al resto de las provincias no productoras, deberíamos haber participado de una reunión tan importante para definir políticas

estratégicas de desarrollo para la Argentina para combatir, fundamentalmente, esto que viene casi desde el fondo de la historia, las tremendas asimetrías entre las distintas regiones del país, dejando constancia de la no participación de mi provincia. Porque tenía cosas para decir de mi provincia. Quiero que sepan, y seguramente lo sabrán todos los senadores, en nuestra provincia y en el nordeste argentino pagamos el precio de las naftas y del gasoil más caro de la República Argentina y, realmente, es una de las regiones más pobres, más postergadas o con mayor cantidad de pobres e indigentes de la Argentina. No tenemos gas natural, y en cuanto al precio de la garrafa, más allá de lo que imponga el gobierno nacional, cuando no se consigue, la gente más humilde tiene que pagar precios exorbitantes. Seguimos pagando, como todos los argentinos, el 6 por mil para el Fondo Eléctrico de Santa Cruz, cuando la ley era muy clara: cuando hacíamos el aporte todos los argentinos era hasta tanto estuviera definitivamente instalado el sistema eléctrico nacional.

**Sr. Presidente.** – Senadora Labado.

**Sra. Labado.** – Sólo quiero decir que cuando se hizo el interconectado, se dejó ya de pagar. Lo anunció la presidenta públicamente.

**Sr. Rozas.** – Conozco que así dice la ley y así informó la presidenta. Pero, lamentablemente, sigue viniendo en las boletas y seguimos pagando. No es una chicana, es lo que ocurre: seguimos pagando el 6 por mil todos los argentinos a Santa Cruz.

Mi provincia no está gobernada por un hombre ni por una mujer de mi partido, pero podría haber estado presente en un acontecimiento tan importante en el que se iba a tratar esta Ley de Hidrocarburos y su marco regulatorio, pensando fundamentalmente en lo que todo el mundo sostiene acerca de la importancia potencial y futura de Vaca Muerta, fundamentalmente los recursos no convencionales. Nos hubiese gustado participar, porque creo que, pensando en el desarrollo integral de la Argentina, tratando de que estas asimetrías que nos hacen tanto daño al país en su integralidad terminen de una vez por todas, necesitamos verdaderas políticas públicas integrales, políticas de Estado.

Seguramente el Chaco podría haber propuesto que si realmente Vaca Muerta iba a ser la segunda reserva mundial en gas y la cuarta

en petróleo, como todo lo indica –esto significa un desarrollo extraordinario para la economía argentina y la de las provincias productoras–, se podría haber pensado en crear, como lo han hecho algunos otros países del mundo, a los que les ha dado un resultado extraordinario, un fondo específico para usos intergeneracionales con vistas al futuro, a que en algún momento la Argentina puede tener problemas en el sistema jubilatorio, a que necesitamos hacer mayores inversiones, fundamentalmente en materia de educación y de salud, y a que necesitamos políticas de desarrollo parecidas a reparaciones históricas en todo el Norte argentino –no solamente el Nordeste, al que pertenecemos nosotros, sino también el Noroeste–. Y se podría haber insertado en esta ley ese fondo para la administración y la distribución de la renta petrolera pensando en el futuro de las nuevas generaciones.

Noruega, por ejemplo, que es el decimocuarto productor mundial de petróleo, cuenta actualmente con un fondo de pensiones del petróleo con recursos de casi 850.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de jubilación, educación y salud de todos los noruegos. Y hoy es uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Lógicamente, tiene características especiales en su funcionamiento y por eso también es tan exitoso. Tiene un Comité de Ética que supervisa las inversiones y está manejado por un director y un dependiente del gobierno de turno, con control parlamentario.

En definitiva, realmente, tratándose de recursos estratégicos, entiendo que deben ser compensadas las provincias productoras porque es un recurso no renovable. Esto está comprendido, lo entendemos. Pero me parece que un recurso estratégico como la energía, el petróleo, el gas, este recurso no convencional que seguramente en los próximos años tendrá un impacto extraordinario en la economía y en el desarrollo del país, no puede ser mirado o analizado exclusivamente en pos de las provincias productoras. Creo que hay que mirarlo con una visión global del país, con una visión integral de la Argentina.

Repito: las provincias no productoras no tienen que reclamar lo que no les corresponde, porque las regalías están bien caracterizadas cuando se dice que son verdaderas compensaciones y

no tributos –esto lo comparto claramente–, pero creo que podrían haber participado de este fondo de la renta petrolera que, en definitiva, queda en el limbo, en suspenso y dependeremos, como siempre, de la voluntad del presidente o de la presidenta de turno, porque no hay una política integral de desarrollo para el país con el objeto de terminar definitivamente con las asimetrías, más allá de los aciertos y de los desaciertos que se pudieron haber realizado en estos años.

Más allá de esto, no tenemos una política integral de Estado para terminar –repito– con estas diferencias entre las distintas regiones del país. Y hay tres regiones bien caracterizadas, lamentablemente, en la Argentina. El Centro del país, rico, productivo; el Sur, con petróleo, gas y turismo, que en estos últimos 20 o 30 años ha tenido un desarrollo en ese sentido muy importante, y el Norte, que representa la otra cara de la Argentina. Y creo que tenemos derecho, quienes vivimos, hemos nacido y seguramente moriremos allá, a pensar que alguna vez vamos a tener una Argentina territorial, social, económicamente más equilibrada, más desarrollada. Y todos los argentinos tenemos derecho a pensar en un porvenir, vivamos donde vivamos. Porque con este concepto, así aislado, de que quien tiene la suerte de tener Vaca Muerta, hay que ir preparando el cambio de domicilio para, dentro de unos años, ir todos a vivir a Neuquén o al sur del país.

Me parece que ése no es el criterio. No estamos pensando en que a Neuquén no le corresponde una compensación. Por supuesto, es dueña de los recursos. Esto está calificado categóricamente en la Constitución, nosotros lo compartimos. Son de dominio exclusivo de las provincias. Pero creo que más allá de esas compensaciones lógicas por ser recursos no renovables, tiene que haber, en la renta petrolera, una visión general de la Argentina. Y este proyecto de ley podría haber servido para incorporar también este tema.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Urtubey.

**Sr. Urtubey.** – Señor presidente: no me propongo hacer un análisis exhaustivo jurídico técnico de la ley. Ya lo han hecho muchos colegas compañeros de bancada y seguramente lo harán los que vengan también para cerrar la posición del Frente para la Victoria.

Quiero, simplemente, transmitir un estado de ánimo. No comparto el pesimismo y la desesperanza que se advierte en muchos de los discursos que se han escuchado en este debate. Son discursos que se agotan en señalar fracasos y predecir la madre de todos los males y de todas las desgracias sobre el pueblo argentino. Pero del futuro, nada de nada; ningún mensaje optimista para la Argentina.

Tenemos conciencia de las dificultades y los desafíos que enfrenta la Argentina, muchos de ellos señalados muy bien por la senadora Labado a través de una paradoja. Muchas de estas dificultades y muchos de estos desafíos se producen precisamente porque la Argentina ha crecido en su actividad industrial, en el consumo y también en hábitos de vida que tienen que ver con el uso de tecnologías que no eran comunes hace decenas de años. Esta conjunción de crecimiento económico, de crecimiento y consumo y la resurrección industrial, ha generado, quizás, una demanda energética que –obviamente– no ha podido cubrir la Argentina por más que su parque energético ha crecido sustancialmente y ha debido tener esta situación de importación de combustible y de consumo de divisas que no es aconsejable para ninguna balanza de pagos.

Sin embargo, estas dificultades y estos desafíos no nos impiden tener una profunda fe en el futuro promisorio de la Argentina en materia energética.

Francamente –por eso hablaba de un estado de ánimo–, yo me quedo con el optimismo, desbordante quizá, del presidente de YPF y de todo su equipo: de que es posible concretar el sueño del autoabastecimiento en la Argentina. Prefiero quedarme con la convicción y con la lucidez de todos los gobernadores que expusieron acá en el plenario de comisiones, no importa a qué fuerza política pertenezcan: todos ellos han exhibido una gran fe y una gran esperanza de que esta nueva forma de obtención de petróleo y de gas con estas nuevas tecnologías traigan prosperidad para sus provincias.

Algunos conceptos breves sobre el proyecto de ley. Primero, quiero aclarar que esta iniciativa es una reforma, es una adaptación de una ley existente; y es verdad que no es una ley integral. Y creo, contra todo lo que se ha dicho en este recinto, que ésa es una virtud y no un defecto, ya que hace a la estabilidad normativa,



a la previsibilidad, a la continuidad jurídica de un Estado de derecho que las normas se modifiquen por evolución normativa y no mediante la destrucción del orden legal existente. Digo más, hasta puedo coincidir con la oposición en que no estaban dadas las condiciones para una reforma integral y que otra hubiera sido la metodología. Acá lo que se trataba era de adaptar, de mejorar e incorporar hipótesis de tecnologías de producción que no están contempladas en la ley.

Por otra parte, tampoco es cierto que sea una ley para los próximos cincuenta años. Creo que hoy en el mundo, por la evolución de las sociedades y por la evolución vertiginosa de los instrumentos al servicio del hombre –sobre todo, las tecnologías– no hay ninguna norma que resista cincuenta años, ni siquiera una Constitución de un Estado; ni una Constitución, ni un código de fondo y mucho menos una ley de estas características.

De manera tal que esta norma puede modificarse cuando existan circunstancias que sobrevengan a ella y que hagan necesaria su modificación. Tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Sería nefasto, así como han pasado tantos años con la vieja ley de Onganía, pretender que esta ley tenga una vigencia más allá del tiempo y del espacio.

En segundo lugar, creo que la evolución de esta norma es buena también porque hay muchísimas situaciones de contratos vigentes. Considero que una reforma integral que hiciera un zafarrancho jurídico sobre una cantidad de derechos adquiridos y de contratos existentes sería –valga la redundancia– un verdadero zafarrancho y, además, eso sí sería un avance absolutamente inconstitucional sobre las competencias de las provincias, que son las que precisamente han negociado estos contratos vigentes.

Tercer tema: igualdad de trato a los inversores. Para nosotros este punto tiene otro costado. Y hablo de Salta, una provincia para la cual, si bien tiene gas y petróleo, el costo de la obtención y de la explotación de esos recursos es sustancialmente más costoso que para otras provincias argentinas; muchísimo más costoso. Efectivamente, hay una relación cinco a uno o seis a uno de costo.

Por eso, Salta celebra este tope en las regalías porque realmente estaba en una situación de absoluta desigualdad en materia de elección de

inversores frente a otras provincias que sí tienen mayores riquezas y muchos menores costos de explotación y que, tal vez, pueden generar situaciones o contratos donde haya retribuciones en materia de regalías mucho mayores que para Salta. Justamente, Salta tendrá que negociar contratos quizá por debajo del 12 por ciento, por circunstancias que hacen a las dificultades y al costo de la explotación. Por lo tanto, ese tope del 12 por ciento implica no sólo igualdad de trato para las inversiones, sino también para provincias como Salta, que si bien tiene una larguísima tradición en materia de explotación de hidrocarburos, lo cierto es que sus cuencas hoy se encuentran bastante maduras y, repito, los costos de explotación tienen una enorme diferencia respecto de otras provincias. Ni hablar en el caso del *shale*, tanto de gas o de petróleo, donde creo que este costo de explotación también será sustancialmente superior.

En consecuencia, me parece una correcta igualdad de oportunidades lo que genera esta situación de equiparar las regalías en el caso de los contratos.

Finalmente, creo no coincidir con muchas versiones que se han dado respecto de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación respecto de la prórroga de contratos considero que no sufre ninguna mengua. No es cierto que las provincias pierdan jurisdicción, potencia o competencia en materia de organización. Por el contrario, considero que la posibilidad de dar prórrogas atendiendo a estos tres tópicos que la ley establece claramente –existencia de una explotación en curso, cumplimiento acabado de todas las obligaciones contractuales y presentación de un plan de inversiones; tres requisitos objetivos– acota muchísimo la arbitrariedad a la hora de optar por ellos.

Queda clarísimo que esta opción de las prórrogas y esta evaluación de la concurrencia de estos tres requisitos es facultad exclusiva y excluyente de las provincias argentinas y, en su caso, del Estado nacional, si fuera una explotación *off shore* o perteneciera al Estado nacional.

De tal manera que me parece que, repito, es una evolución normativa, es un paso, es una adaptación, es una modernización de una norma que hacía falta para encarar esta etapa, quizá, de la explotación de nuestros recursos. Es un instrumento necesario para el autoabastecimiento.

No tiene por qué ser una norma eterna, porque pocas de esas normas quedan en el mundo y en la Argentina.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Artaza.

**Sr. Artaza.** – Señor presidente: pertenezco a una provincia que todavía no tiene petróleo, pero que tiene la Cuenca Paranaense y, seguramente, entre Mercedes y Paso de los Libres alguna vez aparecerá petróleo.

En este sentido, quiero plantear lo injusto que significa que senadores de provincias que no son petroleras estemos discutiendo un acuerdo nacional, con el gobierno nacional y con las provincias que sí tienen petróleo. Digo esto porque uno se pregunta: “¿Y nosotros en qué vamos?”

Como planteaba recién el senador Rozas, del Noroeste argentino, sin gas natural, sin una política casualmente que pueda exponernos YPF por el tema del gas natural, con el combustible que pagamos más caro que en muchos otros lugares del país –hasta un 25 o un 30 por ciento más caro–, la primera pregunta que surge es esa, vinculada con la asimetría permanente que tenemos.

Cuando se discutió el tema de YPF, nosotros insistimos en que solamente las decisiones las podían tomar las provincias que son petroleras. Sin embargo, YPF supuestamente es de todos. Ahora bien, las provincias que no tienen petróleo, que han sido postergadas por razones geopolíticas y que necesitan una reparación histórica, se preguntan: “¿Y nosotras, en qué vamos?” Digo esto porque estas provincias aportan a la energía nacional a través de Yacretá o de Salto Grande, y reciben solamente regalías que, a veces, la Nación les paga de vez en cuando y por las cuales los senadores y los gobiernos provinciales deben estar reclamando. Me refiero, sobre todo a la provincia de Corrientes, que aporta casi un 18 por ciento –a veces un poco más, inclusive– a la energía nacional.

Frente a ello, uno piensa “bueno, en algún momento tenemos que plantear entonces una ley del agua”, porque también es un recurso natural el que tenemos. Y uno se vuelve a preguntar por esa asimetría.

Y luego viene otra inquietud, porque –como bien le gusta decir al senador Solanas– una cosa son las reservas y otra los recursos. En

ese sentido, hemos visto algunas estimaciones de algunos especialistas de 900 mil millones de dólares que están en el subsuelo. Uno tendría que preguntarse de eso qué se queda y qué se va de la Argentina.

Sinceramente nosotros, en el radicalismo, desde 1906 hasta hoy mismo tenemos una clara posición –desde Mosconi, desde Yrigoyen, desde Alvear– en cuanto a qué hacer con un recurso energético no renovable como el petróleo. En tal sentido, hemos tenido políticas constantes al respecto.

Tenemos que tener cuidado –con todo respeto, señor presidente– con quienes en algún momento nos han propuesto estatizar el petróleo, después privatizarlo en los años 90 y luego estatizarlo parcialmente.

En su momento, cuando tratamos la ley sobre la estatización parcial de YPF, dije –creo que fue al senador Mayans–: “Bienvenidos al proyecto nacional y popular de nuevo”, porque los mismos que nos propusieron la privatización nos pedían ese día estatizarla. En ese momento escuché autocríticas de parte de algunos senadores: inclusive de algunos que estaban en aquel período de los años 90. Escuché decir que se habían equivocado: que ese día volvían al sendero nacional y popular de un proyecto nacional para proteger esos recursos no renovables. Sinceramente, señor presidente, espero que no escuchemos esas mismas cuestiones dentro de unos años por esta ley, porque desde nuestro punto de vista se está manteniendo el mismo sistema de concesiones, de contratos, el statu quo que beneficia a las grandes empresas y a las corporaciones. Es por eso que desde la Unión Cívica Radical hemos presentado y vamos a acompañar un dictamen en minoría que contempla otras cuestiones que bien han planteado los senadores preopinantes y el miembro informante del radicalismo.

Entendemos que se mantiene el mismo statu quo, el mismo beneficio o aún mayor para las empresas.

Es cierto lo que dijo el colega Urtubey en cuanto a que siempre son perfectibles en la democracia estas leyes. Mencionó 50 años, pero hay concesiones de 35 años, señor presidente.

Desde el radicalismo, cuando creamos YPF lo hicimos para el desarrollo de los pueblos, para

la grandeza de la Nación, para que se produzca ese derrame hacia el ciudadano común que está esperando una gran oportunidad.

No tengo dudas de que este recurso de Vaca Muerta, así como otros, se va a convertir en reservas; pero creo que es un importantísimo recurso sobre el cual deberíamos discutir mucho más y no dejar pasar esta oportunidad.

Una vez más tenemos que tratar casi a libro cerrado una cuestión que comprende un recurso importantísimo para la Nación, que significa crecimiento y desarrollo. ¡No vaya a ser que nuevamente se arrepientan, como en los años 90! Esperemos que muchos que han hecho autocrítica no se tengan que arrepentir.

Hoy estamos generando el mismo statu quo: vamos a generar nuevos ricos y nuevas empresas que se van a beneficiar.

¿Cuál es el apuro? Yo cuando veo esta fotografía me hace recordar la época de Dromi o la de los años 90, cuando decían: “Hay que hacer esto porque si no las inversiones no van a venir”. Me extraña porque los veía bien. Veníamos bien. Cuando se empezó a estatizar YPF la verdad es que veníamos bien, con un pensamiento casi coincidente. Y me extraña porque frente a los fondos buitres decimos: “No es necesario pagarles a estos. Bueno, solamente una pequeña parte falta pagar. Si ya pagamos al fondo, ya cumplimos, le pagamos de más al Club de París, les pagamos a los reestructurados, le pagamos a Repsol”, todo lo que ya sabemos. Nos ponemos firmes frente a ese pequeño grupo de fondos buitres.

¿Siempre tenemos que tratar las cosas de urgencia en la Argentina? Como pasó en aquel momento, ¿hay que bajarse –para no decir otra cosa– en cuanto a las condiciones, como pasó en los años 90, para que vengan a invertir? ¡Las inversiones van a venir igual! Ahí está el recurso y ahí están las futuras reservas que deberían contribuir a engrandecer este país, señor presidente. Deberíamos pensar mucho más qué vamos a hacer con ese excedente, de qué manera vamos a crecer.

El miembro informante habló hoy de esos pueblos que quedaron deshabitados en el sur del país después de las privatizaciones; y no queremos que vuelva a ocurrir esto. Por eso, respetuosamente quiero poner énfasis en que estamos tratando una de las cuestiones centrales

para el futuro desarrollo de los argentinos: y seguimos dando los mismos beneficios, casi con la misma legislación de los años 90, teniendo una ley de minería. Ésta es una ley que deberíamos tratar mucho más profundamente en el Congreso de la Nación a efectos de que sea beneficiosa para la mayoría de los argentinos.

Sinceramente, señor presidente, tampoco me gustaría que subestimemos la capacidad institucional de las provincias, porque he escuchado por ahí que las provincias no están en condiciones de tratar sus contratos, etcétera. No podemos subestimar así a las provincias y limitarlas solamente a las regalías; y digo esto a pesar de que yo no pertenezco a una provincia petrolera sino, casualmente, a una que necesita gas y energía para su desarrollo.

Quiero recordarles que yo siempre insistí felizmente en que el gasoducto para las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones debía venir del sur, donde tenemos el recurso y la reserva –que seguramente ahora vamos a tener– y no de ese gran gasoducto del norte que va a costar mucho más caro. Nosotros lo vamos a tener mucho más rápidamente, aun sin ser incompatibles uno con otro: es decir, ambas construcciones.

Por supuesto que adhiero al dictamen que ha sido trabajado por nuestros asesores del bloque porque, además contempla, los presupuestos mínimos ambientales.

Finalmente, señor presidente, quiero hacer una reflexión porque me acuerdo de aquella discusión sobre el tema de YPF: pensemos con responsabilidad que en algún momento en los años 90 entregamos las alhajas de la abuela. Espero que hoy no estemos entregando la herencia de nuestros nietos; gracias.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.

**Sr. Barrionuevo.** – Gracias, señor presidente.

Antes de hacer dos o tres acotaciones, y sin perjuicio de que las intervenciones de todos los senadores aportan puntos de vista importantes en este tema tan trascendente, quiero expresar públicamente mi identificación con la postura que tuvo el senador Marcelo Guinle hace un rato. La verdad es que hizo una descripción muy clara de la problemática constitucional que encierra esta cuestión.

Dicho esto, y luego de tantas aristas con las cuales se enfocó esta cuestión, quiero reivindicar el trabajo que han realizado todos los funcionarios y técnicos del Estado nacional, de YPF, de las provincias y demás, pero sobre todo el trabajo de los gobernadores. ¿Por qué digo esto? Porque luego de haberlos escuchado en la audiencia pública me ha quedado la impresión de que han actuado con una enorme responsabilidad en un escenario muy complicado y muy difícil. Me ha quedado la impresión de que han defendido con dignidad toda la compleja temática que estaba en juego, así como con la mesura que exige su responsabilidad con las provincias. En definitiva, han estado a la altura de las circunstancias, y quería expresarlo.

No es lo mismo hacer las críticas desde otras responsabilidades institucionales que estar en la función de gobernador, máxime en esos momentos. Recuerdo una de las frases del gobernador Sapag, cuando dijo que los gobernadores hacían reuniones previas y que, incluso, trazaban estrategias antes de asistir a las reuniones y exponer. Las estrategias se trazan, aquí y en la China, cuando en la mesa a la que uno se va a sentar el interlocutor no piensa lo mismo o tiene posturas distintas, por más legítimas que sean. Entonces, esta autenticidad con la cual se expresó el gobernador Sapag me quedó grabada y la tomo como emblemática de la dificultad que envolvió esta negociación.

Dicho esto, quiero hacer dos acotaciones más. Acá se ha dicho textualmente, al principio de esta sesión, que no se puede ensamblar un plan energético nacional con el federalismo. Textualmente ésa fue la expresión. Esta frase puede ser cierta o inexacta, de acuerdo con el lugar donde uno se pare: si consideramos la política nacional desde la perspectiva de la imposición del más fuerte, puede ser cierta; y si uno se para desde una óptica sarmientina, en base a la cual el Estado nacional, sobre las barbaries de las provincias, tiene que imponerse y enseñar cómo hacer las cosas, puede ser que sea cierto. Si nos colocamos desde la perspectiva del federalismo de concertación, en el cual insistió el senador Guinle con mucho acierto, la postura es diametralmente opuesta.

No puede hablarse válidamente de que es incompatible sostener el federalismo con una política nacional porque, de lo contrario, cabría

preguntarse cómo harán los Estados Unidos, país federal en serio si los hay. Ése es un país federal con todas las letras. Es como decir que los Estados Unidos no tienen políticas nacionales o estructura cuando dan el ejemplo de que sí la tienen. Brasil también da ejemplos. Entonces, son las mejores demostraciones de que esta expresión, por lo menos, es injusta aplicarla a la historia argentina.

Por otro lado, en algunas de las audiencias se expresó –creo que con inexactitud– la siguiente afirmación: que en esta cuestión, sobre todo en lo que tiene que ver con las regalías y el tema tributario, se optaba por un proyecto de ley común y no una ley convenio por las dificultades de su modificación, y porque las legislaturas provinciales la ley convenio debían aprobarla después. Quiero apuntar la siguiente inexactitud: primero, la Constitución de la Nación Argentina contempla un solo tipo de ley convenio con esos requisitos. Es la ley convenio que se refiere a la coparticipación de impuestos. Ésa es la que tiene los recaudos de mayoría absoluta de la totalidad de miembros de ambas Cámaras, de la imposibilidad de modificación unilateral y la de necesidad de aprobación por parte de las Legislaturas. No hay otra ley convenio en la Constitución: ésa es la única. O sea que ese sistema no podría haber sido supuesto.

Antes de 1994 hubo antecedentes –los hay en la legislación argentina– de leyes convenio sin necesidad de la previsión constitucional. El ejemplo más típico y muy conocido por los abogados es la ley 22.172, que es la que regula las comunicaciones entre los tribunales de la República. Ésa es una ley convenio que se firmó antes de 1994. En rigor de verdad, por el artículo 124, en temas de intereses económicos, las provincias pueden hacer leyes convenio sin tanta complicación como la del 75.

Ésas eran las precisiones que quería expresar, señor presidente, sin perjuicio de la posibilidad de inserción de la que vamos a hacer uso.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Mayans.

**Sr. Mayans.** – Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo para reformar la ley 17.319.

Al respecto, hay que destacar el trabajo que ha hecho la comisión y la presencia del ministro



de Planificación, que ha dado una explicación contundente respecto del tema energético. También estuvo el doctor Zannini hablando del tema en un aspecto legal. Y, por supuesto, también la secretaria de Energía, que también hizo su contribución con respecto al tema que estamos tratando.

Por otra parte, la visita de los gobernadores realmente fue algo impecable en el sentido de la explicación que dio cada uno de ellos sobre el porqué de este nuevo convenio con la Nación, de la importancia y de los beneficios del convenio, y –por supuesto– de la esperanza de que la Argentina realmente tenga una fuerte producción en las cinco cuencas tanto en la extracción convencional como en la no convencional. Obviamente esta ley, que fue hecha en 1967, no contemplaba el tema de los recursos no convencionales; y por eso la importancia de este proyecto de ley.

Acá se dijo que no existía política energética en este país. Éste es el discurso que hace la oposición en todos los medios diciendo que nuestro gobierno no tiene ningún programa energético, lo cual rechazamos en forma contundente. Además, decimos que es una mentira absoluta porque mienten a sabiendas. Si no saben, también es grave. Le voy a decir por qué veo que la oposición miente en este tema. Un solo punto: cuatro millones de viviendas en la República Argentina han sido incluidas al servicio de energía eléctrica. ¡Cuatro millones de viviendas! Multiplique por dos en el caso de un matrimonio y son ocho millones de personas; si tienen un hijo, son 12 millones de personas; y si es la familia tipo, estamos hablando de 16 millones de personas.

¿Sabe por qué fueron incluidas prácticamente más de diez millones de personas? Porque la concepción del sistema energético no era federal. Se decía que sí pero no era federal.

Usted ve, señor presidente, que el tema energético es la producción, el transporte, la distribución y la comercialización. Mi provincia es un ejemplo claro de eso. La provincia de Formosa consumía 100 megavatios y ahora consume 350 megavatios. Hemos sido incluidos en el sistema nacional. Había nueve provincias que estaban excluidas del sistema nacional, que no podían competir en condiciones igualitarias porque obviamente el precio

era distinto y porque también no teníamos la cantidad suficiente de energía como para poder producir en igualdad de competencia con las otras provincias. Estamos hablando de nueve provincias argentinas.

Este gobierno hizo 5.500 kilómetros de redes. Estamos hablando de provincias del norte, NEA y NOA. Estamos hablando de provincias del centro y de provincias de la Patagonia que no tenían energía eléctrica.

En mi provincia tenemos la línea de 500 kilovatios porque la alta tensión es de 500 kilovatios. 120 es el piso de la alta, después están la de 33 kilovatios y la 13 kilovatios, correspondientes a la electrificación rural.

Reitero: en el país se incorporaron cuatro millones de hogares para lo elemental y lo básico. La senadora por Córdoba estuvo hablando recién de los derechos humanos, de esas familias que ni siquiera gozaban del derecho a tener una heladera en su casa. Yo me acuerdo que había barrios en mi provincia a los que no se podía conectar al sistema eléctrico porque no había energía suficiente.

Por supuesto que este gobierno cambie ese concepto injusto que había de país. Esa inversión cambió definitivamente el consumo. Eso va a ser para siempre. Esos cuatro millones de familias que se incorporaron son para siempre.

Y les recuerdo una cosa a aquellos que dicen que no había política energética. Antes del gobierno – se los voy a volver a reiterar para que lo graben– el consumo del país estaba en 13.000 megavatios. Ahora es de 24.000 megavatios.

Este gobierno, que no tiene política energética, incorporó 9.000 megavatios. Para cualquier técnico que conoce el tema eléctrico hay que hablar de la usina hidroeléctrica de Yacyretá. Nito no habló de eso: está hablando del tema energético y no ve que en su provincia tiene una generadora de 3.000 megavatios.

O sea que este gobierno, que no tiene política energética, generó el equivalente a tres represas de Yacyretá. ¡9.000 megavatios en prácticamente nueve años, presidente! Es un trabajo tremendo eso, presidente.

Y si hablamos de la política energética, hablamos de la política de electricidad que, como les estuve diciendo, fue realmente fruto de un esfuerzo extraordinario hecho por el gobierno nacional y por las provincias: me refiero a la

distribución energética, la generación, el mejoramiento del precio.

Nosotros teníamos un precio prohibitivo. Importábamos de Paraguay 60 megavatios. El Paraguay nos daba 60 megavatios. Nuestra provincia, lógicamente, en la política grande siempre estaba el conflicto de guerra como una posibilidad de entrega de territorio. Por eso no se hacían obras, señor presidente. Este gobierno cambió esa concepción. Y esa concepción que tiene de un país más federal hizo que este país tenga ese consumo que no va a bajar más. ¡Es un derecho humano! Ahora no se puede vivir con lámpara Petroman o con leña. ¡No se puede! Por ejemplo, una vez que instalamos los sistemas en los hospitales de alta complejidad –tenemos dos en la provincia: uno en la capital y otro a 300 kilómetros–, esos hospitales solamente pueden funcionar con energía eléctrica; no pueden funcionar de otra forma.

O sea que ese esquema de consumo energético que tiene el país, para los que no entienden, es irreversible. Siempre la Argentina, a partir de acá, va a consumir 24.000 megavatios, y en crecimiento.

En materia de gas, tenemos que hablar de casi 2 millones de hogares: del Gasoducto del Norte “Juana Azurduy” y del “Estrecho de Magallanes”, con la incorporación de 2 millones de familias. Estamos hablando de 4, más 2, son 6 millones de familias.

¿A usted le parece, presidente? Estas personas, que son de la oposición, lo desconocen, porque van con este esquema a los medios –por supuesto, a los periodistas que les gusta de la oposición– diciendo: “Este gobierno no tiene programa energético”. Si no tiene programa energético, ¿la Argentina va a duplicar prácticamente su consumo?

¿Pero no conocen los datos? Veo que se ríe la senadora por Río Negro. ¿No conocen los datos? Tienen que estudiar los datos, presidente, para no decir cualquier cosa acá, en el Senado de la Nación.

Hablamos de un país que pasa de exportar 24.000 millones a 84.000 millones de dólares; hablamos de un país que de 100.000 millones de PBI pasa a 400.000 millones de PBI; que tenía 6 millones de vehículos y ahora tiene 12 millones. Todos sabemos acá que hay que corregir el

sistema de cargas del país; pero dicho sistema está basado en el transporte del camión, aunque debería estarlo en el tren o en las vías fluviales.

Obviamente que este país ha crecido de una forma extraordinaria. Acá, por ejemplo, fíjense ustedes: 130 millones de megavatios/año gasta en consumo energético la Argentina. El ciento por ciento se produce acá, en el país. No se importa un solo megavatio en este país.

Para estos que hablan de la política no saben, presidente, o no quieren saber o realmente no entienden cómo es el tema.

En el tema del gas estamos hablando de 120 millones de metros cúbicos/día. Este país genera 100 millones, de los cuales gasta 15 millones. 85 o 86 millones inserta dentro del sistema. Importa 30 millones.

En gasoil, 16 millones: produce 12 millones e importa 4 millones.

En nafta, 7 millones: importa 400 mil litros.

El biodiésel ha sido política de este gobierno. Este gobierno generó la política del biodiésel y del bioetanol. Creó las condiciones para la producción del biodiésel y del bioetanol. Este gobierno hizo eso, ¡y dicen que no tiene política energética! No lo conocen, o no lo saben, o tienen la mala intención de, por ser oposición, decir que este gobierno no tiene política energética. Realmente es lamentable, presidente.

Obviamente que rechazamos todo esto. A mí, la verdad es que me parece incoherente lo que dice la oposición. Y, sobre todo, algunos que dicen: “Bueno, como alternativa vamos a presentar un proyecto alternativo”. ¿Sabe para qué hacen eso, presidente? Para que no digan “nosotros votamos en forma alternativa”. No, no: “Nosotros presentamos un proyecto alternativo”. Buscan la ley y modifican algunos aspectos, pero como no están en el gobierno actúan en forma irresponsable y dicen: “Presentamos un proyecto alternativo” del que solamente ellos saben. De hecho, cuando estuvieron en el gobierno realmente no cumplieron con esas metas que se habían propuesto para el tema energético.

Entonces, presidente, acá estuvo el presidente de YPF explicando realmente los avances que se han tenido: por ejemplo, 6 por ciento en la producción. ¡Importantísimo!

Obviamente que representa el 37 por ciento de la producción, y el 60 por ciento está en manos privadas.

Pero lo que está promoviendo esta ley es la inversión en el país. Estamos hablando de inversiones por 250 millones de pesos. Además, tenemos que hacer que sea atractiva; lo estuvo explicando el ingeniero Galuccio, que es una persona que la propia oposición reconoce –salvo alguna senadora que le “tuiteó” lo contrario– que es un buen administrador de YPF, que ha demostrado que las cosas están funcionando bien y que la Argentina tiene un futuro promisorio en materia de producción de hidrocarburos con la energía no convencional.

Por eso mire, presidente: la verdad, el tiempo es poco y tirano.

Por supuesto, cuando se cayó la convertibilidad nosotros teníamos el precio valor dólar. Se cayó la convertibilidad y el gobierno resolvió tener políticas de subsidio. Subsidia el 30 por ciento: el 70 por ciento paga el usuario, el 30 por ciento paga el gobierno. Esto es porque, en la diferencia de precios existente, obviamente el mercado interno establece las leyes que el gobierno fija. Porque imagínense ustedes cada cuenca petrolera fijando un valor de su petróleo. Imagine que se diga en la zona norte, que somos nosotros, el 8 por ciento de la producción: “Nosotros vamos a cobrar el petróleo a 80 dólares el barril”. Y que diga la zona de Mendoza: “Nosotros vamos a cobrar 95”. Sería un desastre. Tiene que haber una unificación.

Cuando tuvimos la crisis del campo –en eso sí le doy la razón al presidente de mi bloque, porque estaba peleando por los intereses de su provincia–, el barril estaba a 45 dólares y afuera estaba en casi 150 dólares. Obviamente había una diferencia importante para las provincias. Ahora está en 65, contra 93, 95. Obviamente que en el precio interno la producción y la inclusión de 6 millones de familias tiene un costo, presidente.

Yo voy siempre a Paraguay. Voy todos los fines de semana, cuando estoy allá. El tanque de combustible te sale tres veces más; en Uruguay, tres veces y media; y en Brasil, igual. Uno va a cargar un tanque y te sale –no sé– 3 mil pesos, y ahora, con el sistema, 4 mil también. Hay diferencias importantes.

Entonces, presidente, nosotros vamos a acompañar, obviamente, porque tenemos una visión nacional. Perón decía que la riqueza del país es un bien social que tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. En ese sentido, por más que la provincia de Formosa sea una pequeña productora de petróleo es una provincia petrolera.

Entiendo que esta política no tiene que ser hecha solamente por las provincias productoras de petróleo: tiene que haber un criterio más amplio, porque la Argentina es una familia. Entonces, el problema de la soja es problema de todos los argentinos; el problema del petróleo es problema de todos los argentinos. ¡Y me alegra mucho que se haya discutido tan profundamente!

Nosotros somos optimistas. El pesimista dice: “No, seguro que ponemos la pajita y en vez de salir petróleo sale cerveza”. Pero nosotros, que somos optimistas, realmente. Creemos que las cosas van a funcionar y que la Argentina va a resolver el problema de esos 7 mil millones que tenemos. En realidad, el problema no fue del país sino del irresponsable manejo de la deuda externa argentina, que lleva entre 12 y 15 mil millones de dólares por año; no los 7 mil.

La Argentina importa el 10 por ciento de su producción y hay países como Brasil, que estaba en 50 por ciento. Después, por supuesto, con el tema del *off shore* la cosa cambió y ahora está en el 20 por ciento. Y hay países europeos que están en el 40 por ciento. Y hay países que directamente no tienen petróleo. Y hay países como Japón, que su principal fuente de energía es la nuclear.

Nosotros, no. Nosotros, prácticamente, el gran porcentaje es el gas, después de la parte hidroeléctrica y el 6 por ciento de energía nuclear. Pero ese ya es otro capítulo. Va a venir el fuerte tema de energía nuclear. Y, en cuanto a las energías alternativas, como suele decir un senador que es candidato a presidente, es un tema importante. Y nosotros estamos de acuerdo. Pero, en este momento, ellas constituyen el 3 por ciento, porque no se produce a gran escala; y la gente no está en condiciones de esperarnos a que llegue el ventilador por energía eólica; otra cosa será cuando ella se produzca mayor cantidad. Las energías alternativas, tanto la energía eólica como la fotovoltaica, son de baja producción.

Por eso es central este tema que estamos tratando, el tema del autoabastecimiento. Y tengo la esperanza de que, tanto por el lado no convencional, que son la mayoría de las provincias, como por el convencional, la Argentina llegue a este autoabastecimiento, porque eso va a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Castillo.

**Sr. Castillo.** – Señor presidente: no estoy en la lista de oradores. No voy hacer una exposición. Simplemente quiero precisar el sentido del voto. Voy a ser breve.

Galuccio nos ha planteado esta reforma de la ley 17.319, como un modo de atraer inversiones. Más allá de lo que se acaba de decir, hay un déficit de 7 mil millones que, por supuesto, es una situación muy difícil. Y lo que he escuchado de quienes han manejado o trabajado mucho en materia energética es que la expectativa de la reforma de esta ley, parcial, no es consonante quizá con la política energética que hoy se está requiriendo o que se esperaba.

En el caso de los radicales, la modificación de esta ley, que ha sido una ley marco, nunca nos ha caído simpática, porque esta es una norma que se sanciona durante el gobierno de Onganía, después del golpe militar del 66, con aquella anulación de los contratos por parte de don Arturo Illia. Entonces, ésta era una ley muy liberal, muy abierta, que controló muy poco y que estuvo vigente, salvo algunas pequeñas modificaciones, hasta el día de la fecha.

Y acerca de estas modificaciones, es cierto que uno tampoco puede dejar de ver este fenómeno de las exploraciones y explotaciones no convencionales, la expectativa que ello está planteando en el mundo, el resultado que ha dado en los Estados Unidos y la posibilidad cierta y real que a nosotros se nos presenta. De manera que uno queda con algunas de las expectativas.

Escuché muy atentamente a la senadora Crexell, de una provincia casualmente productora y con un alto grado de compromiso respecto de estos temas. Pero tengo cuestiones encontradas al respecto. No puedo dejar de observar lo importante que ha sido la firma, por parte de los gobernadores, en ese tema, más allá de la originalidad o no. Pero también acepto que,

en una provincia como la de Catamarca, donde quizá se vaya a regular en otro momento, otro tipo de actividades, estos acuerdos, estas leyes convenio, estos marcos son realmente importantes, pero también es cierto el respeto de las autonomías de cada una de las provincias.

Agradezco la oportunidad de poder expresarme y en virtud de lo señalado voy a pedir autorización para abstenerme.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – Señor presidente: ¡qué lindo sería vivir en el país que describió Mayans! ¿No?

**Sr. Mayans.** – Estás viviendo. Estás viviendo. No te das cuenta.

**Sr. Cimadevilla.** – Señor presidente: antes de hacer algunas consideraciones sobre la ley, no puedo dejar de señalar que, a mi juicio –y en esto discrepo con algunos senadores que han opinado–, estamos frente a una ley convenio.

No he podido encontrar mucha bibliografía sobre la definición o la naturaleza jurídica de una ley convenio, porque los autores no han escrito prácticamente sobre este tema. Pero sí es cierto que las leyes convenio, para su formación, tienen un proceso donde interviene no sólo la jurisdicción nacional, sino también las provinciales.

En nuestro país hay antecedentes de leyes convenio. Tengo aquí, y traje a modo de ejemplo, la ley 24.228, el acuerdo federal minero, una ley consensuada aquí –es cierto– entre todos los distritos federales y la Nación, pero la definición final del texto de la ley es el producto de un acuerdo.

Y aquí también, más allá de que modifica una ley nacional que estaba vigente, cierto es que esta norma es el producto de un acuerdo. Es más, esta ley tiene una novedad: la iniciativa legislativa, que es del Poder Ejecutivo en este caso, es compartida por los señores gobernadores que también firman el proyecto de ley que viene al Congreso de la Nación. Es decir, más allá de que no abarque la totalidad de las provincias, cierto es que a mi modesto entender –puede que esté equivocado–, estamos frente a una ley convenio.

¿Cuáles son las dificultades o las particularidades que tienen las leyes convenio? Y esto



no sólo rige para la ley de coparticipación que dice el artículo 75, inciso 2º, de la Constitución, sino para todas. Que estas leyes no pueden ser modificadas por el Congreso. O la aprueban o la rechazan. Y también tienen un proceso de modificación más complejo, porque se requiere que concurren las voluntades de aquellos que han firmado ese convenio.

Y aquí se han hecho modificaciones a esta ley. Una es, ni más ni menos, que el *off shore* va a ser en la playita, en más baja marea. Vamos a andar caminando por la costa y nos vamos a chocar con las torres de petróleo. Eso ya es *off shore* para una de las modificaciones que le han incluido.

Esto lo dejo expresado porque, seguramente, alguien va a plantear alguna de estas modificaciones que se han hecho, de las que curiosamente uno se entera por los diarios. Digo esto, porque uno participó en las reuniones plenarias que se hicieron y no tuvo noticias de que el gerente de una importante empresa estaba en el Congreso negociando algunas modificaciones de esta ley.

Yo estoy acostumbrado a que los gobernadores de mi provincia actúen como gerentes de las empresas petroleras, pero no me gustaría que esas influencias gerenciales se trasladen al Congreso de la Nación.

Acerca del texto de la ley, señor presidente, ¿por qué vamos a votar en contra? Sobre el contenido del articulado, mucho se ha hablado, pero toda ley responde a una filosofía, a un espíritu, a una idea sobre la que estamos legislando. Si en este país hoy estuviéramos discutiendo si la pena de muerte sí o la pena de muerte no, y decidiéramos avanzar en la pena de muerte, seguramente la segunda discusión sería cómo ejecutamos al condenado: si con una inyección letal, la silla eléctrica, o si hacemos lo de los musulmanes y lo degollamos.

Aquí estamos discutiendo una ley que propone una metodología para la explotación de los yacimientos, que es el sistema de la concesión, que no se usa más en el mundo. Es un sistema de entrega de los yacimientos, que nosotros no compartimos. No compartimos la filosofía de esta ley. De allí que yo voy a hacer hincapié en esto más que en el propio articulado de la ley.

Mire, señor presidente, acá se nos dijo que dejáramos de analizar el pasado y miráramos hacia adelante. En realidad, no creo que estemos mirando hacia el pasado, si analizamos desde la década del 90 hasta acá lo que pasó con la energía. Más que analizar el pasado, creo que estamos analizando la continuidad de todo un proceso que se inició en los 90. Y ahora voy a explicar por qué.

Tampoco creemos en las teorías conspirativas que explicó el senador Fuentes. Justo a los radicales no nos van a correr por izquierda. El golpe de Yrigoyen, señor presidente, como se dijo, tenía olor a petróleo; los ministros de quien fue presidente de facto eran los abogados de las empresas petroleras. El golpe a Illia también tuvo que ver con esto. Es decir, a nosotros no nos van a correr con que, por la posición que tenemos en contra de esta ley, podríamos estar llegando a conspirar o a ser parte de alguna conspiración de los capitales que manejan los hidrocarburos en el mundo. Ese palo para nuestro gallinero no va.

Estaba leyendo el proceso energético en el país desde el 90 hasta ahora. Y es extraordinaria la coincidencia que he encontrado. Le diría que los fundamentos de un proyecto servirían perfectamente para otro. Me refiero a la exposición de motivos de la ley de privatización de YPF. No varían en absoluto con los motivos que ha expresado el Poder Ejecutivo al remitir el proyecto en consideración.

Se decía lo mismo que se nos dice ahora: que faltaban los recursos; que había que fomentar la competencia; la incapacidad del Estado para financiar inversiones; que había que traer inversiones. Es más; nos decían que los trabajadores de YPF hasta se iban a convertir en empresarios porque serían socios de la YPF privatizada.

Se señalaba en aquel momento por parte del mismo partido que hoy gobierna y por parte de los mismos actores que hoy impulsan esta ley, que la privatización de YPF se articulaba en un proceso de cambio ya logrado en estos primeros años de gestión gubernamental y en la ineludible necesidad de que YPF consolide definitivamente su presencia en un mercado desregulado y competitivo.

Se decía, y lo leeré porque lo quiero transcribir textualmente: No compartimos la idea que considera al petróleo como un bien estratégico

de la Nación. Se trata más de un recurso que, correcta y económicamente administrado, puede transformarse en un factor decisivo de transformación económica y que se comercialice en los mercados del mundo de una manera similar a los cereales y a los metales.

Esta es la misma filosofía que inspira la ley que tratamos. El miembro informante del partido de gobierno decía en el Senado que la limitación de recursos por la que atravesaba el Estado dificultaba la capitalización de YPF –igual que ahora–, dejando como saldo el estancamiento de la producción. La estructura regulatoria de la actividad se había convertido en una traba a la expansión del sector y recomendaba a YPF que se encuadrara dentro de las reglas del mercado. Así nos fue.

Más adelante, señalaba: Las transformaciones iniciadas en 1990 permitieron a la Argentina el paso de país autoabastecido a país exportador neto. Y celebro que el petróleo se haya consagrado como el principal producto de exportación.

Aquí se sigue dando la libre disponibilidad del crudo y se permite que se exporte el petróleo. Y no compartimos la idea de que el excedente sea exportable. Creo que es mucho más beneficioso para un país dejar el excedente como reserva. Así hacen muchos países en el mundo. Los resultados están a la vista. El proyecto en cuestión se nutre del mismo pensamiento.

Ante el fracaso de las políticas privatizadoras, la segunda respuesta que dio el partido que está en el gobierno y con los mismos actores fue, y hoy lo dijo el señor senador Sanz, la creación de ENARSA.

ENARSA tenía por objeto –aquí lo tengo– llevar a cabo por sí o por intermedio de terceros o asociada a terceros el estudio, exploración y explotación de todos los hidrocarburos, el almacenaje, la distribución, la comercialización y la industrialización de todos estos productos, y, además, se le daba la titularidad de todos los permisos. Hoy, se revierten los procesos de ENARSA, porque fue totalmente ineficiente.

Claro, en el medio de todas estas respuestas energéticas que el partido que hoy gobierna nos daba a los argentinos, todos los discursos eran planteados épicamente. Siempre hablábamos, como ahora se habló, de nuestra soberanía energética; se hablaba del manejo estratégico de los

recursos, de la autoabastecimiento. Se hablaba de todo esto. Por supuesto ni la privatización de YPF primero ni la creación de ENARSA después solucionaron los problemas energéticos.

¿Qué se le ocurrió entonces al gobierno? La colonización de YPF. Ésa fue la alternativa a la que echaron mano. ¿Cómo? Claro, Repsol tenía que entender las bondades que significaban incorporar a un socio argentino a la empresa con un trato fluido con el gobierno.

Y aquí aparece Enrique, pero no Mosconi, sino Eskenazi. Pero con una metodología de compra de las acciones que, si me la ofreciera la Coca Cola, compro la empresa. Es decir, pagarla con los dividendos de la propia empresa. De esta manera, se hicieron primero de un 15 por ciento y luego de un 10 por ciento del capital de Repsol.

Esto tampoco dio resultado. Entonces, viene la tercera respuesta. ¿Cuál fue esa respuesta? La expropiación parcial de YPF, que yo voté. Y lo hice por convicción, ya que pertenezco a un partido que siempre ha entendido que el Estado no puede estar ausente en el manejo de los recursos energéticos. Y también la voté porque el señor ministro de Economía nos dijo a todos en el salón de al lado que por la expropiación no íbamos a pagar nada ya que se compensarían créditos. Nos mintió. Terminamos pagando, y lo que los españoles querían. Si uno saca cuentas, lo que se va a terminar pagando por la expropiación de YPF era lo que los españoles querían.

Recuerdo que el proyecto de estatización de YPF también se llamaba proyecto de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina y tenía por objetivo prioritario el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos, que se había perdido, según nuestra presidenta, por la política de los empresarios y no por falta de recursos.

Ahora, se trata un nuevo proyecto. Los invito a que lean la exposición de motivos de todas las normas y actos administrativos y encontrarán que son un calco de los fundamentos que acompañan la iniciativa en cuestión. Está fundado en las mismas razones.

Debo admitir que el país necesita la diagramación de una sola política energética nacional. Más allá de que defienda la propiedad de los recursos energéticos en manos de las provincias,

también comparto la idea de que no debe haber veinticuatro políticas energéticas. Obviamente, debe haber una sola política energética,

No creo que con la presente ley se puedan lograr los objetivos que se declaman ya que la mueven solamente criterios rentísticos o fiscalistas. Decía el senador Pichetto en comisión que la ley tiene un componente ideológico porque, sostenía, cambiaba el canon para entregar los permisos por inversiones. Es decir, todo esto era un cambio ideológico. Creo que, sin dudas, la ley tiene un componente ideológico grande e importante. A los que impulsan esta ley no les importa lograr la soberanía energética entendida como la entendemos nosotros.

¿Cómo entendemos nosotros esto de la soberanía energética? Como el pleno dominio, control y acceso preferente del Estado a la fuente de los recursos energéticos. Y esta ley plantea todo lo contrario; plantea la enajenación de los recursos energéticos. Entienden que la energía es solamente un producto transable en los mercados, y esto es un componente ideológico fuerte de la ley. Mientras tanto, nosotros entendemos que la energía debe ser utilizada con un criterio estratégico.

Voy a ahondar en las diferencias entre un criterio y el otro. Entre lo que es un criterio fiscalista y lo que es, a nuestro juicio, un criterio estratégico del manejo de los recursos.

Hablar de criterio estratégico significa entender que el uso del recurso debe estar vinculado no a los intereses de las empresas sino a los intereses vitales de la Nación; y no sólo a rentabilidad de las empresas o a los problemas fiscales.

La energía es tan importante que así como ya no se concibe a un país sin territorio, creo que tampoco se puede concebir un país que no pueda usar energía. No habría posibilidad de industrias, de transportes, de servicios, de comunicaciones; acá estamos hablando porque estamos consumiendo energía. O sea que sin energía no hay posibilidad de hacer absolutamente nada de esto.

Ahora bien, que este proyecto está lejos del uso estratégico del recurso, ya fue puesto de manifiesto por el propio Galuccio ante una pregunta de la senadora Michetti. En efecto, la senadora Michetti le preguntó al presidente de

YPF –porque esta ley contempla beneficios en aquellos proyectos de un monto de 250 millones de dólares, que en la actividad petrolera no es nada– qué pasa si uno tenía 250 millones de dólares pero en su equivalente en plata argentina. ¿Qué contestó Galuccio? Que no podía porque esta ley tenía por finalidad el ingreso de divisas. Todo esto consta en la versión taquigráfica. Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Esta ley está impulsada, por los dichos del propio Galuccio –autor de esta ley–, únicamente con un criterio rentístico, con un criterio de caja, con un criterio para hacernos de divisas; de la misma manera en que estuvo pergeñada la ley de privatización de las empresas energéticas del país.

Ninguna de las empresas que hoy están en los yacimientos estaría en condiciones de hacer lo que hizo YPF. Pertenezco a una provincia que, en extensión, es la tercera del país. En la década del 60, no llegábamos a los 100 mil habitantes; entre pueblo y pueblo había una distancia de 600 kilómetros, y en medio de los pueblos, nada. Si se iba en auto, uno podía acostarse en la ruta a dormir la siesta que nadie lo pisaba; pero había una estación de servicio de YPF.

Si esto hubiese sido pensado con un criterio rentístico, obviamente, no la hubiéramos podido tener nunca, porque no sacaban ni para el sueldo del empleado de la estación de servicio. Ahí no estaba Shell, no estaba la Esso; estaba YPF. ¿Por qué? Porque entendíamos que el recurso energético, más allá de la renta que pueda dar, tiene que servir para darle calidad de vida a la gente.

No sé por qué desde el Poder Ejecutivo se insiste con un modelo energético que no sólo ya no se usa más en el mundo. No puedo soslayar el triste papel que han desempeñado los gobernadores en todo este proceso, no sólo porque han resignado facultades y autonomía de las provincias, sino también porque han aceptado un tope de regalías del 12 por ciento que hasta el propio Galuccio, ante una pregunta que le hice, reconoció que eran escasas.

¿De dónde viene el concepto de regalías que todavía estamos utilizando en este modelo de explotación de yacimientos? Lo inventaron los reyes de España para el saqueo de las riquezas de América. Les daban permisos a los adelantados, venían, robaban –saqueaban–, y el rey se quedaba con un porcentaje. Este concepto de re-

galía, inventado hace quinientos años, es el que todavía estamos utilizando para el relacionamiento con las empresas. Bien podríamos haber avanzado en otro sistema de relacionamiento.

**Sr. Pichetto.** – ¿Me permite una interrupción, senador Cimadevilla?

**Sr. Cimadevilla.** – Sí, senador Pichetto.

**Sr. Presidente.** – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Señor presidente: quiero hacer una precisión más relacionada con la historia. No se llamaban regalías; los sistemas españoles eran la mita y el yanaconazgo. Esta última práctica implicaba la explotación de las minas con mano de obra esclava, que eran los pueblos originarios. Por lo tanto, no eran regalías.

**Sr. Presidente.** – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – Señor presidente: además, esta ley no contempla la exigencia a quienes exploten nuestros recursos de que se le agregue valor agregado al producto que se trae. En mi provincia, donde se descubrió el petróleo, desde 1907 hasta ahora se ha extraído mucho petróleo, y no tenemos una destilería. La única que, por lo menos, invirtió y ayudó a colonizar la región fue YPF, una empresa estatal.

Estas empresas cumplen una actividad meramente extractiva. Cualquiera que vaya a Comodoro Rivadavia verá los caños que van de los yacimientos al puerto. Y estamos aceptando una ecuación económica que es mala. Escuché decir aquí a varios senadores que en la zona de Río Negro y del Neuquén cuesta conseguir un hotel, que no hay casas para alquilar, etcétera. Es cierto, se genera un movimiento laboral; y es bueno que se genere. Pero estamos justificando la entrega de los recursos avalando la peor de las ecuaciones: cambiar recursos por salario. Éste no es un negocio ni para las provincias ni para la Argentina. Nadie está previendo que se agregue al producto que se extrae algún valor agregado; ni siquiera lo ponen como exigencia.

Lamento la posición de los gobernadores que claudicaron. El senador Pereyra creo que dijo que los gobernadores habían sido presionados, más allá de lo que se expresó en la comisión. Pero en este caso también, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Tengo en mi poder diarios en los que los propios gobernadores de las provincias petroleras hablan de las presiones del Poder Ejecutivo. Curiosamente, dos gobernadores llevaron la iniciativa de embestir contra esta ley: los gobernadores del Neuquén y de mi provincia.

Al gobernador del Neuquén le empezaron a aparecer publicaciones periodísticas por problemas económicos de algunas refinerías de su provincia. Y al gobernador de mi provincia le apareció una denuncia de la AFIP por una cuenta en un paraíso fiscal de más de un millón de dólares.

Al respecto, el propio gobernador de mi provincia y el jefe de Gabinete dijeron que la denuncia la había mandado a hacer Cristina, por la oposición del primero al proyecto. Eso está en los diarios, por si alguno los quiere leer; no estoy inventando absolutamente nada.

Entonces, no puedo dejar de analizar las concesiones que han hecho los gobernadores de provincia, ante este escenario que ellos mismos han confesado. Tampoco me legitima que esta ley haya salido de la OFEPHI, porque de la OFEPHI también salió, presidiéndola Néstor Kirchner, la privatización de YPF. Además, la actual presidenta, legisladora provincial en ese momento, en la provincia de Santa Cruz promovía declaraciones, en la Legislatura provincial, como las que tengo aquí, en las que hablaba de la necesidad de la privatización de YPF. O sea que el hecho de que haya pasado por la OFEPHI a mí, en lo particular, no me da ninguna garantía de nada, porque ese mismo organismo fue utilizado para la privatización de YPF.

Aquí también se habló de la Ley Corta y de su defensa. Necesariamente tengo que hacer una referencia acerca de este tema, porque lo que voy a decir vincula a mi provincia.

La Ley Corta tuvo un tratamiento exprés en este Congreso. Se trató en diciembre de 2006 y entró en vigencia en 2007. ¿Por qué la urgencia de esta ley? En mi provincia, se comenzaron a renegociar contratos petroleros en agosto de 2006; los comenzó a renegociar el gobierno nacional. A punto tal que el contrato más vergonzante que se firmó en la Argentina –no tengo dudas de ello– fue el de Cerro Dragón. Fue firmado por el dirigente del Frente Renovador, aliado de Massa y ex gobernador de la provincia del Chubut, Mario Das Neves. Lo comenzó a



renegociar el gobierno nacional en agosto de 2006, pero en la mitad del camino se dieron cuenta de que no lo podían firmar. Es más, en los borradores aparece De Vido, entre otros, como firmante del contrato. Asimismo aparecen cláusulas con compromisos a cargo del Estado nacional en el contrato.

Ahora bien, cuando se dieron cuenta de que no lo podían firmar, sacan la Ley Corta con tratamiento exprés y en enero de 2007 entra en vigencia. ¿Saben cuánto duró el principal yacimiento petrolero del país en manos de mi provincia durante la gestión –vuelvo a repetir– del dirigente aliado a Massa, Mario Das Neves? ¿Sabe cuánto duró el yacimiento más importante del país en manos de la provincia a partir de la Ley Corta? Dos meses. En dos meses, lo habíamos reventado. Son los mismos a los que yo escucho hoy que critican esta ley, por el 12 por ciento del tope de regalías. ¿Sabe qué firmó el gobernador Das Neves? Un tope a la regalía del 12 por ciento.

Se critica porque les quitan facultades impositivas a las provincias. ¿Sabe cómo resolvieron la cuestión impositiva en mi provincia primero Das Neves y luego Buzzi? Eximiendo del pago de impuestos a las empresas petroleras, lo cual en la práctica –lo quiero aclarar– implica regalarles a las empresas petroleras varios presupuestos provinciales. Sin embargo, se los regalaron.

¿Por qué? Mire, señor presidente, el impuesto de sellos, que es uno de los que se eximieron, se calcula sobre el monto del contrato. Precisamente, para evitar que se conociera el monto del contrato, porque también estos contratos tienen prórrogas de prórrogas, que llevan la concesión hasta el agotamiento del yacimiento. Entonces, para evitar que se conociera el monto del contrato, eximieron –entre otras cosas– del pago del impuesto de sellos.

Es decir, en definitiva, con relación a esta norma, fueron precursores los gobernadores de mi provincia en este modelo de enajenación.

En ese sentido, en Chubut venimos oponiéndonos hace tiempo a este tipo de contratos. Y nos agobian, les puedo asegurar, con publicidades, hablándonos de su bondad. Es más, hay sindicalistas del petróleo –no voy a decir todos– que apoyan este tipo de contratos; sindicalistas que recuerdo que también apoyaron la

privatización de YPF, cuando se quedaban sin trabajo miles de compañeros.

Entonces, a veces es muy difícil tener espacios para plantear este tipo de cuestiones. Y lo quiero hacer acá, porque creo que una futura acción de un futuro gobierno será poner en revisión a todo este tipo de contratos y a todo este tipo de concesiones. Y no van a poder invocar las empresas inseguridad jurídica. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro derecho positivo, desde 1968, por la ley 17.711, está incorporada la teoría de la lesión. ¿Qué es la teoría de la lesión? Significa que yo no puedo pagar esta lapicera 1.000 pesos, porque no lo vale. Si lo hiciera, tengo derecho a rescindir el contrato, devolver la lapicera y que me devuelvan los 1.000 pesos o a ajustar el precio. O sea, tiene que haber equivalencia entre las prestaciones.

Pues bien, yo los invito a que observen la ecuación económica de cualquiera de estos contratos, a ver si le encuentran equivalencia.

En mi provincia se facturan por año más de 6.000 millones de dólares de petróleo, y en el presupuesto de mi provincia quedan menos de 400 millones de esa moneda. ¿Esto es la lapicera por mil pesos o no?

Entonces, estos contratos son lesivos al interés nacional y pueden ser revisados. Y debemos, quienes tenemos responsabilidad política, a aquellos corsarios del petróleo que se animan a firmar este tipo de concesiones, avisarles que cuando cambie el gobierno, también se van a ver expuestos a que esos contratos sean revisados judicialmente.

Además, señor presidente, esta norma –para mí– es peor que la ley de privatización de YPF. ¿Sabe por qué? Porque con la ley de privatización de YPF, en definitiva, estábamos privatizando de la superficie para arriba: privatizábamos los depósitos de combustible, los oleoductos, las cigüeñas que chupaban. Pero hoy, ¿qué estamos privatizando?

Con la ley de privatización de YPF nos quedaba la esperanza de que en el año 2017 se vencerían las concesiones y el Estado nacional o provincial volvería a recuperar los yacimientos. Hoy, ¿qué estamos privatizando? Lo de abajo. Estamos privatizando los yacimientos. Y los estamos enajenando a precio vil.

¿De dónde sale el 12 por ciento de regalías? También esto hay que recordarlo. Sale de una ley de petróleo pensada para el monopolio estatal de YPF. Era el 12 por ciento, pero el otro 88 por ciento era renta argentina. Era renta nacional. Luego se privatizó YPF y se dejó vigente un sistema “regalístico” pensado para una empresa estatal. Otra barbaridad que hemos hecho.

Con relación a este tipo de contratos, hoy se hablaba acá de las ventas. Y quiero referirme a la British Petroleum, que es una de las empresas beneficiarias de este contrato. Tuvo un problema ambiental en el Golfo de México y la condenaron a pagar alrededor de 5.000 millones de dólares. ¿De dónde los sacó? Vendió una parte del paquete accionario de Cerro Dragón a los chinos. Y con esa plata pagó miles de kilómetros de mi provincia. Esto lo permite este tipo de contratos. Por eso quiero decir que estos contratos hay que revisarlos.

En ese sentido, aquí tengo algo que no lo dice Cimadevilla, sino la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Hay una autodenuncia de coimas por parte de la British Petroleum, por la firma del contrato de Cerro Dragón. Ese contrato tiene dos firmas: la del gobernador Das Neves, dirigente del Frente Renovador; y la del dueño de la empresa. Y aquí está, señor presidente, la orden de investigación hecha por la Bolsa de Valores de Nueva York ordenando la investigación para determinar a qué funcionario, dirigente o partido se coimeó. Lo digo para que no expresen que es una cuestión de Mario Cimadevilla. Es una cuestión que se está ventilando en la Bolsa de Valores de Estados Unidos.

Para terminar, señor presidente, otra de las cosas que hacemos por ley y que no vamos a poder cambiar es que el control del petróleo, por declaración jurada, ahora está establecido en la ley. Así, estamos sometidos a lo que las empresas nos dicen que sacaron.

Al respecto, le voy a contar un caso que ocurrió en mi provincia.

Usted sabe que en mi provincia hay pingüíneras. Un año, hace ya bastante, aparecieron pingüinos empetrolados. Entonces, se inició una investigación en el Juzgado Federal de Rawson para ver qué barco había perdido petróleo. Los barcos salen de Comodoro Rivadavia y llegan a Ensenada, a la destilería. Entonces, era fácil

saber a qué barco se le había caído el petróleo, porque el que salió con 100 y llegó con 80 perdió 20 en el camino. Pero, ¿sabe qué ocurrió y por qué no se pudieron encontrar responsables? Los que salieron con 100, desembarcaron con 140. O sea, que no se pudo saber quién perdió el petróleo. Pero sí se pudo saber cómo nos robaban con las declaraciones juradas. Éste es el sistema que se establece ahora y por ley. Cambiar este sistema, va a costar.

Señor presidente: realmente tengo muchas dudas a veces sobre cuál es la posición del partido de gobierno en este tema. Yo pensé que había cambiado. Y, como decía Konrad Adenauer, no hace falta defender siempre la misma opinión, porque nadie puede impedir volverse más sabio; puede cambiar de opinión para hacerse más sabio. Yo a veces pensaba que cuando renegaban del pasado, los que están en el partido de gobierno —porque siempre reniegan del pasado; no fueron responsables de nada— se estaban haciendo más sabios porque cambiaban de opinión. Pero no, señor presidente: hoy están convencidos y mantienen la misma opinión.

**Sr. Presidente.** — Gracias, senador.

Senador Fernández, tiene la palabra.

**Sr. Fernández.** — Muchas gracias, señor presidente.

Un comentario adicional, nada más, a lo dicho por el senador preopinante. Son dos acotaciones.

Una es que la Ley Corta fue votada por unanimidad, con lo cual estaban todos...

**Sr. Linares.** — Menos Giustiniani, que no estuvo...

**Sr. Fernández.** — Bueno, si no vino, que se queje cuando venga. (*Risas.*)

El segundo tema es que en el convenio de Cerro Dragón en Chubut, de los nueve diputados radicales, seis votaron...

**Sr. Presidente.** — Por favor, senador Cimadevilla...

Senador Fernández: el senador Cimadevilla le solicita una interrupción...

**Sr. Fernández.** — Cómo no.

**Sr. Presidente.** — Senador Cimadevilla, tiene la palabra.

**Sr. Cimadevilla.** — Ése es un golpe bajo, porque pretender vincular al radicalismo en

el apoyo a este contrato....; porque me ibas a decir que hubo diputados que lo votaron. Es cierto, pero fueron expulsados del partido. La expulsión ratifica que la posición de mi partido estuvo siempre en contra.

**Sr. Presidente.** – Gracias.

Senador Fernández.

**Sr. Fernández.** – Al contrario, reivindicó que a lo mejor no estando de acuerdo con la situación, de los nueve seis votaron y tres no. Bueno, hay que decirlo. Yo no hago chicanas para ofender a nadie ni mucho menos. Quiero decirlo en este marco: pongamos las cosas en el lugar que tienen que estar porque es importante que se conozcan.

Estamos en un debate trascendente. Se ha presentado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, el 316/14...

**Sr. Presidente.** – Senador Cimadevilla, por favor.

**Sr. Fernández.** – ... que define y encamina las políticas públicas hacia el autoabastecimiento que hemos definido hace un montón de tiempo y que tenemos esa pretensión. Que desde 1907 con el primer yacimiento en Comodoro Rivadavia comienza el mismo propósito y el mismo propósito eleva, en 1922, don Enrique Mosconi en la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con el mismo objetivo, no tengo ninguna duda de eso.

No estoy hablando de la falacia que nos instalan cada vez que tienen oportunidad las viudas de la Secretaría de Energía, que hablan siempre de los buenos viejos tiempos cuando no importábamos combustible. Un problema que se olvidan: un país en recesión, sin infraestructura, la industria en depresión, 75.000 industrias cerradas por falta de competitividad, la mitad de los argentinos excluidos del sistema energético, 54 por ciento de pobreza, 25 por ciento de desocupación y Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, el sur de Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, Formosa, el interior del Chaco y Santiago del Estero no tenían gas. ¡No tenían gas! Esas once provincias hablaban por sí mismas de la situación tan desesperante en la que se encontraba este país.

Esta norma es fruto de un debate profundo en el que todos los gobernadores discutieron. A mí no me cabe ésa que me vengan a decir que

fueron extorsionados porque le publicaron una nota, porque tenían que reestructurar la deuda y le dijeron que no. Ningún gobernador se come semejante cosa, presidente, ningún gobernador, porque en el caso de que eso existiera, que rechazo terminantemente porque este gobierno no actúa de esa manera, lo rechazo, tengo que reivindicar de los gobernadores, que algunos no son de mi partido, la estatuta para defender los intereses de sus provincias. Por Dios, entonces estaríamos en manos de facinerosos, que no lo son. Entonces, tengo todo el derecho de decir lo que estoy diciendo.

Las provincias petrolíferas, llámense Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa, Jujuy y Tierra del Fuego, han participado de esa manera. Hubo cuatro borradores, ya se explicó acá: algunos que no coincidíamos ni por casualidad con lo que se pretendía, absolutamente pensados con un concepto empresario, y otros que fueron cada vez acercando más a la posición de la política para poner las cosas en su lugar y verlo enriquecido con decisiones que salieron de este Honorable Senado de la Nación, con lo cual eso me hace sentir mucho más todavía.

El proyecto en tratamiento consolida aún más la decisión de la reforma de la Constitución del 94 con el artículo 124 *in fine* porque hace una definición estratégica completa del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

Modifica la ley 17.319, la ley larga, conocida por todos, del 23 de junio de 1967, prácticamente a un año de la revolución que diera por tierra con el gobierno de don Arturo Umberto Illia –prefiero llamarla de esa manera antes que mencionar a los facinerosos que se hicieron cargo del gobierno–, haciendo uso de las atribuciones que les confería el artículo 5º del Estatuto de la Revolución Argentina. Un mamarracho.

Me pregunto: ¿un acuerdo entre los gobernadores de este país con el Estado nacional no es más saludable que una ley del gobierno de Onganía? Me cuesta creer que estemos hablando de estas cosas. Me cuesta creer.

Un Estado ausente permitió que mientras estas cosas pasaran, las que nos venían sucediendo en estos veinte años, se desentendió el Estado de la economía y, por supuesto, de YPF y de la política hidrocarburífera. Así fue sucediendo en

estos últimos veinte años. Ese Estado ausente permitió iniquidades fenomenales, como por ejemplo que la provincia de Salta no estuviera conectada al sistema eléctrico nacional. Se habilitó en 1998 la central eléctrica Termoandes, que producía 642 megavatios. ¿Sabe para qué se producían esos 642 megavatios? Para todas las empresas mineras del norte de Chile. ¿Sabe en qué se transportaba la energía? En una línea de 345 kilovoltios, construida deliberadamente en una tensión incompatible con el sistema nacional interconectado, deliberadamente para que no se pudiera tomar y se pudiera vender directamente allá.

No se construía en el país un metro de caño ni por casualidad, pero se habilitaron nueve gasoductos para exportar el gas hacia Chile, sin contar con reservas comprobadas, por supuesto. Es bueno recordar que es un negocio millonario que inventaron estos vivos. Yo no me quiero callar. Si es mi gobierno, es mi gobierno. Yo me quiero hacer cargo de lo que tengo que decir. La realidad es que nosotros no podemos bancarnos esa jugada.

Pero aparece un negocio millonario con contratos de dos dólares el millón de BTU, que revendían en el City Gates de Santiago de Chile a 30 dólares el millón de BTU. Con el gas exportado a precio vil desde 1996, nosotros le hemos transferido a Chile algo así como el 20 por ciento del producto bruto interno chileno. De contar con ese gas de los últimos diez años hubiésemos ahorrado los argentinos 33.500 millones de dólares. Mire si estamos en una situación de vocación formal de transformar la Ley de Hidrocarburos para que nos dé la posibilidad de volver al autoabastecimiento. Es impresionante.

Esta pésima política que existió durante un buen tiempo cambia recién con Néstor Kirchner. El primer hito es la ley 26.197, la Ley Corta, con lo cual las expresiones que dice el senador preopinante, que son absolutamente respetables, no son las que motivaron a ese tema, sino motivaron realmente en una cabeza que tenía puesto como objetivo la transformación de esta Argentina en términos de lo que se necesitaba específicamente como autoabastecimiento o como recomposición de su política energética. Era fenomenal lo que se necesitaba en este caso. Primer paso para reconocer a las provincias el

dominio originario y la administración de sus yacimientos, conforme dice el artículo 124 *in fine*.

El 3 de mayo de 2012 se sanciona la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, la 26.741. El Estado nacional recupera el control de YPF. Me causa no digo gracia, porque sería irrespetuoso, sino cosquillas cuando dicen que el 49 por ciento es de otro. No, el 100 por ciento era de otro, ahora recuperamos el 51 por ciento. ¡No me cambien la bocha! Esto es al revés: el 100 era de otro, no importa quién lo hizo. Si tenemos que hacernos cargo, nos haremos cargo de lo que corresponda.

Declara el interés público nacional y el objetivo prioritario del autoabastecimiento, como la exploración, la explotación, la industrialización, el transporte, la comercialización de hidrocarburos.

Define que el Poder Ejecutivo fijará la política en la materia. Es fundamental este punto porque lo citaremos en varias oportunidades.

La ley 26.932 aprueba el acuerdo con Repsol. Repsol dijo de entrada 18.000 millones de dólares, no 5.000. Después, cuando se plantean ante la SEC dicen 10.000 millones de dólares. Así que no dijo eso tampoco.

El proyecto en tratamiento tiene su génesis en la OFEPM. ¿Quiénes están en la OFEPM? Las diez provincias petrolíferas. Ahí están y ahí se habla de lo que es defender los intereses de sus provincias. No voy a aceptar bajo ningún punto de vista que ninguno de los gobernadores esté obrando de mala fe, que sea un venal. No lo acepto. No acepto que entregan los intereses de sus pueblos so pretexto de una presión para tratar de acordar una Ley de Hidrocarburos para el futuro. Es impensada una cosa de estas características.

Por supuesto que hay que interpretar y ver esta ley de la mejor manera posible en función de la realidad de cada una de las provincias. Seguramente Tierra del Fuego y Chubut estarán mirando hacia el *off shore* por la importancia que tiene, y seguramente Neuquén estará viendo hacia Vaca Muerta y GP. Seguramente así será. Seguramente Mendoza estará viendo hacia el petróleo pesado. Así será, seguramente. Pero lo importante es que no encontramos forma para poder acordar que no sea a través de un acuerdo con los gobernadores, no de una ley de acuerdo porque no lo es. El



único caso que establece nuestra Constitución es específicamente la ley de coparticipación. No lo es porque además la ley convenio impediría su modificación para ser modificada por otra ley convenio. Además, no le daría la posibilidad de reglamentarla tampoco, con lo cual no es una ley convenio, es un acuerdo inteligente entre las provincias y el Estado nacional para que todos se sientan más o menos comprendidos en la mejor forma de administrar los recursos con los que cuenta cada uno.

Se definieron claramente seis objetivos: los plazos para la exploración y la explotación, diferenciados conforme los tipos de yacimiento; las alícuotas de regalía; los aportes que la industria hará por la responsabilidad social y empresaria y el Estado nacional por infraestructura; la adjudicación de las áreas por licitación, donde va a priorizar los programas de inversión y la actividad exploratoria, los programas fiscales y tributarios más o menos homogéneos y parejos en todo el país.

Escuchaba a algunas señoras y señores senadores diciendo que la Legislatura va a intervenir. ¡Claro que va a intervenir! Si estamos tratando de ponerlo parejo y se fijan las tasas de un determinado lugar que es la mediana de lo que sucede en el país, las que estén más altas van a tener que ir a buscar y la que estén más bajas van a tener que ir a buscarlo también. No hay otra forma, no hay leyes supra provinciales, no existen esas cosas.

Mecanismos promocionales para las grandes inversiones y la legislación ambiental que la dejo para el final, tema que me interesa específicamente tratarlo como tema separado.

Aclaramos lo que acabo de sostener respecto del tema de la ley convenio y respecto del proyecto, específicamente, no voy a hablar porque me parece que ya se ha explicado todo lo que se tenía que explicar, pero sí puedo recoger todo lo que se dijo en esta Cámara porque lo quiero contestar. Es la mejor forma de que vayamos aclarando un poquito el panorama de cómo viene.

Se presentó un dictamen en minoría del bloque FAP-UNEN que propone la nacionalización total de la actividad hidrocarburífera, la regula totalmente la autoridad nacional. Tiene serios problemas conceptuales ese tema, presidente. Desconoce la realidad de los yacimientos

existentes y potenciales de los recursos, no lo tiene en cuenta en ningún momento. Ignora las condiciones de modelos de asociación. Le soy honesto, cuando estudiamos este tema, conforme lo iban diciendo, nos da más para que se entienda el esquema que se propone en este dictamen en minoría para Arabia Saudita o la OPEC que para la República Argentina. Desconoce los fundamentos de la inversión petrolera a nivel mundial, transforma el dominio provincial en una mera declaración, porque trabaja específicamente como si fuera el Estado nacional un Estado unitario que toma decisiones per se y no tiene en cuenta a las autonomías provinciales. Reconvierte todos los contratos, con lo cual se imaginan el festín de las indemnizaciones que se vendrían detrás de ese punto. Prohíbe el *fracking*, ergo prohíbe específicamente todo lo que tiene que ver con no convencional y, por lo menos, el 30 por ciento del convencional que también requiere de *fracking*, y cambia el régimen en positivo, con lo cual también impacta en la coparticipación. Ese dictamen que han presentado tiene nuestras críticas también. Como critican nuestros proyectos, nosotros tenemos el derecho de hacer lo propio con los otros dictámenes.

Nos sucede lo mismo con el presentado por la Unión Cívica Radical, con unas sorpresitas bastante interesantes, porque no son los proyectos que estuvieron hasta el día de ayer. En estos nuevos proyectos contemplaron muchas de las cosas de nuestro proyecto, cosa que nos hace muy felices, que hayamos aportado a esa cosa.

Dice: reduce los plazos de permiso de exploración a dos períodos de tres años cada uno, como establece nuestro propio proyecto. Fijan canon de exploración y de explotación, iguales que nuestro propio proyecto. En el artículo 170 se incorpora un artículo igual al 30 de nuestro proyecto, revirtiendo las áreas de Enarsa, igual que lo propusimos nosotros.

En los otros proyectos que nosotros venimos viendo con anterioridad proponían licitación con derecho de preferencia para el operador. Fíjense que no tiene nada que ver con lo que se dijo en el debate del día de hoy, nada que ver. Insisto: proponían licitación con derecho de preferencia para el operador. Ahora toman nuestro modelo, cosa que nos satisface, con bono de prórroga, con idéntica fórmula de cálculo. Pero miren qué cosa

interesante: ese bono, en lugar de ir a las provincias, y ésta es la Cámara donde hay que hablar de esas cosas porque todos representamos a las provincias, no va a las provincias, sino que va a financiar el fondo que va a administrar el Poder Ejecutivo nacional. ¿Lo sabrán los senadores de las provincias petrolíferas que han firmado ese dictamen en minoría? Lo dudo, presidente. Fuertemente lo dudo.

Propone que YPF se rija por la ley de administración financiera. Esto condenaría a YPF a no poder operar ni competir; imposible es esto. Lo hemos explicado cincuenta mil veces. YPF es una sociedad anónima, conforme la sección V de la ley de sociedades y es necesario que así lo sea, una sociedad anónima lisa y llana, para poder operar y competir en el mercado nacional e internacional. No se puede hacer de otra manera. En esto insistimos hasta el cansancio. Además, eso hay que verlo a la luz de lo que expresa la Securities Exchange Commission. ¿Por qué? porque YPF cotiza en la Bolsa de Estados Unidos y eso no lo podemos evitar. Tenemos que ir específicamente a la regulación que establece la propia SEC.

Veamos qué dijeron algunos de los legisladores, que no los menciono porque se dirigieron a mí, tendría que contestarles y yo quiero allanarme al tiempo más corto posible. Hace tres meses en el Club del Petróleo alguien explicó el proyecto que tenía. ¿Qué me dice la gente nuestra que estuvo presente en ese club? Que no tuvo consenso la propuesta de uno de estos dictámenes en minoría, porque los operadores de las industrias nacionales e internacionales vieron como malo al proyecto. Y después de las preguntas, lo vieron más malo todavía. Y dicen que nunca hicieron una definición concreta de lo que significaba lo convencional con lo no convencional, con lo cual estamos en aprietos. Ése era el proyecto que tenían.

Verdades absolutas que se vertieron y que yo no las quiero dar vuelta, demostrando cuántos errores se vierten cuando se debate acá. Lástima que no esté el autor en este caso. Nunca está cuando yo hablo.

Decía que no están reglamentadas las cesiones y transferencias a terceros. Todo permisionario o concesionario debe cumplir con los requisitos establecidos en la reglamentación. Tiene que estar inscripto en el registro de em-

presas petroleras u operadores. No puede no hacerlo, tiene que estar inscripto y tiene que acreditar la solvencia financiera y la capacidad técnica para operar los yacimientos. No es para un "pichi", para un señor que está sin trabajo y quiere llevar un salario adicional a su casa, no tiene nada que ver esto. Estamos hablando de cosas en serio. ¿Cómo van a decir que no están reglamentadas las cesiones y transferencias? Estamos hablando de una definición más concreta imposible, de que si no tiene esa estatura no se puede cumplir.

El artículo 68 del dictamen en minoría de la Unión Cívica Radical es igual. Sólo cambia la autoridad de aplicación del registro, con lo cual estamos hablando de una cosa bien contundente, no se puede decir que no está contemplado. Y nos encontramos con un llamativo esfuerzo de la oposición por encajarle al gobierno el sayo de una mala gestión energética. ¿Y qué dicen? Lo que decía de Narváez: no tengo un plan. No tienen un plan.

Este gobierno, presidente, ha invertido más de 20 mil millones de dólares para incorporar 8.600 megas. Cuando comenzó la gestión, el 25 de mayo, el primer pico se produce a fines de junio, me acuerdo que fue 14.783, si no me equivoco, el pico. Se me dio por preguntar en esa reunión: "¿cuánto era el cuco? ¿A dónde no podemos llegar nunca?" A 18 mil. No hay nada que lo soporte. Estamos hablando de más de 22 mil megas de pico y con una producción objetiva de 27 mil megas sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo hablan de que no tenemos plan?

Subimos la cota de Yacyretá a 83 metros, hicimos las centrales de ciclo combinado, 17 mil millones de dólares destinados a incorporar 2.100 megas más. La construcción de la hidroeléctrica Néstor Kirchner, Jorge Cepernic, 4.244 kilómetros terminados de líneas de 500 kilovoltios, Choele Choel-Puerto Madryn, Puerto Madryn-Pico Truncado, Pico Truncado-Río Gallegos, Río Gallegos-Calafate, San Juan-Mendoza, Recreo-La Rioja, tercera línea de Yacyretá a Buenos Aires, interconexión NOA-NEA, interconexión Comahue-Cuyo, Rodeo-Calingasta y la construcción –que no tardará mucho en concluirse– de Río Turbio. Son 2.400 kilómetros terminados de gasoductos troncales y 3.000 en ejecución. El segundo cruce

del estrecho de Magallanes, el cruce a Bolivia por el Juana Azurduy. ¿Es que nadie se ha dado cuenta de semejante obra? Este esfuerzo de los argentinos, porque es de los argentinos, no es del gobierno, ¿nadie lo ve? ¿No se dan cuenta?

Yo ruego: no usen como blasón que el autoabastecimiento se produce en las postrimerías del gobierno del doctor Alfonsín. Lo ruego por el respeto y el cariño que le he tenido al doctor Alfonsín. No es peyorativa mi expresión pero yo les pido que recuerden en qué situación se encontraba el país.

Voy a leer una cita: “Si el país no hubiera crecido extraordinariamente en los últimos diez años, no existiría hoy problema alguno de energía. En la crisis no hay problema de energía, ya que el consumo se reduce hasta eliminar el desajuste”. ¿Quién lo dijo? ¿Kicillof, De Vido, Matranga? No, lo dijo don Arturo Jauretche en “El Plan Prebisch: retorno al coloniaje” hace cuarenta y cinco, cincuenta años. ¿Cómo se puede decir que no hay un plan estratégico para brindarle realmente a la Argentina toda la infraestructura para que su energía pueda funcionar? Y a eso debemos agregar la recuperación de YPF, que el cien por ciento estaba en manos de extranjeros y ahora el 51 está con nosotros. Ya hemos ganado una parte importantísima.

El Plan Gas para impulsar su desarrollo. Se reconoció a los no convencionales por decreto 929. Se impulsa este proyecto de ley que da todo un marco distinto para poder discutir cómo se va a llegar a la adjudicación de las áreas, porque hasta esta ley lo que decía el senador Cima-devilla, quien se ha ido también —una pena—, es que se hacían hasta 5 áreas y por concurso. Y por más vuelta que se le quiera dar con una explicación técnico-jurídica, quienes conocemos la administración pública sabemos que el concurso es amañado, uno puede hacer lo que se le ocurre. En la licitación pública internacional es donde no hay vuelta de hoja, es a cara de perro. Acá hay que saber quiénes son los que tienen la estatura para poder competir en este tema.

Sobre el canon: primero dijo el senador Sanz que se eliminó y después dijo que es insignificante. No terminé de ver bien dónde se quería parar. No se eliminó nada. El artículo 14 modifica los artículos 57, de canon de exploración, y 58, de canon de explotación. Se reemplazó —es cierto— la actualización de la variable por el

Brent. ¿Por qué se modifica? Porque se pone el artículo 102 de la ley que refleja el ajuste del valor en pesos en la Argentina. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El Brent nunca oscila mucho más allá del 1,5 por ciento y en el peor de los casos, en una situación recontra incómodísima, se va a un 5 de diferencia. En la Argentina no. Aquí el “cantaclaro” es el que realmente está sucediendo y por eso entendíamos que el mejor impacto de la actualización estaba en un índice de esta característica.

“No se incentiva la competencia”, dice. No hay continuidad sin competencia en este proyecto. Si usted no compitió, si no está en condiciones, no tiene continuidad. No es verdad eso de que hay prórroga *sine die*. El operador petrolero compitió por el permiso y por la concesión. Ganó la licitación, exploró y desarrolló. Transformó sus reservas. Para continuar debe hacer las cosas bien, en primer lugar, y proponer un nuevo plan de inversiones, un nuevo negocio para que sea contemplado por la propia autoridad de aplicación —nacional o provincial— con el objeto que defina exactamente si lo que hicieron es lo que correspondía y si el plan de inversiones que proponen, más el nivel de “explorabilidad” son los que nosotros pretendemos. Porque como estamos buscando el autoabastecimiento, el que más nivel de inversiones tenga en estos planes es el que va a llamarnos más la atención. Si no es así, tiene la autoridad de aplicación la capacidad para quitarle la concesión.

Entonces, ¿qué estamos hablando de prórroga *sine die*?

¿Qué sucede si uno corta abruptamente lo que está sucediendo con algún concesionario por las dudas, para no tomar posición sobre si es bueno o si es malo? La continuidad evita que caiga la producción. Es lo único que nos está garantizando antes del vencimiento, porque si uno no da eso y lo corta por las dudas, lo que garantiza es una caída lisa y llana por lo menos —eso dicen los técnicos— del 25 por ciento de la producción. ¿Por qué? Porque el concesionario no tendría incentivo para seguir con la explotación y bajaría su inversión. Es inevitable. Al final de la concesión competirían sobre un yacimiento pobre —estuvo extraído—. Por lo menos hablando de convencionales estaríamos hablando de 25 más 10, es decir, como mínimo, 35 años; un yacimiento más pobre, de menor

inversión, que paga menos regalías y no abona el bono por prórroga. Todas cosas negativas, con lo cual están dados los datos bien claros para saber quiénes son los que van a poder prorrogar específicamente. No es *sine die*. No es llegar y “hola, llegué” y firmo. Es un poquito más serio.

Decía otro senador que no quería un plazo de 90 días que limitara a las provincias para negociar los contratos. Los 90 días son para que renegocien aquellos que con la ley actual están en contratos y tienen que resolver en función de la ley larga, la 17.319. Es para ellos. La provincia tiene el plazo que quiera. No tiene 90 días. Si se superan los 90 días deberá acogerse a esta nueva ley.

No hay cosas que estén impidiendo las cosas, en serio. Lo que está diciendo es que el anterior para resolver su situación tiene que adaptarse a esos 90 días y cumplir dentro de los 90 días. ¿Se pasó? El otro plazo ya es de la provincia, que es la autoridad de aplicación. Dará el plazo que quiera, pero con esta nueva ley.

Se criticó la inversión de YPF en los últimos años. YPF invirtió un poco menos de los 2.000 millones en 2011 y más de 5.000 millones entre 2013 y principios del 2014. Hay una diferencia apreciable, no se puede decir eso.

Una senadora dice: deberíamos imitar al Uruguay. Independientemente de que nuestros hermanos uruguayos tienen un país muy chico –son 167.000 kilómetros cuadrados y 3 millones y medio de habitantes–, me llama la atención que lo elogie, no porque yo no lo haga, sino porque lo que ella vierte como su apreciación respecto de la política ambiental se da de patadas con su expresión. Porque ella elogia a Uruguay por lo que significa la generación de la energía de biomasa. Lo que no toma en cuenta es qué hizo Uruguay con el *off shore*. Porque hace 3 años Uruguay llamó a una licitación de 1.000 millones de dólares para explorar el *off shore*. Entonces, miramos al Uruguay porque son buenos con el tema de la biomasa, pero no miramos a Uruguay que son malos como nosotros que queremos trabajar con el *off shore* y estamos en una situación tan particular como ésta.

Otra senadora dice: las provincias que no pertenecen al OFEPHI no fueron consultadas. La política energética –quedó bien claro y lo resalté desde un principio porque lo dice la Ley Corta– es potestad del Poder Ejecutivo nacional,

artículo 2º. Las provincias que no tienen representantes en OFEPHI los tienen en el Senado para discutir esta situación.

Y la senadora nos presentó un mapa. También tiene por costumbre no quedarse cuando uno habla. No sé por qué, pero dicen un montón de cosas y se van; es una pena que no estén.

Comentaba que la senadora nos mostró un mapa donde dice que el satélite encontró petróleo. ¿Saben qué bueno sería eso? Es espectacular descubrir petróleo por satélite. Pero desgraciadamente eso es Cartoon Network, no tiene nada que ver con la realidad. Y si San Luis descubre petróleo, se integra al día siguiente al OFEPHI, cosa que nos encantaría, porque es más riqueza para nuestras provincias. Y a los que no nos ponemos colorados cuando nos autodenominamos federales, eso nos da placer, una enorme satisfacción.

Nosotros vemos que la mayoría de las industrias están de acuerdo con esta visión. Insisto en el acuerdo entre las provincias y el Estado nacional. Porque lo que se busca de fondo es una definición que nos comprenda a todos.

Venimos a los golpes desde hace muchos años, no veinte. En 1955, Juan Perón propuso al Congreso otorgar una concesión de 40 años a Standard Oil para que explotara el petróleo en 50.000 kilómetros cuadrados en la provincia de San Cruz. Recibió durísimas críticas de la oposición, acusándolo de violar la soberanía argentina, todo quedó sin efecto tras la revolución fusiladora.

Ya en el exilio diría Juan Perón: “YPF no tiene capacidad organizativa, técnica o financiera para realizar un esfuerzo de esa naturaleza. Hacer de esto una cuestión de amor propio es peligroso y estúpido”, en dura crítica a los nacionalistas de opereta. Porque los nacionalistas de opereta nos contaban esa historia.

Arturo Frondizi –lo dice un peronista medular–, un estadista, una cabeza privilegiada para el momento, al asumir impulsó la ley 14.773 que, como dijo la senadora Negre de Alonso, también gozaba de proscripciones porque el peronismo estaba proscripto en ese momento. Pero dio a la Nación la propiedad de los yacimientos y autorizó a YPF a contratar obras y servicios de explotación y contrató la extracción de petróleo a empresas extranjeras. Se compraba



a altos costos internacionales lo que producía a bajo costo nacional.

En julio del 58 Frondizi explicó la razón de su giro ideológico. Dijo: la Argentina no tenía más divisa para comprar petróleo. En consecuencia, había que traer a los capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo.

El país trabaja para pagar petróleo importado, cuando lo tenemos bajo nuestros pies y no nos hemos decidido a extraerlo en la cantidad de necesitamos. Esa dependencia de la importación ha deformado nuestra economía. Las opciones son seguir en esa institución o decidarnos a explotar nuestra riqueza. Pero la solución de fondo sólo puede provenir del autoabastecimiento del petróleo. Las cabezas preclaras de este país lo vieron siempre. Néstor Kirchner lo vio y por eso comenzó desde el primer momento a producir una transformación de fondo en la política energética de los argentinos con semejante nivel de inversión que les acabo de comentar. ¡Impresionante!

El último de los seis cometidos que se propone el acuerdo firmado entre los gobernadores de la OFEPHI y el Estado nacional es el referido al medio ambiente. Y en esto me niego, presidente, a ser vaticinado, proyectado en el pensamiento por el resto de los bloques. Como diría Fernando Savater: “Ocupate de ti mismo, so capullo, que más te vale”. ¡Qué te metés conmigo! ¡Dejá que yo pienso lo que a mí se me antoja! ¡No digan por mí lo que quieren hacer!

Nosotros –lo hablabamos con el presidente de mi bloque– nos comprometimos a sacar una ley de presupuestos mínimos, conforme establece el artículo 41 de la Constitución nacional, porque es lo que corresponde: sacar una ley de presupuestos mínimos. ¡Y estoy convencido de que tiene que hacerse! Y terminar de una vez por todas con estas definiciones de que todo lo que tiene que ver con el no convencional, por el *fracking*, está poniendo en riesgo la vida de los otros, ¡porque no es verdad, presidente!

Se utiliza goma guar. ¿Sabe para qué se utiliza? Para dulces y para helados. El cloruro de calcio se utiliza para las bebidas; el cloruro de sodio, sal de mesa o soluciones; enzimas, aditivo de vino y pasta de soja; sales de borato, vinagres; sílicea, limpiadores de vidrios. ¡Todo lo que tiene que ver es de uso humano! No hay ninguno de

los aditivos utilizados en el *shale* para atacar el esquisto o la pizarra, como se llama específicamente, para poder romper la roca madre; no tiene ningún aditivo que sea contaminante o que produzca daño a la vida humana.

Me niego, entonces, de cualquier manera, a que nos expongan a tener que hacernos quedar como que nosotros tenemos una visión distinta y que nos da lo mismo que haya una ley de presupuestos mínimos a que no la haya. Habrá una ley de presupuestos mínimos a cortísimo plazo, porque debe haberla y porque a este proyecto hay que acompañarlo con ello, con una definición que haga que se defiendan los intereses de las provincias y sus recursos naturales y los de los ciudadanos de cada una de las provincias y de las costas, en caso de una jurisdicción específica del Estado nacional, en defensa de sus intereses, porque no puede ser de otra manera.

¡En esto estamos convencidos, presidente! El bloque del Frente para la Victoria está convencido y decidido a acompañarlo con su voto para tratar de tener a la brevedad una nueva Ley de Hidrocarburos que comprenda la totalidad del país, con las realidades provinciales garantizadas de la mejor manera y el cumplimiento de sus necesidades para poder conseguir las inversiones necesarias que, en un tiempo determinado, nos deje o nos permita dejar de importar y nos permita también contar con el autoabastecimiento que los argentinos reclamamos para nosotros hace un buen tiempo; y vamos en ese camino sin detenernos un solo segundo.

**Sr. Presidente.** – Senador Verna, tiene el uso de la palabra.

**Sr. Verna.** – Presidente, yo no pretendo conducirla la sesión, pero en este momento debería tener la oportunidad de contestar, si tiene alguna observación, el miembro informante. Y como usted no lo ve porque está en el recinto, a su espalda, yo quisiera que lo consultara acerca de si va a hacer uso de la palabra.

**Sr. Presidente.** – No. Fue el senador Fernández quien tomó esa tarea.

**Sr. Verna.** – Muchas gracias.

**Sr. Fernández.** – Espero no lo tome a mal.

**Sr. Verna.** – No, no. Tenía miedo de que después tuviera que hablar Marcelo. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** – Usted no sólo quiere dirigir la sesión, sino dirigir quién habla del bloque oficial.

**Sr. Verna.** – Perdón, presidente.

Antes de hacer algunos comentarios propios, quisiera contestar algunas observaciones que se hicieron.

Una de las primeras preguntas que hubo en el debate fue qué intereses defendían los senadores. Yo aclaro que estoy acá para defender los intereses de mi provincia.

Hubo, además, alguna expresión acerca de que las provincias, que eran débiles, habían tenido que negociar con las petroleras, que eran fuertes. Y que esa negociación devino en una mala situación para las provincias y que no nos había ido bien.

Yo no coincido. A nosotros, en La Pampa nos fue bien. Con la Ley Corta aumentamos las reservas de petróleo y de gas; aumentamos la producción del petróleo y del gas. O sea que pasamos de cobrar en 2003 treinta millones de regalías a cobrar novecientos millones de regalías. A nosotros nos fue bien. Eso de que las provincias no tienen capacidad de negociar no es cierto, por lo menos en nuestro caso.

Sí coincido con lo dicho por el senador Pereyra, de que este proyecto está enfocado a modificar los roles de las provincias. Ése es el objetivo del proyecto.

Y se dijo acá que todas las provincias petroleras formaban parte de YPF. Eso no es cierto. Todas las provincias fueron invitadas, todos los gobernadores firmaron el convenio, pero en mi provincia no lo ratificó la Legislatura. O sea que mi provincia formalmente no forma parte de YPF porque la Legislatura no lo ha aprobado.

Sí coincido con que la regalía es una compensación por el recurso no renovable que se extrae. Ahora, si es una compensación de un recurso cuyo dominio originario es de la provincia, ¿por qué no dejan que fije cada provincia cuál es la compensación? ¿Por qué la imponen?

Y se habló mucho de que estábamos preparando el país y las provincias para lo que se viene. Lo que se viene es la explotación del recurso no convencional. Ahora, si de lo que hablamos es de la inversión para el recurso no convencional, ¿por qué no agregamos un capítulo en la Ley de Hidrocarburos para el recurso

no convencional? Y los recursos convencionales que tenemos las provincias los dejamos como están, que, en definitiva, es lo que se hizo con la Ley de Hidrocarburos. Cuando apareció el petróleo, al Código de Minería le agregaron un capítulo que es la Ley de Hidrocarburos. Bueno, agreguémosle a la Ley de Hidrocarburos un capítulo que sea el del recurso no convencional.

¿Qué es lo que yo pienso de la ley? Creo que es un claro avance de la Nación sobre las provincias. Creo que hay un retroceso en el federalismo, en los acuerdos que quedaron plasmados en la Constitución del 94 y que en el tema petrolero se dio forma a través de la llamada Ley Corta.

Acá se ha hablado del acuerdo y de la presencia de los gobernadores. En lo que todos han coincidido es que los gobernadores han cedido. Algunos dicen que cedieron porque había un acuerdo federal para consensuar; otros dicen que cedieron porque fueron presionados. El senador Pereyra ha dicho que los gobernadores fueron presionados. El senador Cimadevilla ha mostrado las publicaciones en las que el gobernador acusado de un determinado ilícito dice que esa acusación proviene de su posición contraria a la ley.

Yo voy a contar mi propia experiencia. Mi gobernador habló y me dijo que él tenía algunas precauciones, algunas discrepancias con la ley; y que cuando lo había manifestado en la OFEPI lo llamó Parrilli. Hasta donde yo sé, Parrilli es el secretario general de la Presidencia. Entonces, yo fui a leer el decreto 1.277 que reglamenta la ley de estatización de YPF y crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y la integran, según este decreto, un representante de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un representante de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y un representante de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

O sea, hasta donde yo sé, el secretario general no tiene nada que opinar en el tema de energía.

Es más, el único antecedente que le conozco a Parrilli en el tema de energía es que fue miembro informante en la Cámara de Diputados del proyecto de privatización de YPF. Así que casi que coincido con Cimadevilla en que los fundamentos van para el mismo lado. (*Risas.*)

Respecto de la presencia de los gobernadores voy a hacer una sola referencia, y es que sentí vergüenza ajena cuando un gobernador dijo que la Ley Corta era un exceso del federalismo. Búsquenlo en la versión taquigráfica; lo dijo un gobernador. Sentí vergüenza ajena porque yo soy uno de los gobernadores que integraban la OFEPHI y discutimos largamente para conseguir la Ley Corta, y debo reconocer que la Ley Corta se vio plasmada en una iniciativa parlamentaria y se votó porque era Néstor Kirchner el presidente de la Nación. Kirchner ya había tomado esta posición en 1994, cuando se discutió la reforma constitucional, y avaló lo que había dicho en esa reforma; por eso salió la Ley Corta. Ahora, eso sí, en mi provincia no se prorrogó ningún área; al contrario, en mi provincia se licitaron, en licitaciones públicas nacionales e internacionales, las áreas que le dieron a la provincia. No hemos prorrogado ningún contrato. Por eso yo defendiendo la Ley Corta; nos dio prerrogativas, tenemos el dominio originario y tenemos la facultad de fijar las reglas de juego.

Después Zannini expuso lo que acá se ha repetido: que no puede ser una ley acuerdo, que la única ley acuerdo es la ley de coparticipación.

Déjenme que les recuerde que a fines de la década del 90, principios de 2000, se firmaron sucesivos pactos fiscales entre la Nación y las provincias que regulaban las relaciones económicas, y esos pactos fiscales fueron sometidos a la consideración del Congreso Nacional, que los ratificó, y a la consideración de las legislaturas provinciales, que los ratificaron, salvo la provincia de San Luis, que a uno de los pactos ni adhirió ni su legislatura lo aprobó. O sea que hay antecedentes.

Lo que Zannini no dijo y los senadores ocultan es que si los gobernadores hubiesen mandado este acuerdo a ser ratificado por las legislaturas provinciales muchas de éstas no hubiesen tenido la mayoría para conseguir la aprobación, por eso se mandó al Congreso Na-

cional, donde parece que la ley de obediencia debida todavía no fue derogada.

En mi provincia la Constitución es clara: el artículo 81 dice que todos los convenios que celebre el gobernador tienen que ser remitidos a la Legislatura. El artículo 81 dice que el gobernador es el jefe de la administración provincial y que tiene las siguientes atribuciones: primero, representar a las provincias en sus relaciones con los demás poderes públicos y con los de la Nación o los de otras provincias, con los cuales podrá celebrar convenios y tratados para fines de utilidad común con la aprobación de la Cámara de Diputados y el oportuno conocimiento del Congreso de la Nación.

O sea que a la Legislatura de mi provincia este convenio le va a ser remitido, porque es un acuerdo federal. Van a tener que remitirlo en su totalidad, si bien va a ser vinculante la decisión del Anexo I, que es el que fija los topes sobre los recursos provinciales que acá se modifican en un intento de igualar.

¿Para quién es esta ley? Es para YPF; claramente es para YPF. Es más, lo dijo el presidente que coordinaba el plenario de comisión; reconoció él que era una ley para YPF. Lean la versión taquigráfica. Y ¿quién la escribió? YPF; lo reconoció Galuccio. Galuccio dijo: “Hicimos aportes y le agregamos...”. Él reconoció que la conocía, que la escribió.

O sea que es una ley para YPF, escrita por técnicos de YPF, y yo les recuerdo que YPF, mal que les pese a todos, es nuestra en el 51 por ciento, porque en el otro 49 por ciento hay fondos privados, algunos de los llamados “buitre”, y no tienen una parte pequeña sino que, como se dijo acá, tienen una parte más grande que la que tienen varias de las provincias productoras de hidrocarburos.

¿Qué es lo que hace la ley? La ley fija la renta petrolera provincial, le pone un límite a la renta petrolera, dice cuál es la regalía que hay que cobrar, dice cuál es el ingreso bruto que hay que cobrar y no dice cuál es la renta petrolera nacional, porque la renta petrolera nacional la manejan modificando las retenciones, modificando el precio del petróleo sobre el cual liquidan las compañías que explotan el recurso y que se vende para afuera. O sea que esta ley fija la renta petrolera provincial pero no fija la

renta petrolera nacional. Ése es otro avance de la Nación sobre las provincias.

Y bueno, como acá es bastante habitual hablar de los medios, quiero decir que me llamó la atención ver ayer que en un diario de la Capital escribiera una nota de fondo —o sea la editorial— el gerente institucional de YPF, aparentemente contestando algunos elementos que habían dado algunos expertos que evidentemente habían escrito en ese mismo medio los días anteriores.

El gerente institucional de YPF citó diez puntos que evidentemente habían criticado de la ley, y en el décimo dice que critican la falta de debate en las legislaturas de las provincias involucradas, pero se trata de una ley nacional con alcance en todo el país que es aprobada en el Congreso Nacional, por lo que las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos no tienen la obligatoriedad de ser aprobadas en las Legislaturas. Ya dijimos que eso no es cierto. Los pactos fiscales fueron aprobados por las Legislaturas. Este señor, que es gerente institucional, debería conocer mejor la realidad. Además, dice que no hay ningún elemento en este proyecto que favorezca a YPF. Miren, el senador Pereyra enumeró las concesiones que tiene YPF: tiene 142 áreas concedidas, y la ley inmoviliza, cristaliza, la situación de las empresas que están ocupando el territorio. Claramente se ve favorecida, si es la que tiene más áreas.

Ahora, lo que este señor le tendría que haber contado al presidente de la compañía es que cuando yo le pregunté cuál era la inversión que hacía YPF en mi provincia —porque la senadora Montero había pedido que le pasaran las inversiones en Mendoza— me dijo: “En La Pampa no invertimos nada porque no tenemos yacimientos”. Este señor le tendría que haber contado al presidente Galuccio que en La Pampa tienen un área, que es la CNQ7, que la tienen por acarreo porque el área le fue concedida a YPF y ésta acarreo a compañías que invirtieron. Quien descubrió el petróleo fue Petroandina, una empresa canadiense experta en el borde de cuenca, y La Pampa es el borde de la cuenca neuquina, por eso es que ellos encontraron el petróleo, y después le vendieron el derecho a Pluspetrol, que es la que hoy está explotando.

Quiere decir que tiene ventajas YPF y tiene áreas en La Pampa, cosa que los de YPF no sabían.

Este señor dice, además, que anula la discusión por regalías porque desde hace casi 100 años la legislación de hidrocarburos en la Argentina mantiene la regalía del 12 por ciento sobre la producción como única contribución para el Estado.

Yo les puedo mostrar que en mi provincia hay un contrato de concesión de explotación firmado con Enarsa —que firmé yo como gobernador de la provincia, Espinosa como presidente de Enarsa, Kirchner como testigo y De Vido como testigo— por el cual nos pagan una regalía creciente que hoy está en el 18,5 por ciento y dentro de 7 años va a llegar al 41. O sea que este señor debería saber, si representa una empresa de mayoría estatal, que hay una empresa estatal que a nosotros nos va a pagar 41 por ciento y que ya hoy nos paga 18,5 por ciento.

Además, en eso concuerdo, cuando la extracción del petróleo es dificultosa por la profundidad, por la densidad o por el método, las provincias pueden bajar la regalía hasta el 5 por ciento. Es razonable que en una situación especial, de un petróleo muy denso, se requiera una mayor inversión y que la provincia acompañe bajando la regalía. Ahora, cuando se trata de un yacimiento como Cerro Dragón, donde el petróleo es fácil de extraer —está estudiado— y produce una gran cantidad de petróleo, ¿por qué no la pueden aumentar? ¿Por qué la podemos bajar para acompañar a la empresa y no la podemos subir para que la empresa nos acompañe a nosotros? A mí me parece que no es justo.

Frente a las cosas que dice el gerente institucional de YPF y que no son ciertas, los oficialistas podrían aprovechar para decir “Clarín miente” porque fue publicado como editorial del diario *Clarín*. (Risas.)

Me gusta más un artículo que escribió Cristian Folgar en *Perfil* porque dice, cosa que comparto, que un aspecto controvertido es que se les otorgan condiciones especiales a quienes inviertan más de 250 millones en tres años. Si una empresa invierte 50 millones en un año y duplica las reservas o la producción, no tiene beneficios.

Eso es así. En Neuquén le han dado ventajas competitivas a empresas que han enterrado más de 250 millones: les dejan vender el petróleo afuera, les dejan importar equipos con pago diferencial de aranceles. En mi provincia la pro-



ducción de gas aumentó en este último año más porcentualmente de lo que aumentó Neuquén. O sea que a la empresa que es más chiquita pero más eficiente no le dan un incentivo. Y eso nos saca del mercado a quienes estamos al borde de la cuenca y a quienes tenemos áreas petroleras que no tienen una alta producción.

Sigue diciendo que la discriminación es curiosa: por el tamaño de la billetera. A los muy grandes, todo; a los no tan grandes, aunque sean eficaces, nada. Sin duda, la mayor discusión está en el acarreo. ¿Qué es eso? Habitualmente, el dueño del recurso, las provincias, se asocia con quien invierte y éste realiza las inversiones por ambos. El dueño del recurso devuelve su parte, ajustada por intereses, con lo producido del área. El “acarreado” pone el recurso —o sea las provincias— y devuelve lo invertido por su socio en caso de éxito.

Termina señalando que el acarreo tiene un impacto financiero que dependerá del costo del capital, del socio y de la tasa que se aplique para la devolución. ¿El acarreo espanta inversores? No, el problema de YPF es que necesita que las provincias no se sumen a los proyectos siendo “acarreadas”. Si los inversores acuerdan con las provincias, ¿para qué necesitan a YPF?

Ésa es la razón de este proyecto de ley: nos sacan el acarreo para que pueda acarrear YPF, para que puedan invertir.

¿Qué dijo Galuccio? Dijo que para conseguir inversiones habría que tener un marco legal, que teóricamente lo estaría dando este proyecto de ley, y habría que tener un marco fiscal, que estaría dándolo el hecho que las provincias resignemos recursos. Ahora, la situación macroeconómica y la Ley de Abastecimiento, ¿no espantan a los capitales? ¿No dificultan que vengan capitales? La verdad es que cuando digo que tengo una empresa provincial que cobra el 41 por ciento de regalía, tengo miedo de que aparezca Augusto Costa y me aplique la Ley de Abastecimiento, que me diga que la ganancia es excesiva y se me quede con una parte del recurso. Los capitales no vienen no sólo porque no hay un marco para el petróleo no convencional, los capitales no vienen porque está desalineada la macroeconomía, porque tenemos un cepo al dólar, porque no se pueden girar para afuera las utilidades, porque le cambiamos la regla de juego todos los días y porque tenemos cinco,

seis o diez precios de dólar. Eso es lo que hace que no haya inversión.

Finalmente, quiero ver, desde el punto de vista de mi provincia, porque he dicho que estaba acá representando los intereses de los pampeanos, qué consecuencia tiene este proyecto de ley para La Pampa.

En primer lugar quiero aclarar algún comentario que hubo de mi provincia, seguramente de alguno que vive en “Argenlandia”, ese país ideal que es tan parecido a Disneylandia, que dijo que este proyecto de ley es bueno para La Pampa porque íbamos a poder aumentar los ingresos brutos al 3 por ciento, teniendo en cuenta que hoy eran de 2,6 por ciento. En realidad, en mi provincia los ingresos brutos, cuando se votó la ley impositiva de 2014, eran de 2 por ciento y hay un artículo de la ley que dice que, cuando la recaudación de las empresas supere los 500 millones de pesos, se le aumenta un 30 por ciento. Por eso daba 2,6 por ciento.

Sin embargo, eso ya fue modificado. La Legislatura de mi provincia votó que el ingreso bruto para la actividad petrolera sea de 3 por ciento, por lo tanto las empresas que facturen más de 500 millones de pesos van a pagar 3,9 por ciento. Si adherimos a este proyecto de ley perdemos recursos, no ganamos. Es decir, perdemos más de 50 millones. Sería bueno que, a los que nos mandan leer la ley porque nos oponemos, lean la legislación de mi provincia.

Por otra parte, este proyecto de ley no contempla una figura que hay en mi provincia, que es la “locación de obra”. Nosotros tenemos un contrato hecho en 1992 de locación de obra. O sea, la provincia contrató con una empresa el trabajo de extraer el petróleo y por esa extracción le paga el 65 por ciento y cobra el 35 por ciento. Ésta es una buena manera de que las provincias puedan participar en la explotación de sus recursos. Sin embargo eso no está contemplado.

Como decía, hay regalías en que superamos el 12 por ciento, porque también se dijo que La Pampa estaba asociada y que iba en un contrato de locación. Sí, en un contrato de locación cobramos el 35 por ciento pero tenemos un contrato de explotación con Enarsa, Raiser y American Petroleum S.A. por el que estamos cobrando 16,5 por ciento y dentro de siete años vamos a llegar al 41,5 por ciento. Además,

tenemos un contrato en Salinas Grandes con Wertheim S.A., Petrosiel S.A. y Energal S.A. donde hoy estamos cobrando 13,5 por ciento y vamos aumentar progresivamente para que en el séptimo año se llegue al 18,5 por ciento. ¿Por qué hay una regalía creciente? Para obligar a las empresas a que apuren la inversión de capital.

El otro aspecto que a mi provincia la perjudica es el de hacer un pliego modelo. Acá lo presentaron como todo un avance: un pliego modelo hecho entre la Secretaría de Energía y las autoridades de mi provincia. Las autoridades de mi provincia han conseguido aumentar la producción y las reservas mientras que las autoridades de la Secretaría de Energía han conseguido perder el autoabastecimiento. La verdad, déjenme que confíe en que los pliegos de mi provincia lo hagan los técnicos de mi provincia. Nosotros nunca vamos a permitir que Eskenazi compre un 25 por ciento de la empresa con las utilidades porque, como se dijo acá, yo así compro Coca Cola.

Ahora, el artículo 31 tiene nombre y apellido. Ese artículo, que le permite a las provincias que están en trámite de poder prorrogar los contratos, dice así: “Cuando a la fecha de vigencia de entrada de esta ley alguna de las provincias ya hubiera iniciado el proceso de prórroga a que se refiere el artículo 35, respecto de concesiones otorgadas por el Estado nacional, y siempre que dicho proceso hubiese estado establecido en ciertas condiciones precedentes, en función de la voluntad de dicha provincia y del concesionario respectivo y de las leyes vigentes, la provincia dispondrá de un plazo de 90 días para concluir el proceso de prórroga”.

El nombre y apellido de este artículo es Petrobrás. Porque solamente hay una empresa que no ha prorrogado sus contratos nacionales. Tiene contratos en La Pampa y tiene contratos en Río Negro.

Es una empresa que, como todos saben, va a influir y mucho en las elecciones presidenciales de Brasil, por las denuncias de corrupción que tiene Petrobrás entre los integrantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo del Brasil.

Uno de los ejes de campaña de esta segunda vuelta va a ser la corrupción de Petrobrás. Esa es la empresa que tiene que renovar contrato en mi provincia y en la provincia de Río Negro.

En esto voy a leer, porque lo comparto, algunas de las cosas que dijo el senador Pichetto cuando se debatió este tema en comisión.

Pichetto dijo que han prorrogado treinta o cuarenta años —o más—, alegremente, en función de cobrar un bono. El bono aparece como la panacea que resuelve los problemas fiscales de un Estado pobre en un territorio rico. Esta cultura del bono es la que nos lleva al fracaso y a la decadencia. Porque lo que ha habido permanentemente en esta materia, es un esquema de especulación inmobiliaria de muchas empresas que ponen la plata en el bono, y después no invierten ni en una perforación. Con lo cual, tanto la Argentina como las provincias se privan, porque el Estado nacional no logra el autoabastecimiento, no logra la producción de hidrocarburo, de gas y de petróleo, y la provincia no cobra regalías. Se hace muy buen negocio con el bono pero se termina afectando el interés de la Argentina y de la propia provincia, que deja de percibir regalías, de generar empleo y políticas de servicios petroleros que sean rionegrinas. ¿Por qué? Porque empresas de otras provincias significan negocios concentrados, algo que ya hemos vivido.

Yo comparto lo que dice de Petrobrás, porque dice que Petrobrás Argentina no ha invertido ni un solo peso en los últimos años. Agregaba el senador: lo quiero decir con claridad, y esto ha sido el motivo del rechazo en mi provincia del acuerdo firmado por el gobernador de Río Negro, que generaba un bono de 100 millones, sobrevaluando el área y no poniendo 31 millones de dólares anuales; 300 millones en diez años. Yo me pregunto —decía Pichetto— si para una inversión en materia petrolera 300 millones de dólares es una suma significativa. Es absolutamente nada. Es un quiosco en materia petrolera.

Yo comparto este concepto. En mi provincia no tenemos desequilibrio fiscal, pero sí están pensando en cobrar un bono. Pero el bono lo van a cobrar porque son incapaces, desde el gobierno provincial, de cobrarle a la Nación la plata que nos debe.

Nosotros, en la provincia de La Pampa, tenemos un convenio con la ANSES. Nosotros armonizamos, en 2006, las cajas previsionales. La de la Policía no hace falta armonizarla; todas las policías tienen el mismo régimen de jubilación. Como firmamos el convenio nos tienen

que pagar el déficit. Por esa sola caja nos deben 500 millones de pesos.

Por la caja civil y la caja docente, que también se pueden armonizar –y, de hecho, nosotros las armonizamos–, nos deben 400 millones de pesos.

Es decir, nos deben 900 millones de pesos, que si lo actualizamos por los haberes de mi provincia –porque en definitiva, las jubilaciones que se pagan en mi provincia son un porcentaje del haber que percibe el trabajador– nos deben 1.800 millones de pesos.

Entonces, en vez de un bonito, cobrémosle al Estado nacional los 110 millones de dólares que nos debe y los 220 millones de dólares que nos debe, a valor actualizado. O lo cobramos a valor histórico, es decir, por los 110 millones, o lo discutimos a valor actualizado y cobramos los 220 millones de dólares. Es mejor que el bonito, y dejamos que la renta petrolera que da la regalía la puedan seguir cobrando los que están por venir. No es que queremos agarrar la plata ahora para gastarla. Ésa es la verdad.

Yo creo que no hay que mirar el bono. Coincidiendo con Pichetto cuando dice que lo que hay que mirar es la inversión. Hay que mirar cuánta plata se entierra, cuántos puestos de trabajo se generan, qué producción se aumenta y, por lo tanto, cómo nos acercamos al autoabastecimiento y cómo aumentamos la renta petrolera provincial.

Me dicen que no hay una prórroga indefinida. Sí hay una prórroga indefinida. Antes, las concesiones revertían en los Estados. Ahora se presenta un plan piloto. Y ¿quién sabe si ese es el mejor plan?

¿Por qué no hacemos una licitación pública y cada cual presenta su plan piloto? Y, entonces, vemos cuál es el mejor plan piloto.

Porque a mí me podrán decir que el plan piloto que presentan es bueno, pero puede haber otra empresa que tenga un plan piloto mejor.

¿Por qué nos dejan afuera de la licitación? ¿Por qué prorrogan indefinidamente la concesión?

Por último, quiero señalar que nosotros tenemos una empresa petrolera provincial constituida, sin el desarrollo que tiene la provincia del Neuquén en su empresa petrolera, pero tenemos una empresa petrolera.

Tenemos una empresa petrolera que tiene, por ejemplo, un área en la que acarreo a una empresa, descubrieron gas y hoy están en condiciones de producir con ese gas veinte megas. Si encontramos uno o dos pozos más de esa capacidad, tenemos la posibilidad, en vez de ser una provincia importadora de energía eléctrica, de ser una provincia exportadora de energía eléctrica.

¿Cómo lo logramos? Acarreando. ¿Eso lo vamos a poder hacer en las áreas que están sin concesionar? No, no lo vamos a poder hacer. Aunque las tenga adjudicadas la empresa petrolera provincial, podrá acarrear en la investigación, en la exploración, pero cuando comienza el desarrollo del área tiene que empezar a enterrar inversiones a la par, si es que, como en el caso que tenemos en la provincia, participa del 50 por ciento de la explotación. Eso a la provincia de La Pampa no le conviene.

En definitiva, ésta es una ley que está hecha para YPF. Lo repito: lean la versión taquigráfica. Lo dijo el presidente que coordinaba la reunión de comisiones. La escribieron los de YPF; lo dijo Galuccio. Así que, como dicen los abogados “a confesión de parte, relevo de prueba”.

Si tengo que votar y elegir entre YPF y Pampetrol, voy a votar por Pampetrol, que es la empresa ciento por ciento estatal, integrada por la provincia de La Pampa y los municipios de La Pampa. YPF tiene un 51 por ciento de capital mayoritario del Estado nacional y las provincias, pero tiene un 49 por ciento de empresarios.

Si tengo que votar entre que los pliegos los redacten los funcionarios de la Secretaría de Energía, que han provocado el desabastecimiento, y los de mi provincia, que aumentaron la reserva, voy a pedir que los pliegos los hagan los de mi provincia.

Si tengo que votar entre que se limite la renta petrolera provincial o la renta petrolera nacional, voy a votar que se limite la renta petrolera nacional y que nos dejen a nosotros fijar cuánto vale el recurso.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don Gerardo Zamora.

Entre adjudicar las áreas con regalías crecientes o dejar todo como está, prefiero llamar a licitación, licitar con regalías crecientes y

adjudicar a aquel que más le convenga a la provincia, y no en directa, como está ahora, a aquel que haya presentado el plan de inversión; que no es el mejor: es el plan de inversión que presente el que está ocupando el área.

En definitiva, entre votar por una ley que le da ventajas a YPF y que le da, por lo tanto, ventajas a Soros y a Slim, y votar por una ley que le dé ventajas a los pampeanos, yo voy a votar siempre por una ley que le dé ventajas a los pampeanos. Porque yo no creo que Soros sea un buitre bueno ni esté compitiendo con la Cruz Roja por el premio internacional de la benevolencia.

Por todo esto, presidente, yo voy a votar negativamente.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra la senadora Michetti.

**Sra. Michetti**. – Señor presidente: estamos ante un debate obviamente que es estratégico; que tiene que ver no sólo con el presente sino –por supuesto– con las próximas generaciones.

Nosotros tenemos algunas consideraciones que hacer en función de que no nos parece, justamente, la herramienta más adecuada para el objetivo o el resultado que se pretende alcanzar. Como son muchas las cosas que ya se han dicho, voy a hacer un rápido repaso de los elementos que nos parece que no son los que acompañarían una herramienta realmente eficaz en términos de atracción de inversiones para el sector petrolero hidrocarburífero en la Argentina.

Lo primero es una consideración casi metodológica pero que para mí tiene muchísimo que ver con lo que también hace a la atracción de inversiones: que esta ley –para la consistencia que necesita tener; para la trascendencia que requiere– no tuvo un debate profundo, medular, con los tiempos necesarios. Nadie dice que sean eternos, como muchas veces se plantea, si no razonables: por supuesto, no cuarenta y ocho horas, para –como decía– una ley que requiere de un profundo análisis. Entonces, me parece que tan sólo cuarenta y ocho horas no dan para lograrlo.

De hecho, ha habido dictámenes en minoría y proyectos presentados por otros senadores de otros espacios políticos a los que realmente no pudimos terminar de darles el lugar que creo que merecían; y hoy en el debate esto se vio

claramente. Hay algunos senadores que a mí me consta, desde el punto de vista de conversaciones personales, que han trabajado en distintas iniciativas. Tal el caso de la senadora por el Neuquén, Lucila Crexell, que ni bien conocí me dijo que estaba trabajando en un proyecto de ley petrolera. Esto ocurrió en las primeras sesiones, cuando arrancamos. De hecho, ella estaba muy compenetrada con esa tarea desde el punto de vista profesional, serio, con mucha vocación por hacer algo –como dijo hoy en su discurso– que sea consensuado, que tenga que ver justamente con una ley de la Argentina, de los argentinos, en este tema. También está el proyecto de ley de la senadora Montero, del senador Sanz, que creo que asimismo merecía tener un espacio de discusión y debate porque son iniciativas que presentan visiones diferentes de la temática y que, obviamente, no pueden ser pasados de largo porque en cuarenta y ocho horas se termina y hay que firmar un dictamen. Creo que en ese punto yo, si fuera un inversor importante, si en un país veo que las relaciones políticas y las relaciones institucionales se manejan de este modo –más allá de las económicas, que son las primeras que se miran probablemente desde el punto de vista empresarial– seguramente esas inversiones irán donde hay seriedad, donde hay institucionalidad, donde hay respeto y donde hay, de seguro, un acuerdo mayoritario de las fuerzas políticas en pos de reglas de juego para los sectores.

Entonces, me parece que eso no es una manera de considerar este tipo de proyectos de ley.

Además, voy a agregar algo que no tiene específicamente que ver con el sector ni con la cuestión que estamos tratando pero que yo siempre sistemáticamente digo cuando hablo de algunas de estas leyes que estamos debatiendo en el Senado: me refiero a que la política en la Argentina requiere muchísimo de una conciencia y de la responsabilidad de los dirigentes –de los senadores en este caso–, de los diputados, de cada uno de los que representamos o pretendemos representar a los ciudadanos; requiere de seriedad, de escucha, de diálogo, porque hay una enorme necesidad de volver a tener alguna confianza de la gente –de la ciudadanía– en las instituciones. Entonces, este modo de tratar una norma de estas características me parece que no es el mejor.



El segundo tema, que nos parece que también hace a que la herramienta no sea la mejor para atraer inversiones, es el del acompañamiento, o mejor dicho del no acompañamiento, que hace el contexto macroeconómico de la Argentina a este proyecto. Si nosotros estamos diciendo por un lado que queremos atraer inversiones pero, por el otro, el gobierno no toma riendas en el asunto de la inflación, en los problemas de la caída del poder adquisitivo, en la recesión sostenida que estamos teniendo en los últimos meses en la industria, comercio, servicios, el cepo cambiario, las restricciones de todo tipo que vamos teniendo en términos de la macro, me parece que expone una situación razonable para el proyecto y la herramienta que estamos presentando.

Lo dicho, incluso, considerando también que este tipo de atracción de inversiones que pretendemos hacer necesita de una inserción internacional del país que sea consonante con ese objetivo y con esos resultados que queremos. La verdad, en los últimos tiempos también lo que vemos es que desde el gobierno nacional lo único que estamos permanentemente presentando al pueblo, a la ciudadanía, es una pelea contra unos, contra otros, y esto es algo que tampoco hace a un clima de inversiones y a la atracción de aquellos jugadores que en estos sectores prefieren que los países sean Estados insertos en el sistema internacional.

Después tenemos otro de los elementos, que es el de la contradicción que tiene esta herramienta con otras de las que venimos trabajando en los últimos tiempos; de lo que venimos viendo, debatiendo y discutiendo en los últimos tiempos. Recuerdo que esto lo dijo el senador Cimadevilla en su momento, cuando presentó en el debate en comisión la enorme contradicción que existe entre la herramienta de la ley de abastecimiento, de responsabilidad o defensa del consumidor –no recuerdo cómo llaman a la nueva ley, pero en realidad en la ley de abastecimiento del 74– y esta, en teoría, seducción a los inversores.

Por un lado, tengo una ley que les está diciendo a los inversores que me puedo meter en la empresa, que puedo perseguir todas sus acciones, sus decisiones, sus posiciones, etcétera y, por otro lado, estoy diciendo que con esto voy a atraerlos. Ahí, también hay una contradicción

enorme que no se corresponde con el objetivo que perseguimos.

La otra cuestión es que la ley no tiene ninguna condición específica de mejora para el sector, que tiene problemas de precio del crudo en boca de pozo. Esto está justificado o explicado por parte del gobierno por esta subvención que se ha tratado de hacer al mercado interno en cuanto a darle volumen –como decía el senador Pichetto– en términos económicos internos. Pero lo cierto es que este desacople viene siendo cada vez más distorsivo de la economía y, justamente, no está funcionando para la atracción de inversiones. Me parece que en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Y no sólo es el precio del crudo sino que son los costos internos de producción, ningún elemento de acceso al financiamiento o a mercados más facilitado, ningún elemento que le haga más fácil al sector la posibilidad de atraer las inversiones.

Luego, también tenemos la dificultad de que esta herramienta no está contenida en el contexto de un plan energético o de autoabastecimiento energético y desarrollo estratégico de la energía en el país. Entonces, es una herramienta que está suelta. Venimos viéndola suelta a partir de lo que estoy diciendo. De hecho, está aún más suelta porque no tiene un plan energético que la esté conteniendo. Porque, definitivamente, si pretendemos atraer inversiones en el sector del cual estamos hablando, obviamente las cuestiones que tienen que ver con la matriz energética, con qué tipo de desarrollo queremos de esa matriz energética, con si vamos a cambiar esa matriz –y, en ese caso, cómo la vamos a cambiar, cuáles son las metas que nos vamos a poner, con qué cronogramas, con qué indicadores vamos a medir esas metas; si vamos alcanzándolas o no–, son aspectos de una planificación que no está, que no tenemos. Ése era uno de los requerimientos de la ley anterior que nunca funcionó. Entonces, el hecho de que ésta siga descolgada del plan de autoabastecimiento energético o desarrollo del sector me parece preocupante.

La otra cuestión que varios senadores han marcado –vuelvo a la senadora Montero y ahora al senador Verna, que habló recién; Pereyra dijo algunas cosas también– es la de las contradicciones que esto tiene con las provincias y ese famoso logro de la Ley Corta, de haber plasmado en una letra concreta lo que establecía

la Constitución de 1994, ahora se vuelve en una zona gris en términos de la autoridad de aplicación. Incluso, la señora senadora Negre de Alonso habló de posibilidades de planteos de inconstitucionalidad. Definitivamente, hay allí una situación taxativa de ver cómo se planta en este elemento.

Como decía el senador Sanz al principio, ese federalismo de concertación tampoco parece que vaya a funcionar con esta herramienta.

Uno de los elementos bastante demostrativos e ilustrativos de la situación es que hay un modelo único de licitación que, en definitiva, le quita posibilidades de maniobra a las provincias; incluso, teniendo en cuenta las diferencias de las provincias en cuanto a su morfología.

Por otro lado, algunos temas que están pendientes, perfectamente, se podrían haber introducido en el proyecto de ley. Pero no hubo posibilidades de debatirlos o introducirlos. Me refiero al tema de un fondo especial –y escuché atentamente lo que decía la señora senadora Crexell– que, en principio, podía ser compartido entre las provincias y la Nación para reinvertir un porcentaje de las regalías o del precio de boca de pozo para destinarlo a la reconversión de la matriz energética –claro que según la que se haya decidido, aunque parece que no está decidida en ningún lado– y, a su vez, para la reinversión en infraestructura de las provincias a los efectos de hacer más potente al sector.

La discusión que habría que dar es si ese fondo puede ser compartido entre las provincias y la Nación o ser solamente para las provincias. Lo digo por lo mencionado por la señora senadora Crexell, quien aludía a que las regalías han sido definidas como concesión a un recurso no renovable. Pero es un tema menor.

En definitiva, lo importante es que se podría tener este tema decidido y diseñado en la herramienta. Pero, como dije, no hubo posibilidades de establecerlo.

Otra de las cosas que se mencionaron fue lo de los presupuestos mínimos ambientales. Tampoco hay por qué negarlos ni no ponerlos en una norma de este tipo. Es decir, es otro elemento importante como para no sentirnos afines a la norma.

Por otro lado, hay otra cuestión sumamente importante como es el tema del contralor. Po-

dríamos tener en esta herramienta una agencia de contralor de las inversiones. Galuccio es un CEO de empresa que ha decidido poner a YPF en un lugar muy distinto al que estaba y, como alguien dijo, vino a mover la pasividad del sistema. Y lo que trata de hacer con la ley –definitivamente, como surgió de las filminas, es una ley que en gran parte surge de YPF– es dar algunas concesiones por los marcos macro económicos y las contradicciones que tiene el país que hace muy dificultoso ir por los carriles normales de atracción de inversiones. Entonces, en ese contexto, hay que hacer algunas concesiones mayores.

Me refiero al hecho de que no haya una entidad de contralor de cómo se realizan las inversiones. En una parte, la norma alude a los tres requisitos necesarios que debe tener la inversión para ver si se otorgan las concesiones o no. El concesionario debe estar produciendo en las áreas, debe haber cumplido con las obligaciones y debe presentar un plan de inversión. Pero lo cierto es que no hay una estricta definición de estos puntos y es amplio y laxo lo que uno puede llegar a interpretar. Depende de cómo las interpreten la autoridad de aplicación, estas cuestiones pueden tener mucho margen.

Entonces, por qué no haber pensado en un organismo de contralor más exhaustivo a la hora de evaluar estas cosas y que no pase que una concesión otorgada por treinta y cinco años termine siendo una concesión sin movimiento o inversión. Por ende, creo que el tema del contralor hubiera sido muy importante.

En definitiva, creo que nos hemos perdido una oportunidad enorme. Como se dijo acá, hacía mucho tiempo que no se trataba el tema, todos lo queríamos discutir y cada espacio político ha tenido su propuesta y su pensamiento sobre lo que habría que hacer en términos de atracción de inversiones para este sector en la Argentina. Sin embargo, la verdad es que no ha habido tiempo para tratarlo con la profundidad con que debiera haberse hecho.

También quisiera dejar un mensaje. En caso de que la ciudadanía de la Argentina en 2015 nos diera el voto de confianza para administrar y gobernar el país, dejamos en claro que vamos a construir sobre esto y no a destruirlo.

**Sr. Presidente (Zamora).** – Tiene la palabra el señor senador Solanas.

**Sr. Solanas.** – Señor presidente: nosotros pensamos que si ha habido una catástrofe en la Argentina contemporánea fue la privatización salvaje de los hidrocarburos. Fue la destrucción de YPF y de Gas del Estado. No solamente fue salvaje sino que los resultados son de un fracaso estrepitoso.

Tal es el fracaso que hoy la Argentina es importadora de combustibles. Hoy le cuesta al gobierno nacional, y paga el pueblo argentino, 15 mil millones de dólares anuales. Este año serán 15 mil o 16 mil millones de dólares; la mitad en importación directa de combustibles y el resto en subsidios porque nadie puede pagar el precio internacional del gas.

Lo que me resulta sorprendente es que no haya reacción frente al fracaso de la receta neoliberal privatizadora. Lo digo fraternalmente y con dolor. No puede ser que después de todo lo pasado, del daño y el empobrecimiento que le costó a la Argentina la privatización de esas dos fuentes de divisas que eran Gas del Estado e YPF, que sacaban el recurso y lo transformaban en rutas, caminos, ciudades, represas hidroeléctricas y transporte, las recetas neoliberales y el modelo que impulsó Carlos Menem no hayan terminado de morir. Esto es lo que nos sorprende.

Es más; creemos que este proyecto del Poder Ejecutivo profundiza el modelo neoliberal privatizador del petróleo de los años noventa. La verdad es que es de una impunidad que nos asombra. Esto es el sueño nunca realizado por Carlos Menem dentro de su mandato.

Muchos de los legisladores que me han antecedido, Odarda y don Mario Cimadevilla, abundaron en todas estas razones acerca de cuál fue el resultado. El destrozo fue brutal.

En cuanto a la inversión en equipos y todo lo que había construido YPF, llegamos a tener los laboratorios más importantes del continente. En los años 60, les vendíamos catalizadores para sacarles el plomo a las naftas a España, Italia y Francia. Además, YPF construyó ciudades. YPF construía caminos, instalaba el hospital, la escuela, el hotel y las viviendas. Asimismo invirtió a riesgo en toda la Patagonia y en las regiones petroleras.

El modelo fue muy exitoso. Hablo de Mosconi, y de una política impulsada por Yrigoyen

y continuada y profundizada por Alvear. El general Mosconi, invirtiendo lo que obtenía y sin recurrir al crédito externo, con inversión nacional multiplicó 400 veces el capital de la YPF inicial. Sin embargo, el 8 de septiembre de 1930, lo detuvieron a él y al general Barney en la calle por comunistas, porque le comprobaban a la Unión Soviética el crudo a un precio mucho más barato: y había roto el monopolio tarifario en la Argentina.

Construyó la destilería de La Plata en dos años sin pedir crédito externo; la mayor destilería de América Latina. El modelo privatizador no llegó a construir ni la destilería de los petróleos pesados Escalante que tenemos en la Argentina; una verdadera vergüenza. Seguimos exportando esos petróleos, cambiándolos por petróleos livianos. Pero toda esa operatoria la puede hacer la Argentina.

En estos años, las petroleras desembarcaron en la Argentina con el canto del cisne de que se iban a multiplicar las reservas, porque YPF y Gas del Estado eran empresas muy medianas. ¿Recordamos esto o no lo recordamos? ¿Recordamos a Neustadt diciendo estas cosas o no lo recordamos? ¿Recordamos las mentiras de Neustadt, quien decía que era la única petrolera del mundo que estaba endeudada? Claro, cuando la agarra una dictadura feroz, la liquida, porque Martínez de Hoz colocó a YPF y Gas del Estado para tomar créditos externos –las usó como aval–, pero ese dinero nunca les llegó a las compañías. El modelo de YPF y Gas del Estado sentó escuela en América Latina, y nacieron petroleras nacionales de acuerdo con ese modelo.

Pero volviendo a las reservas, no repusieron lo que sacaban. En la industria hidrocarburífera es norma que lo que se saca se repone. Pero acá no sólo no multiplicaron las reservas –ustedes lo saben–, sino que también se chuparon los 35 años de gas que había descubierto y acumulado YPF.

Un país responsable debe tener una reserva estratégica de combustibles, habida cuenta, como ya han dicho los colegas, de que los combustibles y la energía es el primer insumo de la cadena productiva.

Reitero, no repusieron nada, se las chuparon. Y no solamente esto, también destrozaron los territorios con contaminación. Todas las napas

de agua aledañas a los yacimientos tienen altas dosis de hidrocarburos; eso lo he comprobado. He visitado, por lo menos, la mitad de los grandes yacimientos de la Argentina, o sea que no soy un improvisado en energía. En 1958, era secretario privado del ingeniero Julio V. Canessa, presidente de Gas del Estado por dos períodos; la Gas del Estado que había creado Perón en 1947. El ingeniero Canessa le dijo a Perón que en lugar de ventear el gas, podía llevarlo de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Perón le preguntó con qué capital, a lo que el ingeniero Canessa le respondió: con el capital de Gas del Estado. Y construyó 1.700 kilómetros de gasoductos con tecnología y financiamiento nacionales. Era un hombre que decía que todo se podía hacer, pero cuando había una ética pública que quería defender el interés de la Nación. Es fácil defender la economía privada, nos decía, pero defender la economía pública es sagrado; y nos hablaba de San Martín y de Belgrano.

Decía recién que no sólo se chuparon las reservas, sino que también, con los deshechos petroleros, empetrolaron buena parte del territorio. Recuerdo que en el plenario de comisiones en el que se consideró la indemnización a Repsol escuchamos muchas voces y a varias ONG reclamar por los 4 mil a 6 mil accidentes petroleros por año. Digo accidentes, pero accidente es lo que uno no prevé. Por ejemplo, uno va tranquilo con su automóvil y no prevé que de costado se lo va a llevar por delante otro coche. Eso es un accidente; no estaba previsto. Pero acá hay pasivos ambientales por más de 10 mil o 15 mil millones de dólares si quisiéramos remediar eso. Si uno acerca un encendedor al agua de los aledaños de los yacimientos, se prende fuego. ¿Por qué? Porque en la Argentina se destruyó el Estado como ente de control; se destruyó en los años 90 el Estado.

El drama de nuestro país es que el argentino está desamparado, sin ninguna protección; es el sálvese quien pueda. Desde los años 90, nadie, ningún gobierno, fue capaz de controlar yacimientos. Ningún gobierno fue capaz de poner en caja las violaciones contractuales, porque no se cumplieron los contratos, porque no se hicieron las perforaciones que debían hacerse.

YPF perforaba de 120 a 130 en zonas nuevas de riesgo. Todas las petroleras juntas, desde la privatización, no han llegado a 30 perforaciones

por año en sus propios yacimientos; y ni qué decir en las zonas ya localizadas. Por esa razón, la Argentina tiene el 80 por ciento de sus cuencas sedimentarias, geológicamente localizadas desde hace décadas, sin la debida exploración; y no me refiero al mar.

Entonces, el drama fue que desembarcaron las petroleras –las privatizadoras– que iban a traer progreso y beneficios, y le iban a enseñar a YPF y a Gas del Estado, y nos saquearon. Recién, un senador hablaba de la barbaridad que fue permitir la exportación de gas; once gasoductos se construyeron. Es cierto que se vendía el millón de BTU a 1,50 o 2 dólares, y que luego se vendían a precio de mercado, a cinco o seis veces más. ¿Pero quién hacía esto? El diablo, el familiar andaba por acá. Era el gobierno justicialista. ¿De quién hablaban? Era el gobierno justicialista de los 90. Entonces, nos vaciaron. Hoy tenemos 6 o 7 años de reservas de gas, y teníamos 35.

Por lo tanto, esto tiene historia. A veces, cuando uno escucha estos debates se pregunta de quién se está hablando. Por favor, que alguien me instruya acerca de qué había antes que nosotros. Pero cuando uno ve que es lo mismo que se intenta repetir ahora, la verdad es que es inadmisibles. Uno no deja de sorprenderse, porque el proyecto oficial le entrega la renta a las multinacionales y petroleras, les extiende las concesiones por 25 años sin canon, sin licitación y sin concurso y les permite el 20 por ciento de libre disponibilidad del recurso.

¿En qué Argentina? ¿En la que sobra dinero y estamos fenómeno? Entonces, esto es doblemente sorprendente, señor presidente, porque a nadie se le escapa que la Argentina hoy está en una situación económica muy difícil. Estamos en recesión. Hay 200 mil licenciamientos y despidos. Se viene un 2015 con un ajuste severo, ortodoxo. Hasta los analistas oficialistas lo reconocen. En esta Argentina empobrecida, con 5 millones de jubilados que ganan 3.200 o 3.300 pesos –la mitad de la canasta básica–, con un millón de pibes que no estudian ni trabajan y son pasto de la droga, con la educación y la salud en estado delicado, y un déficit de 3 millones de viviendas, no se puede regalar la renta. Todos los países del mundo han salido a conquistar la renta de los recursos que tienen. Los años noventa, del neoliberalismo, han significado



la entrega de los recursos de los argentinos; recursos que sirvieron y deberían servirnos para financiar, sin pedir plata afuera, el desarrollo y el bienestar de los argentinos.

Entonces, señor presidente, es sorprendente que se insista con un modelo que ha significado un enorme fracaso y que, encima, nos va a seguir costando muchísimo dinero.

Es cierto, nosotros, el interbloque de los seis senadores del FAP, UNEN y ARI hemos tomado el camino contrario. Que nadie se sorprenda. No vamos a cometer viejos errores. Quizá cometeremos nuevos, pero los viejos no. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, que no sale de una probeta. Es la continuidad de setenta años de una política de Estado que engrandeció a la Argentina. Desde Yrigoyen a Alvear, pasando por Perón, Illia y Alfonsín, gobiernos de distintos signos no se atrevieron a torcer la gran política de Estado que habíamos construido y que le sirvió al general Cárdenas para crear Petróleos de México y a Getulio Vargas para crear en 1947 Petrobras. ¿Qué significa Petrobras? El Brasil de hoy sólo se comprende, esencialmente, por la maquinaria de riqueza que le devolvió Petrobras, la primera empresa de América Latina; la locomotora de la economía brasilera.

Entonces, señor presidente, nosotros vamos a retomar ese camino. Por supuesto, con las adaptaciones y las mejoras del caso, pero en la dirección de una gran política pública.

Se ha mencionado que uno quiere llevarse adelante la Constitución y la ley. No es así. El dominio originario –lo dice la Constitución de 1994– le pertenece a las provincias.

Ahora bien, señor presidente, y lo digo para todos los presentes, para todos los que vivimos y no sólo para las provincias petroleras: en catorce provincias que no tienen petróleo, pero donde vive el 85 por ciento de los argentinos, donde está el mayor consumo del país y las mayores destilerías –aunque esto no dice mucho–, resulta que ese 85 por ciento financió el 85 por ciento del desarrollo de la industria hidrocarburífera argentina, desde 1922.

¿Qué pasa? ¿Somos los hijos de la pavota los cordobeses, los santafesinos, los bonaerenses, los porteños, los tucumanos, los correntinos? De pronto: Ley Corta y pasó todo el manejo

de la renta a las provincias. Y esto que se está haciendo votar, en realidad, no es una ley nueva; es una reforma que tiene que ver con una discusión financiera o de reparto de la renta entre las provincias petroleras y la Nación.

Sinceremos el discurso. A los argentinos –a todos, porque la energía la necesitamos todos; ni la energía ni el surtidor nos preguntan, cuando nos ponen en el coche el combustible, qué pensamos y de qué partido somos–, nos sorprende esta situación, y rechazamos este proyecto, porque en un tema tan trascendente como éste, uno de los pocos surtidores que tiene la Argentina para financiar y salir de la crisis, que lo vuelva a regalar a las multinacionales, y además en un debate exprés, la verdad es que no lo podemos apoyar.

La verdad, da risa que algunos digan que se debatieron dos días en comisión. Es como acaban de promulgar el Código Civil. No queremos esa Argentina, estimados amigos y colegas. No es honesto, ni sano para la República.

Aquí hace falta un debate crucial que se debe la Argentina, que se vincula con el modelo energético nacional, que es el debate sobre cómo vamos a construir las transiciones para salir de una matriz energética con el 90 por ciento de energías fósiles, que son las más contaminantes, debido a los gases de efecto invernadero. Estamos en pleno cambio climático y estamos importando gas para generar electricidad, lo cual es una aberración.

Entonces, tenemos que discutir esto. El mundo entero gira hacia las energías alternativas. Supongo que todos están enterados, porque los diarios nacionales brindan información de lo que ocurre en el extranjero: Europa, dentro de 15 o 20 años, piensa financiar el 50 por ciento de su electricidad con energías renovables; en Suecia, hoy el 60 por ciento de su electricidad se conforma de energías renovables. Es más, nos ha hecho punta Chile, dado que el 9 o el 10 por ciento de su electricidad ya la financian las energías renovables; mientras que Uruguay tiene el 20 o el 25 por ciento y Brasil se ha largado también.

Por su parte, la Argentina es uno de los tres países del mundo con mayor potencialidad de energía eólica, y tenemos un *cluster* de ciento cincuenta empresas para producir los molinos y los generadores. En la región de La Puna de

Atacama, junto con el desierto del Sahara, es donde se recibe por metro cuadrado la mayor cantidad de energía solar. Y tenemos litio y sales para construir las plantas de energía solar térmica, que a lo largo de veinte o veinticinco años —estas son las ecuaciones que hay que hacer, compañeros de todas las bancadas— van a ser muchísimo más económicas que insistir con este modelo, sobre todo del petróleo no convencional.

Por eso, acá nos debemos un debate grande. No es el *fracking* sí o no; esto sí o esto no. La verdad es que es poco serio que este país apueste todas las fichas a Vaca Muerta, cuando nadie va a saber la rentabilidad del yacimiento antes de cinco o seis años. Lo dicen las petroleras. Por eso, no hay inversión poderosa en Vaca Muerta. Porque no me hablen de Chevron, de 1.200 millones de dólares. ¡Por favor! Son todos pozos piloto, esperando ver la curva de rentabilidad del yacimiento, porque la extracción del petróleo y del gas no convencional es cuatro, cinco o seis veces más cara que el petróleo convencional.

Entonces, no puede la Argentina estar parada. La Argentina tiene desde ahora que discutir un plan energético global. El Parlamento debe discutir la matriz energética y cómo se impulsan distintas alternativas. El presupuesto que hay para las energías renovables no existe. Sólo el 0,5 por ciento de las energías renovables aportan energía a la Argentina. Por eso, éste es un debate grande.

Y frente a este debate grande que nos debemos, nosotros plantamos bandera, sabiendo lo provisorio y las dificultades. Es un aporte a un debate abierto. Porque podrán sancionar la ley, pero si algo tenemos que hacer, es trabajar para que sea una de las primeras leyes a las que le saltamos encima a partir del cambio de gobierno. Entonces, ¡guarda las petroleras y las trasnacionales con creer que esta ley que salga de este Parlamento, y de esta manera, va a tener seguridad! Están totalmente equivocados. Acá hay argentinos que no van a seguir tolerando el saqueo. ¡Atención!

Dicen: ¿qué vamos a hacer? Todos se van a ir, esto es una catástrofe. El 1º de mayo de 2006 Evo Morales nacionalizó el petróleo en Bolivia, el país más pobre de América Latina. Todos dijeron, a coro, el *establishment*, todo el mundo: nos vamos a ir todos de Bolivia, van

a morir en su pobreza, así lo han elegido, que sean más pobres. Presidente: no se fue ninguna petrolera de Bolivia. Del 18 por ciento pasaron a pagar el 50 por ciento de regalías. Nadie se va hoy de donde está extrayendo petróleo. Eso le permitió al gobierno boliviano en tres años acabar con el analfabetismo. La UNESCO lo premió. Y le permitió hoy tener la friolera de 45.000 millones de dólares de reservas y los tres superávits.

Entonces, no se puede insistir con los viejos errores. Nosotros tenemos que pensar en un grandísimo debate. Sabemos que esto que sale ahora, este mamarracho que sale ahora, tiene vida corta. No voy a enumerar todas las increíbles ventajas e incentivos que les dan como premio y beneficio a las pobres petroleras.

Voy a contar algo que todos se olvidan. Uno de los mitos grandes es que acá no hay capital, que tenemos que quedarnos con las petroleras, que tienen que venir los de afuera. Mire, presidente: el año pasado la presidenta, con un decreto, aumentó el costo del barril de petróleo de 45 a 75 dólares. Hoy se llega a pagar en los mejores petróleos 85, que es lo que compran las destilerías a las petroleras. Es decir que, de un simple decretazo, se dio un subsidio de 30 a 35 dólares por barril. Produciendo la Argentina 200 millones de barriles al año, son 7.000 millones de dólares. ¿Quién los pone? Todos: los que sacan el tractor, los que sacan el camión para transportar mercaderías, los automovilistas, que somos nosotros. Todos los años estamos colocando eso. Digo más, a un costo del barril de petróleo no convencional de entre 13 y 15 dólares, y soy generoso. Es decir, el margen a los 45 ya era grande, era de 30 dólares: gastos administrativos, publicidad, toda la mordida, todo lo que quieran. Pero ahora, de 14, 15 dólares a 80, 85 dólares es enorme, son 12.000, 13.000 millones de dólares que salen de nuestros bolsillos, estimados amigos.

Lo que digo es que hay recursos en la Argentina. Por eso Mosconi pudo financiar y por eso Canessa pudo financiar. Necesitamos el manejo de las tarifas. Necesitamos recuperar este poder.

¿A qué nos condujo toda esta privatización? ¿A qué nos condujo el descuartizamiento de estas empresas? La Argentina se ha empobrecido. Cuando veo las provincias petroleras, ¿están ricas, florecientes? Lo hemos escuchado:

déficit fiscal, no se ven grandes obras, no se ven industrias. La verdad, basta con desembarcar en Río Gallegos para no saber dónde uno llegó. Y hubo tres mandatos presidenciales.

Entonces, acá algo no funciona, señor presidente. Nos debemos un debate fraterno entre las 14 provincias y las 10 provincias petroleras. Las diez provincias petroleras, la reforma del 94 y la Ley Corta vinieron como legítima y justa reacción frente al maltrato de la Nación con las provincias, hasta hoy. ¿Qué es esto de la coparticipación federal? La reforma del 94 hablaba en una de sus cláusulas transitorias que antes de veinticuatro meses se debía convocar a una ronda de la coparticipación federal. Del 35 al 36 por ciento que está fijado que debía ser la coparticipación federal, no sé si hoy las provincias reciben el 28 por ciento.

Entonces, vivimos una historia de injusticias, una historia de maltratos. Y con razón, maltratadas las provincias, está el sálvese quien pueda —comprendo el discurso de Verna— y agarro esto.

Nosotros proponemos la recuperación estratégica de los recursos. No queremos provincias que terminen siendo rehenes de las petroleras, que son sus bancos.

Por ese camino podríamos llegar a quedar —corruptelas al margen— en “petrooligarquías” secesionistas que hacen todo lo suyo. La Argentina es una unidad.

Nosotros acabamos de impulsar una ley de pesca. Hoy quince concesionarios del recurso pesquero desde los años 90 se quedan con la totalidad del pescado. ¿Es justo esto? ¿A quién le pertenece el pescado? Hasta las doce millas, por supuesto, son mares territoriales. Pero de las 12 millas a las 200, de la zona económica exclusiva, ese pescado también es del mendocono, del cordobés, del santafesino, del jujeño, del salteño.

Tenemos que encontrar un equilibrio en este debate que nos debemos entre lo que le corresponde a la Nación y lo que legítimamente les corresponde a las provincias, que, por cierto, por tener el recurso no pueden recibir lo mismo que los otros.

Pero el 85 por ciento de los argentinos no podemos ser hijos de la pavota. La indemnización de Repsol nos costará al pueblo argentino más de 13.000 millones de dólares porque son bonos

que pagan intereses del 8,75, etcétera, y algunos llegan hasta el año 31, 32. ¿Quién paga eso? El 85 por ciento de los que pagan somos los hijos de la pavota, con una tasación trucha que es una vergüenza. Porque se fijó en 6.000 millones de dólares por el 16 por ciento del mercado. No hay nadie que pueda tasar a la compañía YPF en más de 18.000 o 20.000 millones de dólares. Pero si nosotros hemos pagado el 51 por ciento, 6.000 millones de dólares, es decir que hemos pagado una YPF a un valor de 34.000, 35.000 millones de dólares, sin contar los pasivos ambientales que dejó Repsol. Sinceremos el discurso, muchachos. Estos maltratos con un pueblo empobrecido, que está muy mal, son intolerables.

Propongo, entonces, que acá tiene que haber esa discusión sobre la relación de Nación y provincias por los recursos del subsuelo. De lo contrario, ¿cómo sería entonces? No, muchachos, nosotros hemos financiado durante 72 años la industria, vamos a pasarles las facturas a las diez provincias petroleras.

Salgamos de este disparate. Hemos pasado de un lado violento, violentamente a otro lado, pero sin lógica. Nosotros tenemos que construir políticas que unan a la Nación, que remedien injusticias, que ataquen corruptelas y que perfeccionen las instituciones que tenemos.

Señor presidente: digo que acá hay capitales. Por supuesto, lo acabo de decir por el aumento terrible del precio de los combustibles, que es lo que más ha empujado el proceso inflacionario en estos últimos años.

Voy a utilizar estos dos o tres minutos para decir qué estamos planteando nosotros en este proyecto. Un proyecto que nace retomando los aportes que se hicieron desde que fundamos el Movimiento por la Recuperación de la Energía en el 2002, el MORENO, junto con el gran especialista en energía don Gustavo Callejas, don Félix Herrero, también con José Rigane; y en este proyecto también han aportado mucho el diputado radical Fabián Rogel y don Alejandro Olmos Gaona. Es decir, lo nuestro no solamente no nace de una probeta, sino que nace de un acuerdo plural entre los que venimos de la vertiente nacional y del peronismo con el radicalismo yrigoyenista.

Hoy hemos presentado ese proyecto de ley que tiene unos largos fundamentos y 108 artícu-

los. Por supuesto, tiene toda una coherencia no en la avenida privatizadora, sino en la avenida de la recuperación para la Argentina, para la Nación argentina, no para la provincia, sino para todas las provincias, de un recurso que nos debe servir a todos y a cada uno en su medida, en su esfuerzo y en su aporte.

Esta ley propone la soberanía energética de la Nación con una matriz independiente de todo requerimiento. Se declara de interés público y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento energético. Se establecen principios claros en lo que debe ser la política energética y la investigación en energía. Se crea una nueva reserva estratégica de hidrocarburos. Estados Unidos tiene cuarenta años metidos en el subsuelo, que no los toca, importan.

Se establece una auditoría periódica de reservas. Acá, hasta el día de la fecha, no se ha hecho. Nosotros presentamos varios proyectos de ley en Diputados, pero no se ha hecho una auditoría de reservas. Las reservas son del pueblo de las provincias. No se ha hecho una auditoría de las reservas. No se sabe lo que tienen. Cómo será esto de escandaloso y de impune que todavía el proyecto oficial de hoy plantea la declaración jurada del que extrae, lo saca y lo vende. Ninguno de ustedes puede retirar un paquete de yerba del mercadito de la esquina sin pasar por la caja. El mismo sistema de la minería, eh; todo esto es la enajenación de los años 90 de los recursos del subsuelo. Las mineras han extraído millonadas, pagando el 3 por ciento de lo que ellas declaran, ciento ochenta días después de llevarse el mineral de acá, sólo sobre tres metales: plata, oro y cobre y se tragan 61 metales, de los cuales más de veinte son tierras raras y metales valiosísimos, más caros que el oro, que se usan en las industrias de punta, las aleaciones, los superconductores.

Entonces, el proyecto nuestro prohíbe, además, la exportación de hidrocarburos. La Argentina no es Arabia Saudita ni Venezuela. La Argentina debe guardar lo que le sobra porque no puede fumarse –artículo 41 de la Constitución– los recursos que le pertenecen no a esta generación sino a las generaciones futuras.

Después, se prohíbe el otorgamiento de concesiones. El modelo de las concesiones está terminado, está reemplazado por muchos otros modelos: el principal, los contratos de obras y

servicios. Todos los que trabajan en Brasil hacen esto. Petrobras tiene un gran consejo nacional de hidrocarburos con todos los estados y representaciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

Esta ley le garantiza una ganancia mayor a las provincias.

**Sr. Pichetto.** – ¿Me permite una interrupción?

**Sr. Presidente** (Zamora). – ¿Le permite una interrupción, senador?

**Sr. Solanas.** – Voy terminando.

Una participación igual al 20 por ciento del producido neto de las actividades en la zona productiva, debiendo destinar una cuarta parte de ellas y de forma directa entre los municipios de la provincia. Se destinará un 10 por ciento del producido neto total a las provincias que no tienen el recurso. YPF volverá a ser la empresa rectora de la explotación de los hidrocarburos. Se establece sobre todo nuestro proyecto la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental con carácter previo a cualquier exploración, explotación, etcétera. Se establece que las empresas que exploren o exploten hidrocarburos deberán cumplir con las normas de protección ambiental y se establece el principio precautorio y el consenso social para el desarrollo de los yacimientos y, por supuesto, con las debidas consultas a las poblaciones originarias en sus territorios. No aceptamos eso de que se viene y se desaloja y se los condena a tomar aguas infectadas con metales.

Se prohíbe la explotación de recursos fósiles no convencionales mediante el sistema de fractura hidráulica; ya lo ha explicado muy bien mi compañera Odarda. Quedan sin efecto las concesiones mediante el sistema de fractura hidráulica. Se establece un impuesto al petróleo crudo del 12 por ciento que estará destinado a la investigación de las energías renovables y alternativas, a la reparación del daño ambiental y a la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Se fijan normas para la nulidad y caducidad de los contratos. Todos los contratos en todas partes del mundo tienen normas de resciliación, etcétera.

La Auditoría General de la Nación tendrá plena competencia para auditar a YPF y a las empresas poseedoras de contratos de asociación y se fija el compromiso de indemnizar a los tra-



bajadores de YPF que fueron escandalosamente robados con la privatización de los años 90, estafados por el robo de las acciones que se les debió otorgar por la ex privatización.

Señor presidente, voy a terminar ya diciendo algo. Aquello de los contratos de La California, para alguien que lo mencionó, no llegó a aprobarse. Fue John William Cooke quien retiró de la Cámara de Diputados el proyecto con La California.

Finalmente, les digo que siendo hoy, estimados amigos, 8 de octubre, que es una fecha que a nosotros nos dice bastante, debo recordar el artículo 40 de la Constitución Nacional: los minerales, las caídas de agua, el petróleo, el gas, el carbón, son bienes inalienables e imprescriptibles de la Nación. Y termino diciendo que no puede seguir confundiendo lo que es recurso con lo que es reserva. Recurso sí; Vaca Muerta tercera o segunda región del mundo con recursos. Pero no son reservas; reservas es lo que puede ser explotado comercialmente, lo que se puede sacar y comercializar, porque en las plataformas continentales y en las profundidades marítimas la cantidad de recursos minerales y petroleros que hay son infinitos pero muy costosos de sacar. Se considera que el uno por ciento del recurso se puede convertir en reserva.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Zamora). – Tiene la palabra el señor senador Romero.

**Sr. Romero.** – Señor presidente: acá el miembro informante nos dijo al comienzo de la sesión que el juego del petróleo, las potencias hegemónicas lucharon para la apropiación de la renta. Seguramente que eso es así. Él dio la sensación de que esto ya estaba terminado con la recuperación de YPF. Creo que no, que el petróleo sigue siendo parte del juego de las potencias; si no, basta ver el mapa del mundo, las guerras en Medio Oriente y la dominación pacífica a través de distintos modelos a los que nos vamos adaptando, pero que a la larga la renta es la discusión.

Atrás de YPF hay un 49 por ciento de capital privado, pero como ya se dijo acá YPF, además, no tiene cómo financiar los 20 mil millones de dólares que necesita para invertir. Con mucho esfuerzo consiguieron que Chevron pusiera 1.000, 1.200 millones. Lo demás son todas

promesas. Esto es lo que genera esta realidad, es lo que le genera a YPF la presión para esta ley.

Por el hecho de que el Estado tiene el 51 por ciento ya bendecimos todas las presiones. Entonces la presión de Galuccio es bendita y fabulosa, cuando fue él quien acusó a los gobiernos provinciales por primera vez atacando el acarreo. Fue hace pocos meses. A las pocas semanas salió la primera ley de máxima para asustar a los gobernadores en extremo. Y después permitió, en una negociación, dar la sensación de que la presión y el daño para las provincias no iban a ser muy grandes porque los gobernadores habían logrado, después de una valiente y heroica lucha, mitigar la presión centralista. Todo es parte de un relato. Ni la presión disminuyó, ni se puede hablar de federalismo de concertación, sino que acá hay un juego de un federalismo de presión.

No se trata de que alguien se enoje porque uno diga que los gobernadores están presionados. Fue público que las cuatro provincias que se resistieron al primer borrador, en ese juego de las negociaciones de las deudas cada tres meses –no sé si ahora es mensual– en el que tienen que venir a rendir cuenta los gobernadores de las provincias endeudadas, no fueron invitadas a la última reunión de negociación. Cuando se renegociaba la deuda cada dos o tres meses –no sé ahora cada cuánto es, pero no son más de tres meses–, los gobernadores de las cuatro provincias que se habían resistido un poco no fueron invitados. Esto, más las otras presiones que señaló el señor senador que expresó las presiones que tuvo del gobernador del Chubut. Esto es una presión.

Creo que esta presión surge de YPF y del sector privado que pide condiciones más favorables aún.

Acá también se preguntó a quiénes estamos representando los que estamos en contra de la ley. No tengo que explicarlo. Es obvio que represento a mi provincia.

Estoy viendo que no fuimos las provincias las responsables del desabastecimiento que la ley promete en todos sus fundamentos lograr. Es curioso: este gobierno, que desde Planificación y desde la Secretaría de Energía generaron en esta década el desabastecimiento, la pérdida de estímulo para invertir, pérdidas para las provincias que un estudio estima en 17.000 millones de

dólares; en mi provincia, si se hubieran liquidado bien las regalías, si no se hubiera subsidiado a la zona central...; y yo les digo aquí que las provincias petroleras nunca recibieron un centavo a la renta. Desde la Ley Corta hasta ahora no pudieron hacer nada. Si pasaron apenas tres o cuatro años, que fueron los peores años de falta de inversión. ¿Qué inversión se logró en estos cuatro o cinco años? ¿Quién viene a invertir? Chevron, a la que tenemos como una perla, fue la única que apareció. Pero con condiciones que no sabemos todavía cuáles son: la jurisdicción, la política cambiaria, la política arancelaria, etcétera. No sabemos lo que se llamaría el costo argentino para que venga Chevron. Y no sabemos cuál será el costo argentino hasta que venga Petronas, si viene.

Por eso esta ley sigue consolidando ese afán centralista. Las provincias petroleras no sólo no hemos recibido un peso de la renta petrolera, sino que en la última década hemos venido financiando a la zona central, a la zona rica del país, porque el gobierno decidió que el gas producido sobre todo en las provincias, y sobre todo en Salta, donde conozco los números, estuviera subsidiado. Entonces, el gas de nuestra provincia, que se pagaba a 1 o 2 dólares en la última época en boca de pozo, que es y fue casi todo el tiempo para consumo domiciliario de las grandes zonas de consumo. Porque el Litoral, Chaco, Formosa y la Mesopotamia, salvo Entre Ríos, no tienen gas. Entonces, en nuestra provincia los gasoductos vienen a Buenos Aires. Hemos estado subsidiando a Puerto Madero y a los countries de la provincia de Buenos Aires con el gas barato, mientras el gas de Bolivia se paga a 10 dólares el millón de BTU. Y Bolivia reparte a las provincias bolivianas vecinas, en concepto de regalías, el 12 por ciento de 10 dólares. Nosotros en Salta recibimos el 12 por ciento de 1 o 2 dólares. Y eso pasó durante 10 años. ¿Y qué consecuencias tuvimos? Que de ser los únicos que inyectábamos 20 millones de metros cúbicos por día en el gasoducto, hoy inyectamos 6 o 7 millones. Los otros 13 millones de metros cúbicos vienen de Bolivia. El gasoducto viene lleno igual.

Luego, hay un desajuste, porque nosotros recibimos regalías por el gas más barato, pero después las industrias y el subsidio compensan el gas de 10 dólares de Bolivia. Y qué curioso:

las mismas empresas que tienen las concesiones en Salta son las que están en Bolivia. Allí reciben 10 dólares y acá 2. Creo que el otro día estaban por inaugurar un pozo en 10 años, porque, además, es más caro.

Entonces, esa injusticia las provincias tienen que repararla de alguna manera en el futuro, con planteos judiciales o con otra ley que algún día haga una verdadera reparación y equilibrio.

Las provincias petroleras han sido postergadas por este modelo. Es cierto, el ex presidente Kirchner cumplió con la Ley Corta, pero en un comienzo. Jamás se transfirió la renta, porque los contratos eran los viejos, porque el precio está pisado, porque no hay inversión nueva. Y eso es lo que hemos vivido todos estos años.

Las provincias no nos podemos hacer responsables de que no haya inversión. Responsables son los que hacen, o hicieron, o provocaron esa pérdida de las reservas. O quienes provocaron que no se invierta. Responsables son los que hoy hemos venido importando gas a 16 dólares en barcos. Y hoy hay entre cuatro y seis barcos parados porque no hay demanda corriente para descargar esos barcos, ni recursos para transferirlos. O hay recursos pero no están los trámites agilizados. Está publicado. Hay entre cuatro a seis barcos estacionados que cuestan, porque la estadía cuesta.

Con esta política energética que nos ha perjudicado a los argentinos, a los salteños; que hace que hoy tengamos que importar lo que importamos, ¿qué renta va a tener un salteño que vive arriba del caño del gasoducto que no tiene gas natural? Porque son barrios que han crecido, o porque las empresas no invierten. Hay gente que vive en Tartagal, en Mosconi, sin gas natural, por donde pasa el gasoducto. La gente del Norte no consigue la garrafa llamada social a precio subsidiado.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

**Sr. Romero.** — Entonces, aceptar esta ley por parte del gobierno de la provincia se traducirá en menos recursos. Ya hemos perdido recursos en esta década con el subsidio al gas. Y ahora vamos a seguir perdiendo más. Porque también dijo el miembro informante que uno de los objetivos de esta ley era igualar cosas. Uno puede, con el papel, igualar cualquier cosa, pero

la geología y la geografía no son las mismas en todo el país. No tiene el mismo atractivo hacer una perforación en Mendoza o en Neuquén que hacerla en Salta. El costo de la perforación no es el mismo. También el cuidado ambiental es más complicado en la zona selvática que en el desierto. Por eso no se puede igualar convirtiendo a la Argentina en una especie de emirato único donde las reglas para las compañías se las garantizamos del lado de las provincias. Es decir: “Mire, usted quédese tranquilo que las provincias no van a poder hacer un contrato con ‘compre local’; no van a poder hacer una licitación, sino con las reglas que se establezcan; las prórrogas ya están establecidas, que son prórrogas tras prórrogas; no van a poder cobrar sellos las provincias más que de esta manera y actividad económica más que de esta manera”.

Entonces, la previsibilidad para el inversor es la provincia. Ahora, claro, yo soy inversor y digo: “Bueno, ahora me siento a ver dónde me conviene, si es todo igual. Ah, no me puedo asociar con nadie, entonces voy a ir a la zona más fácil”. ¿Qué hace pensar que va a ir a la zona más difícil?

Las provincias del interior, las que están alejadas de los puertos, no le reclaman a la zona central ni la lluvia ni el río ni el puerto cercano. Un federalismo verdadero es que cada provincia desarrolle su potencial; y las que no han tenido oportunidad de desarrollar su potencial, que no haya egoísmo, que la solidaridad federal está en eso, que sin egoísmo cada provincia puede desarrollar su potencial; y no igualar lo que no se puede igualar, no cortarnos a todos a la misma altura.

Es cierto que en un momento creció el consumo, pero acá no nos estamos quejando de que falta energía porque hay pérdida por crecimiento del consumo. Estamos diciendo que las políticas equivocadas disminuyeron las reservas, disminuyeron las extracciones.

Las reservas comprobadas de 2003 a 2010 cayeron el 11 por ciento; la producción cayó el 18 por ciento. En cuanto al gas natural, las reservas comprobadas cayeron el 43 por ciento; la producción, el 8 por ciento y la relación reserva-producción, un 38 por ciento.

Esto no tiene nada que ver con el crecimiento. Hubo dos cosas que lo agravaron: por un lado, el aumento de la demanda por mayor actividad,

sobre todo al comienzo de este modelo; y, por otro lado, la disminución de la exploración y de la explotación. Eso trajo –y esto es dato del presupuesto– la necesidad de diez mil millones en 2013 para importar y de ocho mil millones en 2012; y la relación importación-exportación es la que nos da el déficit de siete mil millones. Es obvio y evidente.

Entonces, ese mismo modelo que ahora se vuelve sobre las provincias está tapando lo improductivo del sector energético en el país. Mientras tanto, en América Latina, en la misma década de 2002 a 2011, la producción energética respecto del gas creció en un 45 por ciento y la del petróleo en un 5 por ciento.

En cuanto al petróleo, los países con mayor incremento fueron Perú, 76 por ciento; Colombia, 58 por ciento; Brasil, 44 por ciento; Ecuador, 31 por ciento y Bolivia, 25 por ciento.

En gas, lo mismo. Gran incremento de Bolivia que, como todos sabemos, exporta a la Argentina y a Brasil, y nadie se desgarró las vestiduras con que exporte; al igual que Rusia, que también exporta. Uno exporta lo que tiene e importa lo que no tiene. Esa es una regla mundial. Por lo tanto, no me aterra que en mi provincia haya dos gasoductos, lo que lamentó es que no haya gas para exportar. Bolivia aumentó 137 por ciento; Brasil, 64 por ciento; Colombia, 57 por ciento; Ecuador, 29 por ciento y Venezuela, 15 por ciento; en la Argentina la tendencia es decreciente, como dijimos.

La cantidad de pozos terminados, promedio anual. Del 80 al 89 se terminaba, anualmente, un promedio de 102 pozos; del 90 al 99, un promedio anual de 98 pozos y del 2000 al 2009 un 48 por ciento; la mitad que en la década del 90, y en la década del 90 casi un 15 por ciento menos que en la década del 80 al 89.

Esa es la realidad. Acá no se invirtió. No se invirtió porque no se crearon las condiciones o porque no supimos controlar a Repsol; con socios amigos del poder, con directores del Estado no supimos controlarlo. Siempre buscamos un enemigo afuera, pero a veces los tenemos adentro.

Acá lo que sucede es que se quiere reconstruir la confianza y no la vamos a reconstruir con esta ley. Esta norma no resuelve ni los problemas macroeconómicos ni los problemas inflaciona-

rios ni la presión al sector productivo, pero sí convierte en simbólicas las expresiones de la Constitución en el artículo 124. Al convertir a la Argentina en una sola jurisdicción, acá se logran dos efectos: uno, un beneficio para YPF y el otro para la Nación. Limita las autonomías de las jurisdicciones, establece un tope para todo lo que es provincial, ¡pero ninguno para lo que es nacional!

Según el precio internacional, las retenciones fueron entre el 30, el 35 y el 40 por ciento. El gobierno maneja las retenciones que no coparticipa como una variable. Tiene impuesto a las ganancias, tiene IVA, la política cambiaria, la política arancelaria. Entonces, la Nación es la única que puede manejar la renta y ese es el principal objetivo de este proyecto: que las provincias tengan nominalmente los recursos. Quizá ahora ni siquiera tengan la contratación; sean administradores de la contratación o de la concesión, menos administradores y que, además, no se les permita ningún tipo de asociación, que es la única variable que puede tener una provincia. ¿Por qué? Porque el presidente de YPF se dio cuenta de que el principal competidor que tenía eran las provincias, ¡porque el que no tiene dinero para invertir es YPF y necesita acarrear!

Entonces, el acarreo es malo si lo hace una provincia. Claro, la provincia no tiene capacidad de hacer un acarreo eficiente. Eso sí, el permiso único lo tiene YPF. Tiene ciento y pico de concesiones, entonces es el acarreador mayor, el único, el exclusivo.

Ese es el objeto de esta ley: quitarle a la provincia la competencia de ser parte de un proyecto productivo, donde también asuman un riesgo, porque si le va muy bien, cobrará lo que le corresponde a la sociedad; y si el negocio no va bien, la provincia fracasa en un porcentaje y la empresa privada en otro. No es una avivada. Sin embargo, YPF, que se convierte en una especie de señor feudal, dueño de la tierra, tiene ciento y pico de áreas; entonces, como no consigue dinero, va a traer gente para el acarreo. ¿O no es un acarreo lo de Chevron? ¿Acaso no es un acarreo el área de La Pampa?

Entonces, acá es todo para la Nación y para YPF, y nada para las provincias. Por un lado, con las cargas nacionales, la renta es de la Nación; y con el acarreo, el negocio es para YPF.

Esta es la verdad de este lamentable proyecto que deberá ser revisado en el futuro, en un verdadero federalismo de concertación, donde haya una política energética nacional que incluya todas las energías, pero que también incluya las posibilidades para todas las provincias.

Este es un aprovechamiento de una situación que yo, desde mi provincia, la veo absolutamente dañina y perjudicial para los intereses de una provincia. Ya en Salta, desde la década del 20 daba concesiones. Luego, llegó YPF y en un tiempo convivieron YPF y empresas privadas.

La competencia sería lo mejor para YPF, no el feudalismo.

Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto negativo del Interbloque Federal.

**Sr. Presidente.** – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: terminando este debate, y después de haber escuchado a algunos miembros de la bancada oficialista, quiero decir que la verdad que plantean un país virtual del que muchos no nos damos cuenta, o no sé si vivimos en países distintos, porque acá se ha dicho que no hay crisis en el sector energético.

Quiero reiterar algunos datos que acaba de plantear el senador Romero con algún otro análisis, porque la verdad es que uno de los problemas graves que tiene la economía, que se viene deteriorando, es que se ha terminado con los pilares del modelo de crecimiento sostenido de los primeros años, desde el año 2002 hasta el año 2007: el superávit fiscal, el superávit de la balanza comercial, el tipo de cambio competitivo, el crecimiento en el nivel de reservas y la baja inflación o un porcentaje de inflación controlable. Esos pilares del modelo de crecimiento se han deteriorado, y yo diría que uno de los sectores en donde más se nota esta crisis tiene que ver con el sector energético. En los primeros años teníamos un superávit de 6.000 millones de dólares en la matriz energética y, a poco de andar, este gobierno fue revirtiendo esta situación.

Estaba mirando las cuentas del presupuesto, y la verdad es que una de las partidas que nosotros siempre planteamos en la que hay que hacer cirugía mayor, es la relacionada con los subsidios a la economía; y, en particular, miran-



do los subsidios al sector energético, vemos un crecimiento exponencial. En el año 2005 había 1.800 millones y en el año 2013 se ejecutaron 81.400 millones; es decir que en ocho años se ha más que multiplicado el aporte que hace toda la economía, el sector público, al sector energético en forma de subsidios. Hablamos de Cammesa, de ENARSA, de organismos provinciales, del Ente Binacional Yacypetá, Río Turbio. Algunas son cuentas menores; Cammesa y ENARSA son las cuentas que más demandaron subsidios, y lo siguen haciendo.

Estuve revisando la ejecución presupuestaria del año 2014 y la verdad es que teníamos un crédito inicial de 78.585 millones y resulta que, con decretos, el crédito se ha incrementado a 173.000 millones.

Al mes de septiembre el incremento del crédito de casi 79.000 millones ha subido a 214.000 millones; quiere decir que al mes de septiembre llevamos ejecutados 162.000 millones en esta cuenta de servicios económicos, que es Energía, Combustibles y Minería. Eso sólo en el capítulo de Energía, Combustibles y Minería. Es decir que a septiembre vamos gastando el doble de lo que hemos gastado en 2013.

Yo escuché a los senadores Aníbal Fernández y Mayans, y quisiera que me digan dónde está el modelo virtuoso. ¿En dónde dice, según los datos del presupuesto, que no hay crisis energética?

Una de las razones de la fuga de divisas y la situación que ha provocado caída de reservas es el sector externo y, en esto, el sector energético, la crisis energética, el déficit en la matriz energética que tiene la República Argentina. Y el déficit no se explica en razón del aumento del consumo, que es verdad que ha aumentado, pero ha bajado la oferta.

Esta cuenta no tiene límite; como digo, son 214.000 millones hasta fin de año pero ya llevamos ejecutados... Van a tener que reforzar el crédito. ¿Y me dicen que está todo bien en materia energética?

Esta es una primera cuestión que yo creo que mínimamente tenemos que tratar de confrontar con la realidad, porque si no estamos hablando de situaciones distintas, y no es que estamos viviendo en países distintos. Estos son números contundentes.

El incremento en los subsidios económicos en energía, combustibles y minería, comparando el devengado al 30 de septiembre del año pasado con el 30 de septiembre de este año, es del 157 por ciento; y, como digo, en esto las cuentas más importantes son ENARSA y Cammesa.

Y el tema de la caída de la oferta se explica en los datos que ha dado el senador Romero. Acá tengo el informe de tendencias a julio de 2014 del Instituto Argentino de Energía "General Mosconi", que dice que la producción de petróleo continuó en julio su tendencia descendente, alcanzando su mayor caída en los últimos 17 meses del 3,7 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Dice que la caída es explicada parcialmente por los paros petroleros que se dieron durante dicho mes y por la caída de las inversiones. Y continúa diciendo que, de esta manera, la producción de petróleo acumula una caída en el último año móvil del 1,2 por ciento. Hay que excluir a YPF y a otra empresa, que son los únicos que han crecido, pero el resto de las empresas han caído en cuanto a la producción. Lo mismo pasa con el gas, que tiene una tendencia más moderada a la caída.

El problema es que todavía sigue cayendo la oferta, ahora, porque estamos hablando de un informe al mes de julio de este año.

Entonces, acá hay una situación que es la que, de pronto, genera la llegada de este proyecto, que además tiene que incorporar en la Ley de Hidrocarburos un tratamiento de los hidrocarburos no convencionales. Pero con ese argumento terminan trayendo un proyecto de ley en función de la necesidad de la búsqueda de inversiones frente a la debilidad en materia de seguridad jurídica. Como consecuencia de nuestro aislamiento en el mundo la única posibilidad de traer fondos es que el negocio sea por demás apetecible, que dé ganancias por demás y que dé por demás una renta petrolera, y este es el tema que tenemos que discutir en este proyecto de ley.

Hay algunas cuestiones que nosotros discutimos, y que ya ha planteado el senador Ernesto Sanz como miembro informante.

Acá hemos escuchado decir que con este proyecto se terminaba el negocio inmobiliario para las áreas petroleras. La verdad es que lo que se ha venido haciendo acá, como ha dicho el miembro informante y este proyecto lo con-

firma, es estimular la continuidad y no estimular la competencia. Esto es lo que expresa este proyecto. Porque lo cierto es que el esquema de licitaciones es para las áreas que no están concesionadas; lo que hace este proyecto es reafirmar las áreas concesionadas en un estado de situación donde hay una gran precariedad y una debilidad institucional en materia de control.

Acá no se han revertido áreas. Acá no se les han quitado las áreas a los concesionarios que no han invertido y que están haciendo negocios inmobiliarios. Esto pasa en todas las provincias, inclusive en la mía, donde tenemos solamente 58 pozos. Allí hay un área donde hay una empresa que no le da la espalda para nada; estarán esperando vender el área a alguna empresa. Y no hay mecanismos de control que ejecuten realmente la posibilidad de revertir las áreas, con lo cual no hay ninguna garantía de que pueda haber un proceso licitatorio...

—Murmullos en el recinto.

**Sr. Presidente.** — Por favor, senadoras.

**Sr. Morales.** — Que se terminen de saludar las compañeras. (*Risas.*)

**Sr. Presidente.** — Continúe, senador Morales.

**Sr. Morales.** — Decía que desde el punto de vista institucional y el sistema operativo vigente no hay posibilidad de que pueda darse esta situación que teóricamente han planteado. Es más, en el artículo 4º —en la modificación del artículo 27— vemos que este negocio se va a extender, no será ya un negocio con el tema de los cortadores de pasto —como planteaba nuestro miembro informante— sino que ahora el negocio inmobiliario va a ser de propiedad horizontal porque resulta que el artículo 27, la modificación que se plantea, dice lo siguiente: “Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional.” Es decir, el que tenga permiso de exploración y que venga “cortando el pasto” arriba, ahora puede pedir por los no convencionales más abajo. Entonces, resulta que terminamos generando un negocio inmobiliario de propiedad horizontal. No sé si será en el cuarto o en el quinto piso que le tocará que haya recursos no convencionales. Esto es lo que se consolida.

Entonces, la clave que no resuelve el proyecto que envía el Poder Ejecutivo es el mecanismo de control para poder revertir las áreas, para poder quitar y sancionar. Esto es lo que está ocurriendo realmente. Y esto es lo que ha pasado desde la Ley Corta que, como ha dicho el senador Sanz, acompañamos en todo un proceso pero que tenía que ver con que las autoridades de aplicación realmente puedan intervenir en esta situación.

Por otra parte, lo escuchaba al senador Mayans y hay también la idea en alguno del oficialismo que acá tenemos que votar o votar porque, de lo contrario, somos enemigos de la Patria. Hay que compartir o compartir los proyectos que manda el Poder Ejecutivo porque, de lo contrario, somos destituyentes casi. ¡Que se nos permita disentir! No estamos obligados a acompañar y damos las razones de por qué creemos que esta no es la mejor solución. Y por eso hemos planteado un nuevo proyecto de Ley de Hidrocarburos que prevé el tema de los recursos no convencionales y que prevé también la situación de institutos federales de control, con participación no sólo de las provincias petroleras sino también de las provincias que no son petroleras pero que forman parte de la República Argentina. Todos tenemos la idea de construir desde este proyecto de ley un proyecto nacional energético, que es lo que no hay. Y es lo que no ha habido por desidia del gobierno nacional y también por una situación en la que tienen responsabilidad las provincias petroleras.

Con relación al tema ambiental, en nuestra propuesta tenemos un capítulo con la cuestión de los presupuestos mínimos. Los presupuestos mínimos ambientales son para que los sancione la Nación, no las provincias. Hemos escuchado a funcionarios nacionales decir que la cuestión de la normativa ambiental la dejamos reservada a las provincias. Obvio que las tienen porque todas las provincias, por el artículo 124, somos dueñas de los recursos naturales. Nuestra Constitución Nacional en el artículo 41 está planteando que tiene que ser el Congreso de la Nación, que le compete a la Nación establecer los presupuestos mínimos, como lo hicimos con la ley de glaciares. En nuestra provincia todavía no hemos aplicada la ley de glaciares porque hay una demanda de inconstitucionalidad planteada por el gobierno provincial. Y esto hacen muchos gobiernos provinciales...

**Sr. Presidente.** – Voy a pedir que mantengamos, hasta el final del debate, la atención a los oradores, sobre todo en el cierre. Gracias.

Senador Morales.

**Sr. Morales.** – Acá hay provincias a las que no les interesa legislar en materia ambiental. El juego es decir que se lo hemos dejado porque las provincias están preocupadas por el medio ambiente, cuando hay provincias que este tema ni les interesa. Inclusive no tienen ni siquiera policía de control de las normativas ambientales, que muchas provincias tienen pero que no hacen cumplir. No les interesa. Este proyecto, mínimamente, tendría que haber tenido un capítulo. Nosotros proponemos establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental, quién es la autoridad de aplicación y la obligatoriedad de presentar informes de impacto ambiental. También la transparencia activa, que todos los contratos, toda la evolución y los informes de impacto ambiental estén colgados en la página web. Es decir, que sean de acceso al público, que sea información pública como corresponde.

En el tema de las no convencionales determina la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental para proyectos de exploración y explotación; establece que la declaración de impacto ambiental será utilizada, como mínimo, en forma bianual; fija permiso previo de la autoridad local competente en materia de agua para el uso y disposición de aguas; prohíbe durante la etapa de perforación y terminación de pozo no convencional la utilización de aguas subterráneas con aptitud para satisfacer el abastecimiento de poblaciones; y fija normas en cuanto al agua de retorno que deberá ser sometida en su totalidad a tratamiento en las piletas de almacenamientos. Es decir, establece una serie de normas mínimas que tiene que tener un proyecto. ¡Esta es la oportunidad! ¿Cuándo más vamos a discutir presupuestos mínimos ambientales?

Entonces, esta es la segunda vuelta de rosca de una Ley Corta que intenta resolver el tema de la incorporación de los recursos no convencionales pero en función de la debilidad y la gran crisis energética que hay. ¿De qué modo? Son 214 mil millones para un presupuesto del orden del billón 200 mil millones. Es decir, estamos cerca del 18 por ciento del total del presupuesto en subsidios para la energía. Que a mí me digan

que no hay problema. Por esa razón, por esta debilidad en virtud de la inseguridad jurídica, en virtud de nuestro aislamiento con el mundo, porque cada vez nos creen menos, no es que van a venir alegremente a poner plata, van a venir a poner plata, porque obviamente son inversiones de riesgo, en la medida en que la rentabilidad sea importante. Y lo que estamos entregando con este proyecto de ley es la rentabilidad.

Con relación al tema de las regalías, planteamos un piso de 12 por ciento. ¡Que negocie la provincia y la Nación! También planteamos un esquema de concesión y contratos, un tema que todavía tenemos en debate dentro de nuestra fuerza política. En La Pampa hay contratos de 35 por ciento. Creo que la empresa de La Pampa está cobrando 35 por ciento. Hay otra de 18 por ciento y que están por llegar al 41 por ciento en unos pocos años porque ha habido una negociación en función de los intereses de las provincias. Y acá la terminamos consolidando al 12 por ciento en algún esquema para poder llegar hasta el 18 por ciento. Acá se consolida un esquema que es para las regalías pero no como acá se ha dicho: La Nación, con el tema de las retenciones, tiene libertad de acción y, con la aplicación del impuesto a las ganancias, libertad de acción para repartir como quiera.

Estos son los ejes centrales de un debate que vemos que no está en el proyecto de ley. Y hay otro debate que tiene que ver con el reparto de la renta petrolera. Esto lo hemos planteado y también es un tema de debate en nuestro bloque y en nuestro partido. Yo estaba haciendo números, no quiero cargar con los neuquinos. ¡En buena hora! Les decía a algunos senadores del Neuquén que vamos a empezar a armar cursos de capacitación en Jujuy en materia de hidrocarburos para que tengan trabajo con buenos sueldos en Neuquén. Nosotros hicimos un cálculo, obviamente es un modelo teórico pero posible de inversiones en Vaca Muerta; de casi 6.900 millones de pesos que tiene anualmente Neuquén en materia de coparticipación y regalías, van a pasar en 2025 a 14 mil millones con 551 mil habitantes.

En Jujuy tenemos 700 mil habitantes y 6.200 millones por coparticipación. Y al 2025, me decían sobre el tema del litio, cobramos el 3 por ciento pero con las mínimas actividades que se generan sobre la producción del litio, bajan a 1

por ciento las regalías. No tiene nada que ver. Digo, tiene que haber algún punto en donde exista un modelo redistribuidor para las provincias que no son petroleras, que no se debate en este punto pero que tendría que discutirse en algún momento. Tal vez tendrían que bajar la coparticipación. No hablo de quitarle las regalías porque le pertenecen por el artículo 124. Tal vez un fondo de redistribución o bien tocar la coparticipación, trabajar con las retenciones a los hidrocarburos como se trabaja con las retenciones a la soja. Que el gobierno nacional constituya un fondo que premie a aquellas provincias, de las retenciones del petróleo como se hace con el tema de la soja y que haya un reparto para las provincias que no tenemos petróleo, o que tenemos dos pozos. Nosotros estamos en la OFEPHI pero no nos ha tocado en suerte. En suerte y en buena hora para Neuquén y para las provincias petroleras. Y está bien que les vaya bien porque además tienen otra situación, como se ha dicho. Se les ha bajado el porcentaje de la coparticipación, es verdad. De hecho, tiene que haber algún punto, algún límite donde la renta petrolera sea importante; donde, por lo menos, exista un esquema de distribución –tal el caso del fondo de la soja– con las retenciones a la exportación del petróleo. Entonces, es un tema que no está planteado. Nosotros en nuestro proyecto tampoco lo resolvemos: lo dejamos insinuado. Dejamos insinuada la conformación de organismos federales, con participación también de las provincias que no son petroleras. Pero se trata de un debate pendiente para el futuro.

En definitiva, también en este proyecto terminan haciendo el esfuerzo las provincias. El gobierno nacional sigue: va a meter las retenciones, las va a aumentar o las va a bajar como quiera; y resulta que nos parece que esa es una situación injusta que el proyecto del Poder Ejecutivo no resuelve.

Señor presidente: entre otros, estos son los argumentos. Ya han sido explicitados por los senadores Martínez y Laura Montero los ejes centrales de la propuesta que nosotros hacemos, que creemos que es mucho más amplia. Es un proyecto amplio que incluye todos los capítulos; que no es una sola modificación –una segunda Ley Corta– sino que apunta a resolver estos temas y aborda en serio una modificación de la Ley de Hidrocarburos vigente.

Creemos que el debate que se ha dado en nuestro partido, que no es fácil, seguramente se

habrá dado en el gobierno. Me refiero al debate sobre un tema central, muy importante hacia el futuro, señor presidente. Nosotros creemos que no está bien resuelto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Por eso es que votamos negativamente.

**Sr. Presidente.** – Gracias, senador Morales. Tiene la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Gracias, presidente.

Estamos arribando al final de un largo debate. No quiero entrar en el análisis del proyecto presentado por la Unión Cívica Radical porque me parece que fue muy completo y en detalle el abordaje que hizo el senador Fernández. Sí quiero decir que esa iniciativa genera más incertidumbre. Plantea la creación de una agencia federal. Yo quiero preguntarme cuál sería el pensamiento de las provincias productoras de petróleo en este tema. Plantea la participación de todas las provincias en la discusión y en el debate. Sería interesante preguntarle a la OFEPHI si le prestaría consenso a una iniciativa como esta. Y, fundamentalmente, tiene algunos ejes que debilitan mucho el espíritu y la iniciativa que tiene el oficialismo –el gobierno– en esta materia. Tiene un canon variable y regalías a la baja. Las regalías tienen un tope y pueden llegar al 5 si la autoridad de aplicación lo decide. La verdad, si defienden el interés de las provincias, de la letra no surge claramente en esta iniciativa esta defensa o este interés.

Yo creo que estamos nuevamente frente a un desafío en la Argentina, repetido ya. Lo vivió Perón. ¡Lástima que no está el senador Solanas, porque recién dijo que John William Cooke retiró el proyecto de la Standard Oil de California y la verdad es que no fue así la historia! Fue una historia de interrupciones y fracturas de la democracia argentina.

En el año 55 la iniciativa de Perón, comprometido con el desarrollo y con la búsqueda de inversiones –porque, indudablemente, la capacidad nacional no tenía para avanzar en procesos de exploración, desarrollo e inversión– abrió el camino a empresas americanas: a Standard Oil, precisamente. De hecho, ese proyecto nunca llegó a tratarse porque hubo una interrupción a través del denominado “golpe de la Libertadora” del año 55. Es decir: la caída del gobierno determinó la imposibilidad material de que el Congreso argentino tratara este tema.

Frondizi, que era además un crítico muy fuerte del gobierno de Perón, escribió un libro que



se llamaba *Política y petróleo* donde planteaba con mucha convicción y con mucha firmeza que el petróleo era un eje central del desarrollo; que tenía que estar en manos argentinas y que había que hacer todo el esfuerzo para producir el desarrollo nacional con YPF, etcétera. Después, la realidad en el ejercicio del gobierno, le determinó la necesidad de abrir los contratos petroleros. Eso produce en tres años un proceso de inversión realmente importante y un crecimiento de la producción del crudo que llega casi a niveles del autoabastecimiento: el famoso concepto del autoabastecimiento.

La caída de Frondizi, con el proceso político de la dictadura militar nuevamente, —es decir, el golpe militar; la detención de Arturo Frondizi y luego, nuevamente, la reapertura democrática con la exclusión del peronismo; son datos de la historia reciente de la Argentina; no hace mucho tiempo que pasó— determinan el triunfo de la Unión Cívica Radical del Pueblo: un triunfo casi inesperado. El candidato natural, que era Ricardo Balbín, se abstuvo y fue electo un hombre honesto, un hombre de trayectoria y militancia en la Unión Cívica Radical como fue Arturo Illia.

¿Qué hizo Arturo Illia? Dejó sin efecto todos los contratos que se habían votado, que se habían firmado y que habían puesto en marcha el desarrollo de la Argentina en materia petrolera. Así, volvió al pensamiento de que eso tenía que hacerse con manos nacionales. Eso provocó una caída en el proceso de inversión, una caída en la producción de crudo e, indudablemente, nuevamente un proceso de dependencia...

**Sr. Cimadevilla.** — Illia logra el autoabastecimiento...

**Sr. Pichetto.** — No, señor: el que logró el autoabastecimiento fue Frondizi.

La caída y la rescisión de los contratos petroleros, que fue todo un debate...

—Murmillos en el recinto.

**Sr. Pichetto.** — Usted debería repasar un poquito la historia, Cimadevilla.

Fue un debate interesante. Lamentablemente se equivocaron en ese momento y caducaron todos los contratos. Illia caducó todos los contratos que Frondizi había firmado.

Éste es un debate conocido en la Argentina, casi obvio. Venir acá a hacer algún planteo de esto es realmente desconocer la historia. Recomendando que vuelvan a leer historia argentina.

Me parece un absurdo estar discutiendo esto. Arturo Illia dejó sin efecto los contratos de Frondizi y dejó sin efecto el criterio del principio del desarrollo, un tema que hay que volver a repensar en la Argentina.

Cuando escucho a algunos hombres fuertemente comprometidos con lo nacional, a los cuales respeto, hablando de que no están de acuerdo con el proceso de fractura hidráulica, la verdad es que lo veo reducido simplemente a una mirada ambiental, a una mirada muy limitada. No conozco ningún país del mundo —ningún país del mundo— que no ponga en marcha los procesos de desarrollo y extracción de los recursos, y lo trate de hacer de la mejor manera. Por supuesto que hay que tratar de hacerlo de manera sustentable. ¡A quién se le ocurre llevar adelante procesos de extracción o de producción sin licencia social y sin defender el medio ambiente! ¡Ahora, no es posible negar el proceso de fractura cuando países desarrollados, que los ponen muchas veces como ejemplo de lo que significa el capitalismo moderno, los llevan a cabo! Tenemos en Estados Unidos el caso de la cuenca petrolera de la baja California, que puso en marcha el sistema de fractura y que indudablemente provocó un crecimiento exponencial en materia de obtención de recursos hidrocarbúricos, petróleo y gas, que prácticamente le permiten el autoabastecimiento. Esto, por supuesto, sin analizar la política internacional sustentada a través del ejercicio militar en las guerras en Medio Oriente, así como el control que hoy ejerce en países como Irak y en otros lugares a través de los negocios.

Indudablemente que el tema del petróleo es un tema generador de conflictos bélicos.

Entonces, sostener que no hay que avanzar en ese tipo de actividades económicas, no extraer los minerales, la verdad es una mirada que sinceramente... El otro día yo la calificué, pero no quiero ofender a nadie.

Comparto la preocupación por el medio ambiente, pero no existe ningún país que se desarrolle a nivel industrial cuya industria pueda crecer con competitividad, con una visión nacional, si no tiene indudablemente energía y combustibles. Ésta me parece que es la llave maestra. Lo que pasó en la Argentina —en esto vuelvo a repetir ese pequeño diálogo que tuvimos con el senador Sanz— tiene que ver con un proceso de crisis terminal en 2001, 2002; un proceso de terminación de una etapa económica

ligada a la convertibilidad. Y también tenemos que asumir nuestra parte de culpa, de autocrítica. La convertibilidad, indudablemente, para nuestro gobierno debería haber estado terminada en el año 97. Cuando Brasil devaluó, tendríamos que haber devaluado en la Argentina. Pero hay algunos que se enamoran de mecanismos económicos o de instrumentos económicos y, en nuestro país, se quedan para siempre.

**Sr. Morales.** – Compartimos eso del 97. ¡Muy bien!

**Sr. Pichetto.** – ¡Sí, claro! Cuando devaluó Brasil indudablemente que la Argentina tendría que haber seguido el proceso de devaluación porque era importante y fundamental tener competitividad.

Lo que quiero decir con esto es que ésta es la ley posible. Es un primer paso que hay que dar. La historia nos vuelve a poner en el mismo camino.

Analizamos Vaca Muerta como un lugar y un horizonte deseado para la Argentina, como un lugar promisorio desde el punto de vista de las expectativas; pero el desarrollo va a ser posible –los neuquinos lo saben y los argentinos tienen que empezar a saberlo– solamente si hay inversiones. Chevron invirtió el 1.5 de la totalidad del área de Vaca Muerta, una inversión menor de mil y pico de millones de dólares. Necesitamos muchos Chevron y fuertes inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta para extraer el gas y el petróleo, y para lograr reducir el déficit fiscal de la balanza comercial, que muy bien mencionó el senador Romero que alcanza los 7 mil millones de dólares.

Estudiemos la etapa de la política económica que vivió nuestro gobierno. Se nos cuestiona porque hubo una política que dicen que no incentivó la inversión. En primer lugar, veníamos del infierno: de un proceso de crisis terminal. Había que recuperar empleo en la Argentina; había que incentivar con políticas de subsidio petróleo barato y energía barata para que la industria creciera. Creamos 5 millones de empleos. Produjimos un sistema de inclusión previsional extraordinario, el único de Latinoamérica. Cuando nos ponen algunos países de ejemplo, yo no me quiero meter con este tema porque se me va la lengua y termino diciendo macanas, pero algunos ejemplos latinoamericanos son lamentables y los ponen como modelos económicos a seguir. No tienen política previsional, universitaria, ni de salud

pública. Y nosotros siempre operamos como el ajuste social de todos esos países a los que nos ponen como ejemplo. En la última década un millón ingresó a la Argentina, más los que vienen circunstancialmente para atenderse, a operarse, para estudiar o trabajar, porque nuestro país es igualitario y justo. Es un país que realmente tiene las puertas abiertas a todos los que quieran venir

–La señora senadora Negre de Alonso formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

**Sr. Pichetto.** – Está bien. Yo siempre digo que las cosas que son de Dios son de Dios, y las cosas que son del Estado y del gobierno son del gobierno; y no mezclo la religión. Tampoco voy a ir a Roma a saludar al Papa.

–Murmullos en el recinto.

**Sr. Pichetto.** – Yo creo que para hacer política hay que hacer política abajo, en los barrios, caminando las ciudades y no tanto ir a...

–Murmullos en el recinto.

**Sr. Pichetto.** – La presidenta es una jefa de Estado. Se reunión con el Papa, lo que tiene total legitimidad.

**Sr. Sanz.** – Antes, cuando era Bergoglio, no lo recibía.

**Sr. Pichetto.** – Antes es antes. Hay circunstancias y momentos. Yo no quiero debatir este tema. Mi abuelo era republicano, muchachos. Cuando entraba a los pueblos, sabían lo que se hacía. Perdió la guerra, por supuesto. Tengo una profunda admiración por los que pierden. A veces, la historia la hacen los que pierden y no los que ganan.

Sigo con el tema. Creo que estamos en una coyuntura parecida a la que vivieron Perón y Frondizi. Indudablemente, la Argentina tiene que buscar garantizar un proceso de inversiones. En la década que pasó, el precio internacional no estaba reflejado en el esquema de producción y eso tenía un objetivo: abaratar el costo interno, sostener la industria, sostener el crecimiento. Hoy entramos en un andarivel que se acerca más a la realidad en términos de valores. PlanTEAMOS una política que sea igual en todas las provincias. No puede haber políticas distintas en materia de regalías en las provincias productoras. No puede haber provincias que cobren el 5 por ciento de ingresos brutos y otras que no cobren nada. Hay que fijar marcos políticos que

generen un proceso de estabilidad y de previsibilidad de las contingencias de una actividad riesgosa que, además, requiere de inversiones millonarias. Acá no estamos hablando de que cualquier actor va a venir a hacer inversiones en petróleo. Estamos hablando de las grandes empresas, que son las que pueden invertir miles de millones de dólares en procesos de extracción de gas y petróleo.

**Sr. Fuentes.** – Es un proceso complejo.

**Sr. Pichetto.** – Un proceso complejo, me apunta el senador Fuentes. Indudablemente que lo es y que requiere de mucha plata. Lo mismo que en minería. Para hacer minería también se requiere mucha inversión.

Por lo tanto, la primera definición que la ley sostiene es el principio de inversiones. Es mucho más importante la inversión que el bono. Es mucho más importante el plan de inversiones y lo que tienen que invertir las empresas para hacer el desarrollo, la perforación, la exploración, que el bono. Se acorta, además, el plazo de exploración. O sea que el objetivo de la ley es que las empresas inviertan, no que hagan especulación sobre el área.

Hemos tenido algunas experiencias que se mencionaron. El senador Verna las mencionó. Yo también las mencioné en el debate.

Indudablemente, hay realidades que son complicadas. Petrobras va a tener que definir si se va a quedar en la Argentina para invertir o si se va a retraer definitivamente hacia Brasil. Éste es un debate que tiene que dar la empresa. Lamentablemente, también en la Argentina esto sirve para hacer un análisis crítico sobre el concepto de la burguesía nacional. Petrobrás era de argentinos: se llamaba Pecom, era Pérez Companc. Esta empresa fue vendida en 2002 en 1.124 millones de dólares. Esto también es para repensar el concepto, lo que significa generar un empresariado nacional comprometido con el país.

Hicimos petrolero a un país que no era petrolero. Recién ahora están trabajando *off shore* y están descubriendo algo, pero no eran petroleros. Hicimos petroleros a España, que tampoco era un país petrolero, cuando privatizamos YPF.

En este escenario, hemos dado pasos hacia la recuperación. Creo que la recuperación de YPF fue uno de los hechos importantes del Congreso Nacional. Lo reivindicó porque me parece que también allí, en esa ley, en el artículo 1º, el Estado nacional recupera la posibilidad de fijar

políticas de hidrocarburos con un concepto y una mirada nacional.

Entiendo mucho la defensa del interés provincial. Mi provincia tiene petróleo, pero no es una provincia petrolera como Neuquén. Creo que tiene gran potencialidad y creo que YPF tiene un compromiso muy firme en el área que le compró a Apache para invertir más de mil millones de dólares en cinco años. Eso va a producir, indudablemente, un crecimiento exponencial de las regalías y de las capacidades económicas de Río Negro. Pero no somos Neuquén o Santa Cruz, que son provincias potentes. La misma Chubut ha crecido en la última década. Río Negro, en la década del 80, era importante en materia petrolera y ha perdido lamentablemente la carrera del petróleo. La Pampa no existía como provincia petrolera. La Pampa desarrolló la actividad petrolera en el límite con la provincia de Río Negro, inteligentemente. Lo hicieron, con inteligencia, sobre la misma cuenca. No digo que nos robaron el petróleo de la cuenca (*risas*), pero por ahí estuvieron. Están explotando petróleo en 25 de Mayo. No era una provincia petrolera.

Indudablemente, hay gobiernos que actúan con inteligencia y hay otros que pierden el tren de la historia.

No quiero ser injusto ni generalizar. Pero en algún momento vamos a tener que dar una discusión, revisar lo actuado. Incluso, hasta analizar en profundidad la Asamblea Constituyente de 1994.

¿Había que poner los recursos del subsuelo argentino en manos de las provincias o había que dejarlo en la esfera de la decisión de un gobierno nacional que debe fijar las políticas de desarrollo y crecimiento? Es una pregunta que me hago.

La Ley Corta consolidó el control y el dominio de las provincias. Pero no la utilizaron bien. Muchas de esas provincias miraban el bono nada más, y siguen teniendo sistemas de controles totalmente frágiles a pesar del avance tecnológico.

Hoy, cruzando datos mediante un sistema de software nadie puede eludir lo que verdaderamente sacan de los pozos. Lo que pasa es que los controles son totalmente livianos. En algunos casos, también los controles están corrompidos. Es más fácil comprar al controlador que pagarle las regalías que las provincias efectivamente deben cobrar. Sí, además, se controla en boca de pozo, en la destilería y en la comercialización no

hay ninguna posibilidad de que se escape lo que, efectivamente, se extrae. Lo que pasa es que hay provincias que todavía siguen funcionando con una planillita que llaman declaración jurada y donde la empresa dice “hemos sacado tanto”.

**Varios señores senadores.** – Es la ley.

**Sr. Pichetto.** – No. Las provincias son la autoridad de aplicación y tienen todas las capacidades para hacer los controles. Por más que la ley lo diga, la provincia es la última autoridad para aplicarla.

El sistema de planillas es inviable desde el punto de vista del control y es una de las causas de la derrota y del fracaso de la Argentina.

No quiero dejar de referirme a lo que significó la empresa Repsol.

La verdad es que el capitalismo español es de lo peor. Empresa que agarraron, la destruyeron.

Tomaron Aerolíneas Argentinas y se llevaron los mejores aviones y los simuladores. Después se la terminaron vendiendo a un amigo del rey, que además vino y quebró la compañía.

La empresa petrolera fue otro desastre. El señor Brufau estaba haciendo negocios e inversiones en otro lado. No las hacía en la Argentina. Y la decisión que tomó el gobierno nacional fue la decisión correcta en el momento y en el tiempo oportuno porque estaban próximos a vender la empresa no se sabe a quién en la Bolsa de Nueva York. De manera que también hay que revisar eso.

Entonces, creo que empezamos a dar un paso importante que tiende a que la Argentina recupere capacidad de inversión, a que las empresas inviertan y a que se dediquen al petróleo quienes son empresas petroleras. Hay que plantearse un nacionalismo de fines y no un nacionalismo chauvinista que no modifica ninguna realidad.

El nacionalismo de fines es cómo se hace para extraer el petróleo y el gas y cómo se hace para producir combustibles y evitar la fuga de recursos en el terreno de la importación, situación que nos hace desequilibrar la balanza comercial, y cómo se coloca a la Argentina en una senda de crecimiento para recuperar el anhelo y el sueño de Perón y de Frondizi, que era lograr definitivamente el autoabastecimiento de petróleo en la Argentina. Y me parece que esta ley es la ley posible porque tiene el acuerdo de los gobernadores de las provincias productoras. Se ha discutido bastante.

Estoy enfrentado con mi gobernador. Eso es de público conocimiento. Sin embargo, creo que hizo lo que pudo dentro del debate y la discusión junto a los demás gobernadores. Y hubo varios borradores y discusiones previas. Pero se alcanzó un acuerdo, rubricado en un acta, que forma parte de los documentos que se anexan en el proyecto de ley.

Quiero referirme a un último tema. Se dijo que era una ley para YPF. Que esto era en beneficio de YPF y que la ley estaba hecha a la medida de Galuccio. La verdad es que ojalá sea cierto y a YPF le vaya muy bien. Ojalá YPF pueda seguir creciendo en áreas e inversiones. Ojalá que la empresa pueda ser uno de las grandes motores del desarrollo petrolero. Si la ley está en beneficio de YPF es muy buena ley.

Por ello, la vamos a votar.

**Sr. Presidente.** – Hay dos pedidos de abstención: la senadora Crexell y Castillo.

Se va a votar.

–Se practica la votación.

**Sr. Presidente.** – Aprobado.

Hay una modificación en un artículo que fue referida por el señor senador Fernández. Si alguien lo requiere, se puede leer por Secretaría. Pero creo quedó perfectamente explicitada tal modificación.

Se va a votar el dictamen en mayoría en una sola votación en general y en particular con la modificación que hizo explícita el señor senador Fernández.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Estrada). – Resultan 38 votos afirmativos, 28 votos negativos y 2 abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente.** – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.<sup>2</sup>

Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

–Son las 23 y 57.

JORGE A. BRAVO.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.



## 7

## APÉNDICE

## I

## CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Buenos Aires, 1° de octubre de 2014.

*Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.*

S/D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los términos del artículo 19 del Reglamento de este Honorable Senado, a efectos de solicitarle tenga a bien convocar a sesión especial, a celebrarse el día 8 de octubre del corriente año a las 11, con el objeto de considerar el dictamen en el mensaje 1.592/14 y proyecto de ley modificando la ley 17.319 y sus modificatorias y otros temas vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (expediente P.E.-316/14.)

Sin otro particular, saludamos al señor presidente con atenta consideración.

*Rodolfo J. Urtubey. – José M. Á. Mayans. –  
Miguel Á. Pichetto. – Rolando A. Bermejo.  
– Walter B. Barrionuevo.*

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014.

VISTO:

la solicitud formulada por varios señores senadores para que se convoque a sesión pública especial, y

CONSIDERANDO:

que dicho pedido se encuadra en las disposiciones reglamentarias en vigencia,

Por ello:

*El presidente del Honorable Senado de la Nación*

DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores senadores para celebrar sesión pública especial, el día miércoles 8 de octubre del corriente, a las 11, con el objeto de considerar el dictamen en el proyecto de ley modificando la ley 17.319 y sus modificatorias y otros temas vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (expediente P.E.-316/14 - Orden del Día N° 460).

Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

AMADO BOUDOU.

*Juan H. Estrada.*

## II

## ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

*Nota:* En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable Senado.

1

(S.- 3.314/14)

## Proyecto de declaración

*El Senado de la Nación*

DECLARA:

Su profundo beneplácito en el 200° aniversario de la creación de la provincia de Tucumán, ocurrida el día 8 de octubre de 1814.

Hacer llegar a los ciudadanos de la provincia las más cálidas felicitaciones por la conmemoración del bicentenario.

*Silvia B. Elías de Perez.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 8 de octubre de 1814, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, doctor Posadas, creó por decreto la provincia de Tucumán, cuyo territorio estaba formado por Tucumán y las actuales Santiago del Estero y Catamarca.

Entre las razones de la disposición que motivaron la creación de la provincia, se tiene en cuenta la necesidad de dividir el territorio para reparar los daños de las guerras que venían asolando la región, con mayor facilidad y además “distinguir de algún modo al glorioso pueblo de Tucumán que ha rendido tan señalados servicios a la patria”.

El gobernador intendente de la nueva provincia en esa época era Bernabé Aráoz, tucumano nacido en Monteros, quien se desempeñó destacadamente en el Ejército del Norte. Su mandato transcurrió entre 1814 y 1817, y luego gobernó nuevamente la provincia entre los años 1819 y 1820.

El decreto de la creación se enmarcó en el proceso de creaciones de las provincias de nuestro país, proceso que fue conformando la constitución geopolítica actual. A partir del dictado del decreto firmado por Gervasio Posadas se dividieron los territorios correspondientes a Salta y Tucumán, adquiriendo cada una, su propia autonomía. Es decir, el momento en que la provincia empezó a manejar sus propios destinos y dejó de estar subordinada a otra.

En el día de la fecha –8 de octubre de 2014– se cumplen exactamente dos siglos de la creación de la provincia de Tucumán, uno de los acontecimientos más importantes de una provincia que es cuna de la historia de nuestro país, por lo que corresponde que esta Honorable Cámara exprese su reconocimiento y declare su beneplácito con motivo del 200° aniversario.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

*Silvia B. Elías de Perez.*

### **Sanción del Honorable Senado**

*El Senado de la Nación*

DECLARA:

Su profundo beneplácito en el 200° aniversario de la creación de la provincia de Tucumán, ocurrida el día 8 de octubre de 1814.

Que hace llegar a los ciudadanos de la provincia las más cálidas felicitaciones por la conmemoración del bicentenario.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce.

AMADO BOUDOU.

*Juan H. Estrada.*

2

**(Orden del Día N° 460)**

### **Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el expediente P.E.-316/14: “Mensaje 1.592/14 y proyecto de ley modificando la ley 17.319 y sus modificatorias y otros temas vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”; y, tenido a la vista los expedientes S.-3.030/13: Martínez y otros: proyecto de ley de hidrocarburos; S.-4.099/13: Estenssoro y otros: proyecto de ley de hidrocarburos; S.-2.052/14: Garramuño: proyecto de ley sustituyendo el artículo 61 de la ley

17.319 (hidrocarburos) respecto del pago en efectivo de las regalías conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo; S.-594/14: Morales: reproduce el proyecto de ley creando la Agencia Federal de Hidrocarburos (Ref. S.-1.876/12); S.-2.937/13: Montero y otros: proyecto de ley derogando el decreto 1.277/12 y s/m –creación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas– y otras cuestiones conexas; S.-2.938/13: Montero y otros: proyecto de ley derogando el decreto 929/13 y s/m –régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos– y otras cuestiones conexas, y S.-3.151/14: Pereyra: proyecto de ley modificando la ley 17.319 –hidrocarburos–, respecto de modificar el cálculo para el pago de regalías; y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

### **PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### **TÍTULO I**

### **Modificaciones a la ley 17.319**

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 23: Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada licitación por la autoridad de aplicación, de acuerdo al objetivo de la exploración, según el siguiente detalle:

Plazo básico:

Exploración con objetivo convencional:

Primer período hasta tres (3) años.

Segundo período hasta tres (3) años.

Período de prórroga: hasta cinco (5) años.

Exploración con objetivo no convencional:

Primer período hasta cuatro (4) años.

Segundo período hasta cuatro (4) años.

Período de prórroga: hasta cinco (5) años.

Para las exploraciones en la plataforma continental y en el mar territorial cada uno de los períodos del plazo básico de exploración con objetivo convencional podrá incrementarse en un (1) año.

La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permissionario que haya cumplido con la inversión y las restantes obligaciones a su cargo.

La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento del plazo básico del permiso, conforme a lo establecido en el

artículo 22, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la prórroga.

En cualquier momento el permisionario podrá renunciar a toda o parte del área cubierta por el permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescritas en el artículo 20.

Art. 2° – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 25: Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán las ciento cincuenta (150) unidades.

Art. 3° – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 26: Al finalizar el primer período del plazo básico el permisionario decidirá si continúa explorando en el área, o si la revierte totalmente al Estado. El permisionario podrá mantener toda el área originalmente otorgada, siempre que haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del permiso.

Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al cincuenta por ciento (50 %) del área remanente antes del vencimiento del segundo período del plazo básico.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 27: La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo que fija el artículo 35.

Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, en los términos previstos en el artículo 22 o en el artículo 27 bis, según corresponda.

Art. 5° – Incorpórase como artículo 27 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por explotación no convencional de hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (*shale gas* o *shale oil*), areniscas compactas (*tight sands, tight*

*gas, tight oil*), capas de carbón (*coal bed methane*) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.

El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área existente en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto. La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días y su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 35.

Los titulares de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones previamente existentes, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión. Queda establecido que la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos deberá tener como objetivo principal la explotación no convencional de hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Art. 6° – Incorpórase como artículo 27 ter de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 27 ter: Aquellos proyectos de producción terciaria, petróleo extrapesados y costa afuera que por su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la autoridad de aplicación y por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de hasta el cincuenta por ciento (50 %) por parte de la autoridad de aplicación provincial o nacional, según corresponda.

Se consideran proyectos de producción terciaria aquellos proyectos de producción en que se apli-

quen técnicas de recuperación mejorada del petróleo (*Enhanced oil Recovery –EOR–* o *Improved Oil Recovery –IOR–*). Se consideran proyectos de petróleo extrapesado aquellos que requieran tratamiento especial (calidad de crudo inferior a 16 grados API y con viscosidad a temperatura de reservorio superior a los 1.000 centipois).

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la sección 5 del presente título.

Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará concesiones de explotación no convencionales de hidrocarburos de acuerdo a los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 34: El área máxima de una nueva concesión de explotación que sea otorgada a partir de la vigencia del presente y que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados (250 km²).

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 35: De acuerdo a la siguiente clasificación las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23.

- a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años;
- b) Concesión de explotación no convencional de hidrocarburos: treinta y cinco (35) años. Este plazo incluirá un período de plan piloto de hasta cinco (5) años, a ser definido por el concesionario y aprobado

por la autoridad de aplicación al momento de iniciarse la concesión;

- c) Concesión de explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.

Los titulares de las concesiones de explotación (ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la presente modificación hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas.

La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.

Queda establecido que aquellas concesiones de explotación que a la fecha de sanción de la presente ley hayan sido previamente prorrogadas se regirán hasta el agotamiento de los plazos de dichas prórrogas por los términos y condiciones existentes. Una vez agotados dichos plazos de prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga establecidas en la presente ley.

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 41: Las concesiones a que se refiere la presente sección serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las concesiones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27 bis, los permisos y concesiones regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5º y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Las concesiones que resulten de la aplicación de los artículos 29, párrafo primero, y 40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en el título II de la presente ley.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente:



Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo, elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan. El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 48: La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en particular proponga la mayor inversión o actividad exploratoria.

Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.

Art. 14. – Incorpórase al título II de la ley 17.319 y sus modificatorias la sección VII, “Canon y regalías”, que comprenderá los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65.

Sustitúyense los artículos 57 y 58 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por los siguientes textos:

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:

a) Plazo básico:

Primer período: doscientos cincuenta pesos (\$ 250).

Segundo período: mil pesos (\$ 1.000).

b) Prórroga:

Durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado la suma de diecisiete mil quinientos pesos (\$ 17.500) por km<sup>2</sup> o fracción, incrementándose dicho monto en el veinticinco por ciento (25 %) anual acumulativo. El importe que deba ser abonado por este concepto correspondiente al segundo período del plazo básico y al período de prórroga podrá reajustarse compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la exploración dentro del área correspondiente, hasta la concurrencia de un canon mínimo equivalente al diez por ciento (10 %) del canon que corresponda en función del período por km<sup>2</sup> que será abonado en todos los casos.

Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área de pesos cuatro mil quinientos (\$ 4.500).

Art. 15. – Incorpórase como artículo 58 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 58 bis: La autoridad de aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación, el pago de un bono de prórroga cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final de período de vigencia de la concesión por el dos por ciento (2 %) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento del otorgamiento de la prórroga.

Para los casos de realización de actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, la autoridad de aplicación podrá establecer el pago de un bono de explotación cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y por el dos por ciento (2 %) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento

del otorgamiento de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento (12 %).

Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados, pagará mensualmente la producción de gas natural, en concepto de regalía. Para el pago de esta regalía el valor del gas será fijado conforme al procedimiento indicado para el petróleo crudo en el artículo 61. El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda como autoridades concedentes, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos. Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta tres por ciento (3 %) respecto de la regalía aplicable al momento de la primera prórroga y hasta un máximo total de dieciocho por ciento (18 %) de regalía para las siguientes prórrogas.

En los casos de las concesiones de explotación referidas en el último párrafo del artículo 35, corresponderá el pago de una regalía total que no podrá superar el dieciocho por ciento (18 %).

Por la realización de las actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a las que se hace referencia en el artículo 27 bis de la presente ley, a partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, la autoridad de aplicación podrá fijar asimismo una regalía adicional de hasta tres por ciento (3 %) respecto de la regalía vigente hasta un máximo de dieciocho por ciento (18 %) según corresponda conforme al mecanismo establecido en el artículo 35.

Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo

en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c), apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

Art. 18. – Incorpórase como artículo 91 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica.

Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se podrán realizar esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales durante la etapa de desarrollo será proporcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas.

## TÍTULO II

### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos**

Art. 19. – El Estado nacional incorporará al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, a los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 250.000.000) calculada al momento de la presentación del “Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” y a ser invertidos durante los primeros tres (3) años del proyecto.

Los beneficios previstos en dicho decreto se reconocerán a partir del tercer año contado desde la puesta en ejecución de los respectivos proyectos.

El porcentaje de hidrocarburos respecto del cual se aplicarán los beneficios previstos en los artículos 6º y 7º de dicho decreto, será el siguiente:

- a) Explotación convencional: veinte por ciento (20 %);
- b) Explotación no convencional: veinte por ciento (20 %);

- c) Explotación costa afuera: sesenta por ciento (60 %).

A los efectos de la aplicación de este artículo, y respecto de los proyectos iniciados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, entiéndese por explotación costa afuera a aquellos proyectos en los cuales la explotación sea realizada en locaciones ubicadas mar adentro a partir de la línea de costa.

Art. 20. – Las condiciones para el acceso al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos previstas en el artículo 19, regirán a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, reconociéndose a los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos aprobados con anterioridad, los compromisos de inversión y los beneficios promocionales comprometidos al momento de su aprobación.

Art. 21. – En el marco de los “Proyectos de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, referidos en el artículo 19 de la presente ley, se establecen los siguientes aportes a las provincias productoras en los que se desarrolle el proyecto de inversión:

- a) Dos coma cinco por ciento (2,5 %) del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a responsabilidad social empresarial, a ser aportado por las empresas;
- b) Un monto a ser determinado por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en función de la magnitud y el alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras, a ser aportado por el Estado nacional.

Art. 22. – Los bienes de capital e insumos que resulten imprescindibles para la ejecución de los planes de inversión de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, ya sean importados por tales empresas o por quienes acrediten ser prestadoras de servicios de ellas, tributarán los derechos de importación indicados en el decreto 927/13 o normas que lo sustituyan. Dicha lista podrá ampliarse a otros productos estratégicos.

### TÍTULO III

#### Disposiciones complementarias y transitorias

Art. 23. – El Estado nacional y los estados provinciales, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin

de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.

Art. 24. – El Estado nacional y los estados provinciales propiciarán la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva las actividades hidrocarburíferas previstas en la presente ley a desarrollarse en sus respectivos territorios.

Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas administrará el “Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural creado por la resolución 1/13 y el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida” creado por la resolución 60/13, en ambos casos de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y los planes que con el propósito de estimular la producción excedente de gas natural establezca en el futuro.

Art. 26. – Las autoridades de aplicación del ámbito nacional y provincial, según correspondiere, la Secretaría de Energía de la Nación y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, promoverán la unificación de los procedimientos y registros tendientes al cumplimiento de sus respectivas competencias y el intercambio de información con dicho propósito y con el cumplimiento de los objetivos de autoabastecimiento previstos en la ley 26.741.

Art. 27. – Derógase el artículo 62 de la ley 17.319 y sus modificatorias.

Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, como autoridad concedente, podrá reducir hasta el veinticinco por ciento (25 %) el monto correspondiente a regalías aplicables a la producción de hidrocarburos y durante los diez (10) años siguientes a la finalización del proyecto piloto, en favor de empresas que soliciten una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, en los términos del artículo 27 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, dentro de los treinta y seis (36) meses a contar de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 29. – Las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación confeccionarán dentro de los ciento ochenta (180) días a contar desde el inicio de vigencia de la presente ley el pliego modelo establecido en el artículo 47 de la ley 17.319 y sus modificatorias, el que podrá ser revisado y actualizado periódicamente según la oportunidad y conveniencia de las licitaciones. Dicho pliego modelo contemplará los términos y condiciones generales aplicables a las licitaciones, incluyendo entre otras, las garantías a las que deberán ajustarse las ofertas, el alcance de las inversiones

y los ingresos que eventualmente pudieran corresponder a las respectivas autoridades concedentes. Asimismo, el pliego modelo contendrá las condiciones especiales aplicables a adjudicaciones cuyo objeto sea la exploración y/o explotación convencional de hidrocarburos, explotación no convencional, costa afuera, petróleo extrapesados, exploración en áreas de frontera y demás situaciones que puedan ser contempladas por dichas autoridades de aplicación.

Art. 30. – Derógase el artículo 2º de la ley 25.943, quedando a tal efecto revertidos y transferidos todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas costa afuera nacionales a la Secretaría de Energía de la Nación, respecto de los cuales no existan contratos de asociación suscritos con Energía Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943.

Exceptúase de dicha reversión a los permisos de exploración o concesiones de explotación existentes a la fecha de entrada de la presente ley que hayan sido otorgados con anterioridad a la ley 25.943.

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a negociar de mutuo acuerdo, en un plazo de seis (6) meses, con los titulares de contratos de asociación que hayan sido suscritos con Energía Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943, la reconversión de dichos contratos asociativos a permisos de exploración o concesiones de explotación de la ley 17.319 y sus modificatorias, según corresponda.

Art. 31. – Cuando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley alguna provincia ya hubiera iniciado el proceso de prórroga a que refiere el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias, respecto de concesiones otorgadas por el Estado nacional, y siempre que dicho proceso hubiera establecido ciertas condiciones precedentes en función de la voluntad de dicha provincia y del concesionario respectivo y de las leyes vigentes, dicha provincia dispondrá de un plazo de noventa (90) días para concluir el proceso de prórroga mediante el dictado de los actos administrativos necesarios a cargo del Poder Ejecutivo provincial. Las prórrogas así determinadas tendrán posteriormente el tratamiento que prevé el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias.

Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de octubre de 2014.

*Marcelo J. Fuentes. – Aníbal D. Fernández. – Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrío. – José M. Á. Mayans. – Pablo G. González. – Marcelo A. H. Guinle. – Sigríd*

*E. Kunath. – Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J. Urtubey. – María Graciela de la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Inés I. Blas. – Juan M. Irrazábal. – Rosana A. Bertone. – María de los Ángeles Higonet. – Pedro G. A. Guastavino.*

## ACLARACIÓN

El mensaje 1.592 de fecha 16 de septiembre de 2014, proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el Acuerdo Federal y sus anexos, se encuentran publicados en la página web del Senado.

## (Anexo al Orden del Día N° 460)

### Dictamen de comisión

(en minoría)

*Honorable Senado:*

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado el expediente 316/14, “Mensaje 1.592/14 y proyecto de ley modificando la ley 17.319 y sus modificatorias y otros temas vinculados al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” y por los motivos que dará el miembro informante os aconsejan la aprobación del siguiente

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

### TÍTULO I

#### Disposiciones generales

Artículo 1º – La soberanía energética de la Nación tendrá una matriz independiente de todo requerimiento externo. En virtud de ello los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos existentes en el territorio de la República Argentina, Antártida, islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y la plataforma continental constituyen bienes estratégicos y son patrimonio inalienable e imprescriptible de la Nación Argentina. Las provincias en cuyo territorio se encuentren tienen el dominio originario, conforme el artículo 124 de la Constitución, siendo el dominio jurisdiccional del Estado nacional.

Art. 2º – Se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento energético, en base a una matriz lo más diversificada posible a fin de garantizar la calidad de vida y el ambiente para todos los habitantes del territorio argentino.

Art. 3º – Se declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, con el fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación



de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones del país.

Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional es quien fija la política de hidrocarburos a través del Consejo Nacional de Hidrocarburos, el que arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines del presente, con el concurso de los estados provinciales, del capital público y privado, nacional y extranjero bajo control de los otros poderes del Estado y de la sociedad civil organizada, quien deberá avalar mediante los procedimientos que se reglamenten su participación en los estudios de impacto ambiental que se efectúen de conformidad con la normativa legal vigente.

El Consejo Nacional de Hidrocarburos estará constituido por los representantes de los estados provinciales, un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un (1) representante del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un (1) representante de la Secretaría de Energía de la Nación, un (1) representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y dos (2) representantes de los trabajadores.

Art. 5° – Se establecen como principios de la política energética de la República Argentina los siguientes:

- a) La investigación y promoción de las fuentes de energía limpias y renovables, distribuidas para impulsar el desarrollo productivo, social y cultural locales; la ocupación plena y equilibrada del territorio nacional, la equidad social y la sustentabilidad ambiental;
- b) Desarrollar participativamente un Plan Estratégico de Transición a Energías Renovables (P.E.T.E.R), con objetivos, metas y cronograma de realización para superar en cuanto sea posible la actual matriz energética basada en hidrocarburos y otras fuentes contaminantes y/o de alto riesgo para la vida, la salud y el ambiente;
- c) La exploración y explotación de fuentes de energía hidrocarbúfera, y la explotación de hidrocarburos para otros propósitos, como la fabricación de plásticos, fertilizantes y todos aquellos elementos que puedan ser utilizados industrialmente. Constituyen asimismo actividades de interés nacional la conversión de los recursos hidrocarbúferos en reservas comprobadas y la restitución de reservas, son parte ineludible del plan de transición;
- d) La optimización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto plazo, y el debido mantenimiento del mismo;
- e) La incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración

y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo científico-tecnológico en la República Argentina con ese objeto;

- f) La protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, cantidad, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos;
- g) La realización de una auditoría periódica de reservas y producción de hidrocarburos;
- h) Creación de una reserva estratégica de hidrocarburos, con la cantidad necesario de crudo, para abastecer a las refinerías domésticas por un mes a los efectos de contemplar la oportuna refinación de los hidrocarburos existentes de diversa naturaleza.

Art. 6° – Prohíbese en todo el territorio de la Nación la explotación de recursos fósiles no convencionales, mediante el sistema de fractura hidráulica y la perforación horizontal mediante métodos de fractura, fisuras de la roca y otras formas extractivas mediante la inyección de arenas y fluidos químicos de diversa naturaleza.

Art. 7° – Los permisos de exploración y concesión de explotación mediante el sistema de fractura hidráulica caducarán de pleno derecho desde la entrada en vigencia de la presente ley, no pudiendo los titulares de los mismos ampararse en norma alguna a los efectos de continuar con la actividad.

Art. 8° – Desde el momento que se produzca la caducidad de los permisos indicados en la cláusula precedente, las áreas serán revertidas al Estado nacional o provincial, según donde se encuentren.

Art. 9° – Desde la entrada en vigencia de la presente ley, todos aquellos concesionarios que sean titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación mediante el sistema de fractura hidráulica, cesarán en forma inmediata su actividad, debiendo efectuarse un control estricto por parte de la autoridad de aplicación durante los seis (6) meses posteriores a la cesación de la actividad, con el objeto de determinar cualquier actividad en las áreas que ocasionen daños ambientales, movimientos irregulares del suelo explotado, perjuicio a la salud de los habitantes del lugar, contaminación de los acuíferos, fallas subterráneas, polución.

Art. 10. – La autoridad de aplicación verificará el estricto cumplimiento de las normas ambientales por parte de las empresas concesionarias que hayan cesado en su actividad, fijando los plazos que estime convenientes para asegurar la supervisión de las áreas hasta que se considere la inexistencia de cualquier posibilidad de las afectaciones señaladas en el artículo 9°.

Art. 11. – A los efectos de indemnizar a los titulares de permisos a que hace referencia el artículo 7° de la presente ley, por gastos en que pudieren haber incurrido hasta la caducidad de los contratos, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijará los montos que correspondan.

Art. 12. – Los pagos que determine el Tribunal de Tasaciones serán efectuados una vez que transcurran

los plazos fijados en el artículo 8º, siempre y cuando no se hubieren comprobado daños en el ambiente que pudieran ser objeto de una reclamación por parte del Estado nacional, en cuyo caso se establecerá el valor de los mismos, a los efectos de realizar la deducción correspondiente de la cifra que corresponda pagar.

En el caso de haberse comprobado la existencia de daños al ambiente y a la salud de las personas, la autoridad de aplicación establecerá el valor de los mismos, mediante la debida consulta a los organismos competentes. En tal caso también se deberá evaluar las consecuencias futuras de la afectación, que integrarán el monto que deberá reclamarse a los permisionarios.

Art. 13. – Las actividades relativas al estudio, exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos estarán a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, una vez nacionalizada y constituida en sociedad del Estado.

Hasta el momento en que se produzca la nacionalización y estatización definitiva de YPF, las empresas que son concesionarias tendrán la característica de contratistas.

Art. 14. – Con la puesta en vigencia de la presente ley caducarán de pleno derecho todas las concesiones otorgadas en violación a la ley 17.319 que serán revertidas al Estado nacional; las obtenidas por reconversiones o conversiones de contratos de explotación derivados de los decretos 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89 y demás decretos desreguladores, y las prorrogadas en violación al artículo 35 de la ley de facto 17.319 como Loma de la Lata y Cerro Dragón, que no hubieren sido nulificadas, conforme a su artículo 79, inciso c).

Asimismo, las reglas de la presente ley serán aplicables a los contratos de explotación en curso de ejecución y, en general, a las situaciones jurídicas subsistentes, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Art. 15. – Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación todos los criaderos, fuentes y depósitos naturales de petróleo y de los hidrocarburos líquidos y gaseosos que se encuentren en el subsuelo o que surjan de la superficie de la tierra y que hubiesen sido concedidos a empresas o particulares por el Estado nacional o provincial, en violación a las disposiciones de la ley 17.319 y que se opongan a los términos de la presente ley.

Art. 16. – El Poder Ejecutivo fijará la política nacional en materia de hidrocarburos, siendo su objetivo principal satisfacer las necesidad de hidrocarburos del país, con el producto de sus yacimientos y con la debida custodia de sus reservas para asegurar esa finalidad, dentro de las más modernas técnicas de uso racional de la energía.

Art. 17. – Queda prohibido en todo el territorio nacional el otorgamiento de concesiones que recaigan sobre los yacimientos de hidrocarburos a que se refiere la presente ley, así como la celebración de cualquier otro contrato sea cual sea su denominación en violación a las disposiciones de la presente ley. Los contratos de

asociación que se celebren con empresas privadas, nacionales y extranjeras que contengan cláusulas lesivas o contrarias al interés nacional o que de cualquier modo pudieran gravitar en la economía de la República, serán nulos de nulidad absoluta, lo cual será determinado por la autoridad de aplicación.

Art. 18. – Los titulares de contratos de asociación que eventualmente puedan ser concedidos a empresas mixtas o privadas de manera temporal, deberán poner a disposición de YPF los hidrocarburos que extraigan, quien podrá transportarlos, comercializarlos e industrializarlos, de conformidad con la reglamentación que se dicte, y teniendo en cuenta la conveniencia del mercado interno.

Art. 19. – El Estado nacional reconoce y garantiza a las provincias en cuyos territorios se encuentren los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos una participación igual al 20 % del producido neto de las actividades económicas de la zona productiva, y una participación del 10 % a las restantes provincias.

Las provincias que reciban una participación del 20 %, destinarán el 30 % de la referida participación a los municipios que se encuentren en las mismas.

De la participación que le corresponde al Estado nacional, se destinará un 5 % para la reconstrucción del sistema ferroviario nacional y un 3 % para la reparación del medio ambiente, que haya sido afectado por las explotaciones hidrocarbúferas.

Art. 20. – Los bienes y actividades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en cuanto sociedad del Estado quedarán exentos de toda clase de gravámenes, impuestos y tasas de carácter nacional, provincial y municipal, con excepción de los tributos que se destinen específicamente a los fines señalados en el artículo 16 de la presente ley, a partir de su fecha de sanción.

Art. 21. – En razón de que todas las actividades integrantes del ciclo económico de los hidrocarburos como la exploración, extracción, transporte, refinación, industrialización, distribución y comercialización, constituyen un servicio público, será el Estado nacional quien determine los precios y tarifas de los mismos en todas las etapas.

Art. 22. – A los efectos de obtener contratos de asociación, y sin perjuicio de cumplir con la totalidad de las disposiciones vigentes, las empresas contratistas deberán constituir domicilio legal en la República, poseer capacidad técnica comprobada y solvencia financiera para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado.

Además, serán por exclusiva cuenta de las empresas los riesgos propios de la actividad minera, los que en ningún caso podrán ser transferidos al Estado nacional.

Art. 23. – Durante el período en que la producción nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la utilización en el país de todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, salvo en los casos en que justificadas razones técnicas a juicio del Consejo

Nacional de Hidrocarburos no lo hicieran aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se adecuarán al uso racional de los petróleos nacionales.

Queda prohibida la exportación de gas natural y petróleo crudo.

La comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos estará sometida a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional.

Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional, previo dictamen del Consejo Nacional de Hidrocarburos, determinará las áreas en las que otorgará contratos de explotación.

Art. 25. – A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la República y de su plataforma continental, quedan establecidas las siguientes categorías de reservas, sin perjuicio de otras clasificaciones o denominaciones que considere necesario efectuar el Poder Ejecutivo nacional:

I. Probadas: Las que correspondan con trampas estructurales, sedimentarias o estratigráficas donde se haya comprobado la existencia de hidrocarburos que puedan ser comercialmente explotables.

II. Posibles: Son aquellas sobre las que se tiene certeza aproximada al 10 % que podrán ser recuperadas utilizando la tecnología existente.

III. Probables: Son aquellas sobre las que se tiene una certeza aproximada al 50 % que podrán ser recuperadas utilizando la tecnología existente.

Art. 26. – YPF y otras empresas estatales constituirán elementos fundamentales en el logro de los objetivos fijados y desarrollarán sus actividades de exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve en su favor. En el futuro el Poder Ejecutivo, en relación con los planes de acción, podrá asignar nuevas áreas a esas empresas, las que podrán ejercer sus actividades directamente o mediante contratos de locación de obra y de servicios, integración o formación de sociedades y demás modalidades de vinculación con personas físicas o jurídicas que autoricen sus respectivos estatutos, siempre que se cumplan las disposiciones de la presente ley.

Art. 27. – Se establece un impuesto al petróleo crudo procesado que será del 12 % del valor del ingreso de los hidrocarburos a la refinería. El referido impuesto estará destinado de manera exclusiva a la construcción de represas hidroeléctricas, el desarrollo de energías no renovables y alternativas, y el saneamiento del medio ambiente.

## TÍTULO II

### Derechos y obligaciones principales

#### Sección primera

##### *Permisos de exploración*

Art. 28. – El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el permiso y durante los plazos que fije

la reglamentación y deberán ajustarse a las reglas que se establecen en los artículos que siguen.

Art. 29. – A todo titular de un permiso de exploración y explotación le corresponde el derecho de obtener un (1) contrato de asociación para la explotación de los hidrocarburos que descubre en el perímetro delimitado por el permiso, con arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse este último.

Art. 30. – Los contratos de asociación serán aprobados por el Poder Ejecutivo y otorgados por YPF a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados en la sección cuarta.

Art. 31. – El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados en el artículo 13 y de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen, y la perforación de pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los objetivos establecidos en la presente ley. Todo lo cual será efectuado por cuenta y orden de YPF SE.

El permiso autoriza asimismo a construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en la sección tercera y las demás disposiciones que sean aplicables.

Art. 32. – La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones necesarias a que se haya comprometido para cada uno de los períodos que el permiso comprenda.

Art. 33. – La autoridad de aplicación verificará el estricto cumplimiento de las normas ambientales por parte de las empresas concesionarias, que estarán impedidas de utilizar cualquier técnica que pueda ocasionar daños a la población del lugar, contaminación y daños ambientales.

Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar a YPF la diferencia resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas dificultades técnicas a juicio de YPF, podrá autorizarse la sustitución de dicho pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma igual a la no invertida.

La renuncia del permisionario al derecho de exploración le obliga a abonar a YPF el monto de las inversiones comprometidas y no realizadas, que correspondan al período en que dicha renuncia se produzca.

Si en cualquiera de los períodos las inversiones correspondientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las sumas comprometidas, el permisionario podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones que correspondan al período siguiente, siempre que ello no afecte la realización de los trabajos indispensables para la eficaz exploración del área.

Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en un contrato de asociación, la autoridad de aplicación podrá admitir que hasta el cincuenta por ciento (50 %) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación sea destinado a la explotación de la misma, siempre que el resto del monto comprometido incremente la inversión pendiente en el área de exploración.

Art. 34. – El permisionario que descubriera hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título VII, la correspondiente denuncia ante YPF, y pondrá a disposición de la misma los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios.

Art. 35. – Dentro de los treinta (30) días de la fecha en la que el permisionario, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante YPF su voluntad de obtener el correspondiente contrato de asociación.

El omitir la precitada declaración u ocultar la condición de comercialmente explotable de un yacimiento dará lugar a la aplicación de la sanción prevista y reglada en los artículos 86 y 87.

Art. 36. – Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada concurso con los máximos siguientes:

Plazo básico:	— 1er. período hasta cuatro	(4) años
	— 2do. período hasta tres	(3) años
	— 3er. período hasta dos	(2) años
Período de prórroga:	hasta cinco	(5) años

Para las exploraciones en la plataforma continental cada uno de los períodos del plazo básico podrá incrementarse en un (1) año.

Art. 37. – Podrán otorgarse permisos de exploración solamente en zonas posibles. La unidad de exploración tendrá una superficie de 100 kilómetros cuadrados, no pudiendo concederse más de 15 unidades de exploración, y 20 unidades en el caso de la exploración *off shore*. Con excepción de YPF, ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) permisos de exploración ya sea en forma directa o indirecta. Tal limitación rige igualmente para las uniones transitorias de empresas, que en conjunto no podrán en ningún caso superar el límite anteriormente fijado en cuanto a la titularidad de los referidos permisos.

Art. 38. – Son obligaciones de los contratistas:

- a) Al fenecer cada uno de los períodos primero y segundo del plazo básico de un permiso de exploración, el permisionario reducirá su área,

como mínimo, al cincuenta por ciento (50 %) de la superficie remanente del permiso al concluir el respectivo período;

- b) Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área remanente, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al 50 % del área remanente antes del fenecimiento del último período de dicho plazo básico;
- c) En todos los casos, el permisionario obrará por cuenta y orden de YPF SE.
- d) Si el permiso se convirtiera en un contrato de asociación, se registrará por las normas contenidas en la sección segunda.

## Sección segunda

### *Contratos de asociación*

Art. 39. – El contrato de asociación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos dentro los plazos fijados en el artículo 47.

Art. 40. – A todo titular de un contrato corresponde el derecho de obtener un permiso para el transporte de sus hidrocarburos, sujeto a lo determinado en la sección tercera del presente título.

Art. 41. – Los contratos de asociación para la explotación serán aprobados por YPF y otorgados a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 28 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 33.

El Poder Ejecutivo nacional, además, podrá otorgar contratos de asociación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la sección cuarta del presente título.

Esta modalidad de contrato no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables, corriendo el riesgo a cargo de la empresa contratista.

Art. 42. – El contrato de asociación autoriza a realizar dentro de los parámetros especificados en el respectivo título, los trabajos de búsqueda y extracción de hidrocarburo conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro de los límites que fijara YPF al realizarse la respectiva contratación. Autoriza, asimismo, a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o especiales para hidrocarburos, edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, cualesquiera otras obras y operaciones necesarias para el desarrollo de sus actividades, los que quedarán como propiedad de YPF a la finalización del contrato. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a lo dispuesto por ésta y otras leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o locales de aplicación al caso.

Art. 43. – Todo particular contratista está obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las inversiones



que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por el contrato, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada y económica del yacimiento, y la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas. La explotación de los yacimientos otorgados por el contrato tendrá como contrapartida la obligatoriedad de realizar inversiones a los efectos de mantener el nivel de reservas que garantice el abastecimiento permanente para el mercado interno.

Art. 44. – Dentro de los noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el artículo 34 y posteriormente en forma periódica, el contratista someterá a la aprobación de YPF los programas de desarrollo y compromisos de inversión correspondientes a cada uno de los lotes de explotación. Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 43 y ser aptos para acelerar en todo lo posible la delimitación final de área de concesión con arreglo al artículo 45.

Art. 45. – Cada uno de los lotes abarcados por un contrato deberá coincidir lo más aproximadamente posible, con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El contratista deberá practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites conforme al mejor conocimiento que adquiera de las trampas productivas.

En ningún caso los límites de cada lote podrán exceder el área retenida del permiso de exploración.

Art. 46. – El área máxima de un contrato de asociación, será de doscientos cincuenta (250) km<sup>2</sup>, pudiendo ampliarse por decisión del Poder Ejecutivo de manera excepcional y siempre que existieran razones justificadas para ampliar el nivel de las reservas.

Ninguna persona física o jurídica podrá ser simultáneamente titular de más de cinco (5) contratos de asociación, ya sea directa o indirectamente y cualquiera sea su origen. Análogamente, regirá la misma limitación para las uniones transitorias de empresas, que en ningún caso podrán exceder el número de contratos fijados.

Art. 47. – Los contratos de asociación tendrán una vigencia de diez (10) años a contar desde la fecha de la resolución que los otorgue. El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años, en las condiciones que se establezcan al otorgarse la prórroga y siempre que el contratista haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del contrato. La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación máxima de hasta seis (6) meses al vencimiento del contrato.

Art. 48. – YPF vigilará el cumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones que esta ley

les asigna, conforme a los procedimientos que fije la reglamentación.

Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los permisionarios o contratistas vecinos y, de no mediar acuerdo entre las partes, impondrá condiciones de explotación en las zonas limítrofes a las que sean materia de contratos asignados.

Art. 49. – La reversión total o parcial al Estado de una o más zonas comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión al Estado los equipos móviles no vinculados exclusivamente a la producción del yacimiento.

Art. 50. – El contratista de YPF, que en el curso de los trabajos autorizados en virtud de esta ley descubriera sustancias minerales no comprendidas en este ordenamiento, pondrá las mismas a disposición de la Secretaría de Energía, quien fijará la retribución que corresponda por los valores incorporados al Estado.

Cuando el propietario de una mina, cualquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, lo comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular conforme a la presente ley.

### Sección tercera

#### *Contrato de transporte*

Art. 51. – YPF podrá otorgar contratos de transporte, durante los plazos que fija el artículo 47, a los efectos de trasladar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales y férreas; infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes, y en todos los casos por cuenta y orden de YPF SE.

Art. 52. – Los contratos de transporte serán otorgados por YPF a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los procedimientos que la sección 5ª especifica.

Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el artículo 52, dispongan la construcción de obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos, estarán obligados a constituirse en contratistas de transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos respectivos, cuya observancia verificará YPF, que es la empresa para la cual se realizarán los transportes indicados.

Art. 53. – Los contratos a que se refiere la presente sección serán otorgados por un plazo de quince (15) años a contar desde la fecha de adjudicación, pudiendo el Poder Ejecutivo nacional, a petición de los titulares, prorrogarlos por hasta diez (10) años más por resolución fundada. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho. La prórroga solo podrá solicitarse con una anticipación no mayor a los seis meses previo al vencimiento del contrato.

Art. 54. – Los contratos de transporte en ningún caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida a YPF otorgar iguales derechos a terceros en la misma zona.

Art. 55. – Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, los contratistas estarán obligados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo precio para todos en igualdad de circunstancias. Pero esta obligación quedará subordinada, sin embargo, a la satisfacción de las necesidades del propio contratista.

En los contratos de asociación se especificarán las bases para el establecimiento de las tarifas y condiciones de la prestación del servicio de transporte.

Dado que los contratos referidos serán otorgados por YPF, la empresa establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.

Art. 56. – En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley o su reglamentación, a los respectivos contratos de asociación, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas que rijan los transportes.

#### Sección cuarta *Adjudicaciones*

Art. 57. – Los permisos y contratos regulados por esta ley serán adjudicados mediante concursos públicos en los cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 22 y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Los contratos que resulten de la aplicación de los artículos 41, párrafo primero y 52, párrafo segundo, serán adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el título II.

Art. 58. – El Poder Ejecutivo nacional determinará en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar los objetivos de esta ley, las áreas con respecto a las cuales YPF dentro de los lineamientos fijados en la presente ley, dispondrá la realización de los concursos destinados a otorgar permisos y contratos de asociación.

Art. 59. – Dispuesto el llamado a concurso en cualquiera de los procedimientos considerados por los artículos 63 y 64, la autoridad de aplicación dictará las normas a las cuales se ajustarán los contratos,

confeccionando YPF los pliegos respectivos, los que consignarán a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

Asimismo, los pliegos contendrán las condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciarán las bases fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan, y ventajas especiales para la Nación, incluyendo bonificaciones, pagos iniciales diferidos o progresivos, obras de interés general, etc.

El llamado a concurso deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por los medios que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Art. 60. – La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo, resultare en definitiva la más conveniente a los intereses de la Nación, debiendo tenerse en cuenta además para la aceptación de la oferta la solvencia técnica, económica y financiera que sea presentada.

Es atribución del Poder Ejecutivo nacional, de acuerdo con el dictamen que efectúe YPF, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en el concurso, si la oferta respondiere específicamente a lo requerido en los pliegos respectivos.

Art. 61. – Hasta treinta (30) días antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren lesionados por el llamado a concurso, sea cual fuere la razón que invoquen, podrán formular oposición escrita ante la autoridad de aplicación acompañando la documentación en que aquélla se funde.

Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso si, a su juicio, la oposición fue fundada documentada y suficientemente.

Art. 62. – Podrán presentar ofertas las personas inscritas en el registro que la autoridad de aplicación habilitará al efecto y aquellas que, sin estarlo, inicien el correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que se inicie la recepción de las propuestas y cumplan los requisitos que se exijan.

Art. 63. – No podrán inscribirse en el registro precitado ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y contratos de asociación regidos por esta ley, las personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales y las personas jurídicas extranjeras que no tengan domicilio legal en la República.

Art. 64. – Los interesados presentarán juntamente con sus ofertas, una garantía de mantenimiento de sus propuestas en las formas admitidas y por los montos fijados en la reglamentación o en los pliegos de condiciones.

Art. 65. – Pendiente de adjudicación un concurso, no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de que así ocurriera, los afectados podrán hacer valer sus derechos mediante oposición al llamado, en la forma y tiempo previstos por el artículo 49.

Art. 66. – Cualquiera sea el resultado del concurso, los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio alguno indemnizable por el Estado con motivo de la presentación de propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados por su preparación o estudio.

Art. 67. – Toda adjudicación de permisos o contratos regidos por esta ley y la aceptación de sus cesiones será protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin cargo, por el escribano general de gobierno en el registro del Estado nacional, constituyendo el testimonio de este asiento el título formal del derecho otorgado.

#### Sección quinta

##### *Tributos*

Art. 68. – Los titulares de permisos de exploración y contratos de asociación para la explotación de los hidrocarburos estarán sujetos, mientras esté vigente el permiso o contrato respectivo, al régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:

- a) Según les corresponda, deberán cumplir con el pago de todos los tributos provinciales y municipales existentes a la fecha de la adjudicación, pero durante la vigencia de los permisos y contratos, las provincias y municipalidades no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras o incremento general de impuestos;
- b) La Administración Federal de Ingresos Públicos tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto fijado en el artículo 27 y otros tributos que pudieran establecerse, con arreglo a las disposiciones de la ley 11.683 (t. o. 1960 y sus modificaciones) y sus reglamentaciones.

Art. 69. – YPF pagará al Estado nacional un canon del 3 % de acuerdo al área de la superficie explotada y una regalía del 30 %, distribuyéndose la misma de conformidad con las siguientes pautas:

- a) El 20 % del valor indicado en el artículo 71 a las provincias productoras de hidrocarburos;
- b) El 10 % a las restantes provincias.

Art. 70. – El porcentaje indicado en el artículo anterior será percibido en efectivo, o en bonos emitidos por el Estado nacional.

Art. 71. – El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que se determinará mensualmente por la autoridad de aplicación.

Art. 72. – No serán gravados con regalías los hidrocarburos usados por el contratista, contratante o el permisionario por necesidades de las explotaciones y exploraciones.

Art. 73. – Las ventajas especiales para la nación que los contratistas y el contratante hayan comprometido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, serán exigibles en la forma y oportunidad que en cada caso se establezca.

Art. 74. – Los hidrocarburos que se pierdan por culpa o negligencia de YPF y/o del contratista serán incluidos en el cómputo de su respectiva producción, a los efectos tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del caso aplicar.

#### TÍTULO III

##### **Otros derechos y obligaciones**

Art. 75. – YPF deberá incluir en los contratos que celebre con los permisionarios y contratistas mencionados en las secciones primera, segunda y tercera del título II de esta ley, a los efectos del ejercicio de sus atribuciones, todas las limitaciones legales existentes establecidas por esta ley para el ejercicio de sus derechos. Las pertinentes tramitaciones se realizarán por intermedio de la autoridad de aplicación, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.

Art. 76. – Las mismas limitaciones serán consignadas en los contratos celebrados con permisionarios y contratistas cuyas áreas se encuentren cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías de comunicación y transporte y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

Art. 77. – La importación de materiales, equipos, maquinarias y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades regladas en esta ley, se sujetará a las normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el mismo tratamiento a las empresas estatales y privadas contratistas.

Art. 78. – Constituyen obligaciones de YPF, de permisionarios y contratistas, sin perjuicio de las establecidas en el título II:

- a) Con carácter previo a la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos, se deberán efectuar estudios de impacto ambiental, los cuales deberán ser elevados a la autoridad de aplicación, quien evaluará sobre las condiciones en las que se realizará los trabajos, debien-

do pronunciarse en un plazo improrrogable de treinta (30) días;

- b) Los estudios de impacto ambiental, deberán consistir en análisis rigurosos de todas las condiciones físicas, sanitarias, sísmicas y las eventuales condiciones de las mismas, en caso de realizarse la explotación;
- c) Realizar todos aquellos trabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales y eficientes;
- d) Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o abandono de pozos, dando cuenta inmediata a la autoridad de aplicación de cualquier novedad al respecto;
- e) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia, el permisionario o contratista responderá por los daños causados al Estado o a terceros;
- f) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;
- g) Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;
- h) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables;
- i) En ningún caso se autorizará la exploración, explotación o transporte de hidrocarburos, si el estudio de impacto ambiental indicara la existencia de riesgos ciertos al ambiente.

Art. 79. – YPF suministrará a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y a todos aquellos que realicen los contratistas; asimismo, la demás necesaria para que cumpla las funciones que le asigna la presente ley.

Los contratistas deberán suministrar a YPF en forma mensual toda la información que esta requiera respecto al objeto y realización de los contratos.

Art. 80. – Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos argentinos y del Mercosur en todos los niveles de la actividad.

La proporción de ciudadanos del Mercosur referida al total del personal empleado por cada permisionario o contratista, no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y cinco por ciento (75 %), la que deberá mantenerse mientras dure el contrato.

Igualmente capacitarán al personal bajo su dependencia en las técnicas específicas de cada una de sus actividades.

## TÍTULO IV

### Cesiones

Art. 81. – En caso de que hubiera alguna imposibilidad técnica o económica para que YPF pudiera explotar alguna de las áreas a su cargo, las mismas serán revertidas al Estado nacional o provincial según corresponda quienes deberán efectuar una licitación pública de las mismas, conforme las prescripciones de la presente ley.

Art. 82. – Los contratistas de explotación podrán tomar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales préstamos no importará en ningún caso la cesión del contrato de explotación en favor del acreedor. Dichos contratos se someterán a la previa aprobación de YPF, la que sólo será acordada en caso de garantizarse satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones exigidas en el artículo 84.

Art. 83. – En el caso de incumplir con sus contratos de préstamos, los contratistas responderán en forma exclusiva con su patrimonio, careciendo de cualquier relación contractual los respectivos permisos de exploración y los contratos de asociación celebrados.

Art. 84. – Los escribanos públicos no autorizarán ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente una constancia escrita de la autoridad de aplicación, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se pretende ceder. Tal constancia y el decreto que la autorice en copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo protocolo.

## TÍTULO V

### Inspección y fiscalización

Art. 85. – La autoridad de aplicación fiscalizará el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo 13 de la presente ley, a fin de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

YPF tendrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permisionarios o concesionarios.

Art. 86. – Las facultades acordadas por el artículo precedente no obstan al ejercicio de las atribuciones conferidas al Estado por otras leyes, con cualquier objetivo de gobierno, cuyo cumplimiento también autorice inspecciones o controles oficiales. Las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación, competentes en materia de hidrocarburos, tendrán asimismo facultades de inspección y de control del cumplimiento de la presente ley.

Art. 87. – YPF los permisionarios y contratistas facilitarán en la forma más amplia el ejercicio por parte de los funcionarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.



Art. 88. – Para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la autoridad de aplicación podrá hacer uso de los medios que a tal fin considere necesarios.

Art. 89. – Sin perjuicio de la fiscalización ejercida por los órganos correspondientes, la Auditoría General de la Nación efectuará anualmente una auditoría integral de YPF y de todas las empresas privadas que sean titulares de contratos de asociación.

## TÍTULO VI

### **Nulidad, caducidad y extinción de los permisos y concesiones**

Art. 90. – Son absolutamente nulos los contratos y permisos otorgados por YPF:

- a) A personas impedidas, excluidas o incapaces para adquirirlos, conforme a las disposiciones de esta ley;
- b) Las cesiones de permisos o contratos realizados en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;
- c) Los permisos y contratos adquiridos de un modo distinto al previsto en esta ley;
- d) Los permisos y contratos que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la actividad petrolera, pero sólo respecto del área superpuesta;
- e) Los permisos y contratos obtenidos por uniones transitorias de empresas que hayan excedido el límite de cinco (5) fijadas en la presente ley.

Art. 91. – Los permisos caducan:

- a) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales;
- b) Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las inspecciones de la autoridad de aplicación o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos;
- c) Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 42 y 43;
- d) Por haber caído su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecutoria que así lo declare;
- e) Por fallecimiento de la persona física o fin de la existencia de la persona jurídica titular del derecho, salvo acto expreso del Poder Ejecutivo manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para ser titulares;

Previamente a la declaración de caducidad por las causales previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del presente artículo, la autoridad de aplicación intimará a YPF, a los permisiona-

rios y contratistas, para que subsanen dichas transgresiones en el plazo que fije.

Art. 92. – Los contratos y permisos se extinguen:

- a) Por el vencimiento de sus plazos;
- b) Por renuncia de su titular, la que podrá referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción proporcional de las obligaciones a su cargo, siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho.

Art. 93. – La extinción por renuncia será precedida, inexcusablemente, de la cancelación por el titular el contrato o permiso de todos los tributos impagos y demás deudas exigibles.

Art. 94. – Comprobada la causal de extinción, nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo nacional dictará la pertinente resolución fundada.

Art. 95. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68, inciso c), apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o de las multas ejecutoriadas se hará por la vía de apremio, sirviendo de suficiente título a tal efecto la pertinente certificación de la autoridad de aplicación.

Art. 96. – Anulado, caducado o extinguido un permiso o contrato las áreas respectivas con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o contrato haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones establecidas en los artículos 61 y 65, pasarán al dominio del Estado nacional.

Art. 97. – Para el caso de que el contratista entendiera que la anulación, caducidad o extinción de un contrato carecen de fundamentos legales o técnicos, podrá recurrir a la vía establecida por la ley 19.549.

## TÍTULO VII

### **Sanciones y recursos**

Art. 98. – El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes de los permisos y contratos que no configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, será penado por la autoridad de aplicación con multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas, oscilarán entre un suma equivalente a 10.000 y 50.000 barriles de petróleo. Dentro de los diez (10) días de pagada la multa, los permisionarios o contratistas podrán promover su repetición ante el tribunal competente, si estimaren que las mismas carecen de justificación.

Art. 99. – El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios o contratistas, facultará en todos los casos a la aplicación por la autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se refiere el artículo 50, en la forma que se reglamente. Estas sanciones no enervarán otros permisos o contratos de que fuera titular el causante.

Art. 100. – Con la declaración de extinción, nulidad o caducidad a que se refieren los artículos precedentes, se tendrá por satisfecho el requisito de la ley 3.952 (modificada por las leyes 11.634 y 24.946) sobre denegación del derecho controvertido por parte del Poder Ejecutivo, y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra la Nación o recurrir al procedimiento reglado por la ley 19.549.

Art. 101. – La autoridad de aplicación contará con representación directa en sede judicial en toda acción derivada de esta ley en que el Estado nacional sea parte.

## TÍTULO VIII

### Empresas estatales y provinciales

Art. 102. – YPF, ENARSA y otras empresas provinciales quedan sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación y transporte, a todos los requisitos, obligaciones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación, gozando asimismo de los derechos atribuidos por esta ley a los permisionarios y contratistas.

Art. 103. – De conformidad con lo que establece el artículo 23, las empresas estatales y provinciales quedan facultadas para convenir con personas jurídicas de derecho público o privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de sus actividades, incluyendo la integración de sociedades, siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones de la presente ley.

Art. 104. – A los efectos de la presente ley se entenderá por empresas estatales a Yacimientos Petrolíferos Fiscales y ENARSA, y aquellas que, con cualquier forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan o reemplacen en el ejercicio de sus actuales actividades.

Una vez estatizada YPF y convertida en sociedad del Estado, pasarán a la misma la totalidad de los bienes y el patrimonio de ENARSA.

## TÍTULO IX

### Autoridad de aplicación

Art. 105. – La aplicación de la presente ley compete a la Secretaría de Estado de Energía o a los organismos que dentro de su ámbito se determinen.

Art. 106. – Compete al Poder Ejecutivo nacional, en forma privativa, la decisión sobre las siguientes materias:

- a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley, otorgando a YPF las áreas respecto de las cuales pueda efectuar los contratos de asociación que estime convenientes;

- b) Otorgar a YPF la autorización correspondiente a los efectos de celebrar permisos y contratos de asociación, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones;
- c) Estipular soluciones arbitrales y designar árbitros;
- d) Anular concursos;
- e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales;
- f) Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por YPF y otras empresas estatales con terceros a los fines de la explotación de las zonas que esta ley reserva a su favor;
- g) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superfluos;
- h) Declarar la caducidad o nulidad de permisos y concesiones vigentes con anterioridad a la sanción de la presente ley, especialmente aquellas concedidas en virtud de la ley 17.319 y el Código de Minería.

Art. 107. – Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de esta ley en concepto de regalías, cánones, sumas comprometidas y no invertidas, multas y otros pagos o contribuciones vinculados con la obtención de permisos y concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a solventar los gastos derivados del ejercicio de las funciones que se le atribuyen y a la utilización y el desarrollo de recursos renovables.

En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las regalías serán aplicados al destino fijado en el artículo 16.

## TÍTULO X

### Normas complementarias

Art. 108. – Los permisionarios y contratistas deberán indemnizar a los ocupantes de propiedades cualquiera sea el título que invocaren, de los perjuicios que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar –de común acuerdo y en forma optativa y excluyente– los que hubieren determinado o determinare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna por parte de dichos ocupantes.

En ningún caso los que hubieren usurpado una propiedad, tendrán derecho a la indemnización determinada en el artículo anterior.

Art. 109. – Los valores en pesos que esta ley asigna al canon de exploración y explotación y a las multas, podrán ser actualizados con carácter general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno. Igualmente podrán estipularse en

los permisos y contratos, sistemas de ajuste de las inversiones que se comprometan en moneda nacional o extranjera, a fin de mantener su real valor.

## TÍTULO XI

### Normas transitorias

Art. 110. – Del producido neto que le corresponda al Estado nacional durante el primer año de la vigencia de la presente ley, destinará un 2% para el pago a los trabajadores de la ex YPF, de las indemnizaciones que se encuentran pendientes. Ese porcentaje subsistirá en los años subsiguientes, hasta la cancelación definitiva de las mismas.

Art. 111. – El Poder Ejecutivo dictará, dentro de los ciento ochenta (180) días de sancionada esta ley, la reglamentación a que se alude en el artículo 18, sin perjuicio de lo cual las normas de la presente ley se declaran operativas. Mientras ello no ocurra se estará a las normas fijadas por la ley 17.319.

Art. 112. – La presente ley es de orden público.

Art. 113. – Deróganse las leyes 17.319, los decretos 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89, y todas y cada una de las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 114. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 110 del reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de octubre de 2014.

*Fernando E. Solanas. – Jaime Linares.*

### Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 8 de octubre de 2014.

*Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.*

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

*El Senado y Cámara de Diputados,...*

## TÍTULO I

### Modificaciones a la ley 17.319

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 23 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 23: Los plazos de los permisos de exploración serán fijados en cada licitación por la autoridad de aplicación, de acuerdo al objetivo de la exploración, según el siguiente detalle:

Plazo básico:

Exploración con objetivo convencional:

Primer período hasta tres (3) años.

Segundo período hasta tres (3) años.

Período de prórroga: hasta cinco (5) años.

Exploración con objetivo no convencional:

Primer período hasta cuatro (4) años.

Segundo período hasta cuatro (4) años.

Período de prórroga: hasta cinco (5) años.

Para las exploraciones en la plataforma continental y en el mar territorial cada uno de los períodos del plazo básico de exploración con objetivo convencional podrá incrementarse en un (1) año.

La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permisionario que haya cumplido con la inversión y las restantes obligaciones a su cargo.

La transformación parcial del área del permiso de exploración en concesión de explotación realizada antes del vencimiento del plazo básico del permiso, conforme a lo establecido en el artículo 22, autoriza a adicionar al plazo de la concesión el lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la prórroga.

En cualquier momento el permisionario podrá renunciar a toda o parte del área cubierta por el permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescriptas en el artículo 20.

Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 25: Los permisos de exploración abarcarán áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades. Los que se otorguen sobre la plataforma continental no superarán las ciento cincuenta (150) unidades.

Art. 3º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 26: Al finalizar el primer período del plazo básico el permisionario decidirá si continúa explorando en el área, o si la revierte totalmente al Estado. El permisionario podrá mantener toda el área originalmente otorgada, siempre que haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes del permiso.

Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo caso dicha restitución quedará limitada al cincuenta por ciento (50 %) del área remanente antes del vencimiento del segundo período del plazo básico.

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 27: La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo que fija el artículo 35.

Los sujetos titulares de permisos de exploración y/o de concesiones de explotación de hidrocarburos tendrán derecho a solicitar a la autoridad de aplicación una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, en los términos previstos en el artículo 22 o en el artículo 27 bis, según corresponda.

Art. 5º – Incorpórase como artículo 27 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 27 bis: Entiéndese por explotación no convencional de hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquisto o pizarra (*shale gas* o *shale oil*), areniscas compactas (*tight sands*, *tight gas*, *tight oil*), capas de carbón (*coal bed methane*) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad. El concesionario de explotación, dentro del área de concesión, podrá requerir la subdivisión del área existente en nuevas áreas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo de un plan piloto que, de conformidad con criterios técnico-económicos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento descubierto. La autoridad de aplicación nacional o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60) días y su vigencia se computará en la forma que establece el artículo 35.

Los titulares de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas. Tal solicitud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo precedente.

La concesión correspondiente al área oportunamente concesionada y no afectada a la nueva concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones previamente existentes, debiendo la autoridad concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión. Queda establecido que la nueva concesión de explotación

no convencional de hidrocarburos deberá tener como objetivo principal la explotación no convencional de hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma podrá desarrollar actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la presente ley.

Art. 6º – Incorpórase como artículo 27 ter de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 27 ter: Aquellos proyectos de producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera que por su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la autoridad de aplicación y por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de hasta el cincuenta por ciento (50 %) por parte de la autoridad de aplicación provincial o nacional, según corresponda. Se consideran proyectos de producción terciaria aquellos proyectos de producción en que se apliquen técnicas de recuperación mejorada del petróleo (*enhanced oil recovery* –EOR– o *improved oil recovery* –IOR–). Se consideran proyectos de petróleo extra pesado aquellos que requieran tratamiento especial (calidad de crudo inferior a 16 grados API y con viscosidad a temperatura de reservorio superior a los 1.000 centipois).

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 29: Las concesiones de explotación serán otorgadas, según corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o provincial a las personas físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el artículo 17 cumpliendo las formalidades consignadas en el artículo 22.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, podrá además otorgar concesiones de explotación sobre zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la sección 5 del presente título.

Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, asimismo otorgará concesiones de explotación no convencionales de hidrocarburos de acuerdo a los requisitos dispuestos por los artículos 27 y 27 bis.

Art. 8º – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 34: El área máxima de una nueva concesión de explotación que sea otorgada a partir de la vigencia del presente y que no provenga



de un permiso de exploración será de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados (250 km<sup>2</sup>).

Art. 9º – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 35: De acuerdo a la siguiente clasificación las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución que las otorgue, con más los adicionales que resulten de la aplicación del artículo 23:

- a) Concesión de Explotación Convencional de Hidrocarburos: veinticinco (25) años;
- b) Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años. Este plazo incluirá un período de plan piloto de hasta cinco (5) años, a ser definido por el concesionario y aprobado por la autoridad de aplicación al momento de iniciarse la concesión;
- c) Concesión de explotación con la plataforma continental y en el mar territorial: treinta (30) años.

Los titulares de las concesiones de explotación (ya sea que a la fecha de inicio de vigencia de la presente modificación hayan sido o no prorrogadas), y siempre que hayan cumplido con sus obligaciones como concesionarios de explotación, estén produciendo hidrocarburos en las áreas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el desarrollo de la concesión, podrán solicitar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas.

La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.

Queda establecido que aquellas concesiones de explotación que a la fecha de sanción de la presente ley hayan sido previamente prorrogadas se regirán hasta el agotamiento de los plazos de dichas prórrogas por los términos y condiciones existentes. Una vez agotados dichos plazos de prórroga, los titulares de las concesiones de explotación podrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga establecidas en la presente ley.

Art. 10. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 41: Las concesiones a que se refiere la presente sección serán otorgadas y prorrogadas por plazos equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las concesiones de transporte. Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según

corresponda sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.

Art. 11. – Sustitúyese el artículo 45 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 45: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27 bis, los permisos y concesiones regulados por esta ley serán adjudicados mediante licitaciones en las cuales podrá presentar ofertas cualquier persona física o jurídica que reúna las condiciones establecidas en el artículo 5º y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.

Las concesiones que resulten de la aplicación de los artículos 29, párrafo primero y 40, segundo párrafo, serán adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en el título II de la presente ley.

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 47 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 47: Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artículo 46, la autoridad de aplicación confeccionará el pliego respectivo, en base al pliego modelo, elaborado entre las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación, el que consignará a título ilustrativo y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.

Asimismo, el pliego contendrá las condiciones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales como el importe y los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan. El llamado a licitación deberá difundirse durante no menos de diez (10) días en los lugares y por medios nacionales e internacionales que se consideren idóneos para asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrencia posible, debiéndose incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.

Art. 13. – Sustitúyese el artículo 48 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 48: La autoridad de aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan presentado las de mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La adjudicación recaerá en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente que a criterio debidamente fundado del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en particular proponga la mayor inversión o actividad exploratoria.

Es atribución del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en la licitación.

Art. 14. – Incorpórase al título II de la ley 17.319 y sus modificatorias la sección VII “Canon y regalías”, que comprenderá los artículos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65, y sustitúyense los artículos 57 y 58 de la ley 17.319 y sus modificatorias por los siguientes textos:

Artículo 57: El titular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la siguiente escala:

a) Plazo básico:

Primer período: doscientos cincuenta pesos (\$ 250).

Segundo período: mil pesos (\$ 1.000);

b) Prórroga: durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado la suma de diecisiete mil quinientos pesos (\$ 17.500) por km<sup>2</sup> o fracción, incrementándose dicho monto en el veinticinco por ciento (25 %) anual acumulativo. El importe que deba ser abonado por este concepto correspondiente al segundo período del plazo básico y al período de prórroga podrá reajustarse compensándolo con las inversiones efectivamente realizadas en la exploración dentro del área correspondiente, hasta la concurrencia de un canon mínimo equivalente al diez por ciento (10 %) del canon que corresponda en función del período por km<sup>2</sup> que será abonado en todos los casos.

Artículo 58: El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por el área de pesos cuatro mil quinientos (\$ 4.500).

Art. 15. – Incorpórase como artículo 58 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 58 bis: La autoridad de aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación el pago de un bono de prórroga cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final del período de vigencia de la concesión por el dos por ciento (2 %) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento del otorgamiento de la prórroga.

Para los casos de realización de actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la concesión de explotación

no convencional de hidrocarburos, la autoridad de aplicación podrá establecer el pago de un bono de explotación cuyo monto máximo será igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y por el dos por ciento (2 %) del precio promedio de cuenca aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento del otorgamiento de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 59 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 59: El concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente, en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento (12 %). Idéntico porcentaje del valor de los volúmenes extraídos y efectivamente aprovechados pagará mensualmente la producción de gas natural, en concepto de regalía. Para el pago de esta regalía el valor del gas será fijado conforme al procedimiento indicado para el petróleo crudo en el artículo 61. El pago en especie de esta regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable.

En ambos casos el Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda como autoridades concedentes, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5 %) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos. Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta tres por ciento (3 %) respecto de la regalía aplicable al momento de la primera prórroga y hasta un máximo total de dieciocho por ciento (18 %) de regalía para las siguientes prórrogas.

En los casos de las concesiones de explotación referidas en el último párrafo del artículo 35, corresponderá el pago de una regalía total que no podrá superar el dieciocho por ciento (18 %).

Por la realización de las actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos, a las que se hace referencia en el artículo 27 bis de la presente ley, a partir del vencimiento del período de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, la autoridad de aplicación podrá fijar asimismo una regalía adicional de hasta tres por ciento (3 %) respecto de la regalía vigente hasta un máximo de dieciocho por ciento (18 %) según corresponda, conforme al mecanismo establecido en el artículo 35.

Las alícuotas de regalías previstas en el presente artículo serán el único mecanismo de ingreso

sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes.

Art. 17. – Sustitúyese el artículo 61 de la ley 17.319 y sus modificatorias, por el siguiente texto:

Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que será declarado mensualmente por el permisionario y/o concesionario, restando del fijado según las normas establecidas en el inciso c), apartado I del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar su valor comercial. Cuando la autoridad de aplicación considere que el precio de venta informado por el permisionario y/o concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

Art. 18. – Incorpórase como artículo 91 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, el siguiente:

Artículo 91 bis: Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos de su dominio, no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas o con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica. Respecto de las áreas que a la fecha hayan sido reservadas por las autoridades concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con participación estatal, cualquiera fuera su forma jurídica, pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con terceros, se podrán realizar esquemas asociativos, en los cuales la participación de dichas entidades o empresas provinciales durante la etapa de desarrollo será proporcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean realizadas por ellas.

## TÍTULO II

### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos**

Art. 19. – El Estado nacional incorporará al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, creado mediante el decreto 929/13, los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a doscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 250.000.000) calculada al momento de la presentación del Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y a ser invertidos durante los primeros tres (3) años del proyecto.

Los beneficios previstos en dicho decreto se reconocerán a partir del tercer año contado desde la puesta en ejecución de los respectivos proyectos.

El porcentaje de hidrocarburos respecto del cual se aplicarán los beneficios previstos en los artículos 6º y 7º de dicho decreto, será el siguiente:

- a) Explotación convencional: veinte por ciento (20 %);
- b) Explotación no convencional: veinte por ciento (20 %);
- c) Explotación costa afuera: sesenta por ciento (60 %).

Quedarán comprendidos dentro del inciso c) precedente, aquellos proyectos de explotación costa afuera en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie, medida en la ubicación del pozo, en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros. Todo otro proyecto de explotación costa afuera que no reúna dichos requisitos quedará enmarcado dentro de los incisos a) o b), según corresponda.

Art. 20. – Las condiciones para el acceso al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos previstas en el artículo 19 regirán a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, reconociéndose a los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos aprobados con anterioridad, los compromisos de inversión y los beneficios promocionales comprometidos al momento de su aprobación.

Art. 21. – En el marco de los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, referidos en el artículo 19 de la presente ley, se establecen los siguientes aportes a las provincias productoras en los que se desarrolle el proyecto de inversión:

- a) Dos coma cinco por ciento (2,5 %) del monto de inversión inicial del proyecto, dirigido a responsabilidad social empresarial, a ser aportado por las empresas;
- b) Un monto a ser determinado por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, en función de la magnitud y el alcance del proyecto de inversión para financiar obras de infraestructura en las provincias productoras, a ser aportado por el Estado nacional.

Art. 22. – Los bienes de capital e insumos que resulten imprescindibles para la ejecución de los planes de inversión de las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, ya sean importados por tales empresas o por quienes acrediten ser prestadoras de servicios de ellas, tributarán los derechos de importación indicados en el decreto 927/13 o normas que lo sustituyan. Dicha lista podrá ampliarse a otros productos estratégicos.

## TÍTULO III

**Disposiciones complementarias y transitorias**

Art. 23.– El Estado nacional y los estados provinciales, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme, la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente.

Art. 24. – El Estado nacional y los estados provinciales propiciarán la adopción de un tratamiento fiscal uniforme que promueva las actividades hidrocarburíferas previstas en la presente ley a desarrollarse en sus respectivos territorios.

Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, administrará el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural creado por la resolución 1/13 y el Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida creado por la resolución 60/13, en ambos casos de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas y los planes que con el propósito de estimular la producción excedente de gas natural establezca en el futuro.

Art. 26. – Las autoridades de aplicación del ámbito nacional y provincial según correspondiere, la Secretaría de Energía de la Nación y la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas promoverán la unificación de los procedimientos y registros tendientes al cumplimiento de sus respectivas competencias y el intercambio de información con dicho propósito y con el cumplimiento de los objetivos de autoabastecimiento previstos en la ley 26.741.

Art. 27. – Derógase el artículo 62 de la ley 17.319 y sus modificatorias.

Art. 28. – El Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, como autoridad concedente, podrá reducir hasta el veinticinco por ciento (25 %) el monto correspondiente a regalías aplicables a la producción de hidrocarburos y durante los diez (10) años siguientes a la finalización del proyecto piloto, en favor de empresas que soliciten una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, en los términos del artículo 27 bis de la ley 17.319 y sus modificatorias, dentro de los treinta y seis (36) meses a contar de la fecha de vigencia de la presente ley.

Art. 29. – Las autoridades de aplicación de las provincias y la Secretaría de Energía de la Nación confeccionarán dentro de los ciento ochenta (180) días a contar desde el inicio de vigencia de la presente ley

el pliego modelo establecido en el artículo 47 de la ley 17.319 y sus modificatorias, el que podrá ser revisado y actualizado periódicamente según la oportunidad y conveniencia de las licitaciones. Dicho pliego modelo contemplará los términos y condiciones generales aplicables a las licitaciones, incluyendo, entre otras, las garantías a las que deberán ajustarse las ofertas, el alcance de las inversiones y los ingresos que eventualmente pudieran corresponder a las respectivas autoridades concedentes. Asimismo el pliego modelo contendrá las condiciones especiales aplicables a adjudicaciones cuyo objeto sea la exploración y/o explotación convencional de hidrocarburos, explotación no convencional, costa afuera, petróleos extra pesados, exploración en áreas de frontera y demás situaciones que puedan ser contempladas por dichas autoridades de aplicación.

Art. 30. – Derógase el artículo 2º de la ley 25.943, quedando a tal efecto revertidos y transferidos todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas costa afuera nacionales a la Secretaría de Energía de la Nación, respecto de los cuales no existan contratos de asociación suscriptos con Energía Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943.

Exceptúase de dicha reversión a los permisos de exploración o concesiones de explotación existentes a la fecha de entrada de la presente ley que hayan sido otorgados con anterioridad a la ley 25.943.

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a negociar de mutuo acuerdo, en un plazo de seis (6) meses, con los titulares de contratos de asociación que hayan sido suscriptos con Energía Argentina Sociedad Anónima en el marco de la ley 25.943, la reconversión de dichos contratos asociativos a permisos de exploración o concesiones de explotación de la ley 17.319 y sus modificatorias, según corresponda.

Art. 31. – Cuando a la fecha de entrada en vigencia de esta ley alguna provincia ya hubiera iniciado el proceso de prórroga a que refiere el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias, respecto de concesiones otorgadas por el Estado nacional, y siempre que dicho proceso hubiera establecido ciertas condiciones precedentes en función de la voluntad de dicha provincia y del concesionario respectivo y de las leyes vigentes, dicha provincia dispondrá de un plazo de noventa (90) días para concluir el proceso de prórroga mediante el dictado de los actos administrativos necesarios a cargo del Poder Ejecutivo provincial. Las prórrogas así determinadas tendrán posteriormente el tratamiento que prevé el artículo 35 de la ley 17.319 y sus modificatorias.

Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.

AMADO BOUDOU.

*Juan H. Estrada.*



### III ACTA DE VOTACIÓN

Proyecto: ORDEN DEL DÍA N° 450 - DICTAMEN DE MAYORÍA

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del Cuerpo: 72 Votación: NOMINAL

Prexxdente: BOUDOU, Amado



Honorable  
**SENADO**  
de la Nación Argentina

Fecha: 27/03/2014 00:49:13

Acta: 1

Afirmativos:	38
Negativos:	28
Abstenciones:	2
Resultado:	AFIRMATIVA

Presentes: 68	Ausentes: 4	AMN: 34
---------------	-------------	---------

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
Aguilar, Eduardo Alberto	SI	54	Latorre, Roxana Itatí	SI	61
Aguirre, Hilda Cielia	SI	2	Leguizamón, María Laura	SI	37
Artaza, Eugenio Justiniano	NO	42	Linares, Jaime	NO	45
Barriouuevo, Walter B.	SI	4	Luna, Mirtha M. T.	SI	27
Basualdo, Roberto Gustavo	NO	40	Mansilla, Sergio Francisco	SI	55
Bermejo, Rolando Adolfo	SI	17	Marino, Juan Carlos	NO	24
Bertone, Rosana Andrea	SI	52	Martínez, Alfredo Anselmo	NO	8
Blas, Inés I.	SI	28	Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
Borello, Marta	NO	41	Meabe, Josefina Angélica	AUSENTE	
Cabral, Salvador	SI	50	Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
Castillo, Oscar Anibal	ABS.	9	Michetti, Marta Gabriela	NO	72
Catalán Magni, Julio César	SI	53	Monllau, Blanca María del Valle	NO	7
Cimadevilla, Mario Jorge	NO	20	Montenegro, Gerardo Antenor	SI	64
Crexell, Carmen Lucila	ABS.	69	Montero, Laura Gisela	NO	25
De Angeli, Alfredo Luis	NO	70	Morales, Gerardo Rubén	NO	22
De la Rosa, María G.	SI	18	Morandini, Norma Elena	NO	44
Di Perna, Graciela Agustina	NO	65	Negre de Alonso, Liliانا Terexxta	NO	38
Elias de Perez, Silvia Beatriz	NO	26	Odarda, María Magdalena	NO	48
Fellner, Liliana Beatriz	SI	31	Pereyra, Guillermo Juan	NO	68
Fernández, Anibal	SI	14	Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
Fiore Viñualas, María Cristina del Valle	SI	63	Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	NO	6
Fuentes, Marcelo Jorge	SI	16	Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
García Larraburu, Silvia Marcela	SI	51	Pilatti Vergara, María Inés Patricia	SI	62
Garramuño, Jorge Alberto	NO	67	Reutemann, Carlos Alberto	NO	60
Giménez, Sandra D.	SI	57	Riofrio, Marina Raquel	SI	33
Giustiniani, Rubén Héctor	AUSENTE		Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	Rojkés de Alperovich, Beatriz Liliana	SI	13
González, Pablo G.	SI	12	Roldán, José María	SI	66
Guastavino, Pedro Guillermo Ángel	SI	32	Romero, Juan Carlos	NO	19
Guinle, Marcelo Alejandro Horacio	SI	35	Rozas, Ángel	NO	21
Higonet, María de los Angeles	SI	58	Santilli, Diego César	NO	71
Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	Sanz, Ernesto Ricardo	NO	23
Iturrez de Cappellini, Ada Rosa del Valle	SI	30	Solanas, Fernando Ezequiel	NO	47
Juez, Luis Alfredo	NO	45	Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	Verna, Carlos Alberto	NO	59
Labado, María Ester	SI	11	Zamora, Gerardo	SI	29

#### IV INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR  
CATALÁN MAGNI

#### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

En mi condición de representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no puedo sino votar favorablemente el dictamen producido por las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Ley de Hidrocarburos, contenido en el Orden del Día N° 460.

Esta nueva Ley de Hidrocarburos surgió del consenso arribado entre la Nación y las provincias productoras. Las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego también han expresado su respaldo a esta norma que implica una transformación profunda de la matriz energética de nuestro país que depende del petróleo y del gas en un 90 por ciento.

Desde que en los años 90 se produjera la privatización de YPF, nuestro país vio declinar sus reservas en tanto que no se exploraban nuevos yacimientos ni se realizaban las inversiones necesarias en el sector.

La empresa Repsol llevó adelante una política de vaciamiento y de saqueo. La decisión soberana de nacionalizar YPF en 2012 fue un paso difícil pero absolutamente necesario para revertir la situación que nos habría conducido al desastre energético. Con esa decisión se detuvo el desabastecimiento progresivo y se amortiguó el creciente déficit en la balanza comercial del país.

Volver a poner en manos del Estado a YPF fue el primer paso para recuperar la inversión y la producción de hidrocarburos. El éxito de esta política es evidente por sí mismo. La producción de hidrocarburos convencionales registra cinco trimestres de crecimiento sostenido. Para el segundo trimestre del año 2014, la producción total tuvo un crecimiento del 15,5 por ciento respecto del mismo período de 2013. En tanto que la producción –cuando la compañía estaba en manos privadas– decrecía, hasta el momento de su nacionalización, a un ritmo de 6,5 por ciento anual. También se incrementó la capacidad de refinación en un 20 por ciento. Y los beneficios de YPF registraron un aumento del 81 por ciento en relación al segundo trimestre de 2013. Resta todavía lograr un aumento

del 10 por ciento en la producción de hidrocarburos para lograr el pleno autoabastecimiento del recurso y subsanar el déficit que provoca en la balanza de pagos.

Contrariamente a cuanto se nos informaba antes, nuestro país aún posee un notable potencial de reservas de hidrocarburos convencionales, como lo demuestran los descubrimientos devenidos de las nuevas exploraciones, tales como los pozos de El Manzano y Paso Bardas Norte –Mendoza–, Filo Morado –Neuquén–, Formación D-129 –Chubut–, Los Caldenes –Río Negro– y el más reciente de Los Perales - Las Mesetas –Santa Cruz–.

Mi provincia, Tierra del Fuego, cuenta con reservas comprobadas de petróleo de 3,5 millones de metros cúbicos y 27.000 millones de metros cúbicos de gas.

En cuanto a la extracción, la cuenca austral representa el 4,6 por ciento del total del país en petróleo. Tierra del Fuego en particular produce el 8,4 por ciento del gas extraído aunque, según las estimaciones, el potencial gasífero de la provincia y sus aguas adyacentes es mucho mayor.

Sabemos que el Estado nacional ha hecho grandes esfuerzos para la expansión del sistema de transporte. Desde el año 2006 se han desarrollado, en trece provincias, veintitrés obras de gasoductos de distribución de gran magnitud, lo que representa más de 1.000 kilómetros de cañería troncal y 450.000 metros de redes de distribución, incluyendo el gasoducto fueguino que benefició a 44.000 usuarios.

Todas estas obras permitieron incorporar más de dos millones de hogares al servicio público de gas natural por redes, lo cual constituye un aumento del 25,5 por ciento durante el período 2004-2013.

La inversión pública de estos años ha permitido la puesta en ejecución de grandes obras energéticas, tales como: Atucha II, nueva central térmica de Río Turbio, el cierre del ciclo combinado de la central térmica Ensenada de Barragán y de la de Brigadier López, nueva represa hidroeléctrica Punta Negra, Programa GENREN de ENARSA, central nuclear CAREM-25, nuevas centrales térmicas Vuelta de Obligado y Guillermo Brown, etcétera. Estas obras incorporarán 8.287 megavatios de potencia instalada. También existen numerosas obras para iniciarse próximamente con una producción estimada en megavatios, equivalente a la anterior y duplicándola.

Estos pocos datos contextuales relevan el hecho de que efectivamente nos hallamos frente a una política energética correcta que ya ha dado frutos.

Párrafo aparte merecen las renovadas posibilidades que implican los yacimientos no convencionales, cuyas particularidades no han escapado a esta nueva ley. Su desarrollo habrá de colocar a nuestro país entre los primeros productores mundiales de hidrocarburos. Con

ello, naturalmente, cruzaremos, superlativamente, la actual meta del autoabastecimiento.

Argentina ocupa el segundo puesto en recursos de *shale gas*, detrás de China, con un potencial estimado en 802 TCF –trillones de metros cúbicos– y el cuarto puesto en recursos de *shale oil*, con 27 billones de barriles. La tecnología de la estimulación hidráulica lleva unos 30 años de desarrollo en el mundo y se utiliza en unas 250.000 perforaciones. YPF, actualmente tiene en explotación unos 100 pozos de *shale*. La formación Vaca Muerta tiene una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados y el acuerdo con la compañía Chevron involucra, a la fecha, unos 20 kilómetros cuadrados.

Quizás se comprenda mejor ahora, la pertinencia de la nacionalización de YPF que tantas dudas y rechazos provocara en su momento. Un país sin herramientas propias para aprovechar sus recursos está atado a lo que otros decidan por sus habitantes y, ciertamente, esos otros propenden a satisfacer sus propios intereses de maximización de ganancias, ajenos a cualquier consideración de un orden social más justo.

Esta nueva Ley de Hidrocarburos atravesó exitosamente la discusión justa e inevitable sobre la distribución de la renta petrolera. Sólo este aspecto del acuerdo alcanzado es suficiente para llenarnos de orgullo puesto que su resultado es una decisión federal que no existía hasta hoy. Ello nos permitirá abordar una política nacional integrada en la explotación de hidrocarburos de esquistos que es compleja, que está llena de grandes posibilidades pero que no está exenta de riesgos, sobre todo políticos, más que ambientales como pretenden las ONG subsidiadas por los “poderes fuertes”. ¿O es que no se puede relacionar la actividad agresiva de los *hedge funds* –fondos buitres– orientados a la desestabilización económica y política de nuestro país, con estos gigantescos yacimientos?

No debemos olvidar que la voluntad de dominio neocolonial asume formas multidimensionales y que Suramérica es vulnerable a estos propósitos en relación directa con las dificultades del proceso de integración regional y con la mayor o menor ceguera de sus sistemas políticos locales sobre el entramado internacional.

El contexto en que se desenvuelven las políticas nacionales es el de un conflicto hegemónico del que por mirar hacia el Medio Oriente corremos el riesgo de ignorar que también somos un teatro de operaciones de lo que se ha dado en llamar la “estrategia del *light footprint*” –impacto suave–.

Dicho modelo estratégico implica que no veremos agresiones directas y fácilmente reconocibles, sino indirectas y multidimensionales, como lo hemos dicho antes. Por eso, aun cuando ahora estamos debatiendo la Ley de Hidrocarburos, tengamos en cuenta el contexto más general de nuestra realidad actual.

Tal y como afirma frecuentemente el presidente Correa, de Ecuador: “América Latina. Prohibido olvidar”.

La ley sometida a nuestra consideración establece un marco para las negociaciones y renegociaciones

de contratos, licitaciones competitivas, distribución acordada de regalías y presupuestos mínimos ambientales que son, entre otros, cuatro elementos esenciales para una explotación racional y equilibrada del recurso. También es importante hacer mención de que las áreas actualmente reservadas a empresas públicas del Estado nacional o provincial no se modifican con esta norma. Por último, otro aspecto que consideramos de la mayor importancia es el acortamiento de los plazos que había establecido la ley 17.319, porque ya no es posible esperar para lograr el pleno autoabastecimiento de combustibles.

Por todo lo anterior, sería ciertamente irrazonable no dar continuidad a la recuperación de soberanía en la que se encuentra empeñado el gobierno nacional, por lo cual no cabe sino la aprobación del proyecto de ley contenido en el Orden el Día N° 460/14 en trato.

Señor presidente, estamos convencidos de que sancionar esta norma tal como el Poder Ejecutivo nacional la propone es de beneficio para todos los argentinos.

2

#### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU

#### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Desde 2002 asistimos a un proceso de subexplotación por parte de los operadores privados que acrecentó el proceso de caída de reservas y producción de hidrocarburos, pero este proceso no tuvo que ver con la caída en los márgenes de ganancia de las compañías. Las empresas lograron expandir sus utilidades por sobre las ventas ampliando su rentabilidad.

La última década estuvo signada por la continuación de las políticas hidrocarburíferas de los 90 renovando concesiones y ampliando beneficios. La estatización de YPF que tantas expectativas generó no hace sino seguir confirmando la consagración del modelo extractivista y de disputa de la renta. Por otra parte al agotarse las reservas hidrocarburíferas llevó a la utilización de técnicas para explorar yacimientos no convencionales que se encuentran en una roca madre y para los que es necesario la fractura hidráulica, con grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el hidrocarburo. En el plan de gestión de YPF se da cuenta del enorme potencial de no convencional que tiene nuestro país. La explotación hidrocarburífera que tanto benefició a los operadores privados fue favorecida por políticas de subsidios, privilegios impositivos, daño ambiental, grandes daños a los pobladores nativos y falta de controles. Sistemática y permanentemente se han violado leyes, tratados internacionales e ignorado a las poblaciones originarias.

Señor presidente: una ley por sí sola no permitirá lograr el autoabastecimiento, es preciso modificar la política energética. Las decisiones políticas adoptadas desde el 90 hasta aquí, con los responsables de turno son las que condujeron al país a esta situación en la que nos encontramos que hace que hoy importemos más de lo que exportamos con un saldo negativo de 7.000 millones de dólares. Esto afecta las inversiones porque no hay energía confiable. Y ya es por todos conocido que los hidrocarburos constituyen una importante fuente de financiamiento.

Este proyecto de ley, señor presidente, mantiene los privilegios para el sector privado en detrimento del sector estatal.

Muchos especialistas han coincidido en la necesidad de reformar la Ley de Hidrocarburos pero no de cualquier modo, no a cualquier precio, no escamoteando el debate serio y concienzudo, no con apresuramiento, no para mantener el statu quo de las mismas concesionarias que provocaron la situación en la que nos encontramos que es parte de una trama de corrupción y complicidades de los diferentes gobiernos y en lo que comprometieron al Estado nacional.

Señor presidente; esta ley es hija de la necesidad, pero no de la necesidad de una política hidrocarburífera seria, sino de la necesidad de perpetuar concesiones por más de 35 años a empresas que ya están, en vez de ponerlas en situación de competencia, de la necesidad de mejorar la situación de YPF.

Señor presidente, bien señalaron en la audiencia pública los especialistas que si el proyecto está pensado para los no convencionales se debió haber explicitado la cuestión ambiental y se debería haber realizado un apartado específico para ello. Además se hace gala de un federalismo de concertaciones que involucra a algunas provincias, a las que hoy tienen yacimientos no así a las restantes que no cuentan con este recurso aún. Se fija un tope a las regalías que puede resultar excesivo o inferior según el caso de que se trate y el nivel de productividad del yacimiento.

El proyecto reduce los plazos de los permisos exploratorios pero éste es insuficiente ya que no se establecen controles a las concesiones, debilita el poder del Estado y sus ingresos porque disminuyen las regalías del 15 por ciento al 12 por ciento y evita la transparencia ya que deja a YPF libre de todo control, por caso el de la Autoridad General de la Nación.

Creo, señor presidente, que una ley de esta naturaleza, necesaria pero insuficiente, no se agota en dos días de audiencias públicas o tres; requiere de esforzados acuerdos y necesarios consensos; debe ser una ley que dé cuenta de políticas de Estado en materia energética que trasciendan a los gobiernos de turno que permita que las provincias que tienen el recurso dejen de endeudarse y puedan crecer para que alguna vez dejemos de tener un Estado nacional rico y provincias pobres que sostienen el clientelismo, la burocracia y el aparato político del Estado nacional y que más de una vez

debe declinar posturas y adoptar actitudes genuflexas a cambio de recursos. Por lo expuesto, señor presidente, no acompañaré el presente proyecto.

3

### SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS

### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Esta reforma que hoy se propone desde el Poder Ejecutivo a las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos, viene a consolidar un modelo de ventaja en materia hidrocarburífera en beneficio de nuestro país y nuestra economía nacional.

El Ministerio de Planificación y las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos –OFEPH– firmaron un acuerdo para el autoabastecimiento de hidrocarburos el pasado 16 de septiembre del corriente año, cuyo propósito es incorporar nuevos beneficios e ingresos para las provincias, impulsar inversiones para obtener energía a precios competitivos y costos nacionales.

Actualmente del 100 por ciento total de consumo energético en la Argentina estamos produciendo el 90 por ciento y estamos importando el 10 por ciento, situación que comparativamente con los demás países de la región nos posiciona en uno de los mejores lugares, ya que la mayoría de los países de Sudamérica importan más del 20 por ciento y países europeos más del 45 por ciento, datos que se obtienen de la Agencia Internacional de Energía en su informe oficial 2014.

Tanto la construcción de más viviendas y de hogares, sumado al crecimiento de la actividad económica demandan un mayor consumo energético, el aumento exponencial del parque automotor, la incorporación de más de dos millones de hogares a la red de gas como asimismo a la red eléctrica cuyo número se duplica en el caso de esta última, nos dan cuenta de la importancia de adecuar la ley en materia de hidrocarburos a fin de crear los mecanismos necesarios para la exploración y explotación de los mismos.

Esta gestión de gobierno, que comenzó en 2003 con Néstor Kirchner, construyó 5.500 kilómetros de líneas alta tensión que anillaron el sistema eléctrico incluyendo Cuyo, Noroeste, Noreste y la Patagonia, incorporó 9.000 megavatios incluyendo Yacretá y la Central Nuclear “Néstor Kirchner” –antes Atucha II–, 2.900 kilómetros de gasoductos, 320 mil caballos de potencia en plantas compresoras, lo que da como resultado que 2.100.000 hogares están actualmente incluidos en la red de gas y más de 4 millones están dentro del sistema eléctrico.



Con el magnífico descubrimiento de hidrocarburos no convencionales que tuvo lugar durante los últimos años se abre un nuevo futuro energético en nuestro país, según cálculos de la Administración de Información Energética –organismo oficial de los Estados Unidos–, Vaca Muerta estaría representando el 42 por ciento de concentración, lo que representa 123 años de consumo de petróleo y 410 años de gas sobre la base de consumo actual.

Todo esto sumado a la recuperación de YPF nos da un marco inmejorable para sostener las políticas energéticas durante los próximos años, la puesta en valor de los recursos convencionales y no convencionales, continentales y de la plataforma continental nos auguran un crecimiento en la cadena industrial y de servicios en favor del equilibrio de la balanza energética nacional.

Este proyecto establece nuevos plazos de concesiones, conforme si se trata de hidrocarburos convencionales o no convencionales en razón del sistema de exploración y explotación que necesitan ambos para su extracción fundamentándose en sí mismo la diferenciación.

Por todo esto, convencida de que las políticas públicas a largo plazo en temas tan fundamentales como son los recursos hidrocarburíferos y la generación energética nos benefician a todos los argentinos y al Estado, que hoy podamos contribuir desde nuestras bancas al mantenimiento de esta política que se inició con la recuperación de YPF, marca un claro rumbo en favor del crecimiento industrial, económico y –claramente– el energético, que es la variable fundamental para la economía de los países.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
BERTONE

### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Voy a tratar de ser breve en mi intervención; pero no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer mención a dos hechos fundamentales en la recuperación de nuestra soberanía energética; y que hoy hacen posible este debate y serán profundizados con la aprobación de este proyecto.

Quisiera referirme a mis tiempos de diputada, en donde me tocó presidir la Comisión de Energía y Combustibles, y en donde se realizó el tratamiento del proyecto de ley de expropiación del 51 por ciento del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.

En aquella oportunidad, se inició el camino de nuestra Nación hacia el horizonte de soberanía energética y autoabastecimiento energético, al que algún día llegaremos, si es que podemos asentar definitivamente un marco regulatorio y de políticas que aseguren esa

marcha. Que es la marcha de la inversión, la responsabilidad empresarial y la responsabilidad del Estado nacional como ente soberano.

En esa dirección, se firmó el acuerdo de inversión privada más importante de los últimos años. Marco en el que se incluyen las inversiones de Chevron, Dow y Petrolera Pampa, en los proyectos de Loma Campana, El Orejano y Rincón del Mangrullo. Revertimos el declino en la producción de petróleo y gas, incrementando también la inversión y la actividad.

Tan sólo entre 2012 y 2013, se lograron los mejores resultados de producción de los últimos 10 años, batiendo récords de producción históricos en las provincias de Santa Cruz y Chubut. En estos años la producción creció un 6 por ciento, contra la caída de un 44 por ciento entre 1997 y 2011. Y no tengo dudas de las grandes posibilidades de crecimiento, sobre todo cuando pienso en que Argentina cuenta con la base de recursos de petróleo y gas para revertir la importación.

Continuando en esa marcha hacia la recuperación de nuestra soberanía energética, cumplimos con nuestras obligaciones financieras con Repsol, acuerdo que se debatió y aprobó en este recinto.

Lo que hoy debatimos, señor presidente, es afianzar un eslabón más en la cadena de inversión, reforzar el marco regulatorio y legal para contar con una estructura soberana lo suficientemente sólida como para asegurar la participación de las provincias y el Estado nacional.

Este proyecto de ley promueve la inversión destinada a la explotación de hidrocarburos no convencionales, con el objetivo de revertir el déficit energético con su consecuente impacto negativo en la balanza comercial argentina, sentando las bases para el autoabastecimiento energético del país.

Brinda un marco legal homogéneo a nivel nacional para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Se adapta a las nuevas realidades del sector, trazando las reglas de exploración y explotación de hidrocarburos, diferenciando las regulaciones según tipo de explotación.

Acorta los periodos de exploración, lo que permite acelerar el desarrollo de los proyectos.

Elimina la limitante para personas físicas o jurídicas de poseer más de cinco permisos de exploración, ya sea en forma directa o indirecta.

Fomenta mediante la reducción de regalías la puesta en producción de determinados tipos de proyectos, como los de producción terciaria, petróleos extra y pesados y costa afuera –los que se encuentran a una profundidad mayor de 90 metros– proyectos que requieren de una gran inversión y que con el esquema de regalías vigente resultan poco atractivos.

Se adecuan los plazos de concesión diferenciando según tipo de proyecto. De esta manera, se procura un plazo adecuado según el tipo de explotación para recuperar la inversión realizada por el concesionario.

Se mantiene la vigencia de la Ley Corta y la potestad de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encuentran en sus territorios.

Además, las provincias podrán cobrar un adicional por extender los periodos de explotación, mediante el establecimiento de un bono de prórroga.

También, señor presidente, se agrega la facultad de cobrar un 3 por ciento adicional en materia de regalías en cada prórroga otorgada, incrementando el techo máximo a cobrar en concepto de regalías de un 12 por ciento a un 18 por ciento.

El valor del petróleo crudo en boca de pozo a determinar mensualmente para el cálculo de las regalías, ya no será establecido por la autoridad de aplicación sino que será declarado mensualmente por el concesionario de explotación.

Por su parte, para el caso de los grandes proyectos que ingresan en el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, las empresas deberán aportar en concepto de responsabilidad social empresarial a las provincias productoras el 2,5 por ciento del monto inicial de la inversión. Entre otras cosas.

Pero fundamentalmente, como representante de mi provincia Tierra del Fuego, territorio en el que disponemos de recursos energéticos, quiero destacar el consenso y el aporte promovido por los gobernadores de las provincias y el Poder Ejecutivo nacional.

Como integrante de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles tuve la posibilidad de volver a escuchar a los gobernadores de las provincias más implicadas manifestando su conformidad y pude corroborar que ésta es la mejor opción, respetuosa del federalismo argentino y de nuestra Constitución Nacional.

Por último, señor presidente, además de adelantar mi voto positivo por este proyecto, quiero remarcar que estamos en presencia de otro hecho histórico en la reconstrucción de nuestra matriz energética y que espero ver en unos años los frutos de todo esto en mi querida provincia.

## 5

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
GARCÍA LARRABURU

**Régimen de Promoción de Inversión para la  
Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y  
Anexo)**

Señor presidente:

Estamos aquí para dar un nuevo y contundente paso hacia nuestro autoabastecimiento energético. La nueva Ley de Hidrocarburos tiene dos claros propósitos: modificar la normativa de la década neoliberal de los 90 y fomentar la inversión y la competitividad.

Quienes legislamos tenemos en claro que no existen leyes ideales, que hay idas, venidas, implicancias y demandas de diversos sectores y siempre se termina

buscando y avanzando hacia lo que mayor consenso genera. Esta modificación atravesó todo eso y se ha llegado a la normativa mayormente consensuada.

Déjeme hacer algunas preguntas abiertas: ¿durante cuánto tiempo nuestro país ha padecido la usura del gas y del petróleo, la desinversión y el vaciamiento energético? ¿Cuántas problemáticas han caído en las espaldas de la economía de nuestros ciudadanos por no tener autoabastecimiento?

Hoy queremos saldar nuevamente una deuda del pasado con el presente. No se trata de yacimientos que ya conocemos, que en algunos casos se han vaciado y en otros es poco tiempo el que queda. No crean que estoy siendo pesimista, porque apunta al lado opuesto. Son apenas algunos metros por debajo de nosotros los que hemos explorado.

En las profundidades de nuestro suelo hay otras energías, conocidas y desconocidas. En nuestro sector marítimo tenemos petróleo y hace más de 30 años que lo sabemos, sin embargo, por la complejidad y por la legislación que rige, hasta ahora no se ha invertido. A estas llaves nos referimos cuando queremos abrir la puerta de la inversión y avanzar hacia la competitividad mundial.

Soy una convencida de nuestras capacidades. En la Patagonia, de donde provengo, existe una infinidad de recursos, que no sólo podemos, sino que tenemos la obligación de aprovechar. Somos el tercer país en el mundo en superficie marítima. Podemos explorar en energía, en pesca, en acuicultura, en industria naval... ¿Por qué quedarnos en el pasado y no avanzar?

Cada vez que avanzamos vimos los logros, las conquistas. La nueva propuesta de Ley de Hidrocarburos presenta una oportunidad única que permite consolidar los pasos realizados con la estatización de YPF para lograr el autoabastecimiento petrolero. La iniciativa toma en cuenta, además, tanto las necesidades de las provincias de recaudar impuestos como la impostergable materia pendiente de nuestro país, que consiste en pensar una Argentina desde una clave de integralidad. El dinero del “oro negro” se destinará, en este sentido, a obras de infraestructura en las provincias productoras, que será aportado por el Estado nacional. De ese modo aseguraremos de que el dinero sea reinvertido para satisfacer las necesidades de la población.

Es clave entender en estos procesos el rol de los trabajadores. Cada hallazgo, como lo hemos visto en Río Negro, en Mendoza, en Chubut, en Neuquén, por dar algunos ejemplos, genera inversiones fuertes para la región y eso brinda más puestos de trabajo y posibilidades de ampliar las exploraciones. Esto constituye un orgullo para el país. Invierten acá porque creen en lo nuestro y somos nosotros los que debemos estar más convencidos que ninguno de nuestras enormes capacidades e infinitos recursos.

Mis pares ya han hablado de la parte técnica de la normativa. Es dable destacar que la propuesta unifica criterios que se daban en la práctica y que no estaban

legislados. Hoy se incentiva tanto a sectores públicos como a privados. Con estas modificaciones se nos permite vislumbrar un horizonte productivo e hidrocarbífero exitoso.

Como propuesta, sumo a esta discusión la necesidad de crear una nueva ley ambiental uniforme, que tenga como objeto prioritario aplicar en este rubro mejores prácticas de gestión de las tareas de explotación y de transporte de hidrocarburos para poder desarrollar la actividad con el necesario y adecuado cuidado ambiental. Así se podrá continuar construyendo un país federal que recorra el camino del desarrollo productivo, con alto valor agregado y que tenga en cuenta las necesidades del pueblo argentino en su totalidad.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
KUNATH

**Régimen de Promoción de Inversión para la  
Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y  
Anexo)**

Señor presidente:

En mi intervención del 26 de marzo de este año, durante el tratamiento del proyecto de ley por el que se aprobó el acuerdo de pago por la expropiación de YPF, dije, en este mismo recinto, que éste era un hecho trascendental y que estábamos transitando un momento que, sin duda, es de una relevancia absolutamente enorme para nuestra soberanía y, obviamente, es un paso esencial para el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos.

Hoy, casi siete meses después, estamos allanando el camino para que no sólo nuestra empresa de bandera, sino todas aquellas que quieran venir a invertir a nuestro país, puedan hacerlo en un marco de certeza jurídica y bajo condiciones de competitividad, pero siempre bajo el control de un Estado presente; presente no sólo como auditor, sino presente como un actor más en la exploración y en la explotación de hidrocarburos.

Cuando por decisión política del Poder Ejecutivo nacional se recuperó el control de YPF, nos encontramos con una empresa que, luego de haber estado bajo conducción de capitales extranjeros, no sólo no había hecho las inversiones necesarias sino que estaba desperdiciando e ignorando las oportunidades que tenía por delante.

¿Cuánto se ha dicho desde ese entonces? ¿Cuántos eruditos en economía siguen sosteniendo que el Estado debe mantenerse al margen, sin intervenir en el libre juego del mercado? Tengo la certeza de que la mejor respuesta es la realidad: desde la expropiación de YPF no hemos visto más que logros; se abrió un panorama hasta entonces ignorado por la mayoría de los argentinos y argentinas.

Hubo que poner en marcha una empresa dirigida por y para los argentinos para demostrar hacia adentro de

nuestras fronteras, y hacia afuera también, que tenemos un potencial de crecimiento enorme y que debemos aprovecharlo. Hoy existe una realidad diferente en la materia; las nuevas técnicas no convencionales y los descubrimientos de importantes yacimientos implican un fuerte desafío y una inmejorable oportunidad.

Prueba de ello es el yacimiento Vaca Muerta, que nos ha posicionado en el cuarto puesto mundial en reservas de petróleo no convencional y el segundo en gas no convencional según el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Tengamos presente que éste es sólo el comienzo, tal como lo expresó el enterriano Galuccio ante el plenario de las comisiones del Senado: “El desafío que tenemos por delante es muy grande y es posible porque hemos sido capaces de demostrar que podemos producir petróleo”.

Este proyecto de ley que estamos sancionando es un nuevo capítulo hacia la soberanía y el autoabastecimiento. Forma parte de las grandes decisiones de nuestra presidenta para recuperar la soberanía energética del país, promoviendo la producción nacional, mayor inversión e independencia económica.

Actualmente YPF está liderando el camino hacia un mejor futuro energético para la Argentina. Por ello es necesario lograr más inversión para aumentar la producción y para crear empleo. Según el CEO de YPF: “Hemos pasado de producir 42 pozos a 260 pozos en el área y hemos generado resultados de producción. Producimos 32 mil barriles de petróleo por día en Loma Campana, como segundo yacimiento de producción de petróleo y primer yacimiento de no convencional en términos de producción fuera de Estados Unidos. Este hecho nos muestra que el camino que nos hemos trazado es posible”.

Es cierto que el desarrollo de un país está condicionado por la existencia de sus recursos naturales. Pero esto no resulta suficiente; a los recursos existentes hay que acompañarlos con políticas empresariales justas y equitativas que profundicen la exploración y la inversión, y, por sobre todas las cosas, con políticas públicas que permitan impulsar un modelo de producción y trabajo.

Cabe destacar que esta iniciativa es el fruto de un arduo proceso de debates y de construcción de consensos en el que participaron los gobernadores de todas las provincias petroleras: Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Formosa, La Pampa, Jujuy y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Así, el proyecto de ley que hoy nos convoca es el resultado de meses de negociaciones entre todos los actores involucrados en la materia, donde se ha logrado, tal vez, no un texto perfecto, pero sí dentro de las mejores opciones; uno posible, que entendemos es el más propicio para incrementar nuestra capacidad de producción y llevarnos a lograr la tan mentada soberanía hidrocarbúfera.

Con esta ley estamos adecuando la legislación vigente a las nuevas tecnologías de exploración y de explota-

ción. Estimulando los plazos de exploración podremos tener un conocimiento concreto de los recursos con los que contamos, ampliando así las posibilidades de crecimiento e inversión, en idéntico sentido a lo expresado por la secretaria de Energía, Mariana Matranga.

Tuvimos durante nuestra historia un gran crecimiento en lo que a explotación convencional de hidrocarburos concierne. Desde el descubrimiento de los primeros pozos petroleros en Comodoro Rivadavia supimos que las posibilidades de expansión eran significativas. Hoy, desde que recuperamos la posibilidad de explotar nuestros propios recursos naturales, vemos que es necesario adecuar el marco legal a nuestra realidad actual.

Quiero recordar las palabras del ex presidente Néstor Kirchner cuando, allá por 2007, dijo: “Nosotros queremos que vengan todas las empresas del mundo, que vengan todos los hombres del mundo a trabajar en nuestra tierra, pero que vengan a explorar, a invertir, a desarrollar nuestra riqueza productiva para que nuestros países puedan crecer. Éste es el concepto y la filosofía que tenemos”.

Es por ello que, sin ninguna duda, vuelvo a votar favorablemente un nuevo proyecto que me llena de satisfacción y que me convence de que estamos en el camino correcto. Estamos tomando decisiones trascendentales que están cambiando la historia de nuestra Nación y que nos permitirán posicionarnos nuevamente como el país emprendedor que nunca debimos haber dejado de ser.

7

#### SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO

#### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Inicialmente, y tal como es mi costumbre, anticipo mi voto favorable al proyecto en tratamiento, conforme los motivos que a continuación expongo.

Es imposible que se escape a cualquiera de los que nos encontramos trabajando en este asunto que el objetivo que perseguimos y compartimos es el autosostenimiento energético de la República Argentina, a los fines de fortalecer la independencia energética y de promover la industria, para lograr mayores índices de productividad y de trabajo para nuestro pueblo.

En esa sintonía, este gobierno ha transitado un camino difícil, que requirió mucho valor y coraje de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de todos aquellos protagonistas que apoyamos esta dirección con convicción.

Con la ley 26.741, de mayo de 2012, declaramos de interés público nacional y como objetivo prioritario para la República Argentina el autoabastecimiento de

hidrocarburos, así como la exploración, la exportación, la industrialización, el transporte y la comercialización de hidrocarburos, y sellamos el camino por seguir.

El desarrollo económico nacional con equidad social sólo lo vamos a obtener por medio de una política hidrocarburífera sostenida en el tiempo y que logre una producción suficiente para el consumo interno y, posteriormente, para la exportación.

Este lineamiento permitirá la creación de empleos calificados, el incremento de la productividad de los sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones del país.

El modelo económico de fuerte producción, industrialización y consumo interno se basa en el autosostenimiento hidrocarburífero. Recordemos que el 87 por ciento de la matriz energética del país se centra en el petróleo y el gas. Este proyecto de ley se inscribe en esas líneas de sustentabilidad.

Con el descubrimiento en la República Argentina de importantes yacimientos de hidrocarburos de *shale oil* y *shale gas* —el cuarto a nivel mundial en petróleo y el segundo a nivel mundial, por su magnitud, en gas— se puede aspirar a los objetivos planteados en política energética.

En esos yacimientos se utilizarán tecnologías innovadoras que atraerán inversiones. Para que ello ocurra, debemos sancionar esta ley, que brindará previsibilidad y un marco normativo acorde a la entidad de los proyectos.

Al aprobar esta ley podremos fomentar la inversión destinada a hidrocarburos, podremos incrementar la producción en el país y, consecuentemente, lograr reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y de gas, revirtiendo el déficit energético y ajustando de esta forma las cuentas del sector externo.

Si somos capaces de desarrollar una política de incremento de los *stocks* de crudo, nos permitirá como Nación obtener mayor soberanía económica, ya que nos va a permitir cubrirnos del impacto de las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, asegurando la provisión de petróleo y de gas a precios adecuados.

Éste es un proyecto integral, que apunta a generar un marco legal homogéneo a nivel nacional. En ese sentido se establecen las reglas de exploración y de explotación de los yacimientos no convencionales, así como también de los convencionales, y los emprendimientos *off shore* desarrollados en la plataforma marítima.

Al mismo tiempo, la incorporación del marco normativo acorde a la exploración y la explotación de los yacimientos no convencionales es fundamental en estos lineamientos antedichos; en esa línea se incorpora el artículo 27 bis, donde se define la explotación no convencional de hidrocarburos.

Atendiendo a las diferenciaciones antedichas, se incorporan en el presente proyecto de ley plazos diferenciados, según el tipo de explotación de que se trate. Por un lado, mantiene en los plazos de concesiones, lo



establecido en la ley 17.319 respecto de las explotaciones convencionales, e introduce un plazo de 35 años para las explotaciones no convencionales y de 30 años para las explotaciones *off shore*. Esta segmentación permite a los inversores recuperar su inversión y, a la vez, estimular la inversión en explotaciones no convencionales y *off shore*, donde es necesario tener mayores niveles de inversión y de tecnología.

Por otra parte, es importante evitar la dispersión en materia fiscal. Éste es otro de los elementos basales para brindar previsibilidad a las inversiones y así poder atraerlas.

En el mismo sentido, el Estado nacional y las provincias establecerán una legislación ambiental uniforme, siempre dentro del marco del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Estas políticas van en consonancia con el decreto 929/13, que establece el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. Los proyectos que ingresen en ese régimen obligarán a las empresas a aportar a las provincias productoras, en concepto de responsabilidad social empresarial –RSE–, el 2,5 por ciento del monto inicial de la inversión.

El presente proyecto de ley introduce también una modificación significativa, con referencia al decreto citado precedentemente. Se reduce de 1.000 millones de dólares a 250 millones de dólares el monto mínimo de inversión necesario para acceder al régimen mencionado, generando condiciones para atraer inversiones, que deberán ser realizadas durante los primeros tres años para poder acceder a los beneficios que dicho decreto establece en materia de exenciones impositivas. Esta medida busca que las inversiones que se realicen se ejecuten en un tiempo apropiado para acercarnos al objetivo de autoabastecimiento hidrocarburífero de la Nación.

Hablar de petróleo argentino no es hablar solamente de un recurso natural, sino del debate sobre los recursos energéticos del país, que nos permitirá seguir en esta senda de industrialización, de creación de trabajo y de crecimiento del mercado interno que empezamos a recorrer en 2003. El autoabastecimiento nos otorgará soberanía económica. Para concretar esos fines, como decía Mosconi, el petróleo es “la fuente del progreso moral y material de la Nación”.

8

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
LEGUIZAMÓN

### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Los senadores preopinantes de mi bloque han explicado y fundamentado con precisión la importancia

del proyecto de ley que estamos tratando. Posición que acompaño y que, obviamente, comparto.

Pero me quiero referir en particular a un artículo de esta ley que se refiere a la responsabilidad social empresarial. El artículo 21 de la Ley de Exploración y Explotación de Hidrocarburos especifica que para los proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos que sean aprobados por el organismo correspondiente –Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas–, las empresas deberán aportar el 2,5 por ciento del monto de los proyectos dirigido a responsabilidad social empresarial.

El tema de la responsabilidad social empresarial ha ocupado un lugar importante en mi vida parlamentaria, ya que vengo ocupándome de él hace diez años y sobre el cual he presentado numerosos proyectos de ley; por ejemplo: la ley sobre responsabilidad social empresarial –S.-3735/05–; la ley de reportes de sostenibilidad –S.-765/12– y la ley de balance social para empresas del Estado –S.-922/12–, entre otros.

La responsabilidad social empresarial es un concepto que implica que las empresas –agentes importantísimos de la sociedad moderna– integren preocupaciones de índole social y ambiental en sus operaciones y en sus interacciones con los empleados, con los accionistas, con los inversores, con los proveedores, con los clientes y con las comunidades en las que se encuentran inmersas.

Así, los procesos de globalización, la creciente importancia del capital de reputación y las demandas de estabilidad y sostenibilidad del ambiente apuntan a la necesidad de desarrollar una cultura de la responsabilidad social empresarial como parte de la identidad nacional.

Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los últimos años, sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales y el compromiso de los individuos con la preservación del ambiente y la gestión de recursos no renovables de manera de dejar a las próximas generaciones un mundo, al menos, en las mismas condiciones en las que lo habitamos hoy.

Por estas razones es que son de fundamental importancia los aportes que las empresas realicen en la consecución de acciones de responsabilidad social empresarial. Estos aportes permitirán la realización de planes y programas de responsabilidad social empresarial donde se mejore la gestión de los recursos no renovables, punto fundamental para una empresa extractiva, y que además permitan que la comunidad se beneficie mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

No quiero dejar de observar que es importante considerar que estas inversiones de las empresas en responsabilidad social empresarial serán nuevas y que de ninguna manera podrá usarse estos fondos en la continuación de las acciones que las empresas ya vienen realizando, dado el compromiso preexistente con la responsabilidad social empresarial, ya que todas

las empresas petroleras tienen extensos programas de responsabilidad social empresarial en marcha. Por lo tanto, es importante definir que la inversión en acciones de responsabilidad social empresarial deba ser utilizada en temas específicos, como por ejemplo, en el desarrollo y beneficios en la sociedad.

Tal como lo he expresado en mis varios proyectos de ley acerca de la responsabilidad social empresarial, mientras que en otras sociedades y en la experiencia de otros lugares del mundo es un concepto esencial al momento de hacer negocios, en la Argentina tenemos un largo camino que recorrer para hacer de esto la regla y no la excepción. Ese artículo del proyecto de ley tiene como objetivo continuar andando por este camino de hacer de la responsabilidad social empresarial una forma de hacer negocios.

9

#### SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MANSILLA

#### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Me permito introducir breves palabras en apoyo y para promover la votación positiva de la Ley de Hidrocarburos que ingresa en este honorable recinto el Poder Ejecutivo nacional.

Es conveniente resaltar que viene con la firma y convencido apoyo de los señores gobernadores de las provincias donde yacen estos valiosos recursos. La firma prueba el interés y el beneficio que obtienen las provincias productoras al asignárseles participación en los beneficios que obtienen las empresas que exploten y participen en ella.

Esta ley facilita el ingreso de inversiones, siendo a la par una eficaz herramienta para que esas inversiones queden en beneficios concretos y plenos, tanto en las provincias productoras como en el país. Coloca como principal beneficiario al dueño del recurso y tiene como causa final que esas riquezas se distribuyan en el Estado y en el pueblo, en particular, en beneficios para los argentinos, atendiendo el bien común.

En ocasión del festejo del Día de la Independencia en mi provincia, Tucumán, en el año 1947 el presidente Juan Domingo Perón proclamó la independencia económica de la República Argentina para asegurar la independencia política declarada hace ya casi doscientos años. No es distinta la actividad y el empeño que llevamos todos los miembros del partido gobernante. Es ejemplo de este propósito la valiente firmeza con que nuestra presidenta fija postura ante el mundo.

No debemos preocuparnos por los escondrijos desde donde asaltan los promotores de las medias verdades y las francas mentiras; sí debemos encuadrar, controlar, frenar a sus patrocinadores reales. La industria,

la empresa, la vida económica en general necesita de efectivo e inteligente control, cuanto más si lo que se explota son los recursos genuinos del suelo patrio, que son objeto de la ley en trato.

Utilizando una eficaz y conocida metáfora, voy a parafrasearla: votar esta ley importa ubicarnos en los hombros del presidente Perón, para ver más allá, en la misma dirección de independencia que sus ideas fueron declaradas, sin mudarlas.

En este recinto el senador Fuentes ya exigió que cada uno de los legisladores “tengan la sinceridad de expresar qué intereses defienden”. Vinculando la oposición a la ley a intereses similares, cuando no los mismos, que los que defienden los fondos buitres. Extraña virtud, de dudosa y promovida elegancia, es ponerse del lado del rival, en vez de hacerlo, no ya del lado del partido gobernante, sino del de la patria misma. Ésa es la foto en la que prefieren retratarse quienes dicen “no”, quienes inventan excusas. Promotores convencidos o idiotas útiles, poco importa, sí importa el lugar desde el que eligen intentar perjudicar a la patria por lo que –algunos– creen que les dará un rédito electoral en el próximo llamado.

La obligación es defender la conducción económica nacional y proteger el patrimonio argentino. Nuestra causa final es la realización del pueblo, consiguiendo el bien común, garantizando la riqueza patria y su redistribución.

10

#### SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROZAS

#### **Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y Anexo)**

Señor presidente:

Vengo a fundamentar mi rechazo al proyecto de ley en examen, por el que se impulsa un nuevo marco regulatorio para la exploración y explotación de hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, cubriendo tanto las áreas continentales como las correspondientes a las ubicadas sobre la plataforma continental marítima –*off shore*–.

En ese orden, sobre la base del acuerdo suscripto por los gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos –OFEPHI– y el Estado nacional, el Poder Ejecutivo propicia la modificación de la ley 17.319, sancionada como decreto ley durante el gobierno del general Onganía, y establece un marco normativo para la ley 26.197 –también conocida como Ley Corta–, que permite a las provincias la administración de los recursos hidrocarburíferos, conforme la cesión de dominio dispuesta por el artículo 124 de la Constitución Nacional.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se estructura como una ratificación del acuerdo entre las

provincias que conforman la –OFEPHI– y el Estado nacional. En este sentido el anexo 2 de este proyecto de ley es el texto original firmado por los gobernadores y el Estado nacional y que se reproduce y se envía a los efectos de su tratamiento por el Congreso Nacional.

El objetivo general del proyecto conforme al mensaje del Poder Ejecutivo es lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, conforme a la declaración de interés público consagrado por la ley 26.741, propiciando modificaciones a la ley 17.319 en lo que hace a los permisos de exploración y concesiones de explotación, mediante la extensión de plazos y prórrogas para todos aquellos que tengan en curso de ejecución los tipos de contratos antes mencionados, principalmente YPF y otros permisionarios como Petrobras; Pan American Energy, etcétera.

Con respecto al desarrollo de los recursos no convencionales, permite a los permisionarios actuales que tengan en exploración o explotación áreas y yacimientos convencionales la unificación y la acumulación de plazos de éstos con los nuevos recursos, como *shale gas* y *shale oil*, estableciendo para todo el territorio nacional la figura de un modelo único de pliego licitatorio para las nuevas áreas de exploración y explotación.

Se establece también, en cuanto a las áreas *off shore* actualmente en manos de ENARSA, que retornen a la Secretaría de Energía para su desarrollo, a excepción de aquellas que tengan contratos de asociación, exploración y explotación en curso.

En cuanto a la renta petrolera, se fijan pautas encuadradas por un régimen único de percepción de regalías por parte de las provincias productoras, que varían conforme a la productividad de los yacimientos en un rango que va del 12 por ciento al 18 por ciento sobre el valor boca de pozo. Se fija asimismo el valor del canon de exploración y se establece un régimen de bonos para la prórroga de los contratos.

El proyecto oficial define asimismo un régimen de incentivo para las inversiones superiores a los 250 millones de dólares, que extiende los beneficios dispuestos por el decreto 929/13, que cubría inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares y otorgaba entre otras ventajas retenciones preferenciales sobre la exportación de crudo; y es la base jurídica en la cual se inscribe el contrato YPF – Chevron.

Finalmente el proyecto del Poder Ejecutivo señala que establecerá para todo el territorio nacional una legislación ambiental uniforme conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional y que se fijará un régimen tributario uniforme, lo cual en ambos casos implica la aprobación por parte de las legislaturas provinciales.

Corresponde evaluar las implicancias y significados del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, admitiendo que la crisis energética que vive nuestro país, la pérdida del autoabastecimiento de hidrocarburos junto al surgimiento de una nueva YPF, como la presencia de importantes yacimientos de recursos no conven-

cionales demandan, efectivamente, una nueva Ley de Hidrocarburos.

En tal sentido cabe advertir que el camino elegido por el Poder Ejecutivo suplanta un marco imprescindible de grandes consensos elaborados en el Congreso de la Nación por la simple aprobación de un acuerdo suscrito entre el Estado nacional y un conjunto reducido de provincias productoras de hidrocarburos.

No se puede soslayar el hecho que muchas provincias –como el Chaco–, con recursos potencialmente explorables y explotables, no han participado ni han sido tenidas en cuenta en la elaboración del marco regulatorio que encuadra el desarrollo de esta actividad.

Existe coincidencia, asimismo, en que este proyecto revierte la esencia de la Ley Corta –26.197– que, siguiendo lo dispuesto por el artículo 124, otorgaba en plenitud la administración de la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos a las provincias.

Este proyecto, por el contrario, convierte en un área única a todo el territorio nacional: la prórroga de contratos, pliegos, régimen de distribución de la renta petrolera, incentivos a la inversión, régimen impositivo y ambiental.

Podemos coincidir en la necesidad de establecer un andamiaje institucional y legal que sea consistente con el objetivo: producir más petróleo, reducir las importaciones, aumentar las inversiones, conseguir los recursos financieros necesarios. Pero en esta ley, a diferencia de lo realizado por Brasil, donde Petrobras cedió funciones a un gran ente regulador en manos del Estado, aquí se concentra y se delega toda la dirección de la actividad en YPF.

Se debe tener en cuenta que YPF es una sociedad mixta que no está controlada por el Estado y que, en términos de garantía para avanzar en un verdadero proyecto de desarrollo, se abre una importante incógnita sobre quiénes podrán hacerse del control de YPF en el futuro.

Otro aspecto clave del proyecto es que otorga a los actuales tenedores de los yacimientos –por exploración o por explotación– su tenencia a perpetuidad, lo cual equivale a su propiedad hasta el agotamiento de los recursos existentes.

Entre los aspectos críticos que señalan los especialistas se señala el mecanismo de prórroga indefinida en los contratos vigentes que introduce el proyecto, como la extensión de los plazos que deriva y facilita a los actuales tenedores la unificación de las áreas de recursos convencionales con el otorgamiento de nuevos plazos por los yacimientos de no convencionales, ubicados en esas mismas áreas, por debajo o por adyacencia.

Nos preguntamos: ¿quiénes se benefician con este marco regulatorio? En primer lugar, YPF, que prorroga la titularidad de sus contratos, tanto en la parte continental, como en las áreas *off shore*. De hecho, al prohibirse nuevas reservas de áreas a favor de las empresas provinciales, YPF queda como única empresa

que podrá hacer el acarreo con las grandes petroleras interesadas en la exploración y explotación de los nuevos recursos de hidrocarburos convencionales y no convencionales, tanto continentales como *off shore*.

En la práctica, YPF se hace de un capital que la convierte en la socia imprescindible de todos los futuros desarrollos en la materia. No parece realista ni deseable admitir que una empresa que vale 10.000 millones de dólares puede ser la base para desarrollar recursos no convencionales que exigirán, al menos, 200.000 millones de dólares. En todo caso, debiéramos preguntarnos cuál será el costo de esas inversiones, sobre todo si tenemos en cuenta que los términos del contrato de YPF con Chevron se desconocen.

Desde luego que lo expuesto entraña riesgos importantes hacia el futuro –en el caso de YPF, por su estructura societaria sin control público y sin un ente nacional de conducción estratégica en materia de hidrocarburos–, mucho más graves cuando los beneficiados por esta cuasi entrega a perpetuidad de los yacimientos son las actuales compañías privadas dueñas de las concesiones y de los permisos.

En este sentido el proyecto de ley tiene un claro sesgo conservador porque mantiene un *statu quo* decadente, ya que se les está dando la propiedad a las mismas empresas que nos han llevado a la crisis actual. No han descubierto nuevo petróleo en reemplazo del que han sacado. No innovan ni arriesgan y nos han llevado a la caída actual de la producción.

También resulta muy preocupante que el proyecto oficial invada las jurisdicciones provinciales, prorrogue derechos, no discuta la renta petrolera ni construya la nueva política energética que necesita nuestro país.

En síntesis, del análisis del proyecto surge un interrogante y una hipótesis probable: ¿estamos en realidad frente a un proyecto que representa los intereses de la corporación petrolera? ¿Es ésta una gran corporación de negocios encabezada por YPF, cuya cabeza visible proviene de una de las grandes empresas de servicios petroleros? Sin duda el ocultamiento del contrato con Chevron aumenta las sospechas.

Lo que sí parece claro es que el oficialismo ha lanzado un enorme proyecto de negocios, que incluye el desarrollo de una estructura legal que se cristalizará en una amplia serie de derechos adquiridos que no podrá revertirse. En este marco puede pensarse que este proyecto de ley es, seguramente, una iniciativa oficial tendiente a financiar en todos los aspectos su trayecto pendiente hasta el 2015.

En definitiva, creemos que este proyecto de ley no debe ser aprobado por su esencia conservadora, porque servirá a los concesionarios para mantenerse en los yacimientos hasta agotarlos y beneficiará a las empresas que ya explotan yacimientos, en detrimento de los derechos que la Constitución les reconoce a las provincias.

De tal manera, el poder concedente original de las provincias queda diluido por la prórroga ilimitada de los contratos, que consolida este proyecto de ley.

Nuestra posición en materia de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos líquidos y gaseosos parte de reconocer la libre competencia y la iniciativa empresarial en actividades consideradas de interés público nacional, por lo que ratificamos el dominio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de las provincias, según la ubicación en que se encuentren.

También proponemos que el acervo técnico constituido por los datos e informaciones sobre todas las cuencas sedimentarias argentinas sea compilado por una agencia estatal –la Agencia Federal de Hidrocarburos– y que el Poder Ejecutivo nacional fije la política nacional en la materia.

Los permisionarios o concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan, con las restricciones que se establezcan para preservar el interés nacional, propender a la eficiente utilización de los recursos, la explotación racional de los yacimientos y la preservación de las condiciones naturales del ambiente.

Además, creemos en la necesidad de establecer un Plan Estratégico Nacional de Hidrocarburos con metas anuales y plurianuales cuantificables, del cual se deberá dar cuenta al Honorable Congreso de la Nación. La ley establecerá la metodología de cálculo de las reservas y las auditorías de reservas serán realizadas por certificador externos debidamente registrados en la Agencia Federal de Hidrocarburos.

Los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán suscribir convenios de asistencia técnica con la Agencia Federal de Hidrocarburos para la realización de las actividades de fiscalización dentro de sus respectivos territorios.

Ninguna persona jurídica podrá ser simultáneamente titular de un número mayor a la cantidad de permisos de exploración determinado por la Agencia Federal de Hidrocarburos en base a criterios de concurrencia, transparencia y competencia para el funcionamiento de la industria, ya sea en forma directa o indirecta. La cantidad máxima admisible de concesiones de explotación será determinada por la Agencia Federal de Hidrocarburos previo dictamen obligatorio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

Los titulares de permisos alcanzados por esa limitación deberán adecuarse a la norma en el plazo que fije la autoridad de aplicación, que será como máximo de tres años.

A todo titular de un permiso de exploración corresponderá el derecho de obtener concesiones exclusivas de explotación de los hidrocarburos que descubre dentro del perímetro delimitado por el permiso. Para otorgar permisos de exploración, la autoridad concedente deberá implementar licitaciones públicas.

La Secretaría de Energía deberá promover las actuaciones correspondientes ante la Comisión Nacional



de Defensa de la Competencia, o el tribunal que la reemplace, si existieren sospechas.

Si la inversión realizada en cualquiera de dichos períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, la diferencia resultante. La renuncia del permisionario al derecho de exploración le generará la obligación de abonar a la autoridad que ha otorgado el permiso la totalidad del monto de las inversiones comprometidas y no realizadas.

Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la Autoridad Concedente podrá admitir que hasta el 50 por ciento del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación sea destinado a la explotación.

No se autorizará la prórroga si el permisionario no hubiera cumplido en tiempo y forma con al menos el 75 por ciento de las inversiones comprometidas en el correspondiente contrato.

Al fenecer cada uno de los períodos del plazo básico de un permiso de exploración, el permisionario reducirá su área, como mínimo, al 50 por ciento de la superficie remanente del permiso al concluir el respectivo período.

El poder concedente otorgará a una empresa privada especializada el derecho de explotar un área delimitada por un lapso determinado. El concesionario abonará las regalías y demás participaciones gubernamentales y cargas fiscales establecidas.

A todo titular de una concesión de explotación corresponderá el derecho a obtener una concesión para el transporte de hidrocarburos.

Todo concesionario de explotación estará obligado a efectuar, dentro de plazos previamente comprometidos, las inversiones que establezca el correspondiente contrato.

Las concesiones de explotación tendrán una vigencia de, como máximo, 25 años. La autoridad concedente podrá prorrogarlas hasta por 10 años. La solicitud de prórroga deberá presentarse ante la autoridad concedente con una antelación de 1 año del vencimiento de la concesión.

No se autorizará la prórroga si el concesionario no hubiera cumplido en tiempo y forma con al menos el 75 por ciento de las inversiones comprometidas en el correspondiente contrato.

La autoridad concedente podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación el pago de un bono de prórroga cuyo monto mínimo sea equivalente al 2 por ciento de las reservas comprobadas remanentes.

Durante la vigencia de los permisos y concesiones, las autoridades concedentes no podrán gravar a sus titulares con nuevos tributos ni aumentar los existentes.

También se dispone en nuestro proyecto de ley que el concesionario de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon, cuyo valor será actualizado por la Agencia Federal de Hidrocarburos en forma anual, en función de la variación registrada por el valor del petróleo crudo tipo Brent durante dicho período.

Los concesionarios, además, pagarán mensualmente al Estado nacional o provincial, según corresponda, un porcentaje de al menos el 12 por ciento en concepto de regalía sobre el producido de los hidrocarburos líquidos o gaseosos extraídos en boca de pozo. Como excepción, la autoridad concedente podrá reducir ese porcentaje hasta el 5 por ciento, teniendo en cuenta la productividad, las condiciones y la ubicación de los pozos. El pago en efectivo de la regalía se efectuará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo.

En cuanto al régimen contractual de exploración y explotación de petróleo de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos, en el cual el contratador ejercerá por su cuenta y riesgo las actividades de exploración, valuación, desarrollo y producción, se determina que, en caso de que el descubrimiento de hidrocarburos sea comercialmente explotable, adquirirá el derecho a la apropiación del costo en hidrocarburos, del volumen de producción correspondiente a las regalías debidas y de la parte correspondiente del excedente en hidrocarburos, en la proporción, condiciones y plazos establecidos en el contrato.

La exploración y la producción de petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos en las áreas marítimas y en áreas estratégicas serán contratadas por la autoridad contratante bajo el régimen de participación.

En tales casos, YPF S.A. será operador de todos los bloques pertenecientes a las áreas marítimas, o a las áreas declaradas estratégicas por ley del Congreso de la Nación, que fueren contratados bajo el régimen de participación en la producción con una participación mínima en el consorcio del 30 por ciento.

También nuestro proyecto de ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad hidrocarburífera con sujeción a los contenidos de la ley 25.675, ley general del ambiente, y a sus principios de política ambiental para reservorios o yacimientos convencionales y no convencionales.

Serán autoridades de aplicación las que designe la provincia cuando el impacto ambiental no exceda los límites de su jurisdicción y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para actividad de más de una provincia, carácter binacional, áreas protegidas declaradas por ley nacional y áreas del mar territorial.

Se determina la obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental para los proyectos de exploración y explotación en yacimientos o reservorios no convencionales con contenidos y requisitos adicionales.

Se establece que la declaración de impacto ambiental será actualizada como mínimo en forma bianual. Se fijan normas en cuanto al agua de retorno que deberá ser

sometida en su totalidad a un tratamiento que garantice su encuadre en lo relativo al vertido.

Se establece que la autoridad de aplicación deberá realizar al menos una auditoría ambiental sobre cada reservorio o yacimiento no convencional en actividad de exploración o explotación.

Se determina que, en caso de verificarse daño ambiental presente o futuro vinculado con los resultados de los estudios, los consultores que los hayan suscripto sean solidariamente responsables con los titulares de la actividad desarrollada.

Crea el Régimen de Promoción de Inversiones en la Actividad Hidrocarburífera por el plazo transitorio de 10 años a partir de su entrada en vigencia.

Habilita a su adhesión a las empresas que acrediten bajo declaración jurada ante la Agencia Federal de Hidrocarburos un proyecto de inversión para la explotación y explotación de hidrocarburos que implique la realización de una inversión directa durante los primeros 5 años del proyecto.

Por un título especial de nuestro proyecto se crea el Fondo Nacional de Hidrocarburos –FONADHI–, con recursos procedentes de la actividad hidrocarburífera, cuya finalidad será:

- a) Custodiar los intereses de generaciones futuras.
- b) Preservar las condiciones de equilibrio macroeconómico actuando como fondo anticíclico.
- c) Reducir las desigualdades en el desarrollo territorial del país.
- d) Concurrir a la diversificación de la matriz energética a través de la financiación de emprendimientos energéticos renovables para la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.

Los ingresos del Fondo Nacional de Hidrocarburos serán:

- a) Un impuesto específico al petróleo y gas natural de procedencia nacional o importada cuya alícuota se fija en 2 por ciento del precio del crudo en boca de pozo o en condición CIF y 2 por ciento del precio del gas natural en boca de pozo o en condición CIF.
- b) Un impuesto específico que deberá tributar el concesionario al momento de la prórroga de los contratos de concesión establecida en el artículo 61, cuyo monto mínimo será igual al valor resultante de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final de período de vigencia de la concesión por el 2 por ciento del precio promedio de cuenca aplicable a los hidrocarburos durante los 2 años anteriores al momento del otorgamiento de la prórroga.
- c) El 50 por ciento del canon y de las regalías a percibirse por parte del Estado nacional de la adjudicación de nuevas concesiones o prórroga de las concesiones bajo su dominio.
- d) Todo ingreso percibido por derecho de exportación de hidrocarburos.

e) Los dividendos pagados por YPF S.A. al Estado nacional.

f) Los intereses percibidos por la colocación financiera de los recursos del Fondo.

g) Los aportes del Tesoro Nacional que le sean transferidos por vía presupuestaria.

En definitiva, creemos en la necesidad de fijar un nuevo marco jurídico legal y convencional, de carácter general y permanente, que determine las bases para el desarrollo energético nacional, el aprovechamiento sustentable de los recursos no convencionales, la promoción de inversiones nacionales y extranjeras y la distribución actual y futura de la renta petrolera nacional, con participación de las provincias productoras y no productoras de hidrocarburos.

La sanción de un nuevo marco jurídico en esta materia debe ser producto de amplios consensos entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que reafirme el dominio federal de los hidrocarburos y que establezca las bases legislativas del futuro desarrollo energético nacional, asegure transparencia y previsibilidad a los mecanismos legales y convencionales de apropiación y distribución de la renta petrolera, el aprovechamiento sustentable de los recursos no convencionales, la determinación de los organismos interjurisdiccionales y autoridades de aplicación, el régimen impositivo y la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, explicitando objetivos de corto, mediano y largo plazo, con la participación de las provincias productoras y no productoras de hidrocarburos.

Sostenemos la necesidad de diseñar un sistema de compensaciones del Tesoro nacional para las provincias no productoras, con el objeto de zanjar las asimetrías en el desarrollo regional, resultantes de la distribución de los ingresos tributarios, el grado de participación en la explotación y la disponibilidad geológica de los hidrocarburos.

Resulta para ello indispensable la constitución de un fondo de uso intergeneracional para la distribución y administración de parte de la renta petrolera que pueda obtenerse a partir del desarrollo potencial de los recursos energéticos no convencionales, para cubrir las necesidades y demandas futuras en materia de jubilaciones y pensiones, educación y salud de las próximas generaciones o el financiamiento de las políticas públicas que se determinen.

La producción de energía, como cualquier otra actividad productiva, necesita de un marco institucional y de reglas estables que incentiven las inversiones, premien la eficiencia y proyecten la distribución de sus frutos al conjunto de la sociedad. Pero en esta materia principalmente nuestro país ha vivido fuertes vaivenes sin solución de continuidad, habiendo pasado del estatismo a las privatizaciones, del federalismo al unitarismo, de una política nacional a la mayor seducción del capital extranjero, sin establecer un marco estable para la actividad ni definir con claridad los roles del Estado y los inversores privados.

La dependencia energética de las importaciones ha limitado históricamente las posibilidades de expansión de nuestra economía y fue protagonista principal de las crisis recurrentes de la balanza de pagos.

Hoy, todos los análisis de nuestra actual crisis energética apuntan a la necesidad de implementar con urgencia una nueva política para el sector, que venga a sustituir el cortoplacismo, la intervención discrecional y el llamado “capitalismo de amigos”, por una política de desarrollo sustentable, de largo plazo, que nos devuelva el autoabastecimiento perdido, que incluya planes petroleros surgidos de un marco regulatorio claro y estable, que exprese amplios consensos para reconciliar los derechos de las provincias sobre el subsuelo con los lineamientos de una nueva legislación nacional y que brinde previsibilidad al régimen de apropiación y de distribución de la renta petrolera.

No puede desconocerse que la ausencia de un marco regulatorio claro y estable ha conspirado contra el desarrollo energético del país, dejando la política petrolera entrampada en el corto plazo y al sector sumido en un esquema institucional confuso y cambiante.

La Ley de Hidrocarburos de facto que nos rige desde 1967 –decreto ley 17.319– necesita una apremiante actualización, mucho más después de la reforma constitucional de 1994, que devolvió el dominio del subsuelo a las provincias y del descubrimiento de los recursos no convencionales cuya explotación requiere una legislación específica.

Por ello el primer paso para implementar sin demoras una nueva política energética nacional debe ser la sanción de una nueva ley de petróleo que reemplace aquel decreto ley de 1967.

Una ley que debe respetar la Constitución en el más amplio sentido, reconociendo los derechos adquiridos y los recursos hidrocarburíferos que pertenecen a las provincias, pero a la vez promoviendo de manera equitativa y solidaria un grado equivalente de desarrollo con la distribución de los ingresos fiscales que provee la renta petrolera nacional.

También la legislación debe establecer nuevas normas para la adjudicación de áreas con mecanismos transparentes y competitivos, definir el régimen tributario y la disponibilidad de la producción, adecuando la explotación de los recursos no convencionales con criterios que apunten a preservar el medioambiente.

Son muchos los capítulos que deben contemplarse, desde el recupero de las áreas donde no se cumplieron los compromisos de inversión, hasta un plan exploratorio para la plataforma continental, siguiendo por los lineamientos de la convocatoria internacional para asociarse a YPF en los yacimientos de esquistos –*shale oil* y *shale gas*– hasta planes exploratorios que necesitamos para desarrollar las cuencas de alto riesgo, de manera concertada entre la Nación y las provincias, porque muchas regiones del país no son petroleras debido a la falta de inversiones en exploración, no a la carencia de recursos del subsuelo.

Desde el radicalismo siempre hemos tenido una visión clara sobre la importancia de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, que alcanzamos a fines del gobierno de Raúl Alfonsín.

El autoabastecimiento es una meta que trasciende la cuestión económica. Tiene la dimensión de un objetivo político fundamental en el escenario global de nuestra civilización, porque es un resguardo de la seguridad energética que compromete el desarrollo industrial de un país y de una región. También hemos definido para los tiempos una estrategia de hacer de YPF una empresa integrada, con producción, transporte, almacenamiento y distribución, capaz de actuar como regulador del mercado.

Lamentablemente hemos perdido el autoabastecimiento energético y el Banco Central debe suministrar a diario millones de dólares para pagar crecientes importaciones de energía, como el gas natural desde Bolivia, cuatro veces más caro que nuestro gas, o el gas licuado y el gasoil por barco, siete y ocho veces más caro aún.

Los números del déficit energético son elocuentes. En la última década la producción de petróleo cayó 32,4 por ciento y la de gas 18,4 por ciento, mientras la demanda de gasoil creció 30 por ciento y la de naftas el 140 por ciento. En esta encrucijada de oferta decreciente y demanda en alza, el país tiene que importar cada vez más gasoil porque hace años que no se amplía la capacidad de refinar petróleo. Todo ello ha debilitado al extremo nuestra balanza comercial y tuvo como respuesta del gobierno el cepo cambiario, en el intento de resolver la falta de divisas que afecta a nuestra economía.

Hemos llegado a un punto de la crisis energética nacional en que debemos prepararnos para un cambio sustancial con respecto a lo hecho hasta ahora y para que –gane quien gane en las elecciones presidenciales del año próximo– el país pueda implementar una nueva política energética sobre bases confiables y previsible en el largo plazo, ya que resultará inevitable incrementar la generación de energía para sostener nuestro aparato productivo y el crecimiento de la economía.

Por cierto, este panorama plantea una necesaria adecuación en las normas que rigen el sector energético y una nueva política energética nacional.

La experiencia señala los cinco factores que siempre se deben tener en cuenta para encarar con éxito la explotación de recursos energéticos: el primero es la geología, una oportunidad que nos da la naturaleza; el segundo es la tecnología, que debe estar disponible y el tercero es el capital, tanto financiero como humano, esto es, el esfuerzo del trabajo y del conocimiento. Un cuarto elemento refiere a los precios de comercialización de la producción, que deben tener niveles aceptables de rentabilidad. Pero, por último, se necesita de la política, que debe asegurar las reglas por las cuales se tomará la decisión de invertir, las normas legales, impositivas y ambientales, que hacen confiable una

política energética en el largo plazo. Desde luego, la renta petrolera depende tanto de la productividad de los yacimientos como de las políticas públicas.

Por ello, la mayoría de los analistas, ex funcionarios y expertos coinciden en que es en este último factor –la política energética nacional– donde se registra la mayor asignatura pendiente del Estado nacional, y que luego de tomar el control de YPF con la ley 26.741, de 2012, denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera, representa uno de los mayores desafíos para nuestra tarea legislativa.

A más de dos años de la sanción de aquella ley nos encontramos con fuentes de incertidumbre por donde está surgiendo una colisión de intereses con los estados provinciales, en el marco de un régimen federal de los hidrocarburos y donde el Tesoro de la Nación concurre al pago del acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, sin que las provincias titulares de sus acciones hayan erogado suma alguna.

Otro tanto sucede con los contratos de recientes concesiones, como el de la empresa Chevron, que restan certidumbre a las reglas de una nueva política para la explotación de recursos no convencionales que el país debiera ofrecerle a nuevos inversores. Por ese polémico convenio, cuyas cláusulas se han mantenido aún en secreto, la empresa extranjera se asoció con YPF en el marco de un decreto y de un contrato que establecería condiciones especiales para una nueva concesión y que a su vez obliga a una nueva prórroga que no está prevista en la ley vigente, de una concesión ya prorrogada.

En momentos que se abre un nuevo horizonte en el país como productor de energía con el desarrollo de los recursos no convencionales, se requieren enormes inversiones y una sólida institucionalidad que permita hacer realidad las excelentes perspectivas de los yacimientos en etapa de prueba.

La posibilidad de que esos cuantiosos recursos, como los yacimientos de Vaca Muerta o la formación de Los Molles, se conviertan efectivamente en reservas explotables depende de muchos factores que debemos conservar en un esfuerzo de conjunto y con amplios consensos por la magnitud del desafío. Allí está surgiendo una riqueza que tal vez resulte inédita para el país, ya que se calcula que constituye entre 24 y 100 veces el tamaño de la economía nacional.

Según un informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos –EIA– de junio del año 2012, la Argentina tendría el segundo volumen mundial de recursos no probados técnicamente recuperables, por 802 trillones de pies cúbicos, equivalentes a 22.710 mil millones de metros cúbicos de *shale gas*, detrás de China, y el cuarto de petróleo no convencional, por 27.000 millones de barriles de *shale oil*, luego de Rusia, Estados Unidos y China.

Pero actualmente no existe en nuestro país una regulación específica ambiental para explorar y explotar esos abundantes hidrocarburos no convencionales, que requieren aplicar nuevas tecnologías, como la fractura hidráulica y la perforación horizontal. Para ello será

preciso implementar cambios legales y reglamentarios a nivel nacional que establezcan en todo el país una base regulatoria homogénea en materia ambiental, de manera que el desarrollo de esos importantes recursos no convencionales pueda encararse en un marco de protección al medio ambiente, particularmente en el tratamiento del agua utilizada en la explotación, de manera de conciliar esa aplicación con las necesidades de utilización del agua para uso humano y agropecuario.

Es por un mandato constitucional que debemos legislar la incorporación de presupuestos mínimos ambientales para la explotación de recursos no convencionales. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo... Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementirlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Consecuentemente, esta nueva realidad hidrocarburífera de nuestro país trae también aparejada la necesidad de una mayor coordinación entre las diversas autoridades de aplicación provinciales, y de un mayor control y monitoreo ambiental de la actividad, principalmente en lo relacionado a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.

También debe preverse que parte de la renta petrolera a ser apropiada por la Nación y por las provincias puedan acumularse en un fondo de uso intergeneracional para cubrir las necesidades y las demandas futuras en materia de jubilaciones y pensiones, educación y salud de las próximas generaciones o el financiamiento de las políticas públicas que se determinen.

Hoy en día se abre un nuevo horizonte energético y el desarrollo de la riqueza potencial de los recursos no convencionales debe impulsarnos a obrar con previsión de futuro, siguiendo el ejemplo de otras naciones que han sabido acumular parte de esa riqueza para las próximas generaciones.

Noruega, décimo cuarto productor mundial de petróleo, cuenta actualmente con un fondo de pensiones del petróleo, con recursos por 828.000 millones de dólares, para cubrir las necesidades de jubilación, educación y salud de cinco millones de noruegos. Ese fondo petrolero es hoy uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Tiene un comité de ética que supervisa las inversiones y está manejado por un directorio independiente del gobierno de turno, con control parlamentario.

En definitiva, se trata de poner en marcha una nueva política energética nacional, a partir de nuevas expectativas que pueden cambiar en parte la matriz económica del país.

Por todo ello, exhorto a mis pares en el Honorable Senado de la Nación a volver a empezar, enfrentar los



desafíos y, a la vez, las enormes oportunidades que tenemos por delante en materia energética.

11

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
PILATTI VERGARA

**Régimen de Promoción de Inversión para la  
Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y  
Anexo)**

Señor presidente:

Al igual que mis compañeros de bancada, una vez más estamos acompañando las transformaciones estructurales que este nuestro país necesita para alcanzar su potencial y desarrollo económico-social. Me resulta muy fuerte observar cómo el bloque de la Unión Cívica Radical, que otrora reflejara grandeza en las figuras de Yrigoyen y Mosconi, decide apartarse de estos proyectos y subirse al carro mediático del *mainstream* y sus “lobbistas”, sin reparar en que caen en contradicciones respecto de sus propias críticas, respecto de las exigencias que esgrimen sobre políticas públicas que nos hagan ser mejores o más eficientes.

Este proyecto de ley que propone la modificación de la ley 17.319 y sus modificatorias, y la incorporación al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos de nuevas consideraciones estratégicas, no tendrá impacto en el corto plazo, no devengará beneficios para esta gestión o gobierno. Es una iniciativa que propone un marco fundamental para el actual momento histórico de la Argentina, cuyo espíritu busca consolidar un panorama de reglas claras y unificadas en todo el país que fomenten la inversión local y extranjera.

Inversión que una Argentina castigada por los mercados externos y las instituciones multilaterales de crédito no ha encontrado su pico debido a las decisiones viciadas e irresponsables que llevaron adelante los gobiernos enarbolados de neoliberalismo, prisioneros adiestrados del endeudamiento, de la crisis y de un *default* inédito en la historia contemporánea.

Si esta medida tiene éxito, y así lo esperamos todos los miembros de este proyecto irreversible, el ingreso de divisas y de inversión extranjera directa beneficiará no tan sólo al gobierno que asuma en diciembre de 2015. Todos los argentinos estaremos un poco más tranquilos sabiendo que habrá una excusa menos si alguno se atreviera a intentar volver a las viejas recetas de los “Chicago boys”.

La mezquindad política de hoy nos muestra un crisol de dirigentes que se la pasan mortificando a su audiencia respecto del déficit energético y la supuesta incapacidad de gestión, sin siquiera hacer referencia alguna a que lo que presiona las reservas del Banco Central es el desarrollo de nuestra industria y el alto consumo de nuestro pueblo, mucho menos, a la brillante misión y tarea que lleva adelante el actual equipo que comanda nuestra empresa de bandera, empresa que recuperamos

en su momento crítico y que con buenas decisiones ya triplicó su valorización en el mercado internacional.

Se trata de una YPF que ha incrementado las inversiones en un 165 por ciento desde su expropiación y que, según las proyecciones oficiales, va a cerrar el 2014 con 5.200 millones de dólares en inversiones estratégicas, con un 192 por ciento de incremento en la actividad física de sus operaciones.

Este proyecto que nuestra presidenta pone sobre la mesa de nuestro federalismo y propicia el consenso y acuerdo de las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, retoma la porfiada Constitución de 1949, derogada por la Revolución Libertadora –la “Revolución Fusiladora”, como le llamamos algunos compañeros–, planteando que el Estado, la Nación, debe planificar su destino estratégico en materia energética y para eso es necesario, tal cual lo señalará el ministro de Planificación, tener una ley que armonice la legislación medioambiental, fiscal y los procesos licitatorios para que YPF, junto a las provincias, sean el eje innegable que pongan en valor todo nuestro potencial y alcancen el autoabastecimiento soberano.

Más aún, estamos viviendo en un tiempo dinámico, en el cual países como México, Brasil o Ecuador llevan adelante reformas a sus marcos normativos que se orientan hacia el mismo horizonte: acabar la especulación en este negocio; promover la inversión para que vengan los grandes actores de la actividad hidrocarburífera. Porque no puede nuestro Estado en soledad. Necesitamos un enfoque más amplio que traccione la industria y la creación de nuevos puestos de trabajo de alta calidad.

Escuchar al ingeniero Galuccio sostener una línea sustentable respecto de las nuevas técnicas que interfieren menos con el medio ambiente; detenernos en detallar que los químicos que empleamos en nuestras operaciones no son contaminantes, son también muy relevantes tareas. Reconocemos la sensibilidad y la importancia que tiene profundizar el desarrollo sin quebrantar la armonía natural.

Y son estas razones y tantas otras las que nos movilizan a seguir asistiendo la puesta en marcha de un proyecto que tiene que rebasar la instancia presente, para que nuestro país pueda conquistar la meta de la autosuficiencia y de la soberanía plena.

12

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DI  
PERNA

**Régimen de Promoción de Inversión para la  
Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y  
Anexo)**

Señor presidente:

Quisiera mencionar los aspectos principales del dictamen en minoría que presentamos como interbloque Federal. Como miembro informante debo decir que

nos manifestamos a favor de las modificaciones a la ley 17.319, pero siempre y cuando las mismas no sean efectuadas en desmedro de las jurisdicciones dueñas de los recursos naturales y sus derechos.

Con respecto a la autoridad de aplicación que fijará los plazos de los permisos de exploración en cada licitación, consideramos que la redacción del artículo 1º no es clara. Por lo cual planteamos que debe quedar perfectamente individualizada la misma, ya sea esta nacional o provincial, según corresponda.

Sobre el artículo 2º creemos que no puede haber un margen de liberalidad absoluta a favor de las personas físicas o jurídicas sobre la cantidad de permisos de exploración. Anteriormente a esta modificación, la ley 17.319 permitía sólo 5 permisos, pero consideramos que dicho número debe incrementarse. De esa manera, el titular podrá disponer hasta 15 permisos de exploración siempre y cuando se acredite que en los mismos se esté desarrollando el 75 por ciento de exploración. No queremos empresas que dispongan decenas de permisos y no generen empleo ni recursos genuinos para la provincia y para el país.

Planteamos que es necesario la puesta en vigencia del Consejo Federal de Hidrocarburos, creado por el artículo 4º de la ley 26.741 a los fines de promover la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales sobre toda cuestión vinculada a la política hidrocarburífera de la República Argentina.

Es claro que este Consejo Federal debe cumplir un rol fundamental, más teniendo en cuenta que la ley declara como objetivo prioritario de nuestro país el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores y el crecimiento sustentable de las provincias y regiones.

Debo aclarar que los recursos naturales de nuestras provincias no son renovables. Y las regalías tampoco son un impuesto, sino una compensación por el recurso que se extrae y no se vuelve a recuperar. Por lo cual proponemos que el concesionario de explotación pueda pactar con el concedente un pago mensual en concepto de regalías sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, no pudiendo ser inferior al 12 por ciento ni superior al 15. De esta manera se podría alcanzar un máximo de hasta 21 por ciento de regalías en los períodos de prórroga de la concesión.

Tampoco estamos de acuerdo en que las alícuotas de regalía sean el único mecanismo de ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de concedentes. Nosotros pensamos que se está limitando la capacidad de negociación y acuerdo que tienen las jurisdicciones dueñas de los derechos de los recursos y sostenemos que esta disposición avasalla claramente el federalismo. Por este motivo planteamos que debe quedar explícito que será el único mecanismo

de ingreso, salvo acuerdo en contrario entre concedente y concesionario.

No estamos de acuerdo con la redacción del artículo 18 del dictamen en mayoría, que incorpora el 91 bis a la ley 17.319, ya que entendemos que nuevamente avanzamos sobre derechos adquiridos de las provincias federales. Si hablamos de una ley que prevea contingencias futuras y para los próximos 40 años, ¿por qué mi provincia pierde el derecho a establecer en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas? ¿O es que se quiere eliminar a las empresas provinciales de energía e hidrocarburos? Nos oponemos abiertamente a esta modificación, ya que consideramos que dicho artículo es lesivo para los intereses de la provincia y en nuestro dictamen propiciamos su eliminación.

Por otra parte, en el marco de proyectos de inversión para la explotación de hidrocarburos que sean aprobados en el futuro por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, en los aportes que se establecen planteamos que es necesario definir con mayor claridad el destino y conformidad por parte de las provincias de los fondos de responsabilidad social empresaria –2,5 por ciento– del monto de la inversión. Asimismo, se establece un monto no inferior al 2,5 por ciento aportado por el Estado nacional para obras de infraestructura en las provincias productoras.

En cuanto a materia ambiental, concluimos que es necesario especificar y mejorar las disposiciones contenidas en el dictamen en mayoría, incluyendo aquellos aspectos de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Nacional. En este sentido debemos explicitar algunos puntos básicos para la explotación de hidrocarburos; teniendo en cuenta el tipo de proceso, la tecnología, los insumos y los medios de la exploración y de explotación no convencional, en resguardo de la salud, de la calidad de vida de la población y del adecuado cuidado del medio ambiente.

Señor presidente: por los motivos expuestos, en el convencimiento de defender los derechos de las provincias productoras de hidrocarburos y en el marco del tratamiento de esta nueva ley que estamos debatiendo, manifestamos nuestra oposición a ella y, consiguientemente, adelanto mi voto negativo.

13

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA  
FELLNER

**Régimen de Promoción de Inversión para la  
Explotación de Hidrocarburos (O.D. N° 460 y  
Anexo)**

Señor presidente:

El proyecto de ley que estamos tratando nos coloca, una vez más, frente a un acontecimiento histórico por las consecuencias que de él derivan. Se trata de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, 17.319, del

año 1967, con el fin de atraer las inversiones necesarias para explorar y explotar todo el potencial que tiene nuestro país en la materia y, de esta forma, lograr el tan anhelado autoabastecimiento energético, en un país en crecimiento en el que, consecuentemente, la demanda de energía es cada vez mayor.

En este sentido y simplemente a modo de ejemplo, resulta útil señalar que en estos últimos 10 años la Argentina duplicó su consumo energético; el consumo per cápita en hogares es el más alto de la región; el parque automotor se duplicó, pasando de 6 a 12 millones de vehículos; se incorporaron más de 2 millones de hogares a la red de gas y más de 4 millones a la de electricidad, lo que derivó a su vez en 40 millones de nuevos electrodomésticos, con la consecuente mejora en la calidad de vida; en materia de consumo de energía eléctrica, el pico de demanda aumentó un 70 por ciento –143 por ciento en el caso específico de hogares–, en tanto que el pico de demanda de gas aumentó en un 35 por ciento.

No pasa inadvertido el hecho de que este proyecto que estamos considerando representa un paso más, un nuevo avance en la política energética, que se ha comenzado a delinear allá por el año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner, y que con posterioridad y ante la pujante expansión que ha experimentado la economía, ha tenido que readaptarse y buscar nuevos horizontes para satisfacer la creciente demanda.

En este sentido, en el año 2006 se sanciona la ley 26.197, conocida como Ley Corta, mediante la cual se reafirma el dominio que tienen las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en su territorio –vale aclarar que con la modificación que estamos tratando, esta ley y por ende el dominio de las provincias no sufren ningún tipo de alteración–; en febrero de 2012 se rubrica, en el marco de la OFEPM, el Acuerdo Federal de Hidrocarburos; en mayo de ese mismo año el Congreso sanciona la ley 26.741, denominada ley de soberanía hidrocarburífera, que nos permitió la recuperación de nuestra querida empresa de bandera: YPF.

Para poder cristalizar o concretar esa soberanía hidrocarburífera y el autoabastecimiento, es necesario e imprescindible contar con inversiones que permitan hacer frente a los desembolsos de las ingentes sumas de dinero que se requieren para la exploración y explotación de hidrocarburos, principalmente de los no convencionales.

En términos generales, para las provincias productoras de hidrocarburos este proyecto incorpora nuevos beneficios e ingresos, impulsa las inversiones e incrementa notablemente las exigencias a los permisionarios y concesionarios a favor de las jurisdicciones locales.

A modo de ejemplo, cabe indicar: el incremento de los valores vigentes del canon de exploración de 86,71 pesos a 250 pesos por kilómetro cuadrado, un 188 por ciento más para el primer período del plazo básico; este canon se aumenta de 173 pesos a 1.000 pesos por kilómetro cuadrado para el segundo período del plazo básico; para el período de prórroga se establece un valor especial de 17.500 pesos por kilómetro cuadrado. Todos estos valores se actualizan por el precio del petróleo tipo Brent.

En materia de regalías también se generan mejoras sustanciales a favor de las provincias: al 12 por ciento actual se le adicionará un 3 por ciento por cada período de prórroga que solicite el concesionario, con lo cual en la primera prórroga se abonarán regalías equivalentes al 15 por ciento y en la segunda, 18 por ciento.

Otro beneficio importante se establece respecto a la prórroga de la concesión de explotación mediante el pago de un bono equivalente al 2 por ciento de las reservas comprobadas en el área, valorizadas al precio del barril en la cuenca durante los 2 años anteriores.

En este punto quiero referirme concretamente a lo que esta ley significa para la provincia a la cual represento. La renacionalización de YPF abrió para Jujuy nuevas perspectivas de desarrollo. Y las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos que hoy estamos tratando, seguramente, impulsarán el aumento de las inversiones y, con ello, la exploración de nuevas áreas productivas, generando de esta forma en la provincia las condiciones para una fuerte y decidida reactivación de la actividad.

Es oportuno recordar que la provincia de Jujuy estuvo llamada a ocupar un lugar importante en la historia hidrocarburífera de nuestro país. En realidad, toda la historia hidrocarburífera de la provincia de Jujuy estuvo signada por profundas paradojas, ya que en el proceso de nacimiento y crecimiento de esta industria la provincia fue protagonista destacada en algunos de los hitos más importantes que se registraron en la materia. No obstante ello, la industria petrolera siempre le dio la espalda a la provincia.

Con relación a los hitos mencionados precedentemente, Jujuy estuvo presente en tres momentos históricos de suma trascendencia en la materia. Así, puede señalarse que el primer intento de una explotación petrolera fue una iniciativa privada que data del año 1865, cuando Leonardo Villa –primer empresario interesado en la explotación comercial del petróleo en nuestro país– solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación un privilegio exclusivo por quince años para la fabricación y elaboración de aceite de chapapote o querosene y la propiedad de algunas cuerdas de terreno donde estaban situadas las minas en la provincia de Jujuy.

Si bien las dudas legales y el estado de organización general en que se encontraba el país en aquel momento dieron por tierra con el pedido de Villa, el debate parlamentario que surgió a instancias de su pedido –del que participaron Alsina y Sarmiento– tuvo la virtud de conmover la apatía y provocar la inquietud del gobierno frente a los asuntos petroleros. Asimismo, la discusión despertó la expectativa pública sobre la posibilidad de crear una industria petrolera en nuestro país.

La participación de la provincia en el proceso de desarrollo de la industria no se detuvo allí. Las primeras perforaciones registradas en búsqueda de petróleo se llevaron a cabo en Mendoza –1880–, en Salta –1882– y en Jujuy –1883–. Asimismo, la primera refinación comercial de petróleo data del año 1876, cuando se destiló querosene en Jujuy para ser utilizado como combustible para iluminación.

El tercer hito destacado tuvo lugar en el año 1968, cuando se inicia la perforación del pozo Caimancito 1, en el departamento de Ledesma, aunque en rigor de verdad los trabajos de registros sísmicos habían comenzado en el año 1962. En el desarrollo de estas tareas se fueron sucediendo grandes dificultades, pero gracias a la tenacidad de quienes participaron en dicha empresa se logró el cometido. A los 3.300 metros se halló una capa de gas y a los 3.917 metros se encontró el petróleo.

El pozo Caimancito 1 entró en funcionamiento el 1º de marzo de 1969 y su volumen fue una verdadera sorpresa. Este pozo fue el de mayor producción del país, batiendo un récord que hasta el día de hoy no pudo ser superado por ningún pozo a lo largo y a lo ancho del país. Sin embargo, los altos costos que im-

plican las tareas de exploración en provincias como la mía impidieron que la actividad tuviera un desarrollo continuo y sistemático.

Vale recordar que esta actividad exploratoria fue nula durante toda la gestión de Repsol debido a que la cuenca Noroeste es considerada de riesgo, en razón de lo profundo de sus objetivos y de la complejidad estructural.

Actualmente, Jujuy cuenta con doce áreas, nueve de las cuales están a la espera de ser exploradas: La Quiaca, Abra Pampa, Casabindo, Humahuaca, Aguilar, Susques, Salar de Cauchari, Tres Morros y Tilcara.

En este sentido, YPF ha presentado a la provincia carta con iniciativa privada –tramitada mediante expediente 660-471-2014– para explorar la subcuenca Tres Cruces. Dicha propuesta pretende avanzar sobre la propuesta previa de Gerencia Cuencas de Frontera, consistente en la delimitación de una nueva área denominada Tres Cruces, a fin de realizar trabajos exploratorios que permitirán incorporar mayor conocimiento geológico con el objeto de confirmar tanto el potencial ya delineado por YPF como también su viabilidad económica.

Es por todo lo expuesto que estoy plenamente convencida de que avanzar con la sanción de esta ley permitirá concretar, traducir en hechos concretos, esas nuevas perspectivas que se abrieron allá por el año 2012 con la renacionalización de YPF.

Por estos motivos, voto afirmativamente el proyecto de ley.